

ISSN: 0719-2398

(versión electrónica)

Nº4 / Año 2

julio - diciembre 2013

Taller de Historia  
THP  
Política

## ARTÍCULOS:

El sujeto social de derechas en Uruguay y la emergencia de la Juventud Uruguaya de Pie (1968-1972).

**Gabriel Bucheli Anaya**

“Nosotros queremos que escuchen nuestras historias”: El documental Locos de la Bandera y las memorias en conflicto de la Guerra de Malvinas.

**Fabrizio Laino Sanchís**

“De la derrota crear primavera”. Movimientos Sociales en Latinoamérica de los '90 - Construyendo Poder Popular. El caso de la SeLVIP.

**Victoria Álvarez Tornay - Adrián Bernasconi Tappero - Daniela Rodríguez**

Continuidades en el Chile post-dictatorial: El accionar del MAPU-Lautaro y la respuesta de la Policía de Investigaciones en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990).

**Nicolás Acevedo Arriaza**

“Presidente Aylwin: ¿Dónde quedaron sus promesas frente a los trabajadores?”.

Confianza y desilusión de los trabajadores con el gobierno de Aylwin en el caso del fraude de Lozapenco (1990-1993).

**Oscar Peñafiel Arancibia**

El “regionalismo político no partidista” en el Chile actual: ¿repolitización ciudadana o expresión neoliberal?

**Patricio Ruiz Godoy**

La representación del poder y la construcción de redes sociales en espacios locales: El caso de las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal de Huechuraba en un contexto electoral.

**Javier Rivas Rodriguez**

## COMENTARIOS Y ENSAYOS:

Comentario Bibliográfico:

Riesco, Manuel (2012) El Parto de un siglo

**Luis Corvalán Marquez**

Comentario Bibliográfico:

Palma Ramos, José (2012), El MIR y su opción por la Guerra Popular.

**Mariano Vega**

Revista de Historia Política  
**divergencia**  
Órgano de difusión y discusión político-académica  
impulsado por el TALLER DE HISTORIA POLÍTICA

El año 2007 marcó a fuego a la Universidad de Valparaíso. La crisis en la que estaba sumergida esta casa de estudios, causada por las negativas políticas educacionales provenientes del gobierno, trajo una serie de movilizaciones que develaron dicha situación. Al calor de ese movimiento, estudiantes, académicos y funcionarios de la UV, remecieron a los porteños con sus demandas por un mayor financiamiento estatal y una estructura que permitiera la participación democrática de todos quienes nos vinculamos con la Universidad. Esa experiencia de participación activa en un movimiento social y político en la que se afianzó nuestra conciencia como actores sociales, fue la chispa que encendió el camino para constituir el *Taller de Historia Política*, el que se plantea como una instancia de discusión, difusión y producción historiográfica impulsada por y para los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, con el fin de aprehender los procesos políticos, económicos y sociales en que se ha visto inmersa la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX.

De manera concreta, nuestro trabajo se ha materializado internamente en la realización de talleres de discusión dirigidos por profesores invitados. En el plano externo, destaca la organización de foros periódicos.

(continúa en la solapa posterior)

Taller de Historia  
THP  
Política

Revista de Historia Política

# divergencia

Órgano de difusión y discusión político-académica impulsado por el  
TALLER DE HISTORIA POLÍTICA, Valparaíso, Chile

N° 4 / Año 2  
julio - diciembre 2013

[www.revistadivergencia.cl](http://www.revistadivergencia.cl)  
[contacto@revistadivergencia.cl](mailto:contacto@revistadivergencia.cl)



## EQUIPO RESPONSABLE

Editor Responsable

José Ponce López  
j.ponce@revistadivergencia.cl

Editor Asociado

Jorge Valderas Villarroel  
j.valderas@revistadivergencia.cl

Editora Asociado

Nicole Ríos Kroyer  
n.rios@revistadivergencia.cl

Traductora

Paula Valderas Villarroel  
p.valderas@revistadivergencia.cl

Redacción

Nicole Ríos Kroyer  
n.rios@revistadivergencia.cl

Diseño, diagramación y soporte web

Israel Fortune Fuentesvilla  
i.fortune@revistadivergencia.cl

Revista Divergencia

ISSN (electrónico): 0719-2398

Taller de Historia política O.C.F. (THP)

E-mail: contacto@revistadivergencia.cl

www.revistadivergencia.cl

N°4 / Año 2

julio - diciembre 2013

# ÍNDICE / INDEX

Presentación

6

Presentation

## ARTÍCULOS

9

## ARTICLES

El sujeto social de derechas en Uruguay  
y la emergencia de la Juventud Uruguaya  
de Pie (1968-1972).

Gabriel Bucheli Anaya

11

The social entity of the right-wing parties  
in Uruguay and the emergence of the  
Juventud Uruguaya de Pie. (1968-1972).

Gabriel Bucheli Anaya

“Nosotros queremos que escuchen  
nuestras historias”: El documental  
Locos de la Bandera y las memorias en  
conflicto de la Guerra de Malvinas.

Fabrizio Laino Sanchís

37

“We want our stories to be heard”:  
the documentary Locos de la Bandera  
and memories in conflict from  
The Malvinas War.

Fabrizio Laino Sanchís

“De la derrota crear primavera”.  
Movimientos Sociales en Latinoamérica  
de los ‘90 - Construyendo Poder  
Popular. El caso de la SeLViP.

Victoria Álvarez Tornay  
Adrián Bernasconi Tappero  
Daniela Rodríguez

55

“From the defeat create spring”.  
Social movements in Latin-American  
from the 90s - Building people’s power.  
SeLViP case.

Victoria Álvarez Tornay  
Adrián Bernasconi Tappero  
Daniela Rodríguez

Continuidades en el Chile post-dictatorial:  
El accionar del MAPU-Lautaro y la  
respuesta de la Policía de Investigaciones  
en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990).

Nicolás Acevedo Arriaza

73

Continuity in the post-dictatorship period  
in Chile: The acts of MAPU-Lautaro and  
the response of the Investigation police,  
during Patricio Aylwin government (1990).  
Nicolás Acevedo Arriaza

“Presidente Aylwin: ¿Dónde quedaron sus  
promesas frente a los trabajadores?”.  
Confianza y desilusión de los trabajadores  
con el gobierno de Aylwin en el caso del  
fraude de Lozapenco (1990-1993).

Oscar Peñafiel Arancibia

103

“President Aylwin: where are your  
promises concerning the workers?  
Trust and disillusion of workers during  
Aylwin’s government in the case of the  
fraud of Lozapenco (1990-1993).

Oscar Peñafiel Arancibia

El “regionalismo político no partidista”  
en el Chile actual: ¿repolitización  
ciudadana o expresión neoliberal?

Patricio Ruiz Godoy

133

The “political regionalism with no party  
politics in present day Chile: Citizen  
re-politicization or neoliberal expression?  
Patricio Ruiz Godoy

Sobre la representación del poder y la  
construcción de redes sociales en espacios  
locales: El caso de las Juntas de Vecinos y  
la Unión Comunal de Huechuraba  
en un contexto eleccionario,  
julio-octubre, 2012

Javier Rivas Rodríguez

159

In relation to the representation of  
the power and construction of social  
networks in local space: The case of the  
neighborhood council and the communal  
union in Huechuraba in the context of an  
election process . July-October- 2012.  
Javier Rivas Rodriguez

## COMENTARIOS Y ENSAYOS

181

## COMMENTS AND ESSAY

### COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO:

Riesco, Manuel (2012) *El Parto de un siglo: Una mirada al mundo desde la izquierda de América Latina*. CENDA-USACH, Santiago.

*Luis Corvalán Marquéz*

183

### JOURNAL REVIEW:

Riesco, Manuel (2012) *The birth of a century: a look at the world from the Latin American left wing* CENDA-USACH, Santiago.

*Luis Corvalán Marquéz*

### COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO:

Palma Ramos, José (2012), *El MIR y su opción por la Guerra Popular. Estrategia político-militar y experiencia militante. 1982-1990*. Ediciones escaparate, Santiago.

*Mariano Vega*

191

### JOURNAL REVIEW:

Palma Ramos, José (2012), *MIR and their choice for the People's war. Political-military strategy and militant experience. From 1982 to 1990*. Ediciones escaparate, Santiago.

*Mariano Vega*

Instrucciones a los autores

197

Instructions to the authors

Consejo Editorial

205

Editorial Council

# PRESENTACIÓN

La cuarta edición de la Revista de Historia Política Divergencia, profundiza los análisis sobre la historia reciente de la región, con particular énfasis en Chile. Investigaciones que se nutren de la politología y la sociología son el sello de este nuevo número.

Compartimos en las próximas páginas, una sección dedicada a estudios de caso regionales. El primer artículo versa sobre un tema poco estudiado: la relación entre las derechas y los movimientos juveniles. Enfocándose en Uruguay y aplicando conceptos provenientes del estudio de los movimientos sociales, Gabriel Bucheli analiza a la agrupación “Juventud Uruguaya de Pie”, colectividad que surgió en el agitado contexto de los años sesenta. Sintetizando tradiciones liberales y conservadoras con el anticomunismo local, esta agrupación buscó disputarle el espacio juvenil a las izquierdas, en los años previos al golpe de Estado.

Continuamos con un trabajo sobre memoria en Argentina. Nutriéndose de los planteamientos de Giorgio Agamben y Paul Ricoeur, Fabricio Laino indaga el “trabajo de la memoria” realizado a través del documental sobre la Guerra de las Malvinas, “Locos de la bandera” (Julio Cardoso), observando tanto las respuestas a las representaciones dominantes sobre el conflicto y las “zonas grises”, invisibilizadas por las miradas hegemónicas en la sociedad argentina, como también los olvidos del mismo documental.

Acercándonos a los fenómenos políticos más inmediato de la región, Álvarez, Tapero y Rodríguez estudian el caso de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SeLViP), instancia articuladora de distintas organizaciones latinoamericanas de construcción autogestionaria del hábitat. A partir de ellas, se trata de

profundizar en las construcciones identitarias, estratégicas y prácticas en contextos sociales donde se impuso el neoliberalismo.

En una perspectiva similar, entramos a una serie de investigaciones socio-políticas sobre Chile en sus años de “transición a la democracia”. La tonalidad de los textos parten desde una mirada crítica, donde lo planteado por Nicolás Acevedo da cuenta de ello. Desde un acontecimiento en particular, el rescate del militante del MAPU-Laturao Ariel Antonioletti, el artículo indaga en las continuidades que después de la dictadura enfrentó el gobierno de Patricio Aylwin. A través de la dialéctica entre organizaciones insurreccionales, y las Fuerzas de Orden del Estado, como la Policía de Investigaciones, que continuaron aplicando sus métodos represivos provenientes de la etapa dictatorial, se analiza el rol clave que estas últimas jugaron en la desarticulación de agrupaciones subversivas como el MAPU-Lautaro.

Las complejidades del retorno democrático en Chile, especialmente durante el Gobierno de Patricio Aylwin, se profundizan en el estudio de la tensión entre esperanza y frustración política de los trabajadores. A través del caso del fraude de la industria “Lozapenco”, Oscar Peñafiel evidencia las debilidades y carencias del otrora poderoso movimiento laboral chileno para enfrentar el nuevo contexto político, social y laboral que amanecía en el país.

Desde un ángulo crítico, Patricio Ruiz cuestiona algunas aristas del movimiento regionalista en Chile. A través de las organizaciones regionales agrupadas en la Corporación para la Regionalización de Chile (CorChile) y el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (CONAREDE), el autor indaga en lo que sería un producto arquetípico del Chile neoliberal de fin de siglo: el regionalismo político no partidista.

Ya en el siglo XXI, Javier Rivas se enfoca en las formas de articulación y construcción de poderes locales. Tomando las redes sociales elaboradas a partir de las juntas vecinales para el uso político-electoral en Chile, analiza la comuna de Huechuraba –de la Región Metropolitana, donde también se ubica la capital del país– y la contienda electoral municipal del año 2012 entre Carlos Cuadrado Prats (Concertación) y Marcelo Teuber (Alianza por Chile).

En la sección de Ensayos, el Doctor Luis Corvalán Marquéz comenta el libro del economista Manuel Riesco, “El Parto de un siglo. Una mirada al mundo desde la izquierda de América Latina” (2012). Corvalán enfatiza en los planteamientos políticos de un texto que aborda principalmente cuestiones del desarrollo económico. Así, el autor del ensayo esboza, desde una mirada tributaria de la tradición iniciada por Marx, una “crítica a la economía política” planteada por Riesco. El texto concluye con las líneas generales para un programa emancipador de cara al siglo XXI.

Para cerrar este número de *Divergencia*, incluimos la Reseña de Mariano Vega al libro de José Antonio Palma, “El MIR y su opción por la Guerra Popular. Estrategia político-militar y experiencia militante. 1982-1990”, editado por Escaparate el año 2012. No obstante las críticas al enfoque, las fuentes y la metodología de la

obra, el reseñista destaca la contribución de la obra en la visibilización historiográfica de lógicas clandestinas y conspirativas del MIR, que llevaba la militancia dentro de esta organización.

Con este número, pretendemos seguir consolidando los objetivos trazados en la primera versión de *Divergencia*: contribuir al debate teórico de las ciencias sociales en la actualidad y ayudar a comprender, desde la dimensión político-social, la realidad del pasado reciente de nuestra región.

Comité Editorial

# ARTÍCULOS

/ ARTICLES



# EL SUJETO SOCIAL DE DERECHAS EN URUGUAY Y LA EMERGENCIA DE LA JUVENTUD URUGUAYA DE PIE (1968-1972)

## *THE SOCIAL ENTITY OF THE RIGHT-WING PARTIES IN URUGUAY AND THE EMERGENCE OF THE JUVENTUD URUGUAYA DE PIE (1968-1972)*

Gabriel Bucheli Anaya\*

### RESUMEN:

Este trabajo da cuenta del clima político-social del Uruguay de 1970, el cual propició la radicalización del sujeto social de derechas, abriendo el camino para la emergencia de la Juventud Uruguaya de Pie. Éste fue un movimiento de derechas que, disputando el espacio juvenil con las izquierdas, sintetizó las tradiciones liberal-conservadoras del anticomunismo local con el programa de las derechas radicales de matriz falangista.

Utilizando categorías de la teoría de los movimientos sociales, en base a fuentes primarias (prensa y entrevistas), presentaremos las condiciones para la ascendente movilización de las derechas uruguayas en la coyuntura previa al golpe de 1973.

**Palabras clave:** Derechas – Anticomunismo – Movimiento Juvenil.

### ABSTRACT:

*This work shows the socio-political environment in Uruguay 1970 when it contributed to the radicalization of the right-wing social entity, giving place to the emergence of the Juventud Uruguaya de pie. This was a right-wing movement that, disputing the juvenile place against the left-wing one, it synthesized the liberal-conservative traditions of local anticommunism with the program of the radical right-wing with falangistas characteristics. Using categories from the theory of social movements regarding primary sources (press and interview), we will present the conditions for the growing mobilization of the Uruguayan right-wing, previous 1973 coup.*

**Keywords:** Right-wing – Anticommunism – Juvenile Movement.

**Recibido:** 30 de Septiembre de 2013

**Aceptado:** 15 de Diciembre de 2013

**Received:** September 30, 2013

**Approved:** December 15, 2013

\* Uruguayo, Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Maestrando en Estudios Latinoamericanos, Universidad de la República. Correo electrónico: [gabriel.bucheli@cienciassociales.edu.uy](mailto:gabriel.bucheli@cienciassociales.edu.uy)

## I. INTRODUCCIÓN

Este artículo se centra en el estudio de diversas organizaciones de derecha que evidencian la existencia, desde la sociedad civil, de un marco habilitante para el proceso autoritario que se concretó en Uruguay en dos fases: una civil (1968-1973) y otra cívico-militar (1973-1985).

Esas organizaciones se manifestaron con vigor en dos coyunturas políticas precisas: 1959-1962 y 1969-1974. En ambos casos asistimos a la irrupción de acciones colectivas de base societal, al despliegue de organizaciones con importante presencia pública y luego, a su súbito decaimiento y desaparición. Si bien las condiciones específicas del origen, desarrollo y declive de cada una de esas oleadas responden a componentes concretos de las coyunturas en particular, constatamos una línea de continuidad entre ambos impulsos, y el proceso autoritario indicado.

Consideramos que un estudio en profundidad de esta cuestión aporta a una agenda de investigaciones en curso en Uruguay, que propone indagar en las formas y los alcances del “consenso social y cultural” buscado por el régimen dictatorial. En ese sentido, planteamos que los movimientos políticos arriba mencionados constituyen indicios, desde la sociedad civil, de la presencia de potentes pulsiones conservadoras que denunciaban y se organizaban contra lo que consideraban la acción de los portadores del desorden. Esa perspectiva conservadora respondía a ciertos sentidos comunes fuertemente asentados en el tejido social uruguayo pero que, exigidos por “la amenaza revolucionaria”, condensaron en su práctica y en su discurso las tradiciones más reaccionarias del conservadurismo nacional.

El objetivo de este trabajo en particular, es el de presentar el marco social y político que propició el nacimiento de una organización concreta, la Juventud Uruguaya de Pie<sup>1</sup> (JUP). Ésta fue fundada en octubre de 1970 como resultado de la convergencia de agrupaciones estudiantiles de todo el país autodenominadas “demócratas”, enfrentadas a la creciente influencia del estudiantado izquierdista, hegemónico además en la capital. De fuerte impacto público hasta su autodisolución en 1974, la JUP se manifestó a través de un amplio repertorio de acciones colectivas (propaganda escrita y radial, activismo estudiantil, actos públicos en todo el país) y movilizó a un importante sector de la población tras un discurso que conjugaba el patriotismo con el anticomunismo militante. Así, esta organización vino a dar voz al sujeto social de derechas en un espacio simbólico fundamental en la disputa con las izquierdas, el ámbito juvenil, aunque su convocatoria trascendió a ese espacio generacional. A partir de un cauteloso discurso de respeto a las dos tradiciones partidarias (blanca y colorada), fue afianzando desde 1972 un discurso crítico a la conducción de sus dirigentes.

1 Su nombre tomaba el de una organización local, la Juventud Salteña de Pie, fundada en julio de 1969 en la norteña ciudad de Salto, y subsumida en 1970 en la organización devenida nacional.

A partir de 1968 se dieron condiciones propicias para la movilización social y política de ciertos sectores de la derecha uruguaya. Esta ola de movilizaciones tuvo un carácter más radical y visible que el observado en períodos anteriores, alcanzando momentos de intensidad desconocidos en la historia del país.

Presentaremos en primer lugar (Apartado 1) los argumentos que a nuestro entender explican la intensa movilización social de derechas evidenciada en particular en el período 1969-1972. Utilizaremos la categoría que ciertas teorías de los movimientos sociales denominan “estructura de oportunidades políticas” (EOP) para la emergencia de este tipo de fenómenos (McAdam, McCarthy y Zald, 1996; Tarrow, 2009). Nos basaremos en tres componentes que consideramos claves en esa EOP: a) la potente movilización de las izquierdas y la percepción por parte del sujeto social de derechas de una situación de “caos” promovida por aquellas; b) la acción estatal de corte represivo que, al tiempo que asumía una férrea contención de los sectores “disolventes”, animaba formas paraestatales de acción ciudadana (pacífica y violenta); y c) la dramática percepción por parte de nuestro sujeto de estudio, de inestabilidad en el alineamiento de las elites encargadas históricamente de garantizar el orden y superar las crisis (crisis de la partidocracia).

En segundo lugar (Apartado 2), señalaremos cómo, resultante de las condiciones políticas señaladas, se hizo manifiesta la expresión pública del sujeto social de derechas mediante una intensa movilización, y que esa manifestación encontró un lugar de privilegio en el interior del país. En ese contexto tuvo lugar la emergencia del movimiento juvenil “de pie”.

## II. UNA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS (EOP)

### I. El país ante el “caos”

Existe una abundante bibliografía que ha abordado la manera en que la crisis nacional favoreció desde mediados de los años 60 la irrupción y el ascenso de expectativas de transformación radical del país hacia un horizonte socialista (Aldrighi, 2001; Vécovi, 2003; Varela, 2005; Rey Tristán, 2005; Labrousse, 2009; Leibner, 2011; Markarian, 2012). La perspectiva de una revolución de signo izquierdista constituyó para las fuerzas políticas adscritas a este sector un asunto central de su agenda. En una compleja dialéctica entre impulsos espontáneos (relacionados con el malestar de la clase trabajadora y el desencanto de las nuevas generaciones) y acciones organizadas (de los viejos partidos de la izquierda, de la miríada de nuevos grupos y grupúsculos nacidos al calor de los debates de la época<sup>2</sup> y de las organizaciones armadas), el proyecto de la revolución socialista se instaló en los

2 Para un repaso sobre el surgimiento de nuevos grupos de izquierda en los años 60 ver Rey Tristán (2005).

movimientos sociales y permeó al conjunto de la sociedad<sup>3</sup>. No es este el espacio para abundar en los debates sobre las etapas de la revolución que involucraron a los diversos actores de la izquierda vernácula, ni en el acento internacional sobre el que se asentaron las pulsiones revolucionarias en el Uruguay. Simplificando, y pensando con la lógica de los extremos de un continuo, el conjunto de las posturas revolucionarias<sup>4</sup> se movió entre las dos que adquirieron mayor resonancia: la del Partido Comunista y su línea gradualista de “acumulación de fuerzas”, y la de la guerrilla tupamara y su interpelación foquista al sistema político. Esta situación de pluralidad en el campo de las izquierdas, que en ciertas circunstancias llegaba a ser de honda fisura, vino a vitalizar el accionar político del conjunto en lo que por su propia definición eran sus “frentes de masas”: el movimiento sindical y el movimiento juvenil/estudiantil. El mundo del trabajo, el ámbito de la enseñanza y algunos espacios territoriales impregnados de tradición de luchas sociales, fueron el marco de disputa entre diversas fracciones de la izquierda, al tiempo que se multiplicaban las instancias de movilización.

Para evitar cualquier interpretación unidireccional del proceso, debemos asentar que, como es natural en toda etapa de polarización izquierda/derecha, la radicalización de cada una de las partes respondió a una dialéctica compleja. La radicalización por izquierda, el carácter masivo y tumultuoso de sus acciones, no puede separarse del accionar también revulsivo desplegado desde los márgenes derechos del sistema político. Es innegable que el estilo crecientemente autoritario de las élites gobernantes contribuyó a potenciar a las fuerzas de izquierda. Resulta atendible en ese sentido la expresión utilizada por el ex-dirigente guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro para interpretar el auge de su organización desde 1968: “Pacheco fue el principal reclutador de tupamaros”. Más allá del tono legitimante que sobre sus acciones pasadas reviste esta afirmación, suerte de justificación a posteriori de los niveles de adhesión que alcanzó la opción armada en ciertos espacios sociales, consideramos que refleja adecuadamente una de las derivaciones de la relación dialéctica arriba mencionada. Con lógica similar, aunque en sentido inverso, puede ser leído el impulso alcanzado por agrupaciones de padres, vecinos, docentes y estudiantes conservadores contra el activismo de las izquierdas en el ámbito educativo. Así, las acciones de la izquierda explican en buena medida la respuesta organizada y militante de grupos emanados de la sociedad civil en nombre del orden, incluida la aún no aclarada participación de los “escuadrones de la muerte”<sup>5</sup>.

3 Las porosidades en la sociedad civil en relación a la “penetración izquierdista” están marcadas por clivajes geográficos (Montevideo/Interior, urbano/rural), generacionales y, en medida más difusa, permeado por los dos anteriores, de clase (se hizo notoria la adhesión a los discursos de las izquierdas en el núcleo duro de la clase obrera y otros sectores de trabajadores sindicalizados).

4 Utilizamos la expresión “revolucionaria” sin adjudicarle un sentido axiológico. Evitamos confundir así “postura revolucionaria” con “lucha armada” como se ha planteado desde ciertas interpretaciones.

5 Adherimos a la idea de Varela, quien adjudica a las esferas estatales el recurso a la violencia parapolicial. “Un ejercicio abierto del poder represivo no era fácil en la coyuntura [electoral de 1971]; se le complementó pues por la vía clandestina (Varela, 1988, p.115).

Resulta de interés repasar la interpretación que el por entonces diputado y ministro colorado Dr. Julio María Sanguinetti<sup>6</sup> publicó en 2008. Más allá de lo que pretende ser una reconstrucción del proceso que llevó a la dictadura, este libro puede ser visto como un resumen del sentido común conservador que impregnó a un amplio sector de las élites políticas y de la sociedad civil hacia 1970. Despojado del tono virulento de aquella época, el autor deja asentado el pensamiento hegemónico desde el cual se construyó hacia 1970 la idea de que el país estaba sumido en el caos por la responsabilidad de las izquierdas. En su análisis, destaca la presencia de una “opinión pública” atónita ante hechos que parecen producidos por actores ajenos a la naturaleza intrínsecamente moderada del uruguayo medio, reflejada en “el sentimiento de la mayor parte de la población, clases medias y trabajadoras, cansados de la permanente paralización de los centros de enseñanza y de vivir la zozobra constante de ver a sus hijos adolescentes envueltos en refriegas que van más allá de su comprensión” (Sanguinetti, 2008, p.144). Sobrevuela a este análisis la responsabilidad de las “minorías extraviadas” en la crisis del país. Escrito en 2008 en el marco de las disputas por el pasado, expresiones como ésta vienen a rescatar el genuino pensamiento conservador/reaccionario de aquellos años. Este tipo de planteos constituyó la materia prima que cargó de sentidos el discurso del sujeto social de derechas y de las organizaciones que le dieron voz en aquella coyuntura, de lo que damos cuenta a través de varias fuentes primarias en las páginas que siguen. El siguiente extracto de prensa de octubre de 1969, del mismo órgano de prensa que un año después se volvería medio oficioso de la JUP, es elocuente:

“Todos sabemos lo que pasa en la Universidad, en Enseñanza Secundaria y en su Instituto de Profesores, en el Cuerpo de Inspectores de Primaria y en los Institutos Normales y en la Enseñanza Industrial... Porque ya no aceptamos el pretexto de “respetar rebeldías estudiantiles” porque es un disfraz... Existen incalificables actitudes estudiantiles que revelan la calidad humana de sus profesores. No se trata de invocar actitudes progresistas “que desconocen los elementos conservadores”. Porque buscar destruir la dignidad humana no es síntoma de progreso sino de degeneración. Es evidente PARA TODOS que la irresponsabilidad está en las autoridades de la enseñanza. .. TIENE QUE VENIR LA RESPUESTA CONCRETA. Todos la esperamos. Hay en la vida de nuestro pueblo, en estos instantes, valores inmensos a cultivar. **Y suciedad que hay que eliminar** porque han enfermado las raíces puras de nuestra nacionalidad que han rechazado toda clase de totalitarismo... ¿quién tendrá que decir basta?” (La Mañana, Edición del Interior, 23 de octubre de 1969, p.7).<sup>7</sup>

6 Presidente de la República en 1985-1990 y 1995-2000, fue Ministro de Educación y Cultura en 1972, bajo la administración de Juan María Bordaberry antes del golpe de Estado.

7 “Las heridas sangran en nuestra cultural nacional”. Firma “Coronilla”. Negritas y mayúsculas son del original. Vale decir que “Coronilla” aparecerá frecuentemente en 1971 acompañando las posturas de la JUP, sobre todo en relación al tema de la educación.

Ese estado de cosas fue el que a nuestro entender impulsó la organización y movilización de una parte de la sociedad contrariada por el desempeño de las izquierdas. La movilización sindical y estudiantil no eran novedosas en la historia del Uruguay. Sin embargo, la percepción de que el país asistía a formas cada vez más transgresoras y por ende peligrosas de agitación, removió desde las entrañas el sentido conservador, larvado y latente, de esa parte de la sociedad. Esa representación de la realidad no podía ser ajena al enfoque que, acicateado por la política exterior de los EEUU, colocaba al movimiento de protesta nacional como eslabón de una escalada revolucionaria visible en el subcontinente latinoamericano desde el triunfo de la revolución cubana.

Notoriamente, esa percepción fue alentada desde diversas esferas del poder. En el apartado siguiente señalaremos el perfil discursivo del presidente Pacheco y su entorno más próximo. Los medios de prensa tradicionales (escritos, radiales y, seguramente, también los televisivos<sup>8</sup>) jugaron a su vez un rol protagónico en la construcción del enemigo. El señalamiento de que el país se debatía en la dialéctica “caos-orden” adquirió en esa coyuntura visos hegemónicos (Rico, 1989). En un antagonismo que no admitía “grises”, el discurso conservador fue claro al colocar detrás de esa línea divisoria a todos los que no compartían su sentido de “nación” y “democracia”<sup>9</sup>. Ciertamente es que la tendencia unitaria de las izquierdas (en el campo sindical desde 1966, en el campo político/electoral en 1971, incluyendo el “apoyo crítico” de los tupamaros al Frente Amplio) reprodujo la percepción binaria (incluso a través de su versión también dual “oligarquía-pueblo”), y legitimó a los ojos de las derechas la existencia de un “otro” singular, expresión del “caos” y agente “disolvente” de los valores de la nación.

## 2. El Estado, primer guardián del orden

Ante la crisis nacional, la acción estatal se mostró cada vez más direccionada a implantar un severo ajuste económico, que no podía ser ajeno a un también severo ajuste político. Si bien la aplicación de ajustes de inspiración fondomonetarista y la implementación de medidas represivas se venían anudando desde fines de la década del 50, con el gobierno de Gestido (Alonso y Demasi, 1986, pp.61-62), y con mayor evidencia con el de Pacheco Areco, esa articulación se naturalizó. Las élites gobernantes, el batllismo incluido, se apartaron del tipo de conducción transformista que había identificado al país desde décadas antes. La línea de investigación de Ferreira es consistente al analizar el proceso de mutación ideológica del liberalismo uruguayo. Este investigador muestra cómo ese proceso se venía ges-

8 No existen en Uruguay archivos de la programación televisiva, al menos disponibles para la investigación histórica. Pero al respecto de sus contenidos, viene al caso el comentario de Real de Azúa, escrito en 1971: “En el ámbito de la “privatización fomentada” asumió relevancia –incluso por las irregularidades que acompañaron los actos de concesión– la atribución de la red de canales de T.V. – asignada al interior del país a grupos de intereses de la trenza económica.” (Real de Azúa, 1988, p.28).

9 Ambos conceptos eran rescatados en un sentido “esencialista”, concebidos como parte de una matriz cultural constituida de una vez y para siempre desde el fondo de la historia, e íntimamente ligada al itinerario de los dos partidos tradicionales, el blanco y el colorado.

tando dentro del batllismo desde los años 50, como “expresión temprana del viraje ideológico de signo conservador que realizara una parte importante del espectro partidario de tradición liberal en el Uruguay, en el marco de la crisis y los avances de la movilización autónoma de la sociedad civil.” (Ferreira 2012).

La nueva Constitución de 1967 reforzó los resortes de poder del Ejecutivo ahora unipersonal. Si bien estas tentativas iban de la mano de un discurso desarrollista que veía en un Ejecutivo ágil el instrumento apropiado para enfrentar una crisis económica que se veía como estructural (Sanguinetti y Pacheco Seré, 1967, p.12), resulta consistente el análisis que ve en la carta magna una herramienta política adecuada para privilegiar a una autoridad estatal que fuera capaz de atemperar las resistencias sociales (Alonso y Demasi, 1986, pp.43-44). El estilo con el que Pacheco asumió sus funciones presidenciales desde diciembre de 1967 recorrió sin rodeos ese camino. Desde un análisis de su discurso, Panizza subraya, entre otras, la resignificación del concepto de democracia que propuso el Presidente, “desarticulada del sistema partidario y relacionada con la idea de orden (dicotomía “orden-subversión”)” (Panizza, 1990, p.26). Pacheco instauró así un estilo de conducción novedoso para la tradición política uruguaya. Eludiendo la mediación, tanto partidaria como parlamentaria, optó por gobernar por decreto, como modo de efectivizar un agudo ajuste económico de inspiración fondomonetarista. Los fundamentos de este organismo de crédito internacional respondían a una concepción liberal y aperturista, que en el caso uruguayo apuntaban a diluir la densa trama institucional que regulaba la economía nacional para volverla más competitiva en el plano internacional. Condicionado por los objetivos de tales ajustes, se avanzó en el deterioro del salario real y en los recortes del gasto público. Al mismo tiempo, en aras de una mejor competitividad externa, se aplicó una profunda devaluación del peso, con su consecuente escalada inflacionaria. Es en ese marco que se debe interpretar la medida aplicada en junio de 1968 de congelación de precios y salarios, política definida por el economista Jorge Notaro como un “intervencionismo estabilizador” (Notaro, 1984).

La reacción se hizo sentir por parte de la Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única creada en 1966. Sustentado en la “metáfora de la soledad”<sup>10</sup>, presentándose como el garante último del “orden” frente al “caos”, en defensa de los destinos superiores de la nación, Pacheco dirigió con mano dura un gobierno que no se mostró dispuesto a negociar con sus oponentes. Decretó de manera recurrente las Medidas Prontas de Seguridad, censuró a la prensa, ilegalizó movimientos políticos, militarizó a funcionarios en huelga y actuó en permanente conflicto con la oposición parlamentaria, desoyendo incluso las denuncias de torturas que una comisión legislativa adjudicó a dependencias policiales. Entre agosto y septiembre de 1968, tres estudiantes murieron en las calles de Montevideo por disparos de la policía, situación que se volvería frecuente en los años que antecedieron y siguieron al golpe de Estado.

10 Expresión utilizada por Panizza para caracterizar el recurso discursivo de Pacheco: “estoy solo con mi pueblo”. (Panizza, 1990, p.144).

Claro está, la “soledad” de Pacheco respondía a un apelativo de contenido “populista autoritario” (Panizza, 1990, p.127) más que a una realidad política. Diversas fracciones o líderes partidarios reconocieron en el estilo presidencial un mecanismo oportuno para implantar el orden. Más allá de ciertas oscilaciones, la fracción batllista liderada por el Dr. Jorge Batlle (Lista 15) fue un consistente aliado del pachequismo, “uno de los responsables auténticos del mantenimiento del régimen de excepción” (Real de Azúa, 1988, p.145) y usina de ideas en materia de política económica. En el caso del Partido Nacional, las relaciones con el gobierno marcaron el ritmo de la disputa de liderazgos y fracciones a la interna del partido. Luego de cierta actitud expectante, el senador Wilson Ferreira Aldunate se empeñaría en mostrarse como el líder de la oposición parlamentaria. Por su parte, la Alianza Nacionalista, liderada por el herrerista Dr. Martín Echegoyen, intentó presentarse como componedora del tablero político (bajo la fórmula de la “colaboración patriótica”), situación que la llevó a un irremediable segundo plano en el contexto de polarización planteado (Corbo, 2009, pp.28 y ss.), pero a sostener en lo sustancial al régimen (Real de Azúa, 1988, p.145). El dirigente nacionalista que asumió de manera más enérgica su apoyo al gobierno, con un discurso “salvacionista” de tono suprapartidario, fue el Dr. Alberto Gallinal (Corbo, 2009, p.44), en cuyo proceso se vería progresivamente aislado<sup>11</sup>. Quienes sí ostentaron una actitud de franco apoyo a la gestión gubernativa de Pacheco, incluso a su estrategia reeleccionista, fueron los dirigentes “sobrevivientes” del ruralismo nardonista, entre los que destacaban por presencia pública Juan María Bordaberry y Juan José Gari<sup>12</sup> (Corbo, 2009, pp.46-47 y 49).

Consideramos que la suma, no lineal, de pachequismo, quincismo, echegoyenismo y ruralismo constituyó en este período la voz de una derecha político-partidaria que vino a dar sustento a la reacción conservadora que puso en la autoridad estatal el peso decisivo para garantizar el orden frente a la “amenaza foránea”. Sin embargo, algunas acciones públicas orientadas desde esos ámbitos políticos (sobre todo desde sus órganos de prensa afines), dan cuenta de una convocatoria explícita a la manifestación social. La conmemoración “patriótica” del 18 de julio que recuerda la Jura de la Constitución de 1830, se transformó en 1969 en el acto de “desagravio al pabellón nacional”, como respuesta al izamiento en centros de estudio de banderas de Cuba, del Viet-Cong e imágenes del “Che” Guevara. La convocatoria a tal acto dio lugar en la ciudad norteña de Salto al surgimiento de la Juventud Salteña de Pie, creada a los efectos de organizar el citado acto patriótico. Las conmemoraciones patrióticas oficiales fueron el marco en los años siguientes para demostraciones de tono similar en todo el país (sobre todo en el interior), instancias en que la JUP tuvo un importante protagonismo. La movilización de derechas tuvo un momento emblemático con la “caravana por la democracia” en Montevideo, en vísperas de las elecciones de noviembre de 1971, consagrada a alertar sobre el peligro de un triunfo de la izquierda<sup>13</sup>.

11 Tal vez ese mismo aislamiento explique que Gallinal fuera uno de los referentes de la política partidaria de mayor aparición pública en actividades de la JUP.

12 El ruralismo se transformó, como veremos, en el apoyo más claro de la JUP dentro del sistema político.

13 En la sensibilidad conservadora estaba presente la reciente victoria electoral de la alianza de las

Sin embargo, entendemos también que la constelación político-partidaria arriba indicada no colmó las expectativas del sujeto social de derechas alarmado por el tenor que adquiría la percepción de “caos” impuesto por la izquierda, y eso explica la constitución de un movimiento social como la JUP

Como sostiene McAdam, a la hora de evaluarlo desde la perspectiva de un movimiento social, no se debe confundir lo que “se consideran oportunidades políticas, es decir, los cambios estructurales e ideológicos del poder, con los procesos colectivos por medio de los cuales se encuadran e interpretan estos cambios” (McAdam, 1999, p.52). En ese sentido, las “oportunidades políticas” deben ser concebidas como “externas” y “percibidas” (Tarrow, 2009, p.116) por el sujeto en cuestión. Precisamente, debe prestarse atención al tono de desencanto que denota el emergente movimiento social de derecha ante las dificultades del poder establecido por contener la protesta social de la izquierda. El señalamiento de responsabilidades no fue desde un principio claro, y no incurrió en favoritismos partidarios. Se puede entender que estas fuerzas conservadoras mantenían una expectativa acerca de qué actor/es serían capaces de sostener el orden interno frente a la amenaza de los “portadores del caos”. Desde 1968, Pacheco fue mostrando su carácter de gobernante de “mano dura”, pero sin embargo no fue la estructura partidaria del pachequismo la que canalizó orgánicamente el grueso de estas energías militantes, ni tampoco las demás estructuras políticas existentes<sup>14</sup>. Esto es razonable en la medida en que esa conducción autoritaria apenas podía controlar algunos de los desbordes que alarmaban a la derecha. Creemos que la memoria colectiva y la propia historiografía han contribuido a la construcción de la imagen de Pacheco como “hombre fuerte”. No es nuestro propósito contestar esa afirmación (es indudable que su discurso y sus prácticas políticas iban en esa dirección, y que esa fue la percepción de sus rivales políticos) pero a modo de hipótesis, planteamos que desde la perspectiva de la derecha esa fortaleza no estaba garantizada. Entendemos incluso que fue esa misma perspectiva la que debió reforzar los impulsos más autoritarios de ese gobierno. Pues bien, lo que queremos decir es que la preocupación de aquellos que constituyeron movimientos sociales por derecha no apostaban a tal o cual figura política para impartir el orden, sino a una ecuación de poder suficientemente estable como para garantizarlo. Citando a Oswald Spengler, desde su semanario, la JUP señaló cuatro meses antes del golpe de Estado que “siempre es a último momento un pelotón de soldados el que salva la civilización” (Semanario Nuevo Amanecer, 8 de febrero de 1973).

En el ítem que sigue ahondaremos en torno a los signos de inestabilidad que mostraba la alianza de las élites políticas ante la crisis del país.

---

izquierdas en Chile. La intensa movilización del recién nacido Frente Amplio, azuzaba dicho fantasma.

14 En sus apelativos históricos y en su simbología, la JUP se reconocerá más próxima al itinerario del ruralismo nardonista. No deja de ser sugerente que Pacheco eligiera en 1971 como su sucesor a la presidencia a un hombre formado en la Liga Federal de Acción Ruralista, el posteriormente golpista Juan María Bordaberry.

### 3. La frágil alineación de las élites

La EOP visible en el Uruguay de fines de los sesenta muestra con nitidez una de las condiciones señaladas por McAdam (1999, p.4) propiciatorias para el surgimiento de un movimiento social: la inestabilidad en las alineaciones entre las élites. Los años que enmarcan el nacimiento del movimiento juvenil “de pie” (1969-1970) son de un importante nivel de descomposición en los grados de acuerdo de las principales fracciones dirigentes.

Según Rico, el país asistió así a la

“degeneración de la democracia o camino democrático a la dictadura... el sistema político democrático no fue capaz de autorregular sus propias contradicciones internas ni los conflictos de intereses ni las relaciones de discordia y división que se entablaron entre las élites civiles y militares ni la enemistad generalizada entre conciudadanos; la fragmentación de los partidos y la multiplicación de los liderazgos partidarios; la intolerancia ideológica y social; las difamaciones e injurias al honor; la pérdida de respeto por la integridad de la vida humana; la corrupción política y el incremento de los delitos económicos; las denuncias y comprobaciones de fraude electoral en 1971” (Rico, 2005, p.46).

Una de esas señales puede apreciarse en la manera en que el presidente Pacheco refería en sus discursos a un amplio arco de la oposición: “un vasto sector de demagogia”, “los ingenuos acomodaticios o cobardes”, “la hostil incompreensión de un frente político opositor, ciegamente obstinado en destruir de todos modos nuestra compleja y sacrificada tarea” (Panizza, 1990, p.140).

El mensaje de unidad interpartidaria (entiéndase blanco/colorado) se vio rápidamente desbaratado, cuando las conversaciones tendientes a un acuerdo de coparticipación, iniciadas entre Pacheco y Echegoyen el 18 de julio 1969, terminaron bloqueadas en la propia interna blanca (Corbo, 2009, p.30-31).

Algunas interpelaciones parlamentarias a ministros de Pacheco generaron hondos conflictos de poder. En una rápida síntesis, recordemos la interpelación al ministro de Industria y Comercio Jorge Peirano Facio en mayo de 1969, provocando la amenaza de disolución de las Cámaras por parte de Pacheco; la interpelación del senador blanco Ferreira Aldunate al Ministro del Interior Pedro Cersósimo en abril de 1970, logró la censura, su renuncia y la del jefe de Policía de Montevideo, Coronel Romeo Zina Fernández, por irregularidades en Jefatura; la interpelación de Ferreira Aldunate al ministro de Hacienda César Charlone en abril de 1971 por asistir al Banco Mercantil cuando uno de sus dueños, Peirano Facio, era canciller, terminó también con la censura y renuncia del ministro.

Otra profunda crisis ministerial se produjo entre setiembre y octubre de 1970 cuando el Poder Ejecutivo vetó 96 artículos de la Rendición de Cuentas y la Asamblea

General logró las mayorías necesarias para levantar 65 vetos. Tras la renuncia del gabinete, sobrevino un feriado bancario y rumores devaluatorios. Como correlato de la crisis, dirigentes de primera línea del partido de gobierno dieron señales poco alentadoras: el senador Manuel Flores Mora sostuvo sendos duelos de honor a sable con los dirigentes quincistas Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti. Pautando el grado de fragmentación dentro de ese partido, ya se había constituido un grupo parlamentario opositor colorado (Corbo, 2009, p.29), y a fines de 1970, el senador colorado Zelmar Michelini y su Lista 99 abandonaron el lema partidario (Correa, 2007).

El caso Mitrione<sup>15</sup>, por sus connotaciones internacionales y por su dramático desenlace, sacudió al conjunto de la sociedad uruguaya, removiendo las fibras más íntimas de la sensibilidad conservadora. En ese sentido, las declaraciones conciliatorias del vicepresidente Dr. Alberto Abdala y del subsecretario de Relaciones Exteriores, Dr. Américo Ricaldoni, durante esa crisis, no podían menos que sembrar la confusión en el sujeto social de derecha. Para complejizar aún más el clima, el tradicionalmente conservador periódico herrerista *El Debate* adoptó una singular actitud crítica ante el gobierno por su negativa a negociar con los tupamaros (Aldrichi, 2007, pp.138 y ss.).

Existe, sin embargo, cierto consenso en la bibliografía académica acerca de la opacidad de los propios sectores opositores que, a pesar de su peso parlamentario, evitaron arrastrar al Poder Ejecutivo hacia un bloqueo:

“En verdad, la prolongada impotencia mostrada por ese personal para ejercer el derecho constitucional de levantar las mismas “medidas prontas de seguridad” que son la seña y el justificativo de su propio descaecimiento señala que la mayoría de la representación de los partidos ha asentido tácitamente a su necesidad” (Real de Azúa, 1988, p.52). Para este autor, la clase política, como parte de los sectores medios de la sociedad, funcionó como “clase de apoyo” a los sectores dominantes, haciendo predominar así las “determinaciones sociales e ideológicas de base – emboscadas o no en el justificativo de la ‘lucha contra la subversión’... sobre las político partidarias y el propio interés personal o de cuerpo.” (Real de Azúa, 1988, p.52).

Para Varela, “la actitud de los políticos estaba guiada en primer lugar por un reflejo de prudencia”, educada en el recuerdo de 1933, y “más allá de los métodos, la mayoría de las fracciones tradicionales no tenían un desacuerdo sustancial con el plan económico aplicado ni con la propuesta de orden.” (Varela, 1988, p.52).

Estas afirmaciones irían en contra de nuestra observación sobre una supuesta “inestabilidad de las élites”. Pero, insistimos, nos estamos refiriendo al impacto del clima

15 Dan Anthony Mitrione era un agente estadounidense establecido en Uruguay en tareas de formación contrainsurgente para la policía local. Acusado por el movimiento tupamaro de ser un agente encubierto de la CIA y de adiestrar en la práctica de la tortura, fue ejecutado el 9 de agosto de 1970 (Ver Aldrichi, 2007).

político en el plano de la subjetividad ciudadana. Si bien es cierto que la rivalidad entre las diversas fracciones de los partidos tradicionales estaba naturalizada por la propia trayectoria del sistema político uruguayo, y que además es cierto que la oposición parlamentaria no amenazó la estabilidad del gobierno, entendemos que los choques arriba mencionados, relacionados con los mecanismos de imposición estatal del orden, marcaron un escenario novedoso en términos de confrontación pública de las élites. Esa debió ser la percepción de los sectores alarmados por derecha.

El año electoral de 1971 profundizó las grietas dentro del sistema de partidos. El intento reeleccionista del presidente Pacheco, materializado en junio de 1970 con la creación de la Unión Nacional Reeleccionista, conmovió la interna colorada, incluso la pachequista, provocando divisiones y cruce de acusaciones (Corbo, 2009, pp.40-41 y 47).

Por otra parte, las ofertas electorales confirmaron la creciente fragmentación de los partidos, alcanzándose “los mayores índices de fraccionalización de los lemas tradicionales en toda la historia del país” (Caetano y Rilla, 1994, p.29).

El gobierno constitucional de Juan María Bordaberry (de marzo de 1972 a junio de 1973), marcado por las denuncias de fraude electoral por parte del Partido Nacional, constituyó la recta final del descaecimiento democrático, pautado por el progresivo aislamiento del propio Presidente, el ascenso de las Fuerzas Armadas, y la alianza de ambos actores mediante el pacto de Boiso Lanza de febrero de 1973. Embarcados en la denuncia de la “corrupción”, la “politiquería” y la “demagogia” de los políticos, los militares venían a ofrecer un proyecto presuntamente alternativo, orientado a “proporcionar seguridad al desarrollo nacional”. Por cierto que el proyecto, más allá de argumentos moralistas, nacionalistas y férreamente anticomunistas, no contenía más que vagos enunciados que, para amplios sectores de la izquierda, presentaban un parentesco programático con el “peruanismo”<sup>16</sup>. Las señales emanadas desde tiendas partidarias carecieron de unidad de criterio y cada fracción intentó, ante la crisis, arrimar agua a su molino<sup>17</sup>. La alternativa golpista no parecía necesitar de activismo ni abanderados en el campo social, aunque la JUP se encargó de asentar su apoyo desde las páginas de su semanario “Nuevo Amanecer”<sup>18</sup>.

16 Esta expresión refería al peculiar proceso que se vivía en Perú desde 1968, cuando un golpe militar conducido por el General Juan Velasco Alvarado, impulsó un programa de reformas estructurales en base, entre otras medidas, a la reforma agraria y la expropiación del petróleo a empresas estadounidenses, lo que condujo a la ruptura de relaciones entre ambos países.

17 Para un repaso de esa coyuntura y de las posturas de las diversas fracciones partidarias véase “Bucheli y Harriett, 2012, pp.17-19”.

18 Esa misma prédica asumió el semanario Azul y Blanco, de tendencia militarista y falangista.

### III. EL SUJETO SOCIAL DE DERECHAS SE MOVILIZA

Las evidencias disponibles permiten señalar que la reacción conservadora que estamos estudiando se reconoce nítidamente en el clivaje Montevideo/interior. Ante la crisis nacional, Montevideo se presentó como la caja de resonancia de la protesta izquierdista, marcándose “un claro discontinuo entre las capas de la población en las que ha prendido el prestigio político, social y cultural de la “contestación” al sistema global y las restantes del país” (Real de Azúa, 1988, pp.32-33). Esta situación respondía a fenómenos estructurales anclados en las profundidades de la historia económica, social y política del Uruguay. Como resultado de una temprana modernización, el espacio capitalino había dado lugar a formas de dominación social permeadas por una conducción de tipo transformista, en el sentido gramsciano de la expresión, como lo plantea Panizza (1990, p.14). Si bien el alto grado de centralización montevideana de la política uruguaya hizo de ese carácter un fenómeno nacional, el interior (y cuanto más profundo ese interior, con mayor evidencia) representó el marco cultural de mayor resistencia a las pulsiones de cambio, ya fueran “reformistas”, “transformistas” o “revolucionarias”, todas ellas de fuerte impronta citadina y de referencia cosmopolita.

Seguramente, a ello había contribuido en las últimas dos décadas el fenómeno nardonista, actuando como “proceso de concientización económica... entre los niveles bajos y medios de la producción rural en el sentido de que eran privados de una parte del valor internacional de sus productos en beneficio de la industria, el Estado, la burocracia, el ‘lujo de la ciudad’, etcétera.” (Real de Azúa, 1988, p.146).

En contrapartida, Montevideo acuñó importantes grados de sindicalización de rai-gambre clasista, una fuerte autonomía de una intelectualidad crítica respecto a las estructuras tradicionales y, asociado a ello, una dinámica de protesta juvenil/estudiantil que desde los años 60 interpeló desde los cimientos el sistema de dominación.

Relevamos a continuación ciertos hechos que dan cuenta del malestar reinante en los sectores de la población del interior permeados por el imaginario conservador.

Hemos elegido tres “momentos” de expresión de alarma conservadora que consideramos de relevante densidad, por la cantidad de las manifestaciones públicas ocurridas, por la radicalidad discursiva de las mismas, y por su incidencia directa en el escenario de constitución y ascenso del movimiento juvenil “de pie”.

Primero, entre 1968 y 1969, la reacción ante lo que se señalaba como la “penetración comunista” en la enseñanza.

Segundo, la respuesta en clave de condena a las fuerzas subversivas, en particular como consecuencia del caso Mitrione, en agosto de 1970.

Tercero, en el año 1971, como réplica al surgimiento de la coalición de izquierdas Frente Amplio, la conformación de una suerte de “coalición espejo”, expresada en diversas manifestaciones gestadas en la sociedad civil que, aunque expresaran una preocupación irradiada desde los dos partidos tradicionales, demostró una autonomía de acción relevante.

## 1. La denuncia de la penetración comunista en la enseñanza

El ámbito de la educación fue un espacio de particular sensibilidad, donde padres, estudiantes y docentes autodefinidos como “demócratas” levantaron su voz contra la penetración izquierdista, real o imaginada. Esta reacción, observa Real de Azúa, respondía a un antagonismo establecido: “la concepción enteramente tradicional que de los fines de esa enseñanza profesa un sustancial sector de la población nacional y la otra, y tan distinta, que se involucra en la militancia de los sectores docentes y estudiantiles de posición más extrema” (Real de Azúa, 1988, p.135).

## 2. Los episodios en José Batlle y Ordóñez y Fraile Muerto

En agosto de 1968 se produjo en los liceos de las pequeñas localidades de José Batlle y Ordóñez (departamento de Lavalleja) y Fraile Muerto (departamento de Cerro Largo), la protesta de los alumnos, mediante huelga y ocupación. Debido a

“la inclusión de profesores de tendencia marxista en distintas cátedras y [...] por el proselitismo que realizan fuera y dentro de los salones [...] han debido ser los propios alumnos, quienes tomaron las banderas de la libertad y de la democracia que esos profesores dicen defender, y alzaron su voz protestando ante las autoridades nacionales por lo anormal de los hechos” (La Mañana, Edición del Interior, 29 de agosto de 1968, p. 3).

Una persona entrevistada para este trabajo, que residía por entonces en Batlle y Ordóñez, relató que ese hecho se produjo luego de que una parte de los docentes del liceo local habían concurrido a la plaza del pueblo para recordar al estudiante Líber Arce, muerto días atrás por un policía en Montevideo, provocando el rechazo de una parte de la población contra ese mitin<sup>19</sup>.

Cabe agregar que este poblado fue elegido más de dos años más tarde como sede del II Congreso Nacional de la JUP, en mérito a la lucha desarrollada en 1968 contra la presencia de profesores comunistas. “La reciente fundación de la JUP le viene a dar la razón a estos cruzados de la libertad” (La Mañana, Edición del Interior, 31 de diciembre de 1970, p.4).

<sup>19</sup> Entrevista a Raquel Miranda.

### 3. Los hechos de Bella Unión

El acto de conmemoración de la Jura de la Constitución, el 18 de julio de 1969 se transformó a nivel nacional en un acto de “desagravio al pabellón nacional” luego que se denunciara el izamiento en centros educativos de la capital del país de banderas extranjeras. Como en la inmensa mayoría de las localidades del país, en la localidad de Bella Unión<sup>20</sup>, en el extremo norte, los vecinos fueron convocados a la plaza principal.

Según la prensa, todo ocurría con normalidad, hasta que tomó la palabra el profesor Carlos Bartolomé Rampa y “comenzó a oírse un verdadero discurso político. La izquierda estaba presente nuevamente en un acto patriótico. Pero lo que no se esperaba la izquierda, era la reacción del pueblo, que con una verdadera llama patriótica endosada en su pecho, abucheó y recriminó sus palabras”, obligándolo a bajar del estrado, un acierto, pues, según la prensa, “los ánimos estaban exaltados en grado sumo” (Tribuna Salteña, 21 de julio de 1969, p.4). Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Prof. Rampa fue detenido por transgredir las Medidas Prontas de Seguridad, lo que provocó en respuesta una huelga de profesores y funcionarios, avalada por la Directora Interina del Liceo de Bella Unión<sup>21</sup>, en solidaridad con el colegio del establecimiento.

El día 21 de julio, un grupo de unos treinta padres de alumnos del Liceo ocupó el instituto en protesta por la medida gremial. “Posteriormente se congregó una enorme cantidad de padres y amigos del liceo”. Los ocupantes exigían la separación de su cargo de la Directora, Prof. Nelly Pérez de Acosta, y del “grupo de profesores de declarada tendencia antidemocrática”. Se informaba que se habían cursado telegramas al Presidente de la República<sup>22</sup>, Ministros de Cultura e Interior, Consejo de Secundaria y Jefatura de Policía de Artigas (nótese el carácter policíaco que se asignaba al caso). Según el diario, a las 10 de la mañana ya era enorme la lista de firmas en adhesión a la carta, y la recepción de solidaridad de personas amigas enteradas del hecho (Tribuna Salteña, 22 de julio de 1969, pp. 3-4). La ocupación realizada por los padres de alumnos provocó una asamblea estudiantil, convocada por la Asociación de Estudiantes de Bella Unión (AEBU) en un local céntrico, con más de 400 alumnos presentes. Allí se hizo presente un grupo de alumnos denominado Grupo de Estudiantes de Izquierda de Bella Unión (GEIBU), en defensa de la Directora y opuestos a la ocupación de los padres. La moción mayoritaria dio apoyo

20 Con sus 4.955 habitantes en 1963, era la segunda ciudad del departamento de Artigas, detrás de la capital (VVAA 1970).

21 Se trataba de una dirección interina por enfermedad del Director titular, Prof. Muguruza. Entrevista a Juan José Moraes.

22 El telegrama enviado a Pacheco declaraba “solidaridad absoluta con el Gobierno Nacional en su posición ideológica de preservación de los altos postulados de libertad y democracia imperantes en nuestro tradicional sistema de vida. Respaldo incondicional a toda aquella actitud asumida por las respectivas autoridades nacionales tendiente al mantenimiento del orden.” (Tribuna Salteña, 22 de julio de 1969, p. 4).

a los padres ocupantes, solo siete votos fueron en contra<sup>23</sup>: “Preferimos perder el año antes que seguir manteniendo esta situación”, fue, según Tribuna Salteña (22 de julio de 1969, p. 4) la consigna de la mayoría. La ocupación del liceo fue levantada por los padres el 5 de agosto ante la llegada de un delegado del Consejo de Secundaria, al son de la marcha “Mi Bandera”. Entregaron a las autoridades un manifiesto:

“**ALERTA** Uruguay, alerta padres uruguayos, es el grito que trasunta desde el rincón más alejado del país (...) BELLA UNIÓN ESTÁ **DE PIE** (...) contra quienes ha renegado de nuestra fe democrática (...) **DE PIE URUGUAY, LA PATRIA PELIGRA, DEFENDÁMOSLA DE LOS ORIENTALES ENTREGUISTAS**” (Tribuna Salteña, 8 de agosto de 1969, p.7).<sup>24</sup>

La referencia a ponerse “de pie” se producía en consonancia con hechos casi simultáneos que ocurrían en la vecina ciudad de Salto, con la conformación de la “Juventud Salteña de Pie”, de similar impronta ideológica. No tenemos elementos para saber si existía una influencia recíproca<sup>25</sup> o si se trataba de una mera coincidencia, pero es plausible que esa consigna fuera parte del repertorio discursivo de la derecha anticomunista. Precisamente, entre las adhesiones en la prensa salteña, figuró la siguiente: “Juventud Salteña de Pie, con Uds. unidos y adelante. Dignos de ser imitados” (Tribuna Salteña, 24 de julio de 1969). En relación al lenguaje político adoptado por las derechas, notemos aquí también el recurso al término “Alerta”, nombre y sigla de una organización derechista de comienzos de los años 60 (Bucheli, 2012). Esa misma expresión sería utilizada en otros manifiestos de la Juventud Salteña de Pie<sup>26</sup>.

En carta dirigida al Ministro de Cultura, los “Padres y Amigos del Liceo Piloto” de Bella Unión denunciaron una serie de actitudes de los profesores, señaladas como subversivas, de agitación y de coacción de los estudiantes. A continuación se daba una lista de ocho profesores que debían ser removidos (Tribuna Salteña, 9 de agosto de 1969, pp. 3 y 4 y 10 de agosto de 1969, p.8).<sup>27</sup>

23 Entrevistada para este trabajo, Cristina Porta (integrantes del GEIBU en 1969), señala que la agrupación estudiantil de izquierda era efectivamente minoritaria y marginal. Realizaban tareas de apoyo en los campamentos cañeros de UTAA, en las afueras del pueblo, y casi todos terminaron en la orgánica tupamara.

24 Las mayúsculas corresponden a la versión original. Las negritas son nuestras.

25 A través de la prensa salteña, sabemos que los hechos ocurridos en el liceo de Bella Unión, en el extremo norte del vecino departamento de Artigas, tuvieron repercusión en el entorno conservador de aquél departamento. Consideramos que esto se debe a una trayectoria histórica de larga data, que había transformado a Salto en una suerte de capital regional en el plano económico y cultural, y también, para sus elites, en un plano simbólico. Desde el punto de vista de las comunicaciones, Bella Unión se encontraba mucho más vinculada a la ciudad de Salto que a la de Artigas, capital de su departamento, a través de la Ruta nacional No. 3 (Esto último a partir de la entrevista a Juan José Moraes).

26 Como por ejemplo: “Alerta pueblo uruguayo!” “... manos anónimas osaron hacer flamear una bandera extranjera en el local en construcción del Instituto Normal de Salto”. (Tribuna Salteña, 12 de agosto de 1969, p. 9).

27 Uno de los docentes impugnados era el reconocido intelectual Eliseo Salvador Porta. Otro era

El debate público sobre lo acontecido continuó cuando padres del Liceo de Bella Unión respondieron a una nota publicada por “un profesor cristiano y demócrata” titulada “Bella Unión, las ideas no se matan”, en el semanario montevideano Domingo, dirigido por el Dr. César Luis Aguiar<sup>28</sup>. La respuesta de los padres discurrió sobre varios puntos. Primero, rechazaban la alusión sarmientina del título de la nota (“Bárbaros, las ideas no se matan”, había dicho el autor de “Facundo”), apropiándose ellos del sentido civilizatorio de la misma: “Cómo osan mutilar de a poco las mentes jóvenes (que) reciben la ponzoña de una doctrina comunista?” Luego, acerca de la adjudicación de la palabra “pueblo”: “pregunta si los que tomaron el liceo pueden llamarse pueblo”. La respuesta estaba dada, según ellos, por las más de mil firmas de padres y amigos del liceo, realizada por el apoyo de la prensa oral y escrita, “que colaboró a desnudar una situación que por años se soportó...” Obrar así era un derecho y una obligación de los padres ante las actitudes antidemocráticas. Sirvió de ejemplo para que en otros muchos liceos “los verdaderos demócratas (...) salieran a pelear también de la misma forma que ellos” (Tribuna Salteña, 4 de setiembre de 1969, p.6).

Entrevistamos para este trabajo a J.J. Moraes<sup>29</sup>, quien vivió entre los años 60 y 70 en Bella Unión y conoció de cerca los hechos que presentamos. En su relato adquiere especial énfasis la estructura social de la localidad. Según él, la ocupación del liceo fue promovida por personas de lo que se podría llamar la “alta sociedad” del lugar. Él mismo relativiza esa expresión. “Estaba la gente que tenía dinero, que no era mucho dinero, pero que eran los más acomodada del pueblo, que tenían sus negocios, sus comercios y les iba bien, era una clase media alta, pero no era una clase alta. Bella Unión se destaca por ser una región agrícola más que ganadera, agricultores cañeros con grandes extensiones de caña, no estancieros...” Para ejemplificar la escena social del pueblo, Moraes sintetiza sonriendo: “Las clases sociales eran dos: la “gente” y los “chinos”. Los “chinos” no podían ir a los bailes de la Sociedad de Fomento”. Repasamos con él la lista de firmantes del manifiesto entregado por los padres a las autoridades. La lista nos da como resultado un grupo de hombres ubicados en los escalones superiores de aquella sociedad. De los once individuos, dos tenían cargos técnicos en empresas de la caña de azúcar, dos eran despachantes de aduanas, dos tenían cargos de jerarquía en la órbita municipal, tres eran comerciantes establecidos (panadería, fábrica de hielo, gomería), uno era médico y otro productor cañero. Agrega Moraes: “hay uno que no aparece, Carlos Mallo, estanciero fuerte, viejo muy ladino, mucha plata y muy fascista, él no aparece pero es uno de los promotores.” Nos cuenta que entre ellos predominaban los

Dante Porta, sobrino de éste, y que sería asesinado bajo tortura el 12 de diciembre de 1976 en el Regimiento de Caballería No. 10 de Bella Unión luego de ser detenido por las FFAA en un coletazo de la “Operación Morgan”, destinada a desarticular al Partido Comunista.

28 Sociólogo, de trayectoria política en el cristianismo progresista.

29 Nacido en 1944 en una familia de catorce hermanos, hijos de un padre católico y militante de la Unión Cívica, empleado del Ministerio de Agricultura y Pesca. Juan José estudió como pupilo en un colegio católico de Buenos Aires. Volvió al pueblo para trabajar en el sector azucarero y se casó años después con la hija de la directora interina Nelly Pérez. Votante del Partido Demócrata Cristiano en 1966 y 1971 (en esta ocasión ya dentro del Frente Amplio), fue trasladado en 1970 de la empresa donde trabajaba, CALNU, “porque un comunista no puede estar allí”. Entrevista a J.J. Moraes.

colorados, tanto de la Lista 15 como de la 14. Ante nuestra pregunta sobre la relación de esos hombres con el proceso político posterior, nos dijo que “todos esos, en la época de la dictadura tuvieron una actitud de colaboración en el sentido de que estaban de acuerdo con lo que pasaba.”<sup>30</sup> Según él, el corte entre quienes apoyaron la ocupación del liceo y quienes no lo hicieron, tuvo un sentido más social que ideológico, basado en una situación que refleja la realidad de un pueblo pequeño. El marido de la Directora interina desautorizada por los padres ocupantes era, además de profesor de física en el liceo, el médico cirujano del pueblo. El cuerpo docente recibió por ello el apoyo de la gente del sector más pobre de la ciudad, la del barrio “El Tropezón”, que se mostraron leales al Dr. Acosta<sup>31</sup>, “que nunca le negó atención a nadie, y le pagaban como podían, cuando podían, y le pagaban con botellas de caña brasilera... y él no tomaba, o con gallinas o corderos...”<sup>32</sup>.

#### 4. Protestas en el Instituto Magisterial de San Ramón

En esos mismos días, una situación similar se produjo en la localidad de San Ramón, departamento de Canelones, cuando una carta con “numerosísimas firmas de vecinos” fue elevada al Presidente de la República, Ministerio de Cultura y Consejo de Primaria, pidiendo la destitución del Director del Instituto Normal por “documentado proselitismo político comunista”. Entre las múltiples acusaciones realizadas contra el director, estaba la de recomendar como bibliografía para la materia “Historia de la Educación”, el semanario *Marcha*, el diario *El Popular* y la Revista de la CNT; no concurrir a las reuniones preparatorias del acto de desagravio al pabellón nacional, no concurrir al mismo y no izar el pabellón en el Instituto, “en franca rebeldía a un decreto del Poder Ejecutivo” (*Tribuna Salteña*, 26 de julio de 1969, p. 3).

#### 5. Acto en la ciudad de Treinta y Tres

En la semana que siguió al Congreso fundacional de la JUP (24 de octubre de 1970), la agrupación de la ciudad de Treinta y Tres de ese movimiento realizó un acto en una plaza 19 de Abril “repleta de gente”. La convocatoria estaba relacionada con hechos acaecidos en un liceo de la capital olimareña. Se señalaba que un profesor de literatura habría respondido soezmente a una alumna

30 Subraya en particular el caso del Dr. José Carlos Laporte, conocido más adelante por supervisar torturas en el cuartel local. De todos modos, no terminó bien: “*los milicos terminan procesándolo por contrabando*”. Entrevista a J.J. Moraes.

31 El Dr. Acosta era oriundo de Montevideo. Era colorado de Zelmar Michelini, y se pasó al Frente Amplio con éste. Fue segundo suplente del candidato a la Intendencia de Artigas por el Frente Amplio en 1971, lista encabezada por el Ing. Eladio Dieste. Durante la dictadura “*estuvo un año preso acusado de asistencia a la subversión...*” Entrevista a Juan José Moraes.

32 Entrevista a Juan José Moraes.

“tradujo el acto sexual a la terminología lunfarda, mostrando de esa manera que confunde a sus alumnas con prostitutas y a los varones por inmorales”. “Esta erotomanía, esta obsesión por los problemas sexuales, tan común en algunos de los profesores de Secundaria, va de la mano con esa otra manía por la violencia y por la subversión. Estos falsos educadores saben perfectamente que destruyendo la institución familiar, socavando la moral, envileciendo al ser humano a punto de transformarlo en un animal, es como mejor se franquea el camino al materialismo marxista... No es mera coincidencia que meses atrás se exhibiera en Treinta y Tres para los alumnos liceales y de preparatorio, la película del homosexual y afiliado al Partido Comunista Italiano Pier Paolo Pasolini<sup>33</sup>: Teorema<sup>34</sup>... Es paradójal decirlo pero se ha llegado al extremo de que sean los estudiantes los que están enseñándole a los profesores que es lo que se debe enseñar y qué es lo que no se debe” (La Mañana, Edición del Interior, 5 de noviembre de 1970, p.3).

Consideramos que un relevamiento más completo de casos a nivel nacional de protesta contra la presencia de “comunistas” en la enseñanza contribuirá a dar cuenta de la amplitud del sujeto social de derechas que alcanzó grados de representación en los movimientos sociales de los que damos cuenta en este trabajo. Creemos de todos modos que los casos aquí recabados, con ejemplos del norte, este y sur del país constituyen una muestra factible de representar al conjunto del interior de la República.

## 6. El impacto del “caso Mitrione”

El secuestro del agente estadounidense Dan A. Mitrione y su posterior ejecución por parte del MLN-T el 9 de agosto de 1970, tuvo una repercusión inmediata en determinados sectores conservadores, lo que dio lugar a la conformación de organizaciones que bajo los apelativos de “democráticos” o patrióticos”, levantaron su voz reclamando la urgencia de actuar. Veamos el ejemplo de dos ciudades del litoral oeste.

El 11 de agosto la prensa salteña anunciaba, “ante los momentos cruciales porque [sic] atraviesa la República”, la conformación de un “Movimiento Patriótico Salteño”, tras reunirse un “grupo representativo de las fuerzas vivas del departamento”: el Centro Industrial y Comercial de Salto, los Clubes de Leones y de Rotarios, la Cámara Juniors de Salto, la Asociación Agropecuaria e Hípica de Salto y el Rotaract Club de Salto. Se apelaba a la defensa del “tradicional sistema de vida

33 1922-1975. Afiliado al PCI en 1948 y expulsado en 1949 tras acusaciones de corrupción de menores y obscenidad. Asesinado en 1975 en un caso poco claro. <http://www.rebeldemule.org/foro/monograf/tema2616.html> Consultado 22 de mayo de 2013.

34 1968. “A una familia de clase alta italiana, compuesta por un matrimonio, un hijo y una hija, llega un misterioso joven que irá alterando el comportamiento de todos ellos. Polémica película -fue declarada inmoral por la Iglesia- del siempre controvertido Pier Paolo Pasolini.” <http://www.filmaffinity.com/es/film838535.html> Consultado 22 de mayo de 2013.

uruguayo” para lo cual se convocaba a una “intensa campaña de Acción Cívica y a Actos Patrióticos”. El movimiento así constituido llamaba a dar “carácter Nacional” a esta iniciativa (Tribuna Salteña, 11 de agosto de 1970). Real de Azúa ha subrayado la reaparición en esta época del uso de la denominación “fuerzas vivas”, que según él no era usada desde hacía décadas (Real de Azúa, 1988, pp.30 y 53). La autoproclamación de “fuerzas vivas” ostentaba un indisimulado sentido de clase. Estaban allí representadas las tradicionales gremiales de los empresarios salteños (industriales, comerciantes, ganaderos), así como las clásicas organizaciones filantrópicas laicas, vinculadas a los sectores más graneados de la sociedad local.

Si bien no tenemos elementos para asegurarlo, una serie de acontecimientos ocurridos en el ámbito educativo de la ciudad de Salto en las semanas siguientes, parecen discurrir en ese clima de reacción y respondiendo al llamado del citado Movimiento Patriótico. En una asamblea convocada en la Asociación de Estudiantes del Liceo Piloto de Salto, la mayoría pidió “masivamente... la renuncia de sus dirigentes” porque éstos apoyaban la actividad de los estudiantes agitadores de la capital, rechazaban la intervención de la Secundaria y la clausura de cursos en la capital y se solidarizaban con los docentes destituidos<sup>35</sup>. Quedó conformada luego de la asamblea una nueva directiva provisoria (Tribuna Salteña, 18 de setiembre de 1970, p. 3). Días después, una “trascendente declaración de docentes salteños” con las primeras cien firmas de maestros, estampaba su condena” ante “los problemas de notoriedad”, entre los cuales se señalaba “el asesinato del Sr. Dan A. Mitrione”. (Tribuna Salteña, 23 de setiembre de 1970, p. 3). Hacia fines de setiembre, se producían sendas declaraciones del Movimiento Patriótico de Salto y de la Asociación Estudiantil Osimani y Llerena ante los actos de vandalismo presuntamente perpetrados por “los pocos bolches” de la ciudad (Tribuna Salteña, 29 de setiembre de 1970, p.1).<sup>36</sup> Según un relato de prensa, en rueda de jóvenes se propuso tomar represalia contra la Casa Universitaria, identificada como símbolo del movimiento revulsivo; pero primó la “serenidad” y el criterio de no “descender al mismo nivel que los apátridas” (Tribuna Salteña, 29 de setiembre de 1970, p.1).

Ese clima de reacción se hizo presente también en otra capital litoraleña, Fray Bentos (departamento de Río Negro). Allí, se conformó en agosto de 1970 una “Confederación democrática de maestros y funcionarios de Enseñanza Primaria y Normal de Fray Bentos”. Denunciando el “trágico suceso” del asesinato de Mitrione, se señalaba que “el foco subversivo, la voluntad instigadora y los cerebros dirigentes tienen un recinto: la Capital y dentro de ésta una guarida: **la Universidad.**” Proponían: “Unirnos en pensamiento y acción, propulsar una marcha gigante hacia la Capital, y allí todos unidos en demostración de fuerza, coraje y patriotismo, recorrer la Av. 18 de Julio, en expresión silenciosa, elocuente y desagraviante”. Llamaba a “salvar la Democracia, depurar la Enseñanza y voltear la mala Universidad **Ahora**” (La Mañana, Edición del Interior, 24 de setiembre de 1970, p. 3).<sup>37</sup>

35 Secundaria y UTU habían sido intervenidos por el PE en febrero de 1970, generándose un vasto conflicto entre las autoridades interventoras y las gremiales de docentes y estudiantes, sobre todo en Montevideo. Ver (Romano, 2010).

36 Se referían a una pintada realizada en la fachada del principal instituto secundario de Salto.

37 Las negritas son del original.

## 7. 1971: la “coalición espejo”

El año 1971 está perlado de manifestaciones de movimientos conservadores expresados en clave “reaccionaria”. Esta lista seguramente incompleta, resulta de un registro de eventos que señalan la participación activa de diversas organizaciones emanadas de la sociedad civil, cimentadas en el impulso dado por las “fuerzas vivas” locales: el “Comité Demócrata de Dolores” (La Mañana Edición Interior, 18 de febrero de 1971, p.4), el “Movimiento Patriótico Nacional de Artigas”<sup>38</sup>, el “Movimiento Isabelino Demócrata” (Semanao La Idea, Paso de los Toros, 22 de mayo de 1971, p. 4), “Patriotas de Flores” (presidido por el hacendado Eduardo Vidiella) (La Mañana Edición Interior, 24 de junio de 1971, p. 4) y “Juventud y Pueblo en Marcha de Lascano” (La Mañana Edición Interior, 19 de noviembre de 1970, p.1), son algunos ejemplos recogidos en consultas de prensa para esta investigación.

En entrevistas realizadas pudimos recabar otros casos: el del “Comité Patriótico de Bella Unión” tras los hechos ocurridos en el Liceo de la localidad en julio de 1969<sup>39</sup>, y el del “Comité Patriótico Femenino de Carmelo”<sup>40</sup>.

Muchas de esas organizaciones se entrelazaron en diversas actividades públicas con la Juventud Uruguaya de Pie.

Esta expresión de un periódico conservador del Interior reafirma la percepción de que algo estaba reanimando el accionar de las “fuerzas vivas”, devenidas “comités patrióticos” con ese u otro apelativo: “Los gravísimos hechos de notoriedad que suceden en Montevideo... vienen provocando enérgicos pronunciamientos y saludables oposiciones de parte de significativos sectores sociales...” (Tribuna Salteña, 29 de setiembre de 1970, p. 1).

Consideramos que esta activación conservadora se vio dinamizada por la irrupción del Frente Amplio y su “ruidosa” presencia desde su conformación oficial en febrero de 1971. Si bien este no es el espacio para profundizar en ello, existe una larga lista de testimonios y evidencias que señalan la hostilidad de numerosos habitantes de los más diversos pueblos contra la caravana del Frente Amplio previa a las elecciones de noviembre de 1971, incluyendo atentados con armas de fuego que, en el caso de la localidad de Castillos, terminaron con la muerte de un niño por una bala perdida.

38 Era un vasto movimiento convocado por Asociación de Jubilados y Retirados Policiales, Agrupación de Jubilados y Pensionistas Civiles, JUP, Asociación de Rematadores, Sociedad de Fomento Rural, Club Uruguay, Club Deportivo Artigas, C.A.L.A., Aero Club Artigas, Organización de Padres Demócratas, Organización de Pequeños y Medianos Productores, Centro Comercial, Sociedad Italiana de Artigas, C.W.142, Asociación Agropecuaria e Industrial de Artigas. (La Mañana Edición Interior, 8 de julio de 1971, p.4).

39 Entrevista a Juan José Morales.

40 Entrevista a José Glisenti, realizada para otra investigación. Era un militante socialista originario de esa localidad, procesado por integrar las Agrupaciones de Militantes Socialistas en 1978. Señala que las integrantes de ese Comité durante la dictadura “*entraban al cuartel como perico por su casa*” denunciando a los “subversivos”.

## IV. CONCLUSIONES: EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO JUVENIL “DE PIE”

La constelación de organismos arriba reseñados, y el conjunto de demandas, acciones y manifiestos que impulsaron reflejaban el descontento y desconcierto de los sectores conservadores en clave reaccionaria. El movimiento juvenil “de pie” pasaría a representar su expresión en un ámbito de particular sensibilidad: la juventud.

Decíamos líneas arriba que los partidos y sus fracciones conservadoras no fueron capaces de aglutinar esas energías. En opinión de Real de Azúa, los partidos tradicionales ni siquiera merecían el apelativo de “partidos”

“... hace décadas que no son vías de esa labor permanente de integración, movilización y participación política que hace de los partidos los dinamizadores de la sociedad y que su misma y, en verdad, inevitable función de intermediación entre la colectividad y el Estado se cumple según las pautas más particularistas e inorgánicas que quepa imaginar”. (Real de Azúa 1988, p.67)

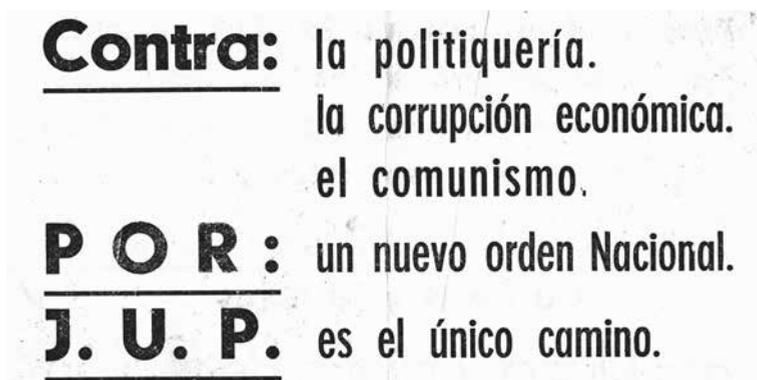
Esa “ausencia” de canales partidarios capaces de representar las demandas ciudadanas ha permitido explicar fenómenos políticos nuevos en el Uruguay de los 60. Para Costa Bonino el surgimiento de la guerrilla izquierdista es resultante de una situación de “alienación política”, entendida como una orientación negativa de los individuos con respecto al sistema político (Costa Bonino, 1988). Consideramos que esta perspectiva da cuenta de la constitución de una “estructura de oportunidades políticas” también para la emergencia de movimientos sociales radicales de derecha. Creemos, con Marchesi y Yaffe, que éstos son

“(...) grupos que surgen ante un escenario marcado por la carencia institucional de oportunidades políticas e intentan crearlas a través de repertorios de acción colectiva, que no tienen que ver con las maneras tradicionales de hacer política y no pretenden integrarse al sistema político, más allá de que mantengan relaciones de diverso tipo con algunos de sus actores” (Marchesi y Yaffé, 2010, p.107).

La emergencia de un movimiento juvenil de derecha, que se apropió de la denominación “de pie” debe ser entendida en ese marco.

Desde una movilización de base estudiantil en torno a demandas y consignas empapadas del nacionalismo anticomunista y el conservadurismo tradicional, la Juventud Uruguaya de Pie transitó por un proceso de organización militante con una carga ideológica que abrazó la causa de la “revolución nacional” y el golpismo y se emparentó con la violencia política. Así, sobre la base de “sentidos comunes” liberal/conservadores, el discurso de la JUP mostró continuidades con las organizaciones de extrema derecha radical de décadas anteriores. Ese giro discursivo se hizo notorio desde el segundo semestre de 1972. Volantes distribuidos para con-

vocar a actos barriales de la JUP señalaban su desencanto con “la politiquería”, a la vez que denunciaban “la corrupción económica” y a “los delincuentes de guante blanco”, además de las clásicas diatribas contra el “veneno marxista extranjero”. El llamado a un “nuevo orden Nacional” guardaba fuertes resonancias de un nacionalismo revolucionario de matriz falangista que había sobrevivido a las sombras del secular liberalismo uruguayo, y que en esta coyuntura ganaba espacio en la plaza pública.<sup>41</sup>



Volante convocando a un acto en Villa Colón para el día 10/10/72

En nuestra investigación, de la cual este trabajo constituye un avance, pretendemos mostrar que la JUP fue un movimiento social que aglutinó detrás de las banderas del “patriotismo” y el “anticomunismo” una vasta “reacción conservadora” frente a los portavoces del “caos”; que en virtud de la polarización política reinante radicalizó su discurso, promoviendo lo que ha sido históricamente difícil en Uruguay: movilizar a una parte de los sectores más conservadores; que en aras de constituirse en un movimiento político autónomo, enunció un proyecto caratulado de “revolución nacional” que lo llevó a anhelar un ajuste militar de determinado tipo; y que desde ese discurso y esa práctica se volvió permeable a los impulsos de impronta violentista desde dentro (sectores de su propia militancia) y desde fuera (fracciones extremistas de los partidos tradicionales, organizaciones fascistas, cuerpos represivos estatales, agencias de inteligencia extranjeras), que no quiso o no supo contener.

41 Las citas son de volantes que convocaban a actos de la JUP en tres diferentes barrios de Montevideo en los meses de octubre (Villa Colón), noviembre (Maroñas) y diciembre (Belvedere).

## BIBLIOGRAFÍA

- Aldrighi, C. (2001). *La izquierda armada*, Montevideo: Trilce.
- Aldrighi, C. (2007). *El caso Mitrione*, Montevideo: Trilce.
- Alonso R. y Demasi C. (1986). *Uruguay 1958-1968. Crisis y Estancamiento*, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Bucheli, G. (2012). *Organizaciones «demócratas» y radicalización anticomunista en Uruguay (1959-1962)*, En Revista Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX (Vol. 3), 31 - 52.
- Bucheli, G. y Harriett, S. (2012). *La dictadura cívico-militar, 1973-1984*. En Nahum, B. (coord.), *Medio siglo de historia uruguaya - 1960-2010*, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Caetano, G. y Rilla, J. (1994). *Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al Mercosur*. Montevideo: CLAEH/Editorial Fin de Siglo.
- Correa, J. (2007). 'Cuando en el gobierno hay tiranos...' *La ruptura de Zelmar Michelini con el Partido Colorado*. En Cuadernos del Pasado Reciente (Uruguay, 1968-1985) (Vol. 2), 79-96.
- Corbo, D. (2009). *Cómo hacer Presidente a un candidato sin votos. Las elecciones protestadas de 1971 y la operación reeleccionista*, Montevideo: Planeta.
- Costa Bonino, L. (1988). *Crisis de los partidos tradicionales y movimiento revolucionario en el Uruguay*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Ferreira, P. (2012). *Batllismo, reforma política y conflicto social en los tempranos cincuenta. Una mirada desde la teoría de la Democracia y la Ciudadanía*. Avance de tesis de Maestría en Ciencia Política presentado en seminario GEIPAR, Montevideo (inédito).
- Labrousse, A. (2009). *Una historia de los tupamaros. De Sendic a Mujica*, Montevideo: Fin de Siglo.
- Leibner, G. (2011). *Camaradas y compañeros. Una historia política y social de los comunistas del Uruguay*, Montevideo: Trilce.
- Marchesi, A. y Yaffé, J. (2010), *La violencia bajo la lupa: una revisión de la literatura Sobre violencia y política en los sesenta*. En Revista Uruguaya de Ciencia Política, (Vol. 19 N°1), 95-118.
- Markarian, V. (2012). *El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*, Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.

- McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Madrid: Ed. Istmo.
- McAdam, D. (1999). *Oportunidades políticas. Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación*. En McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Madrid: Ed. Istmo.
- Notaro, J. (1984). *La política económica en el Uruguay 1968-1984*, Montevideo: CIEDUR-EBO.
- Panizza, F. (1990), *Uruguay: Batllismo y después, Pacheco, militares y tupamaros en la crisis del Uruguay batllista*, Montevideo: EBO.
- Real de Azúa, C. (1988). *Partidos, política y poder en el Uruguay (1971 – Coyuntura y pronóstico)*, Montevideo: FHCE.
- Rey Tristán, E. (2005). *La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973. ¿Tiempo de lucha, tiempo de elecciones?* Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Rico, Á. (1989) *1968: el liberalismo conservador*, Montevideo: EBO.
- Rico, Á. (2005). *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005*, Montevideo: Trilce.
- Romano, A. (2010). *De la reforma al proceso. Una historia de la Enseñanza Secundaria (1955-1977)*, Montevideo: Trilce.
- Sanguinetti, J. y Pacheco Seré, Á. (1967), *La nueva Constitución*, Montevideo: Editorial Alfa.
- Sanguinetti, J. (2008). *La agonía de una democracia. Proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973)*, Montevideo: Taurus.
- Tarrow, S. (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza Ensayo.
- Varela G. (1988). *De la República liberal al Estado militar*, Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo.
- Varela, G. (2005). *El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal*. Montevideo: Trilce.
- Véscovi, R. (2003). *Ecós revolucionarios. Luchadores sociales. Uruguay, 1968-1974*. Montevideo: Nós Editorial.
- VVAA (1970), *Artigas. Los Departamentos. No. 17*, Montevideo: Editorial Nuestra Tierra.

## PRENSA

- Diario La Mañana, Edición del Interior, Montevideo, años 1968 a 1971.
- Diario Tribuna Salteña, Salto, años 1969 y 1970.
- Semanario Azul y Blanco, Montevideo, años 1972 y 1973.
- Semanario La Idea, Paso de los Toros, mayo de 1971.
- Semanario Nuevo Amanecer, Montevideo, año 1973.

## VOLANTES DE LA JUP

- Octubre a Diciembre 1972

## ENTREVISTAS

- José Glisenti, realizada el 9 de diciembre de 2012.
- Raquel Miranda, realizada el 26 de noviembre de 2013.
- Juan José Moraes, realizada el 16 de mayo de 2013.
- Cristina Porta, realizada el 1° de noviembre de 2012.

# “NOSOTROS QUEREMOS QUE ESCUCHEN NUESTRAS HISTORIAS”: EL DOCUMENTAL LOCOS DE LA BANDERA Y LAS MEMORIAS EN CONFLICTO DE LA GUERRA DE MALVINAS

## “WE WANT OUR STORIES TO BE HEARD”: THE DOCUMENTARY “LOCOS DE LA BANDERA AND MEMORIES IN CONFLICT FROM THE MALVINAS WAR

Fabrizio Laino Sanchís\*

### RESUMEN:

En el presente trabajo nos proponemos analizar el documental *Locos de la bandera* (Julio Cardoso, 2005), que recupera testimonios de excombatientes y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas (1982). Observaremos las maneras en las que el film problematiza ciertas representaciones dominantes sobre el conflicto bélico, sobre los excombatientes y sobre la vigencia de la “causa Malvinas” en el presente político argentino. Veremos, además, cómo el documental ensaya su propia respuesta para aquellas incómodas “zonas grises” (Agamben) de la experiencia bélica que la memoria colectiva invisibilizó. Analizaremos, por último, los propios “olvidos” del film que sintomáticamente nos sirven para terminar de interpretar el sentido de este “trabajo de la memoria” (Ricoeur).

**Palabras clave:** Guerra de Malvinas – Cine Documental –  
Memorias Colectivas – Representaciones.

### ABSTRACT:

In the following work we pretend to analyze the documentary *Locos de la Bandera* (Julio Cardoso, 2005), that gathers testimonies from ex-combatants and relatives of the fallen in the Malvinas War (1982). We will observe the ways in which the film questions several dominant representations about the bellicose conflict, the ex-combatants and the validity of the “Malvinas cause” in the present Argentinean politics. We will see as well, how the documentary creates its own response for those uncomfortable “gray zones” (Agamben) of the bellicose experience that the collective memory turned invisible. Finally, we will analyze the “oblivion” of the film that symptomatically helps us finish interpreting the significance of this “work of the memory” (Ricoeur)

**Keywords:** Malvinas war – Documentary film – Collective memory – Representation.

**Recibido:** 18 de Octubre de 2013

**Aceptado:** 15 de Noviembre de 2013

**Received:** October 18, 2013

**Approved:** November 15, 2013

\* Argentino, Estudiante de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: fabrizio\_laino@yahoo.com.ar

## I. INTRODUCCIÓN

Desde el retorno de la democracia (e incluso desde el final de la última dictadura militar), en la esfera pública argentina comenzaron a circular discursos que, bajo formatos narrativos diversos, intentaron repasar, reflexionar y repensar la experiencia política reciente del país. Principalmente, fueron las memorias y los testimonios de los mismos protagonistas de ese pasado los que nutrieron aquellas narraciones. Dentro de los diversos formatos y géneros discursivos empleados (literatura testimonial, investigaciones periodísticas, novelas, cuentos, etc.), las representaciones audiovisuales, tanto ficcionales como documentales, han realizado un aporte significativo al complejo entramado de memorias que disputan entre sí la construcción de sentidos sobre ese pasado.

A lo largo de estos 30 años de vida democrática argentina, los soportes materiales, los géneros y, principalmente, los sentidos construidos por estos ejercicios de memoria han variado sustancialmente. Como señalan Pittaluga y Oberti (2006, pp. 13-36), los cambios en los contextos socio-políticos a lo largo de estos decenios han derivado en variaciones en las formas de abordar el pasado. Cada contexto ha motivado diversas interrogantes sobre esa experiencia reciente que, a su vez, han contribuido a que los distintos actores sociales elaboraran relatos muchas veces contrapuestos, enfatizando y marginando en cada caso distintos aspectos de ese pasado.

En los primeros tiempos post-dictatoriales, con la necesidad imperiosa de instalar la denuncia de los crímenes de lesa humanidad y lograr el avance de los procesos judiciales contra los represores, los organismos de derechos humanos concentraron sus esfuerzos en reponer públicamente la presencia de sus familiares desaparecidos, cuya identidad los militares habían intentado borrar. En esa dirección, y con el objetivo de contrarrestar las memorias apoloéticas de la dictadura que buscaban negar o justificar la represión ilegal, fueron aquellas representaciones sobre el pasado reciente que tomaban como eje las políticas represivas del Proceso de Reorganización Nacional las que vivieron un mayor auge (Lvovich y Bisquert, 2008). El registro audiovisual no fue la excepción, y diversos films de la época, como “La Noche de los lápices” (Héctor Olivera, 1986), intentaron poner en imágenes las prácticas represivas y los dispositivos concentracionario-desaparecedores que los testimonios de los y las sobrevivientes de los centros clandestinos devolvían (Pittaluga y Oberti, 2006, p. 25).

Con los cambios de la coyuntura política en Argentina desde fines de los ‘80 y hasta la actualidad, viejos y nuevos actores comenzaron a formular renovadas preguntas sobre los años trágicos del Proceso de Reorganización Nacional y, progresivamente, también sobre los años previos. Si bien excede el objeto de este trabajo, podemos decir brevemente que las nuevas reflexiones buscaron recuperar del pasado la trayectoria militante de los desaparecidos, sus organizaciones, proyectos y horizontes políticos (aquellos por los que, en última instancia, habían sido objeto

del terrorismo de Estado) y también, en muchos casos, la vida privada, familiar e íntima de esos militantes.

Podemos notar que la producción cinematográfica que aborda las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar es profusa y diversa. Es precisamente por esta magnitud de representaciones audiovisuales que sorprende la exigua cantidad de obras referidas a un acontecimiento clave dentro de la historia de la última dictadura militar como la Guerra de Malvinas. Las películas (documentales o ficcionales) que tratan la cuestión son escasas. Entre las ficciones más importantes, podemos mencionar *Los chicos de la Guerra* (Bebe Kamin, 1984, basada en un libro homónimo de Daniel Kon que recogía testimonios de excombatientes), *El visitante* (Javier Olivera, 1999), *Iluminados por el fuego* (Tristán Bauer, 2005), *Estuvimos ahí* (César Tuturro y Fernando Acuña, 2006), *Los últimos* (Miguel Mirra, 2007) y *Cartas a Malvinas* (Rodrigo Fernández, 2009). En el campo documental, destacan *Hundan al Belgrano* (Federico Urioste, 1996), *Malvinas, historia de dos islas* (Diego Alhadeff, 1999), *No tan nuestras* (Rodrigo Longo, 2005) y *Locos de la bandera* (estrenada en el 2005 y dirigida por Julio Cardoso, bajo encargo de la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas).

Con excepción de *Los chicos de la Guerra* y de *Iluminados por el fuego* (grandes éxitos de taquilla ambas), las películas sobre Malvinas pasaron prácticamente inadvertidas para el público de cine y para el conjunto de la sociedad. Este relativo olvido del cine nacional sobre la "cuestión Malvinas" se relaciona, como han señalado autores como Rosana Guber (2001, 2004) y Federico Lorenz (2006), con las dificultades que ha tenido la sociedad argentina posdictatorial para procesar el trauma de la guerra y para enfrentarse a los complejos dilemas que la misma acarrea. Estas dificultades se manifestaron también en la imposibilidad, individual y colectiva, de escuchar los testimonios de los excombatientes y de darles un lugar en la discusión pública sobre ese pasado reciente.

¿Cuáles son los dilemas que encierra este conflicto bélico? ¿Cuáles son las tensiones y las contradicciones que el recuerdo de dicho acontecimiento consigue desatar en nuestra sociedad? Aquí intentaremos pensar algunas respuestas tentativas a estas complejas interrogantes a partir del análisis de algunas representaciones cinematográficas de la Guerra. A través de ellas podremos delinear las interpretaciones que se han elaborado sobre el conflicto armado (su sentido, sus objetivos, la valoración de sus causas y sus consecuencias) y sobre sus participantes a lo largo de los últimos treinta años. Preguntarnos por las formas en que estos discursos fílmicos han concebido y calificado, por ejemplo, a aquellos hombres argentinos que participaron del conflicto en el teatro de operaciones (¿genocidas, héroes, patriotas, militares incompetentes, chicos, excombatientes?) nos va a ayudar a entender también (ya sea por el énfasis en lo que se dice o por el señalamiento sintomático de lo que se calla) aquellos temores y aquellos sentimientos encontrados que se encuentran cifrados en la Guerra y en la "Causa" Malvinas.

En las páginas siguientes intentaremos, por ende, revisar las representaciones sobre la Guerra de Malvinas que ha construido el cine argentino a lo largo de las últimas tres décadas. Veremos, en primer lugar, cómo algunas de las interpretaciones formuladas en ciertas obras “canónicas” han calado hondo en el pensamiento colectivo y han llegado a convertirse en verdades incuestionables dentro de cierta memoria hegemónica. Después de ese breve recorrido por la filmografía clásica sobre el tema, nuestro objetivo final será analizar una producción cinematográfica más reciente: *Locos de la Bandera*, estrenada en el 2005 y dirigida por Julio Cardoso, por encargo de la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas. En nuestro análisis, trataremos de observar las maneras en las que el film critica o tensiona muchas de las representaciones dominantes, planteando en varios sentidos una memoria alternativa sobre el conflicto, sobre sus participantes y sobre la “causa Malvinas”. Intentaremos dilucidar las respuestas que los propios protagonistas de la película (los familiares y excombatientes cuyos testimonios construyen el relato) dan a aquellas cuestiones incómodas de la experiencia bélica, aquellas acciones difíciles de evaluar en términos morales y políticos, aquellas “zonas grises” de la guerra (Agamben, 2002) que la memoria hegemónica procuró silenciar. De todos modos, como veremos, ninguna memoria es “completa” y todo recuerdo implica, necesariamente, algún tipo de olvido. En este trabajo reflexionaremos acerca de los olvidos y los silencios que pueden ser inferidos en *Locos de la Bandera* y que, a modo de indicios, nos permitirán terminar de reconstruir algunos de los sentidos presentes en esta obra polifónica. Por último, a modo de conclusión, trataremos de pensar esta película como un contradictorio pero valioso “trabajo de la memoria” (Ricoeur, 2004).

## II. LAS REPRESENTACIONES CLÁSICAS DE LA GUERRA: EL BORRACHO, LOS CHICOS Y EL ABSURDO

Como señalábamos anteriormente, la Guerra de Malvinas fue un tema muy poco frecuentado por la filmografía nacional. En los más de treinta años que han transcurrido desde la finalización del conflicto, se han estrenado muy pocas películas sobre la cuestión. Por otra parte, salvo algunas pocas excepciones, éstas han recibido escasa atención por parte del público y de la crítica especializada.

A partir de las estadísticas recogidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y por la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM), podemos observar que, después del gran éxito de *Los chicos de la guerra* (que en el año 1984 fue vista por más de 642 mil personas), la única película referida a Malvinas que ha logrado ubicarse entre las cinco más vistas de las producciones nacionales de su año fue *Iluminados por el fuego*, que en el 2005 totalizó aproximadamente 315 mil espectadores (Gentino, 2006). Para los parámetros de las producciones cinematográficas argentinas (en ese mismo 2005, por ejemplo, 35 de los 53 estrenos no superaron los 10 mil

espectadores), estos datos hablan de un importante éxito comercial. En relación, sin embargo, con los más de 36 millones de tickets vendidos en total en la Argentina durante aquel año, la cifra de espectadores del film de Tristán Bauer representa una cuota de apenas el 0,875% del mercado. La película estuvo lejos de quedar entre las primeras diez vistas del año, en un mercado hegemonizado por las producciones estadounidenses (solamente una película argentina, *Papá se volvió loco*, pudo ubicarse entre las primeras diez posiciones). Si la incidencia en el público de cine de este film comercialmente exitoso parece ser relativa, mucho peor ha sido la suerte de las otras cintas que han abordado la cuestión Malvinas en estas últimas tres décadas. La mayoría de estas películas han contado con pocas salas para su exhibición, alcanzando un número muy bajo de espectadores (en varios casos, menor a las mil personas).

Es cierto que muchos de estos films, surgidos de iniciativas militantes de los propios excombatientes y de las comisiones de familiares de caídos en Malvinas, han contado con canales de circulación no comerciales, como por ejemplo proyecciones en centros culturales, organizaciones sociales y políticas y ámbitos educativos formales y no formales, además de los mismos centros de excombatientes y otros espacios dedicados a la memoria de la Guerra de Malvinas. Esto ha permitido la difusión de algunas de estas películas más allá del circuito de salas comerciales, como ha ocurrido con el caso de *Locos de la Bandera*<sup>1</sup>. De todos modos, sin desestimar estos otros medios de difusión del material audiovisual sobre Malvinas, es evidente que su alcance es bastante limitado en comparación con los canales tradicionales de distribución. En todo caso, habría que indagar más aun en esas experiencias alternativas para ver cuál puede ser su incidencia real en la circulación y recepción de estos films.

Este aparente desinterés sobre el tema Malvinas que vemos en el cine no es exclusivo de este ámbito. La sociedad argentina en su conjunto ha encontrado grandes dificultades para pensar Malvinas después de la derrota y la rendición del 14 de junio de 1982. En los años de la transición democrática, a los que habían peleado les costó hablar de su experiencia, pero más aún les costó ser escuchados por los argentinos que los recibían con sentimientos encontrados en el continente (Guber, 2001, pp. 107-128; Lorenz, 2006, pp. 142 - 160). La guerra perdida remitía indisolublemente al gobierno dictatorial de las Fuerzas Armadas que la habían conducido. Los miembros de esas mismas fuerzas eran repudiados y denunciados por los organismos de Derechos Humanos y por gran parte de la sociedad por los crímenes de lesa humanidad (secuestros, torturas, desapariciones, robo de bebés) que habían perpetrado en los años de brutal represión que ellos autoproclamaban como "lucha antisubversiva". ¿Qué destino podía depararle, entonces, a una acción bélica encabezada por militares genocidas, con la evidente intención de recuperar algún

1 Un indicio de la presencia de esta película en diferentes ámbitos de consumo cinematográfico no comerciales es el hecho de que fuera recomendada en varias oportunidades por el Ministerio de Educación de la Nación para ser utilizada como material de trabajo en las aulas argentinas (véase, por ejemplo, el dossier *Pensar Malvinas*, editado por dicho Ministerio en el año 2011).

tipo de legitimidad en un contexto de profundo descontento social; acción que, a la luz de los hechos y de los testimonios de los ex combatientes, se mostraba como una verdadera “aventura militar” absolutamente irracional? Esta “guerra absurda” se interpretó, pues, como el delirio atroz de unas fuerzas militares acostumbradas a reprimir a la población civil pero absolutamente incompetentes para una guerra internacional, que entablaron (con un General alcohólico a la cabeza, un arsenal militar deficiente, un ejército de conscriptos mal entrenados y un plan estratégico sustentado en supuestos azarosos que nunca se cumplieron) un conflicto suicida con la segunda potencia militar de la OTAN (Guber, 2001, pp. 112-113).

En la Argentina transicional, una guerra de estas características sólo podía ser contemplada con perplejidad, repudiada como un evento más dentro la cadena de violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura militar contra la población civil y condenada al olvido y al silencio como un recuerdo triste y amargo. De este modo, la “causa Malvinas” (es decir, el reclamo de soberanía territorial que impulsó o, al menos, justificó la “aventura armada”) quedó inexorablemente vinculada a aquellos que la usaron como prenda de unión para concitar el apoyo de la sociedad civil: la Dictadura Militar y sus simpatizantes. El problema de esta interpretación, como indica con mucha lucidez Rosana Guber, es que, para funcionar, debía olvidar necesariamente que el 2 de abril de 1982, cuando Galtieri anunció la (re)ocupación de las Islas, la acción armada fue apoyada y hasta celebrada, con diversos matices, por el grueso de la población y de las fuerzas sociales y políticas. Este apoyo no se debe a una manipulación finamente orquestada del régimen militar, sino al hecho de que las Islas Malvinas, como causa soberana, habían funcionado desde los mismos orígenes de la construcción del Estado Nacional como metáfora de la unidad nacional por encima de los antagonismos políticos internos. (Guber, 2001, 108-110). En los años de la transición a la democracia, reivindicar (o recordar siquiera) esa participación más o menos activa en apoyo a la guerra no era cómodo ni sencillo para ningún argentino —menos aun para los comprometidos con el nuevo orden político o con la lucha de los organismos de Derechos Humanos.

Un segundo problema con respecto a la memoria de la Guerra era qué hacer con quienes habían combatido. Quedaba claro, en principio, que para los comandantes, generales y demás oficiales sólo cabían adjetivos fuertemente peyorativos, como “pusilánimes”, “mediocres” e “incompetentes” (sin olvidar, por supuesto, el más determinante de su criminalidad: “represores”). Pero, a diferencia del bando inglés, las tropas argentinas no estaban compuestas principalmente por militares profesionales sino por jóvenes civiles que realizaban el servicio militar obligatorio. Estos conscriptos, mayoritariamente de 19 y 20 años de edad (clases 1962 y 1963), después de sobrevivir a los bombardeos, las descargas de ametralladoras, el frío, el hambre y los maltratos de muchos de sus oficiales, volvieron con una intensa carga de experiencias al continente. La sociedad abrió un pequeño espacio para escuchar lo que tenían para contar, pero recortó aquello que le interesaba oír y ocluyó los aspectos de esos testimonios que eran contradictorios con la memoria hegemónica que se iba imponiendo (Lorenz, 2006, 154-157).

El cine post-dictatorial ofreció una obra que se volvió paradigmática de estas representaciones de la guerra y de los excombatientes: *Los chicos de la Guerra* (1984), una película de ficción dirigida por Bebe Kamin que, como hemos mencionado anteriormente, se convirtió en un impresionante éxito comercial. El film se basó libremente en los testimonios de tres conscriptos que habían sido recogidos en un libro del periodista Daniel Kon que llevaba el mismo nombre que la película. El libro de Kon hacía hincapié en los flagelos y las duras condiciones vividas por los excombatientes durante y después de la guerra, pero también daba lugar a los testimonios en los que aquéllos reivindicaban su participación aun dentro de los límites evidentes de la conscripción y de la conducción militar de las Fuerzas Armadas. El film, empero, borró todo elemento que pudiera indicar una voluntad activa a partir de motivaciones personales, familiares o sociales y, en cambio, enfatizó la minoridad y la pasividad de los soldados argentinos frente a las circunstancias externamente impuestas (Salvatori, 2008, 128).

Situada la acción en las horas finales de la rendición de las fuerzas argentinas en Malvinas, la película relata (utilizando el recurso del *flashback*) la vida de tres jóvenes conscriptos de distintas clases sociales antes de llegar a Malvinas. Sus experiencias de niñez y juventud se ven marcadas por el autoritarismo imperante en la Argentina de los '60 y los '70. La última dictadura militar representa el punto más álgido de la represión contra la sociedad civil y, principalmente, contra los jóvenes. Uno de los protagonistas (Fabián, un adolescente de clase media del conurbano bonaerense) sufre en carne propia la aparente aleatoriedad e irracionalidad del terror: una noche, mientras espera con un amigo un colectivo que no llega, un grupo parapolicial lo intercepta y lo golpea brutalmente. No parece haber ninguna militancia que "justifique" (dentro de la lógica perversa de la represión militar) este accionar vejatorio. La juventud aparece como la víctima inocente de un poder inconmensurable e ininteligible (Salvatori, 2008, 129). Dentro de esta secuencia, la Guerra de Malvinas aparece como el último de los crímenes contra la humanidad —y, en especial, contra la juventud— perpetrados por los militares.

Como a cualquier obra artística, es importante ubicar a esta película dentro de su contexto de producción. Como hemos señalado anteriormente, los años de la transición a la democracia estuvieron marcados por la lucha de gran parte de la sociedad (sobre todo de las organizaciones de Derechos Humanos en los grandes centros urbanos) por el enjuiciamiento y el castigo a los represores y sus cómplices. En ese contexto, se comprende el énfasis puesto en *Los chicos de la Guerra* por denunciar las situaciones dramáticas vividas por los excombatientes, muchas veces como consecuencia directa de vejaciones cometidas por sus oficiales y suboficiales. El film expuso, por primera vez para un público masivo, las denuncias de los soldados argentinos, muchas de las cuales hoy en día, en el año 2013, esperan para ser juzgadas bajo la carátula de crímenes de lesa humanidad (Diario Perfil, 14/08/2012).

Sin embargo, la imagen de los excombatientes como “chicos”, indefensos y pasivos, meras víctimas involuntarias de un hecho no deseado, se ha presentado como muy problemática. En especial, como veremos más adelante al analizar *Locos de la bandera*, han sido los mismos excombatientes quienes han tratado de distanciarse y de recortarse contra esta representación que progresivamente se volvió hegemónica.

La imagen de los soldados conscriptos como “chicos” no es casual y su éxito como sustento de la construcción de la memoria social de la guerra hay que buscarlo, nuevamente, en el clima de los años de la transición democrática. La imagen de los exconscriptos como menores de edad, principales víctimas en una sociedad que, en su conjunto, habría sido objeto pasivo de designios espurios del poder dictatorial, era funcional para saldar un doble problema. Por un lado, conjuraba cualquier posibilidad de evaluar la participación y el apoyo activo de gran parte de la población en el desarrollo de la guerra (situación incómoda que, como hemos dicho, la mayoría prefería evitar). Por otra parte, todo viso de participación o de elaboración voluntaria del conflicto por parte de los excombatientes (que pudiera chocar con la políticamente necesaria imagen de la sociedad civil como víctima pasiva) quedaba cercenado. La película, de esta manera, sentaba un precedente sobre el lugar que la sociedad argentina estaba dispuesta asignarle a los excombatientes y a los testimonios de su experiencia: ellos pasarían a ser “chicos” perpetuos, cuya inocencia (representada en su minoridad) habría sido violada por las fuerzas armadas genocidas. Ninguna memoria divergente, que señalara la voluntad de participar aun dentro de la obligación de las circunstancias, que destacara sentimientos nacionalistas, patrióticos o de otra índole, arraigados y capaces de movilizar a muchos de los hombres que pelearon en Malvinas, sería escuchada o tenida en cuenta seriamente. (Lorenz, 2006, 155).

Después del estreno de *Los chicos de la guerra*, sobrevino un silencio prolongado sobre el tema Malvinas, tanto en el cine como en la esfera pública en general (Salvatori, 2008, 131). Para muchos sectores de la población y de la clase política, parecía evidente que la construcción del orden político democrático requería de una “desmalvinización”<sup>2</sup> de la sociedad. La consecuencia de esta “desmalvinización” fue la clausura tácita de cualquier reflexión o problematización sobre las implicancias y las consecuencias de la guerra. La memoria colectiva dominante estableció una versión del pasado que hablaba del engaño y de la manipulación de la población con fines políticos, de la aventura militar, de los crímenes de las fuerzas armadas (en el continente y en las islas, en la guerra y más allá de ella) y de los brutales padecimientos de jóvenes e inexpertos conscriptos.

A pesar de sus buenas intenciones, estas representaciones cerraron la posibilidad para que esos mismos jóvenes (por los cuales la sociedad decía lamentarse) pudieran aportar sus voces, narrar en primera persona sus vivencias y complejizar o cuestionar la imagen que de ellos se presentaba. A las dificultades para narrar su

2 La noción de “desmalvinización” habría sido acuñada por el politólogo francés Alain Rouquié en 1982.

experiencia y enunciarse que, como señalaba Walter Benjamin (1991, pp. 8-12), acarrea todo sobreviviente posbélico, se sumó la imposibilidad de la sociedad para escuchar las notas disonantes o perturbadoras de algunos testimonios. Pollak (2006, pp. 52-59) afirma que la posibilidad de testimoniar no depende únicamente de la voluntad individual del testigo, sino sobre todo de las condiciones sociales que vuelven comunicable y audible sus palabras. Durante muchos años (y, probablemente, aún hoy), gran parte de la sociedad argentina no pudo, o no quiso, escuchar los testimonios de los excombatientes o de los familiares de los caídos.

### III. RECUPERANDO MALVINAS (EN EL CINE): PATRIA, SOBERANÍA Y TERRITORIO

A fines de los años '90 y principios de la década del 2000, después del letargo impuesto por la política de "reconciliación nacional" promovida durante el menemismo, la dictadura y el terrorismo de Estado volvieron a ocupar un espacio importante en la discusión pública. En ese contexto, la "cuestión Malvinas" reapareció en la esfera pública, aunque siempre de forma tangencial. La inauguración de diversos memoriales y monumentos (como los que se encuentran emplazados en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, o el de la localidad de Quequén, en la Provincia de Buenos Aires) reabrieron, hasta cierto punto, el debate sobre el pasado y el presente de la Guerra de Malvinas (Guber, 2001, pp. 143-158; Salvatori, 2008, p. 132).

También algunos testimonios de excombatientes lograron alcanzar una circulación antes impensada. El caso más resonante es el del periodista Edgardo Esteban. En 1993, este excombatiente escribió una ficción testimonial sobre su experiencia bélica: *Iluminados por el fuego. Confesiones de un soldado que combatió en Malvinas*. El relato de Esteban alcanzó una gran masividad cuando fue llevado al cine en el año 2005 por Tristán Bauer. La película representó, para los parámetros de la industria del cine nacional, un importante esfuerzo de producción. Por primera vez, una película de ficción recreaba escenas de batallas de la guerra, con una más que aceptable calidad técnica (algo que mostraba, por otra parte, el grado de reactivación general que vivía la industria cinematográfica argentina) (Cfr. Salvatori, 2008, pp. 134-135). Otro mérito notable de la cinta es haber filmado las escenas finales en suelo malvinense. En estas escenas, el protagonista se encuentra con las marcas de su paso por las islas y visita el cementerio de los soldados argentinos en Darwin. Por último, la película contó con un elenco integrado por actores y actrices muy reconocidos por el público argentino, como Gastón Pauls, Virginia Innocenti y Juan Leyrado. Todos estos elementos repercutieron en la positiva recepción de los espectadores que, como ya hemos dicho, convirtieron a esta película en un importante éxito de taquilla.

*Iluminados por el fuego* fue la película más importante en términos de audiencia y difusión, pero no fue la única que por estos años retomó la reflexión sobre la Guerra de Malvinas. Aun cuando la temática se mantuvo en los márgenes de los circuitos de producción y distribución cinematográfica, varias obras de ficción y, sobre todo, documentales sobre Malvinas fueron estrenadas desde fines de los '90. Muchas de estas películas tuvieron la intención manifiesta de poner en discusión las representaciones hegemónicas y de habilitar el espacio para escuchar la palabra de los sobrevivientes y de los familiares de los caídos. Una de estas producciones fue *Locos de la Bandera*, estrenada en el año 2005 al igual que el film de Tristán Bauer. Desde su misma concepción, la película habla de la búsqueda de los familiares y de los excombatientes por hablar y por ser escuchados. La película fue dirigida por Julio Cardoso, un conocido dramaturgo de la escena teatral de la Ciudad de Buenos Aires que incursionó en el mundo del cine a partir de este documental. Sin embargo, aunque el guión y la dirección corren por cuenta de Cardoso, la película surgió directamente de la iniciativa y del encargo de la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas. El objetivo de los integrantes de esta Comisión, que se pone de manifiesto a lo largo de todo el film, era poder contar no sólo las vivencias de la guerra, sino también los problemas para afrontar los tiempos de paz en una sociedad decidida a ignorar a los excombatientes (los que volvieron y los que perdieron la vida en las islas).

El film narra las dificultades que, desde el fin del conflicto, han tenido los familiares para acercarse a sus seres queridos y procesar el duelo. Muchos de los cuerpos de los caídos han quedado en las islas, en el cementerio de caídos argentinos de Darwin. Otros directamente no han sido identificados y algunos probablemente nunca sean siquiera recuperados, como aquellos que murieron en medio del mar en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Hilvanando material de archivo con algunas dramatizaciones y una gran cantidad de testimonios de familiares y sobrevivientes de diversas provincias argentinas (Salta, Formosa, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz), la película intenta recuperar los hitos de la lucha por volver a Malvinas a reencontrarse con aquellos que dejaron la vida allí (un reclamo y una lucha que les valió a los familiares el mote de "locos"). Los testimonios de los difíciles años de posguerra llevan, indefectiblemente, a la memoria de las experiencias vividas en el teatro de operaciones, narradas por sus participantes o por los familiares a partir de las cartas de los fallecidos en combate o de las historias transmitidas por aquellos excombatientes que tuvieron una muy corta sobrevida<sup>3</sup>. Un joven narrador, que recolecta pequeñas ofrendas de los sobrevivientes y que luego recorre las islas Malvinas para acercárselas simbólicamente a los caídos, resulta fundamental en la construcción del relato, ya que es a través de su voz que la película explicita las preguntas y los dilemas incómodos que aparecen en las declaraciones de muchos de los testimoniantes.

3 Además de los caídos en batalla, debemos contabilizar entre las víctimas de la guerra a aquellos excombatientes que decidieron quitarse la vida después de finalizado el conflicto. La cifra exacta no se conoce, pero se estipula que son más de 400 los excombatientes que se han suicidado.

Puestos a hablar, los sobrevivientes y los familiares tensionan muchas de las representaciones canónicas de las que hablamos anteriormente en este trabajo. El primer aspecto que es objeto de enconadas críticas se relaciona con la imagen que de ellos mismos construyeron las escrituras previas. Ante todo, se trata de una disputa nominativa. Uno de los excombatientes que da su testimonio señala enfáticamente: "no soporto que se les siga diciendo 'chicos de la guerra' a los que perdieron la vida" (*Locos de la Bandera*, 2005). La crítica al apelativo de "chicos", cuyo origen ya hemos mencionado, se remonta a los primeros tiempos de las organizaciones de excombatientes. Una publicación del Centro de Ex Soldados combatientes en Malvinas afirmaba en 1984 que "...los 'chicos de la guerra' cuando pisamos Malvinas dejamos de ser chicos para pasar a ser hombres" (Lorenz, 2006, p. 170). Ambas declaraciones dan cuenta de la búsqueda de los testimoniantes de reposicionarse en un lugar activo frente al pasado que se recuerda y se narra. Muchos de los testimonios de *Locos de la bandera* apuntan en este sentido: "sabía a lo que íbamos", "sentí un gran orgullo", "para mí fue algo trascendental". También las palabras de los familiares dejan transmitir estos sentimientos. Una madre dice que, ante el reclutamiento, se mezclaron en ella el miedo por la vida de su hijo y el orgullo por la defensa de la patria.

La "patria" aparece nuevamente, pues, como un móvil válido y realmente existente, por encima de la incompetencia, la irracionalidad o el autoritarismo militar. Otro testimonio pone de relieve el arraigo de este patriotismo: "siempre nos enseñaron que las Malvinas son argentinas". Todos estos testimonios plantean, como señala Rosana Guber, que la causa Malvinas se constituyó (durante todo el siglo XX, al menos hasta la finalización del conflicto bélico el 14 de junio de 1982) en símbolo de unidad nacional y de ultraje a la soberanía del Estado que reclamaba algún tipo de redención futura. Precisamente, porque durante décadas se "enseñó" (no sólo en la escuela) que las Malvinas pertenecían a la Argentina y debían volver a estar bajo el dominio efectivo del Estado nacional; y porque la mayor parte de las fuerzas políticas (incluso muchas de izquierda) usaron a las islas como metáfora de la unión nacional por encima de los intereses sectoriales, fue posible para el gobierno de Galtieri movilizar, en apenas pocos días, a toda la población en apoyo de la aventura militar de su recuperación (Guber, 2001, pp. 25-63).

La noción de Patria aparece, en el film, fuertemente vinculada a la de soberanía territorial. La voz del narrador se pregunta en un momento: "¿Qué podría llegar a ser la Argentina si estuviera completa?" La imagen de la Nación cercenada por la pérdida del territorio en manos extranjeras nos recuerda que la nacionalidad y el nacionalismo argentino se edificaron principalmente sobre el principio de unión territorial (antes que sobre principios étnicos, religiosos o incluso cívicos) (Palermo, 2007, pp. 57-60). En este sentido, el film hace un gran hincapié en el trabajoso proceso de construcción de un monumento a los caídos argentinos que hoy se emplaza en el cementerio de Darwin. "El monumento es como recordarle a los malvinenses que ahí está Argentina", dice el hijo de un excombatiente que participa de la comisión pro-monumento. Se trata de una forma de volver a apropiarse del suelo, al menos simbólicamente. Pero el documental plantea una clara postura respecto

al futuro del reclamo soberano: “Está el monumento, falta la bandera”. La única manera de suturar la herida de la Nación es recuperar el territorio perdido. Y no se trata, para otro de los testimoniantes de la película, de satisfacer los delirios megalómanos de un dictador, sino de una tarea de la democracia, pues “sin patria, no hay democracia” (y, dentro de esta lógica territorialista de la Nación, sin Malvinas, la patria siempre estará incompleta).

#### IV. SOBRE HÉROES Y GENOCIDAS: “ZONAS GRISES” Y “OLVIDOS” EN LOCOS DE LA BANDERA

Como hemos señalado, *Locos de la bandera* busca disputar la construcción de la identidad de los que participaron en la Guerra de las Malvinas. Los testimoniantes rechazan el calificativo de “chicos”. ¿Qué otro apelativo usan en su lugar? ¿Cómo llamar a esos hombres que combatieron y (como recordaba un testigo) perdieron la vida? Una madre es categórica al respecto: “Mi hijo es un héroe, pero nadie lo sabe”. Al rescatar la causa soberana por Malvinas del mundo de la irracionalidad al que había sido confinada, los familiares y los camaradas de los excombatientes podían reivindicar a sus caídos como héroes de la patria por la cual habían muerto. Esta interpretación de la muerte en el campo de batalla, que ha sido habitual en muchas memorias estatales y colectivas de los conflictos bélicos a lo largo del siglo XX (véase, por ejemplo, Gentile, 2007 y Nora, 2008) debe ser, en el contexto argentino, proclamada desde los márgenes por los propios familiares de las víctimas (pues “nadie lo sabe”).

¿Por qué la memoria hegemónica está dispuesta a aceptar como “víctimas” pero no como “héroes” a aquellos que combatieron en Malvinas? Esta pregunta, sumamente compleja, nos posiciona frente a las contradicciones que conlleva la memoria de la Guerra en el presente. El problema de la “heroicidad” de quienes pelearon en Malvinas nos transporta más allá de los conflictos políticos e ideológicos que desata aún hoy la cuestión Malvinas, vinculados con la defensa de la causa como un reclamo soberano legítimo o su rechazo como una rémora del “nacionalismo burgués” o del “populismo”, según el caso. Seguramente, para las tradiciones políticas ajenas o contrarias al nacionalismo, no hay mártires para recordar en Malvinas; sólo víctimas para lamentar. Pero aun dentro de las corrientes con raigambre nacionalista, ¿quiénes pueden ser considerados como “héroes”? El dilema se presenta, nuevamente, porque el ejército que había comandado la guerra era el mismo que había encabezado la más brutal y sanguinaria represión de la historia argentina.

En esta instancia, el film se sumerge en aquello que Agamben llamaba las “zonas grises” de la experiencia, aquellos momentos que parecerían encontrarse “más acá del bien y del mal”, inaprehensibles para el lenguaje judicial de la responsabilidad y para la lógica moral binaria (Agamben, 2002, p. 20). La complejidad de pensar estas zonas grises se advierte cuando nos percatamos de que muchos de los oficia-

les que habían luchado y dejado sus vidas en el campo de batalla habían estado, al mismo tiempo, directamente implicados en la perpetración de crímenes de lesa humanidad<sup>4</sup>. El Estado Argentino ha resuelto legalmente este problema declarando, a través de la ley 24.950 del año 1998, que todos los caídos en combate son "héroes nacionales". Esta solución del problema se nos presenta evidentemente insatisfactoria, máxime cuando ese mismo Estado lleva adelante hoy en día, en el año 2013, quince años después de la sanción de aquella ley, múltiples juicios a los perpetradores del genocidio (muchos de los cuales, insistimos, estuvieron en la Guerra de Malvinas).

¿Cuál es la interpretación de *Locos de la Bandera*? ¿Son todos igualmente héroes nacionales? La película ofrece respuestas ambiguas a estos interrogantes. En algún momento parece querer ubicarse más allá de los juicios de valor, cuando la voz en *off*, en tono crítico, indica que "algunos buscan un pasado de buenos y malos (...) y condenan". Sin embargo, posteriormente algunos testimonios (que no son uniformes y muestran disonancias entre sí) ofrecen juicios valorativos y criterios que intentan demarcar el "heroísmo" de lo que no puede llamarse de tal forma. En primer lugar, en varios pasajes de la película se manifiesta que los comandantes y la alta oficialidad, que manejaron las acciones con incompetencia y que abandonaron cobardemente sus puestos, no merecen tal calificativo. Pero, ¿y el resto de los oficiales? ¿Qué pasa con aquellos que perdieron su vida luchando? Para éstos sí parece reservado un lugar preeminente en el panteón de los héroes nacionales. En esta línea, el film rescata a dos oficiales caídos en Malvinas: el Teniente Roberto Estévez y el Comodoro Rodolfo de la Colina. A través de las voces de María Julia (hermana del Teniente Estévez) y de Leandro (hijo del Comodoro de la Colina) se expone el coraje y el patriotismo con el que éstos militares pelearon hasta ser abatidos por el fuego enemigo. María Julia Estévez, incluso, lee una carta que su hermano le enviara desde el teatro de operaciones, a través de la cual se busca reivindicar el valiente y decidido nacionalismo de este joven oficial.

El film, pues, no busca trazar una distinción entre conscriptos y oficiales y opta, en cambio, por otras líneas de demarcación ("coraje patriótico" versus "cobardía") para definir a aquellos excombatientes y caídos que son dignos de recuerdo. De esta manera, elude hasta cierto punto el dilema incómodo sobre la posible participación en el genocidio de muchos de los oficiales y suboficiales que batallaron en Malvinas.

Precisamente en relación con este dilema incómodo podemos pensar los "olvidos" del film. Debemos recordar aquí que, aunque algunas organizaciones argentinas defensoras de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad declamen su búsqueda, no existe ninguna "memoria completa". Tal cosa debería aparecernos como un oxímoron. Al igual que los individuos, los grupos sociales construyen sus

4 Resulta paradigmático, en este sentido, que el primer caído argentino en combate fuera el capitán de fragata Pedro Edgardo Giachino (merecedor post-mortem de la Cruz al Heroico Valor en Combate), quien ha sido denunciado posteriormente como partícipe en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

memorias colectivas de recuerdos, pero también de olvidos. Unos y otros pueden ser más planificados y sistemáticos o más involuntarios y azarosos, pero ambos son necesarios en toda elaboración de representaciones del pasado (Yerushalmi, 1989, pp. 14-15; Campos, 2009, pp. 6-7). Los olvidos, incluso, pueden leerse como indicios capaces de ayudarnos a comprender o a completar la operación de sentido de aquello que se recuerda. Aquello que se calla, que no se menciona ni se alude tácitamente puede iluminar, en una lectura sintomática, aquello que sí se dice, se repite y se reafirma (Ginzburg, 1989, pp. 138-175).

¿Qué es lo que lo que, por acción o por omisión, ha sido olvidado en *Locos de la bandera*? ¿De qué manera esas ausencias, esos silencios del relato contribuyen a la delimitación de las representaciones sobre la guerra, sobre los excombatientes y sobre los familiares que la película intenta construir?

Algo que llama la atención en la visualización de la película es la casi total falta de referencias al contexto político en el que el conflicto tuvo lugar. La dictadura militar que bajo el mando del presidente de facto Galtieri tomó la iniciativa de ocupar las islas el 2 de abril de 1982, ocupa un lugar marginal en la trama narrativa del film. Las pocas menciones que hacen los testimoniantes se refieren a la ya mencionada inoperancia y mediocridad del mando militar en Malvinas. Nada se dice sobre las posibles intenciones políticas que motivaron al gobierno militar a recuperar las islas. Tampoco se habla de las durísimas condiciones vividas por los soldados en el teatro de operaciones. No aparece, ni en los testimonios de familiares, ni en los de los excombatientes, ni en las consideraciones del narrador que hilvana el relato, casi ninguna reflexión sobre la relación entre la acción bélica y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el continente por los miembros de la dictadura militar.

No significa esto que la película minimice la dictadura, ni que niegue la existencia del terrorismo de Estado, y menos aún que la justifique. De hecho, la hermana de un caído en Malvinas da cuenta, en su historia familiar, de la marca del terrorismo estatal: otro hermano suyo se encuentra desaparecido. Sin embargo, sí podemos plantear que la película busca en todo momento correr el eje de discusión del régimen dictatorial (y de las intenciones políticas coyunturales que lo impulsaron a reocupar las islas) para centrarlo en la causa nacional que, en la perspectiva de los familiares y de los sobrevivientes, sería la verdadera razón (superior a cualquier gobierno de turno) del "heroísmo" de los caídos. De esta manera, al decir de Rosana Guber (2001, pp. 157-158), se reinscribe a Malvinas en el lenguaje tradicional de la Nación, dentro del cual se presenta como prenda de unidad capaz de movilizar al ciudadano (y, en este caso, al espectador). También podemos aventurar que, al evitar mencionar la relación innegable entre la Guerra y la dictadura, se busca eludir el planteamiento de cualquier suspicacia en torno a los oficiales caídos cuyo recuerdo enaltece la película.

## V. A MODO DE CIERRE: LOCOS DE LA BANDERA COMO UN “TRABAJO DE LA MEMORIA”

El film *Locos de la bandera*, que cuestiona algunos estereotipos construidos alrededor de la figura de los excombatientes y de sus familiares, también es sumamente crítico con el trato que gran parte les deparó a estos grupos en la posguerra: el silencio obligado, el olvido, el reproche, la negación. “Hablar era como un pecado”, dice un sobreviviente, en relación a su posibilidad de testimoniar tras el regreso a su hogar. Como en otras situaciones socialmente difíciles de procesar (como, por ejemplo, los casos de violencia de género en los centros clandestinos de detención) la inaudibilidad apareció, para muchos familiares y sobrevivientes, justificada como “respeto” al dolor ajeno (Tornay y Álvarez, 2012). “Muchos me decían: ‘yo no quiero tocarte el tema, la sensibilidad...’ – declara el padre de un excombatiente muerto en batalla - Lo triste sería lo otro, que vos no me preguntes”, concluye, enfático. Frente a la indiferencia encubierta de solemnidad, la actitud de los excombatientes que participan de la película es contundente: hablar. “Nosotros queremos que escuchen nuestras historias”, dice uno de ellos.

Si bien se trata de una iniciativa impulsada por un grupo organizado de familiares y excombatientes con la finalidad explícita de reponer el debate sobre Malvinas en la agenda pública, la película no pretende en ningún momento mostrar un relato monolítico o una interpretación unívoca del pasado. Por el contrario, el film trata de reflexionar sobre la complejidad del recuerdo. Son los propios testimonios de los sobrevivientes vertidos en el film los que nos muestran las oscilaciones y las contradicciones de la memoria, incluso sus olvidos. “No tengo recuerdos propios, sólo anécdotas, imágenes sueltas”, dice uno de los ex-combatientes. Las historias que los familiares y los sobrevivientes tienen para contar no son uniformes ni unidimensionales. Sus memorias, desde luego, han pasado por constantes reelaboraciones a lo largo de los 23 años que mediaban entre el conflicto y la realización de la película. Muchas de estas elaboraciones se han forjado conscientemente, al calor de las disputas de sentido con otras interpretaciones en pugna.

La memoria es inestable, conflictiva y maleable. Como dice el narrador, “los recuerdos son como piedras. Están ahí para que se usen como quieras”. También el espectador debe hacer algo con esos recuerdos-piedras que afloran en los testimonios. No hay en el film una línea interpretativa explícita que pudiera ser acatada (o rechazada) desde una postura pasiva frente a lo que se ve. Ciertamente, la voz en *off* entreteje los testimonios, pero lo hace a partir de dudas y de preguntas, más que de afirmaciones y respuestas. Es el espectador, desde una postura activa, el que debe suturar el sentido de la obra, a partir de una reelaboración crítica del heterogéneo material que éste presenta.

El film, en este sentido, puede considerarse un verdadero “trabajo de la memoria”, concepto que retomamos de Paul Ricoeur para pensar aquellas escrituras de la

memoria que no buscan una repetición mecánica del pasado en el discurso, sino que tratan de reelaborar críticamente la experiencia con el fin de pensar en perspectiva de presente y de futuro (Ricoeur, 2004: 222-225). *Locos de la bandera* recupera (con reivindicaciones pero también con críticas) las experiencias vividas y recordadas, habilita un tiempo para la voz de aquellos que habían sido silenciados -total o parcialmente- por las memorias oficiales y plantea dilemas importantes, conflictivos pero indispensables (a la vez que, como toda memoria, olvida o silencia otros). Al abrir la serie de sentidos sobre un pasado cuya memoria parecía petrificada, *Locos de la bandera* aparece como un interesante “trabajo de la memoria” y como un aporte controversial pero valioso para volver a pensar Malvinas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, G. (2002). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III*. Valencia: Pre-textos.
- Anónimo (2012). "Torturas a soldados en Malvinas serían crímenes de lesa humanidad". En *Diario Perfil* (Buenos Aires), 14/08/2012.
- Benjamin, W. (1991 [1936]). *El narrador*. Madrid: Taurus.
- Campos, E. (2009). "¿Es posible una memoria completa? Acerca de olvidos y reacciones conservadoras en la narrativa histórica de los '60/'70 (2006-2009)", en *Revista afuera. Estudios de crítica cultural* (Año IV, N° 7). Consulta 02 de noviembre de 2013: <http://www.revistaafuera.com/NumAnteriores/pagina.php?seccion=Articulos&page=07.Articulos.Campos.htm&idautor=151>
- Gentile, E. (2007). *El culto del littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Getino, O. (coord.) (2006) *Aproximación al mercado audiovisual del Mercosur. Periodo 2002-2005*. Montevideo: RECAM. Consulta 06 de febrero de 2013: [http://www.recam.org/\\_files/documents/aprox\\_al\\_mercado\\_cinemat\\_del\\_mercosur.pdf](http://www.recam.org/_files/documents/aprox_al_mercado_cinemat_del_mercosur.pdf)
- Ginzburg, C. (1989). "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales" en *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia* (138-175). Barcelona: Gedisa.
- Guber, R. (2001). *¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Guber, R. (2004). *De chicos a veteranos. Memorias argentinas de la guerra de Malvinas*. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Lorenz, F. (2006). *Las guerras por Malvinas*. Buenos Aires: Edhasa.
- Lvovich, D. y Bisquert J. (2008). *La cambiante memoria de la dictadura. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional/Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Nora, P. (2008). *Pierre Nora en Les lieux de mémoire*. Montevideo: Trilce.
- Palermo, V. (2007). *Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura argentina contemporánea*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Pittaluga, R. y Oberti, A. (2006). *Memorias en montaje*. Buenos Aires: El cielo por asalto.

- Pollak, M. (2006). *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límites*. La Plata: Ediciones Al Margen.
- Salvatori, S. (2008). "Montajes de una guerra. Representaciones cinematográficas sobre el conflicto Malvinas". En Susana Sel (comp.), *Cine y Derechos Humanos* (pp. 127-139). Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos/INADI/DerHumALC.
- Tornay, L. y Álvarez, V. (2012), "Tomar la palabra. Memoria y violencia de género durante el terrorismo de Estado". En *Revista Aletheia*, (Vol. 2, N° 4). Consulta 10 de octubre de 2013: <http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-4/numeros/numero-4/textos-de-otros-estudios-de-posgrado/tomar-la-palabra.-memoria-y-violencia-de-genero-durante-el-terrorismo-de-estado>
- Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: FCE.
- Yerushalmi, Y. (1989). "Reflexiones sobre el olvido". En AA.VV., *Usos del olvido* (pp. 13-26). Buenos Aires: Nueva Visión.

# “DE LA DERROTA CREAR PRIMAVERA”. MOVIMIENTOS SOCIALES EN LATINOAMERICA DE LOS '90 CONSTRUYENDO PODER POPULAR. EL CASO DE LA SELVIP.

## “FROM THE DEFEAT CREATE SPRING” SOCIAL MOVEMENTS IN LATIN-AMERICAN FROM THE 90S BUILDING PEOPLE’S POWER. SELVIP CASE.

Victoria Álvarez Tornay\*, Adrián Bernasconi Tappero\*\*, Daniela Rodríguez\*\*\*

### RESUMEN:

La Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SeLViP) nuclea diversas organizaciones latinoamericanas de construcción autogestionaria del hábitat. La tomamos como caso para aportar nuevos insumos al estudio de la construcción de identidades, estrategias y prácticas concretas de las organizaciones sociales en el contexto de imposición del neoliberalismo. Nos basamos en el material producido por la SeLViP y las organizaciones que la integran, testimonios directos de los protagonistas de dichas experiencias y material académico que brinde marco teórico a la investigación de los movimientos sociales latinoamericanos.

**Palabras clave:** Habitat – Movimientos Sociales – Poder Popular – Neoliberalismo.

### ABSTRACT:

The Latin-American ministry of low income housing (SeLViP) gathers different Latin-American self-managed organizations of construction of dwelling. We use this as a case to contribute with new material for the study of the construction of identities, strategies and concrete practice of the social organizations in the context in which neoliberalism imposes itself. We based our work on the material produced by the SeLViP and the organizations that take part in it, direct testimonies of the protagonists of this experiences and academic material that gives theoretical frame to the investigation of the Latin-American social movements.

**Keywords:** Dwelling – Social Movement – Latin-America – People’s power – Neoliberalism.

**Recibido:** 31 de Enero de 2013  
**Aceptado:** 30 de Marzo de 2013

**Received:** January 31, 2013  
**Approved:** March 30, 2013

\* Argentina, Profesora en Historia, Becaria Doctoral CONICET, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata. Correo electrónico: viqualvarez@yahoo.com.ar

\*\* Argentino, Técnico Superior en Periodismo, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Correo electrónico: berna\_1764@hotmail.com

\*\*\* Argentina, Estudiante de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: ladesbundada@hotmail.com

“Y si los miras a los ojos  
verás, son los mismos ojos,  
los que nunca se apagaron  
los que no quieren caer...”

“Telarañas”

La Arveja Esperanza – 2002  
Arbolito

## I. INTRODUCCIÓN

Entre el pasado mítico de la década de 1970 y nuestra realidad presente, se despliega como fotografías un historial de luchas derrotadas y despojos de las clases oprimidas. El estruendo del muro al caer, y el fracaso del socialismo real como mandato desesperanzador, abrieron paso al capitalismo imperialista en su fase neoliberal y a la sentencia del final de la historia. Sin embargo, lento pero a paso firme, en el aquí y el ahora, esta época ha visto nacer experiencias organizativas cuyo origen, prácticas y sujetos integrantes, se nos presentan como misterios y como preguntas. ¿Nuevos movimientos sociales? La discusión acerca de la naturaleza de estas experiencias, constituye el eje central que atraviesa el recorrido de este trabajo, que pretende ser una reflexión sobre las identidades de los y las protagonistas, sus concepciones y prácticas en torno al territorio, al poder y a la relación con el Estado.

Estas nuevas o resignificadas estrategias de construcción de políticas transformadoras, se analizarán en base al estudio del caso de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SeLViP). Esta organización de organizaciones, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular nacida en 1991, desarrolla una política desde la sectorialidad de la producción social del hábitat a lo largo y ancho de América Latina.

En este sentido, comenzamos con un primer apartado dedicado a la descripción del contexto histórico del surgimiento o fortalecimiento de las organizaciones sociales que protagonizaron la resistencia al neoliberalismo. A su vez, también presentamos a la SeLViP y a las organizaciones que la integran.

En los dos apartados que le siguen, discutimos la caracterización de “nuevos movimientos sociales”, que algunos autores hacen de las organizaciones surgidas en las últimas décadas.

El apartado titulado “La autonomía como búsqueda” es una reflexión sobre la naturaleza del poder y la necesidad de comprender las prácticas de las organizaciones sociales desde su concepción del mismo.

Por último, abordamos el problema del Estado: cómo lo caracterizamos y cuál debiera ser la actitud de los movimientos sociales frente a él.

Para finalizar presentaremos las conclusiones generales a las que arribaremos en el desarrollo de este trabajo.

Sólo queda, entonces, nada más que iniciar la travesía y situarnos en el contexto, que es marco de estas reflexiones.

## II. ENTRE LOS ESCOMBROS Y LOS LADRILLOS QUE EMPIEZAN A LEVANTARSE

1989. Hito de la derrota. La primera revolución perdurable que se reivindicó socialista en la historia se desmembraba en los escombros del muro caído. El cimbronazo generado por el fracaso del socialismo real, es explicado por Ruben Dri en las siguientes palabras: "La caída del muro de Berlín, símbolo mayor, impactante de dicho fracaso, fue un durísimo golpe para quienes no sólo habían abrigado esperanzas en la Revolución Rusa, sino que habían dedicado gran parte de su vida a la militancia, siguiendo las orientaciones que venían del que se creía centro ortodoxo del marxismo leninismo" (Dri, 2007, p. 74). Siguiendo a Dri, podemos decir que este golpe coincidió con el inicio de la era de la posmodernidad como la expresión cultural del capitalismo en su fase neoliberal.

Desde las entrañas del imperialismo estadounidense, el economista Francis Fukuyama decretaba así, en su artículo "El fin de la Historia":

"Lo que podríamos estar viendo no es sólo el fin de la Guerra Fría, o de un particular periodo de postguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución histórica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano." (Fukuyama, 1989, p. 6)

A través de estas palabras, quedan evidenciadas las expectativas del sistema, sintetizando el rasgo característico de la cultura postmoderna, escéptica y segregadora.

Al tiempo que en el este el bloque soviético naufragaba, acabando con un mundo bipolar, el imperialismo imponía, mediante el Consenso de Washington en 1989, su programa hegemónico a escala mundial. El pilar de este programa fue, en lo que respecta a la circulación de bienes en el mercado internacional, la imposición del más descarado libre cambio y apertura indiscriminada de los mercados nacionales<sup>1</sup>, con su correlato en la conformación de bloques económicos garantizados

1 En el mundo bipolar, primaba la regulación de la economía, mediante un protagonismo fuerte del Estado. Con la decadencia y caída final de la bipolaridad, la liberalización se transformó en el objetivo y programa explícito del capitalismo. La política de apertura comercial, sin embargo, es una receta que solo se lleva adelante en las economías tercermundistas, mientras que en el corazón del imperio y las potencias mundiales centrales, predominaba una política proteccionista tanto en la circulación de bienes como de personas.

mediante tratados internacionales de libre comercio<sup>2</sup>. En paralelo, el desarrollo de alta tecnología informática y comunicacional al servicio de la movilidad creciente de capitales a escala global, se complementaba con las políticas de desregulación y privatización de la economía, conducentes al máximo achicamiento del Estado. Parafraseando al Sub-Comandante Marcos, en el cabaret de la globalización, el Estado hace un *strip-tease*, quedándose con lo mínimo.

Esta nueva avanzada imperialista, en América Latina, es la coronación de un proceso que se abre en la década del '70, llevado adelante por las dictaduras cívico-militares fogueadas desde Washington. Sin el exterminio físico de miles de luchadores y luchadoras sociales, y de los regímenes que se planteaban independientes, no hubiese sido concebible el genocidio económico que en los '90 se expresó en la máxima brecha social alcanzada entre ricos y pobres. "Después de los regímenes militares iniciales y la toma de posiciones económicas estratégicas por parte de colaboradores públicos y privados, el Imperio apoyó la transición hacia regímenes clientelares civiles que, indirectamente, profundizaron y ampliaron el proceso de construcción imperial" (Petras, 2004, p. 42). Insertos en el nuevo orden imperial como Estados subalternos, estos regímenes hipotecaron el presente y el futuro de los pueblos latinoamericanos, transfiriendo masivamente los recursos públicos fuera del país, en concepto de pago de las gravosas deudas que habían adquirido con los organismos internacionales de crédito. Pueden citarse como algunos de los verdugos que estuvieron a cargo de la ejecución de este plan, el "menemato" (1989- 1999) en Argentina, los dos gobiernos consecutivos de Fernando Enrique Cardoso (1995-2003) en Brasil y los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti Coirolo (1985-1990 y 1995-2000) en Uruguay. Tal como explica Petras, estos gobiernos reflejaron en su composición burocrática "un híbrido de propietarios y directores de empresas de capital extranjero y nacional" (2004, p. 42), adeptos a los organismos internacionales de crédito tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

La consecuencia social más visible de estas políticas, fue el afianzamiento de una sociedad de clases profundamente polarizada (Petras, 2004, p. 44), como resultado de la desindustrialización, apertura de los mercados nacionales y endeudamiento externo. El empobrecimiento generalizado de la población, la movilidad social descendente, el crecimiento de las tasas de desocupación y subocupación, así como la precarización y flexibilización laboral se transformaron en rasgos estructurales de las economías de la región. Así, "la construcción imperial invirtió la pirámide de la renta con el crecimiento de transferencias masivas de ingresos y riquezas hasta el tope del 5 %, mientras el 80 % más bajo sufrió importantes pérdidas en los ingresos" (Petras, 2004, p. 44). Como si no hubiera sido poco para las clases subalternas "quedar en la calle", tener que aceptar por la fuerza las peores condiciones de trabajo para conjurar la amenaza de la desocupación, y no contar con la posibilidad de recurrir a las organizaciones obreras para la defensa de sus derechos pisoteados, sufrieron como consumidores. La reducción al máximo del Estado, me-

2 Un ejemplo de este tipo de tratados, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

diante la privatización y encarecimiento de los servicios públicos, la decadencia de los servicios de salud y educación y el disminución del gasto público, repercutieron doblemente en los bolsillos de las clases trabajadoras.

El impacto de las políticas neoliberales se refleja también en la dimensión territorial: "mientras unas pocas grandes ciudades se consolidan como los ejes de una nueva geografía planetaria" (Sasen, 1997, p. 12), la globalización capitalista multiplica la miseria de manera inédita: incertidumbres, inestabilidad, nuevas formas de violencia e inseguridad. La exclusión social, en lo territorial se expresa como una segmentación interna entre regiones (en el interior de los países y aún dentro de las ciudades) (Rodríguez, 2005).

La expresión espacial de la extrema polarización social que afecta los sectores populares, es el resultado de la lógica de inversión aplicada por el capital financiero, que ha seguido criterios de rentabilidad, generando un proceso de concentración de la riqueza y de equipamiento urbano en las grandes ciudades (Borja, 1995).

De esta manera, en contraposición, lo suburbano se constituye como símbolo de la periferia y de la marginación. El derecho a la ciudad se vuelve una meta lejana, en ciudades donde el valor del suelo, de la propiedad inmobiliaria, y de los bienes y servicios en general, ha aumentado desorbitadamente, generando la expulsión de miles de personas y la imposibilidad de acceso de otras tantas. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, a modo de ejemplo de la ciudad expulsora, podemos señalar que se ha cuadruplicado la construcción de viviendas de lujo (1991-1999), al tiempo que la población de las villas miseria pasó de 11.157 habitantes en 1993, a 59.977 en 1995 (Cerruti y Grimson, 2005). Se va configurando así, una sociedad atravesada por la exclusión social, en la que el "estar afuera", el no acceder, es la manera que el sistema encontró para que los sectores populares "estén dentro".

Desde los '90 a esta parte, se ha notado como tendencia en toda la región latinoamericana, el fenómeno de las migraciones masivas hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, tanto en las zonas céntricas como periféricas de las mismas. Hacia fines de la década de los '90, un 70% de la población latinoamericana vivía en las ciudades. En el 2003 en la Argentina la población urbana había ascendido al 90% del total, en Brasil al 83%, en Uruguay al 93% y en Venezuela al 88%. De esta población una porción importante se encontraba bajo la línea de la pobreza: 30% en Argentina, 25% en Uruguay, y 15% en Brasil.

Al llegar a las ciudades fueron pocos los que accedieron a un nivel de vida digno. "La pobreza se extiende no sólo en las zonas que hemos sabido denominar 'periféricas' o 'marginales', si no también, de manera progresiva, entretejiéndose impertinentemente en la trama urbana formal, en la ciudad central y penetrando sus intersticios." (Rodríguez y Procupez, 1997, p. 1) Como ejemplo de esto, podemos tomar el caso de las ciudades más pobladas de América Latina, pertenecientes a Brasil y a México: un 65% de los pobres se concentra en ellas. En cuanto al acceso a

la vivienda de los pobres urbanos, en la ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 3 millones de habitantes, 400.000 personas se hallan en situación de demanda crítica de hábitat en la ciudad, viviendo en villas miseria, inquilinatos y hoteles. Mientras tanto los gobiernos neoliberales, siguiendo las directivas de organismos como el BID, han llevado adelante políticas focalizadas al tiempo que han transferido recursos públicos a las grandes empresas constructoras. Tal como lo plantea Nestor Jeifetz (2005), el Estado en el neoliberalismo desplegó dos tipos de políticas, como caras de la misma moneda: intervención y no intervención. La transferencia de inmuebles fiscales en beneficio del capital privado, ha permitido la puesta en marcha del mega-negociado inmobiliario de Puerto Madero, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el Estado apelaba a los principios de la no intervención, desentendiéndose de la regulación de los precios del suelo, de los alquileres y de las propiedades, profundizando las políticas de desalojo, y criminalizando, bajo la figura usurpación.

Este, lejos de ser un caso aislado, se corresponde con la situación general de América Latina. De acuerdo con María Carla Rodríguez (2005), los Estados neoliberales latinoamericanos, han sabido intervenir, en los períodos de auge económico, aumentando el gasto y la inversión institucional que incentiva las nuevas grandes inversiones de punta, como los megaproyectos turísticos y las grandes obras de infraestructura, requeridos para la eficiente circulación masiva de mercancías. En cuanto a la política habitacional en los '90, promovida y financiada por el BID, tiene su máxima expresión el modelo habitacional chileno. El otorgamiento del subsidio habitacional directo, como presunta estrategia de focalización, correspondiente al recorte del gasto público, es la expresión de un Estado que decide no intervenir, al no hacerse cargo de la situación habitacional crítica, y, por otro lado, decide intervenir subsidiando el mercado inmobiliario, garantizando las ganancias de las oligopólicas empresas constructoras.

### III. DE LA RESISTENCIA A LA CREACIÓN

“Al excluir a la mayoría dentro y fuera de la ciudad, la elite de la ciudad amurallada también se excluye y, sin saberlo, siembra el germen de su propia desaparición.”

R. Leis (Flores y Zárate, 2002)

Frente a este panorama desolador, en el que se supone que no hay nada más que hacer, que el fin de la historia ha llegado y, contradiciendo los cálculos del sistema, emergieron a lo largo y ancho de nuestra Latinoamérica, experiencias organizativas que no sólo buscan dar respuesta a la adversidad, sino que, se plantean como propuesta superadora al orden desigual capitalista. Parafraseando a Marx, podríamos decir que las circunstancias hacen al hombre y el hombre hace a las circunstancias, en una dialéctica constante y conflictiva.

Como sostiene Waldo Ansaldi (2006), existe una correlación entre los patrones de acumulación de capital, el marco institucional de regulación de las relaciones sociales y políticas y las formas de acción colectiva.

A partir de la década del '80, emergieron movimientos sociales en América Latina en respuesta a las políticas continuadoras y profundizadoras de los planes genocidas llevados adelante por las dictaduras militares, que impusieron como desafío a los sectores populares la gestación de nuevas formas de resistencia. La crisis como símbolo de la creatividad del campo popular, fue contexto recuperado por los "viejos sujetos" de los sectores populares resignificados y resignificadores de sus formas organizativas y territorios. Movimientos campesinos, indigenistas, de mujeres, cooperativas de vivienda y de trabajo, comedores comunitarios, centros culturales comenzaron a gestarse desde el territorio, como espacio politizado, dados a la tarea de la recomposición de las degradadas redes sociales, a la supervivencia en contextos desfavorables y a la repolitización de lo cotidiano. Como ejemplos de éstos pueden nombrarse el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de Moradía Popular (UNMP) en Brasil, el Ejército Zapatista Liberación Nacional (EZLN) en México, guerreros del agua y cocaleros bolivianos, los Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), fábricas recuperadas y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) en Argentina y la FUCVAM<sup>3</sup> en Uruguay, entre otros.

Entre estas experiencias organizativas profundizaremos en el caso de la SelViP, integrada por una serie de organizaciones de hábitat y vivienda<sup>4</sup> que, desde la sectorialidad<sup>5</sup> pretenden asumir un rol transformador de la sociedad en un sentido integral.

La SelViP es una organización popular, autónoma y democrática, fruto de la confluencia de diversas experiencias concretas de construcción autogestionaria del hábitat. Como organización de organizaciones, representa a nivel internacional a sus afiliadas en el campo de la vivienda, siendo su mayor tarea la de construir y promover el desarrollo de políticas habitacionales en Latinoamérica, desde las experiencias de base de los sectores de menores ingresos.

La historia de su nacimiento se remonta, a los primeros intercambios entre la FUCVAM y la Unión de Movimientos de Moradía (San Pablo), realizados entre 1988 y 1989. De estos primeros encuentros, surgió la necesidad de generar articulaciones más profundas entre las organizaciones del hábitat popular. Fue así que, en el año 1990, cuando la FUCVAM celebraba su vigésimo aniversario en la

3 Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

4 Entendemos por hábitat a todos aquellos elementos que configuran el espacio social en el que desarrollan su vida las comunidades y los individuos, tales como infraestructura vial, acceso a los servicios, acceso a la salud y la educación, lugares de esparcimiento, disponibilidad de los recursos naturales y condiciones medioambientales. El hábitat urbano o rural es producto de la construcción social y por tanto es escenario de disputa. Vivienda, en cambio, refiere al "techo" bajo el cual se habitan y la disputa de estas organizaciones gira en torno a la dignidad de la misma.

5 En la disputa contra el capital, la sectorialidad es una reivindicación estratégicamente elegida (hábitat, educación, salud).

lucha por la vivienda popular, a modo de festejo, convocó a Montevideo a diversas organizaciones del hábitat. Éstas participarían de un seminario-taller, a lo largo de una semana, en las instalaciones municipales de Parque Rivera, al borde de cuyos bosques hoy se asientan tres cooperativas de FUCVAM.

La Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, fue constituida en 1970, producto de un proceso organizativo de cooperativas de vivienda que ya desde los '60, venía gestándose en Uruguay. Fueron 95 familias de los departamentos de Salto, Fray Benito e Isla Mala, las primeras protagonistas de la lucha por la Ley de Vivienda<sup>6</sup>, sancionada en 1968 en Uruguay. Al calor del debate acerca de la ley, nace la FUCVAM y se constituye en la primera experiencia cooperativista de vivienda de América Latina.

Por su parte, la Unión Nacional de Moradía Popular, nació en 1989, en el proceso de lucha por un marco normativo que promoviese la construcción de vivienda popular en Brasil. La UNMP había organizado una campaña de juntada de firmas a favor del Proyecto de Ley de Iniciativa Popular, creador del Consejo Nacional por la Moradía Popular. A partir de este encuentro, los movimientos de vivienda de los Estados de Paraná, Sao Paulo, y Mina Gerais iniciaron una articulación de la lucha por el derecho a la vivienda, la reforma urbana y la autogestión, con el fin de vivir en una sociedad sin exclusión social. Puede decirse que el resultado de este encuentro, en el marco del acceso del Partido de los Trabajadores de Brasil al gobierno San Pablo, fue la creación del Programa de Autogestión por el cual se construyeron 10.000 mutirones.

Junto a la FUCVAM y a la UNMP, se sumaban experiencias más incipientes como las que el Comité de Iglesias estaba impulsando en Asunción del Paraguay. La experiencia de esta organización reflejaba la estrategia de toma de tierras en las periferias de las ciudades y el desarrollo de procesos de autoconstrucción de verdaderos barrios, con infraestructura en servicios, loteo, etc. Desde Buenos Aires, se sumaba también el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) para aportar su embrionaria experiencia cooperativa y autogestionaria, en áreas centrales de la ciudad. Emergente del fenómeno de ocupaciones de edificios, ya no en las periferias, sino en el mismo corazón de la ciudad, en los intersticios por los cuales, la marginalidad se va instalando, bajo la bandera del derecho a la ciudad.

De las jornadas de trabajo compartidas, donde se pusieron en común las distintas experiencias, surgió la propuesta de realizar lo que sería el Encuentro fundacional de la SeLViP en San Pablo en septiembre de 1991.

Los objetivos que motivaron la creación de esta red latinoamericana fueron el enfrentamiento al neoliberalismo capitalista, la construcción de una red latinoamericana de organizaciones de base de vivienda popular, incorporando a organizaciones con experiencia concreta en la producción social y material de vivienda y equipamiento comunitario e impulsando la instalación de políticas de autogestión.

6 Esta ley buscaba dar respuesta al déficit de vivienda popular, promoviendo la construcción de viviendas a través de Cooperativas de Ayuda Mutua.

"SeLVIP no es una red virtual; es una red material, real, motorizadora de políticas sectoriales de vivienda y hábitat de contenidos autogestorios; generadora de nuevos colectivos que cotidianamente van arando y sembrando el camino de la construcción de poder popular para una Latinoamérica social, económica, cultural y políticamente liberada del neoliberalismo capitalista" (Documento de Difusión de la SeLVIP, 2001).

## IV. EL DESFILE DE LO NUEVO ANTIGUO

"Yo estaba sobre una loma cuando vi acercarse Lo Antiguo;  
sin embargo decía ser Lo Nuevo.  
Se arrastraba sobre muletas nuevas, nunca vistas en ninguna parte.  
La piedra pasó rodando, exhibida como el descubrimiento más reciente...  
La caravana iba rodeada por gente que gritaba:  
'¡Aquí viene Lo Nuevo, dad la bienvenida a Lo Nuevo!'  
Y quien escuchaba, solo oía esos gritos;  
pero quien miraba, veía también a muchos que no gritaban.  
Y así marchaba Lo Viejo, disfrazado de nuevo;  
pero en su marcha triunfal arrastraba también Lo Nuevo,  
que era exhibido como si fuera Lo Viejo.  
Lo Nuevo marchaba encadenado y vestido de harapos  
que dejaban al descubierto sus miembros jóvenes y vigorosos..."

Desfile de lo Nuevo Antiguo

Bertold Brecht

Algunos autores de las Ciencias Sociales, han caracterizado a los movimientos surgidos en los últimos treinta años, apelando a la caracterización de "nuevos", marcando una ruptura con las formas organizativas previas. En este sentido, Zibechi (2003) plantea que hasta los '70, la acción social tenía como meta acceder al Estado para modificar las relaciones de propiedad, justificando el desarrollo de prácticas organizativas Estado-céntricas, caracterizadas por el centralismo, disposición piramidal, y la división jerárquica entre dirigentes y dirigidos. Estas formas cayeron en crisis en el nuevo contexto latinoamericano, resultando de la misma, el surgimiento de "nuevos movimientos sociales".

Esta concepción de "nuevos movimientos sociales", esta íntimamente ligada a una visión renovada del sujeto revolucionario: el obrero de overol, de identidad homogénea, con prácticas organizativas de tipo marxista-leninista desarrolladas desde el espacio de la fábrica, cuya conciencia revolucionaria era inyectada por las vanguardias iluminadas conforman un modelo pasado de moda, en un contexto de creciente desindustrialización. Esto implica una ruptura con el tiempo pasado, y la emergencia de identidades múltiples que interpelan a los sujetos organizados bajo otros patrones, también novedosos.

En contraposición, hay quienes se centran en la historicidad de estas organizaciones y sus protagonistas. Plantean que los sujetos se resignifican, cuidando de no perder de vista la dimensión histórica de los procesos. La caracterización de los movimientos sociales, sujetos y territorios debe tomar como punto de partida la comprensión de las estrategias populares dadas en una situación histórica determinada. “Sería más correcto leerlos (a los movimientos sociales) como una mixtura desbordada por prácticas creativas que combina al mismo tiempo continuidad y ruptura, pasado y presente, legado y originalidad con respecto a las formas tradicionales de pensar y hacer política.” (Ouviaña, 2007:186)

Lo novedoso de las experiencias organizativas de nuestra era es que están interpellando a otras dimensiones de las identidades, instalando nuevas prácticas y concepciones del territorio, reinventando la construcción de poder popular.

En el caso de la SeLViP podemos ver que la lucha política, en el plano internacional, se da desde la sectorialidad de la pelea por el hábitat y no desde el interior de la fábrica. Esto no quiere decir que los sujetos oprimidos sean otros sino que se reconocen en distintas identidades y toman otra relevancia aspectos de su lucha que antes eran menos visibles. En las múltiples contradicciones al interior del sistema, las prácticas de resistencia y transformación que desarrollan los oprimidos y oprimidas se modifican y recombinan adaptándose a las nuevas coyunturas.

## V. IDENTIDADES Y TERRITORIOS: UN MUNDO EN EL QUE CABEN TODOS LOS MUNDOS

“Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.  
La identidad no es una pieza de museo, quietecita en una vitrina,  
sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de  
cada día.”

Celebración de las contradicciones/2; en  
Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos

Referirnos a los sujetos integrantes de estas experiencias organizativas, nos remite a la dialéctica entre contexto y sujeto, a la cual hacíamos referencia en apartados anteriores. Si las circunstancias cambian, esto no puede más que afectar a la configuración de dichos sujetos. De lo contrario estaríamos negando que el sujeto es un “ensamble de las relaciones sociales” (Dri, 2007: 25) y, por lo tanto, estaríamos negando su historicidad. Caracterizar a los sujetos como “nuevos actores sociales”, nos obliga entonces a reflexionar acerca de las implicancias de tamaña aseveración.

Los peligros de esta postura se expresan por ejemplo en el planteo de Zibechi, al referirse al protagonismo de mujeres, niños e indígenas en los movimientos sociales.

A nuestro entender, mujeres, niños e indígenas no son "nuevos actores". Lo novedoso es la interpelación a esas múltiples identidades, antes invisibilizadas por las lecturas dogmáticas y eurocentristas<sup>7</sup> de la realidad, pero que ahora cobran relevancia en los nuevos escenarios, para las disputas de las clases oprimidas, determinados por las nuevas coyunturas. Como plantea Miguel Mazzeo, la condición periférica en la que el capitalismo imperialista nos sitúa, nos "lleva a pensar en un sujeto plural, multisectorial, un sujeto social múltiple, capaz de articular a un conjunto amplio de sectores sociales." (Mazzeo et al., 2007:13)

Siguiendo con la idea de sujeto como ensamble de relaciones sociales, debemos considerar que él mismo desarrolla sus prácticas siempre en un territorio. A no ser que consideremos que las relaciones sociales, a lo largo de la historia, se han desarrollado en nubes inmateriales de éter<sup>8</sup>. La fábrica es tan territorio como el barrio, entendiendo a los territorios como los espacios en los cuales se desenvuelven los conflictos sociales. Coincidimos con Zibechi, en que el arraigo territorial de los movimientos sociales post-'90 es en ellos una característica fundamental. Su planteamiento se basa en la idea que la "desterritorialización productiva" llevada a cabo por las dictaduras militares y por el neoliberalismo ha hecho entrar en crisis a los viejos movimientos. Éstos, han visto desaparecer los espacios donde habían ganado poder<sup>9</sup>, habiéndose abierto un período de reconfiguración del espacio físico y de "reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva" (Zibechi, 2003, p.186).

Sin embargo no compartimos del todo esta última afirmación: los sectores populares no se encuentran solamente concentrados en los márgenes de las ciudades. Ya que, como hemos dicho anteriormente, la pobreza atraviesa todo el entramado urbano. Es por eso que la SelVIP reivindica el derecho a la ciudad y el suelo como valor de uso social, defendiendo la instalación de cooperativas y ocupaciones en zonas céntricas y de alto valor inmobiliario.

Otra de las características de las que Zibechi intenta dar cuenta, y que resulta fundamental en estas experiencias, es la búsqueda de la autonomía material y simbólica respecto del Estado y de los partidos políticos. Esto nos enfrenta a la discusión acerca de las diferentes estrategias de poder llevadas adelante por dichos movimientos.

7 Es más que obvio que mujeres, indígenas y niños han existido y participado desde siempre en nuestra historia más allá de que las vanguardias intelectuales y políticas no lo hayan reconocido o de que en otros contextos su accionar no fuera tan relevante o estratégico.

8 Con esta afirmación no pretendemos malinterpretar ninguna de las posiciones que se plantean en esta discusión sino poner en evidencia los posibles peligros en los cuales pueden caer al utilizar livianamente la caracterización de "nuevo".

9 En este caso el autor se refiere fundamentalmente a la desindustrialización y sus consecuencias para las organizaciones de trabajadores.

## VI. LA AUTONOMÍA COMO BUSQUEDA

“No es para quedarnos en casa  
que hacemos una casa,  
no es para quedarnos en el amor  
que amamos...”

Juan Gelman

Un primer acercamiento a la reflexión sobre las diferentes estrategias de poder de las expresiones antisistémicas de nuestra era, nos obliga a centrarnos en las concepciones de poder en boga. La comprensión que hasta aquí hemos hecho acerca de sujeto, territorio y contexto, ineludiblemente, implica pensarla en el marco de relaciones sociales de dominación.

El modelo tradicional llevado adelante a partir de los procesos revolucionarios de principios del siglo XX, estaba fundamentado en la toma del poder como estrategia. De esta manera, el poder era concebido como un objeto depositado en determinado lugar y detentado por ciertos actores y, por lo tanto, se planteaba la necesidad de ir en marcha heroica por su conquista. Para esto se precisaba de una herramienta organizativa que pusiera en marcha un programa a cargo de revolucionarios profesionales que, con la verdad iluminada, lograrían sus objetivos finales.

En nuestro presente, la discusión central sobre las estrategias de poder radica en lo que Dri denominó “huída o construcción del poder popular”. Este autor, intentando explicar la postura de uno de los exponentes teóricos de las corrientes autonomistas, John Holloway, afirma que la culpa de todo la tuvo Hegel, por influenciar el pensamiento del joven Marx. Este autor, que se reivindica a su manera marxista, sostiene que la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo no existe como punto de partida para la construcción de una nueva sociedad, dado que la realidad social es múltiple y que el antagonismo solo puede expresarse de forma negativa, es decir, mediante identidades que rechazan al capitalismo. Superar la contradicción entre el amo y el esclavo utilizando la estrategia del amo, la ejecución de un **poder sobre**, implica la reproducción de aquello a lo que se quiere transformar pero con signo opuesto. Por lo tanto, la única estrategia viable es la de huir del poder. Para ellos, si el poder es dominación, el no-poder es la emancipación.

En oposición a esto, Miguel Mazzeo sostiene:

“Indefectiblemente, tiene que ser ‘poder’ el poder popular, porque no se limita al marco ‘resistente’ (y sin dudas necesario) de la potencia. Luchar contra los esclavizadores, romper con la dominación o ‘desestructurarla’, que no es igual a atemperarla o a construir la utopía aristocrática, exige el ejercicio de alguna forma de poder, de un ‘mando’ que no necesariamente debe estar centralizado y que no debe ser permanente. Un poder

que prescinde de los argumentos tautológicos y de la razón cínica, un mando sin jerarquía. Un poder de mando puesto en común, democratizado, junto con el poder de deliberación y el poder de decisión. Se trata de (...) una forma de poder no absolutizado que no tiene como objetivo la obediencia, sino hacer respetar la palabra del oprimido, una forma histórica de concretar la utopía de los negados y victimizados. Las formas de mando que debe alumbrar el poder popular no deberán constituirse jamás como un fin en sí mismas" (Mazzeo, 2007, pp. 27-28).

Se trata, entonces, de construir el poder popular desde donde habita lo real posible, reconociendo el potencial liberador de las clases populares en el aquí y en el ahora. Esto implica, a la luz de las reflexiones que venimos desarrollando, situar a la construcción del poder popular desde abajo, ya que este nunca podrá ser otorgado desde arriba, aunque el más revolucionario de todos los tiempos llegue a ocupar el Estado. La construcción del poder popular parte de la creación colectiva de una conciencia superadora del capitalismo, en el calor de las luchas que a diario desarrollan los oprimidos y oprimidas. El fin último que guía las esperanzas transformadoras está contenido en los medios para alcanzarlo, como ensayo de todo aquello a lo que aspiramos.

Miguel Mazzeo, intelectual orgánico de la organización argentina Frente Popular Darío Santillán, expresa en las siguientes palabras esta nueva concepción:

"El poder popular es el proceso a través del cual los lugares de vida, de trabajo, de estudio, de recreación, etc. de las clases subalternas se transmutan en célula constituyente de un poder social, alternativo y liberador que les permite ganar posiciones y modificar la disposición del poder y las relaciones de fuerza y, claro está, avanzar en la consolidación de un campo contrahegemónico" (Mazzeo et al., 2007, pp. 11-12).

Esta práctica de construcción del poder popular en el aquí y en el ahora a través de la cotidianeidad y de la lucha presente, se ve en el planteo de las organizaciones que integran la SeLVIP, cuando caracterizan de la siguiente manera a esta secretaría:

"(La SeLVIP es una) Herramienta de constitución del movimiento popular desde la sectorialidad de la vivienda y el hábitat; sectorialidad con una clara conciencia respecto a que 'la vivienda es el principio y no el final', en la esencialmente humana responsabilidad que nos corresponde de ser parte activa y consciente de la derrota del neoliberalismo capitalista a través de la cotidiana construcción de un hombre y mundo nuevo". (Documento de difusión del SeLVIP, 2001b)

## VII. EL ESTADO COMO CONTRADICCIÓN

“Será que la necesidad parió conmigo,  
la necesidad de lo que hoy resulta necio,  
la necesidad de admitir al enemigo,  
la necesidad de vivir sin tener precio”  
Silvio Rodríguez, “El necio” en *Silvio*, 1992

La autonomía como búsqueda, mediante la construcción del poder popular, no puede negar la existencia de las relaciones de dominación entre clases sociales. En el supuesto caso de que el poder dominante fuera indiferente y no buscara aplastar al embrionario poder popular erigido por experiencias concretas, se presenta el peligro de que ese poder se convierta en parte del paisaje natural, a modo de isla feliz, dentro de un sistema que oprime al resto del universo. La vocación de poder popular debe perseguir como objetivo irrenunciable la eliminación de toda forma de opresión.

Ahora bien, ¿qué espacio si no el Estado refleja mejor la condensación de las relaciones sociales de dominación? Entendiéndolo como el principal garante de dichas relaciones, se vuelve innegable la necesidad de que el poder popular apunte a su conquista, para su posterior destrucción. En este sentido Esteban Rodríguez, que toma de la autora Mabel Thwaites Rey (2006) la máxima “la autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción”, en las siguientes palabras expresa con claridad las tareas de las organizaciones sociales frente al Estado:

“En el camino, en el mientras tanto productivo de una nueva configuración social, puede empujarse al Estado a actuar como si verdaderamente, fuera una instancia de articulación de lo social. Esto es, forzar de manera conciente la contradicción íncita del Estado, provocar su acción a favor de los más débiles (...)” (Rodríguez et al., 2007, pp.122-123)

Retomando nuestro caso de referencia, uno de los objetivos que incentivaron la articulación de las organizaciones parte de la SelViP es, a través de esta red internacional, contar con mayor peso y mayores solidaridades en la disputa por un marco normativo que abra mayores posibilidades en la búsqueda de sus objetivos. En este sentido las solidaridades al interior de la SelViP se expresan por ejemplo en la lucha por la ley 341 en la ciudad de Buenos Aires, así como la Ley de Moradía popular en Brasil.

## VIII. CONCLUSIONES

"Que dignidad tan grande la de creer siempre en la vida  
con solo ver una flor brotando entre las ruinas"  
León Gieco, "Mensajes del alma" del disco homónimo, 1992

Hasta aquí, este trabajo propuso constituirse en un marco para la reflexión acerca de las problemáticas políticas que se les presentan a los movimientos sociales en la actualidad. La reflexión nos permitirá continuar con el trabajo de investigación, orientándolo hacia la sistematización de una experiencia concreta y a la recopilación de las fuentes que dan cuenta de su historia. Entendemos que la comprensión de la trayectoria organizativa de la SelVIP, favorecerá al aprendizaje acerca de los movimientos sociales post '90 y de las diversas disyuntivas que deben afrontar.

Entre las preguntas que nos quedan resonando y que darán continuidad a nuestra reflexión, la principal es: ¿cómo se expresan y resuelven las tensiones entre la lucha por lo sectorial y la construcción de la integralidad, desde la concepción de poder autogestionario?

En este sentido, consideramos que la misma dinámica de construcción cotidiana colectiva en el aquí y el ahora conduce a la ampliación de las metas conseguidas por el mero hecho de que para alcanzar y consolidar los objetivos sectoriales, resulta imprescindible el cambio integral. De esta manera, la lucha sectorial debería generar las condiciones para el desarrollo de los hombres nuevos y mujeres nuevas. Vemos que se trata de un proceso dialéctico constante donde lo sectorial y lo integral se retroalimentan y no pueden avanzar el uno sin el otro. En términos gramscianos, podríamos decir que para llevar adelante un cambio integral en la sociedad sería necesario que la construcción del poder popular deviniera en hegemonía para que, de esta manera, el capitalismo desaparezca para todos y todas y en todos y todas.

Desde nuestra perspectiva, estas, como otras contradicciones que atraviesan al campo popular, contrariando a los portadores del conveniente escepticismo post-moderno, podrán resolverse. Entendemos, como Paulo Freire que "la crítica a la esperanza viene de quienes no necesariamente entienden a la historia como posibilidad. De quienes no aceptan que la historia no es algo predeterminado, que la historia es posible. No solamente es posible sino que es posibilidad y que si es posibilidad hay que realizarla" (Korol, 2004, p. 19).

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, consideramos que los supuestos "nuevos" movimientos sociales son expresión de las renovadas (y no nuevas) prácticas de construcción del poder popular, que hacen de la autonomía un principio y una praxis. Se trata de una autonomía que es de clase, pero que no olvida ni niega a sus enemigos concretos, y que interpela al Estado como garante de sus derechos, como espacio de disputa de las clases sociales antagónicas. En las grietas que se abren

en la puja entre estos movimientos sociales y la clase dominante y sus representantes en el Estado, los movimientos luchan cotidianamente por crear desde abajo la sociedad nueva, en donde todo sea para todos y todas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ansaldo, W. (2006) "Quedarse afuera, ladrando como perros a los muros. Protesta y movimientos sociales en América Latina en la bisagra de los siglos XX y XXI", en *Anuario*. Rosario: Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y artes. Universidad Nacional de Rosario, N° 21
- Borja, J. (1995). *Movimientos sociales urbanos*. Buenos Aires: Ed. Siap – Planteos.
- Castro, F. (1953) *La Historia me absolverá*. Disponible en: <http://www.granma.cubaweb.cu/marti-moncada/jm01.html>
- Cerrutti, M. y Grimson, A. (2005) "Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares" en: Portes, Roberts y Grimson (ed), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Di marco y Palomino (Comp.) (2004) *Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina*. Buenos Aires: Jorge Baudino Ediciones.
- Dri, R. (2007) *El poder popular en autores varios, Reflexiones sobre poder popular*, Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- Flores, E. y Zarate M.L. (comp.) (2002) *Vivitos y coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina*, México: Universidad Autónoma Metropolitana/ HIC- AL.
- Fukuyama, F. (1989). *El fin de la historia*. Disponible en: <http://firgoa.usc.es/drupal/files/Francis%20Fukuyama%20-%20Fin%20de%20la%20historia%20y%20otros%20escritos.pdf>
- Jeifetz, N. (2005). *Intervención – no intervención. Algunos comentarios sobre la relación entre el estadio local y / o nacional, y la dinámica socioespacial de la Ciudad de Buenos Aires*.
- Korol, C. (2004), "Continua soñando. Entrevista a Paulo Freire realizada por Claudia Korol", en *Pedagogía de la Resistencia. Cuadernos de Educación Popular*, Ediciones Madres de Plaza de Mayo - América Libre, pp. 19.
- Mazzeo, M. (2007) *El sueño de una cosa (Introducción al poder popular)*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo
- Ouviaña, H. (2007) "Hacia una política prefigurativa. Algunos recorridos e hipótesis en torno a la construcción del poder popular" en AA. VV. *Reflexiones sobre el poder popular*, Buenos Aires: Editorial El colectivo.

- Petras, J (2004) *El nuevo orden criminal*, Caracas: Monte Avila.
- Procupez, V y Rodríguez, M.C. (Comp.) (1997) *Autogestión. Rehabilitación. Concertación. Experiencias en política de vivienda popular*. Buenos Aires: Subsecretaría de Vivienda y Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
- Rodríguez, M. (2005) “Producción Social del Hábitat: un esfuerzo transformador colectivo” en: *HIC (Habitat International Coalition), De la marginación a la ciudadanía, 38 casos de producción y gestión social del hábitat*.
- VV. AA. (2007). *Reflexiones sobre el poder popular*, Buenos Aires: Editorial El colectivo.
- Zibechi, R. (1999) *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*. Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad.
- Zibechi, R. (2003) “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”. En publicación: *OSAL, Observatorio Social de América Latina*, año V, no.9. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osa9/Zibechi.pdf>.

## FUENTES

- Documento de Difusión de la SeLViP (2001)
- Documento de Difusión de la SeLViP “¿Qué es la SeLViP?” (2001)
- Entrevista a Néstor Jeifetz (Miembro del Equipo Técnico interdisciplinario del MOI) y a María Carla Rodríguez (coordinadora del Área de Capacitación y Proyectos y miembro del Equipo Técnico Interdisciplinario del MOI)

# CONTINUIDADES EN EL CHILE POST-DICTATORIAL: EL ACCIONAR DEL MAPU-LAUTARO Y LA RESPUESTA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN (1990).

## *CONTINUITY IN THE POST-DICTATORSHIP PERIOD IN CHILE: THE ACTS OF MAPU-LAUTARO AND THE RESPONSE OF THE INVESTIGATION POLICE, DURING PATRICIO AYLWIN GOVERNMENT (1990).*

Nicolás Acevedo Arriaza\*

### RESUMEN:

El artículo estudia las continuidades que debió enfrentar el Gobierno de Patricio Aylwin. Por un lado, el accionar del MAPU-Lautaro, que operó con apoyo de colaboradores, tal como hacía en Dictadura; y por otro lado, el accionar de Policía de Investigaciones, que siguió torturando para poder desarticularlo. El escrito relatará dichas continuidades a través del rescate de Ariel Antonioletti, a partir de entrevistas a sus protagonistas, de prensa nacional y bibliografía. Se concluye que el Gobierno con tal de desarticular al MAPU-Lautaro, debió confiar en Investigaciones, a pesar de que estos violaran los derechos humanos, como en la Dictadura.

**Palabras clave:** MAPU Lautaro – Violencia Política – Transición a la democracia – Gobierno de Patricio Aylwin – Policía de Investigaciones.

### ABSTRACT:

*The article studies the continuities that the government of Patricio Aylwin had to face. On one hand, the acts of the MAPU-Lautaro, that operated with the collaboration of others, as it did during the dictatorship and on the other hand, the acts of the Investigation police, that kept torturing in order to destroy it. This work will talk about these continuities through the rescue of Ariel Anonioletti, through interviews of its protagonists, by national press and bibliography. Finally, it is stated that the government, having as a purpose to destroy the MAPU-Lautaro, had to rely on the investigation police, regardless of the human rights violation, as it happened in the dictatorship.*

**Keywords:** MAPU Lautaro – Political violence – Democracy transition – Patricio Aylwin Government – Investigation police.

**Recibido:** 30 de Septiembre de 2013

**Aceptado:** 15 de Diciembre de 2013

**Received:** September 30, 2013

**Approved:** December 15, 2013

\* Chileno, estudiante magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: nicoacevedo@gmail.com.

“Las ideas son balas hoy día y no puedo  
usar flores por ti.  
Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir  
lo que aquí no he podido decirte,  
hablar como un árbol  
con mi sombra hacia ti  
(Silvio Rodríguez, “De la ausencia y de ti”, 1977)

## I. INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

Al iniciar su gobierno, en marzo de 1990, Patricio Aylwin enfrentó una serie de conflictos políticos, económicos y sociales heredados de la saliente Dictadura, entre ellos: la vigencia de la Constitución de 1980, el reconocimiento de las violaciones de Derechos Humanos y la permanencia de Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército. El ambiente político entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas estuvo caracterizado por una fuerte tensión, justificándose la búsqueda de consensos entre la Concertación y la Derecha en materias legislativas. Así se evidenció con la reforma tributaria y laboral, pero no en la realización de cambios constitucionales (Boeninger, 1997, pp. 433- 435). De esta manera, la denominada *transición a la democracia* se fue convirtiendo en un proceso casi eterno. Manuel Antonio Garretón, por ejemplo, ha denominado a este proceso como *Chile post-dictatorial*, toda vez que los gobiernos de la Concertación, si bien, corrigieron el modelo neoliberal, no lo reformaron (Garretón, 2012).

Una de las características de este Chile post-dictatorial fue la permanencia de las organizaciones rebeldes armadas, quienes continuaron utilizando la violencia política con el Estado, teniendo un limitado alcance entre la población civil. Dichas orgánicas, que fueron catalogadas por el Estado como “asociaciones terroristas”, principalmente porque realizaron una serie de asaltos o atentados, logrando ser desarticuladas a mediados de los noventa. Con ello, se produjo el encarcelamiento de más de un centenar de personas, ya sea en la Cárcel de Alta Seguridad y el Centro de Orientación Femenina, donde hombres y mujeres, respectivamente, permanecieron hasta después del año 2005 (Farfán, 2006). Este trabajo pretende profundizar en las razones que motivaron a dichas organizaciones subversivas a mantener su accionar armado después de 1990, así como analizar las estrategias que utilizó el gobierno de Aylwin para desarticularlos. Nuestra hipótesis cuestiona que dicha desarticulación fue con el respeto a los derechos humanos de los detenidos, como afirman hasta el día de hoy algunos ex personeros de gobierno en materias de seguridad (Peña, 2012, pp. 14-16). Por otro lado, profundizaremos en el

1 Mis agradecimientos más profundos a Camila Silva y Luis Castro por sus comentarios, correcciones y sugerencias; a todos quienes me facilitaron documentos y fuentes como Sylvia Vera, Camilo Plaza, Marco Paulsen, Ángel Spotorno, Héctor Ordenes y Eyleen Faure; a todos quienes me dedicaron su tiempo y sus recuerdos para este escrito, mi cariño siempre.

proceder de las acciones subversivas y en la subjetividad que actualmente perciben sus propios protagonistas sobre sus experiencias en los años noventa.

Para ello abordaremos una microhistoria que marcó mediáticamente el retorno de la democracia concertacionista: el rescate del prisionero político Marcos Ariel Antonioletti, quien fuera liberado por un comando del MAPU-Lautaro en noviembre de 1990 desde el Hospital Sótero del Río, al sur de Santiago. Este hecho terminó dramáticamente con la muerte de cinco uniformados y la detención de Marcela Rodríguez, quien terminó gravemente herida. Posteriormente se produjo el asesinato de Antonioletti por parte de Policía de Investigaciones. Ante estos acontecimientos nos hemos planteado las siguientes preguntas: ¿Por qué el MAPU-Lautaro siguió operando militarmente después de 1990?, ¿por qué rescatar precisamente a Ariel Antonioletti?, ¿cómo recuerdan los propios protagonistas dicho rescate y cuales fueron internamente las explicaciones de su fracaso?, ¿por qué Investigaciones mató a Antonioletti en vez de detenerlo con vida?, ¿fue una decisión del Gobierno o Investigaciones actuó con autonomía? Creemos que al intentar responder estas preguntas, podremos aportar a una comprensión más integral del complejo escenario que se vivió en Chile a partir de marzo de 1990. Si bien Augusto Pinochet dio el traspaso a un gobierno elegido democráticamente, hubo una serie de continuidades que siguieron operando en los primeros años del Chile post-dictatorial. Algunos de estos procesos fueron aceptados por los gobiernos concertacionistas, realizando solo pequeñas reformas: nos referimos, por ejemplo, a la vigencia de la Constitución de 1980 o el modelo económico basado en la mono-exportación y el Estado subsidiario. En cambio hubo otras continuidades que el gobierno buscó frenar, como fue el accionar armado del MAPU-Lautaro, pero ¿qué sucedió con el modo de actuar de Carabineros e Investigaciones para combatir a los grupos subversivos? Este artículo busca graficar como tanto el MAPU-Lautaro como la Policía de Investigaciones siguieron actuando con los mismos *modus operandi* que en la Dictadura, por lo menos hasta mediados de los años noventa cuando el gobierno desarticuló a la organización subversiva y logró imponerse a las autoridades de la policía luego de una serie de despidos (Rosas, 2004).

Nuestro trabajo se enmarca en el enfoque de Historia Reciente, el cual se preocupa del 'pasado actual', cuyo permanente proceso de actualización "interviene en las proyecciones a futuro elaborado por sujetos y comunidades" (Franco y Levín, 2007, p. 31). En este marco, para entender al Chile post-dictadura debemos realizar un estudio de los conflictos que existieron en los primeros años de la dictadura, analizando continuidades y rupturas, en las cuales se enmarca el rescate de Ariel Antonioletti y sus consecuencias. Para ello, como plantea la Historia Reciente, el uso de la memoria es complementario a las fuentes escritas, entendiendo que "la historia se sostiene sobre una pretensión de veracidad, la memoria lo hace sobre una pretensión de fidelidad" (Franco y Levín, 2007, p. 42). En el caso de las organizaciones rebeldes armadas y su desarticulación, no bastaría con la mera revisión de fuentes escritas, tales como prensa (diarios y revistas) o los documentos internos de la organización, sino que además utilizaremos la memoria de los propios protago-

nistas. En el caso del rescate de Antonioletti, si bien ya existe un trabajo periodístico realizado por la periodista Silvia Vera, éste no pudo acceder a los testimonios de los propios ejecutores del rescate. De esta manera, no se logra detallar en profundidad los hechos acontecidos en el rescate, ni las razones que llevaron a dejar a Antonioletti en la casa del periodista Juan Carvajal, quien lo denunciará al gobierno (Vera, 2011). El trabajo abordará primeramente quién fue Ariel Antonioletti y cuáles fueron las razones del MAPU-Lautaro para continuar la lucha armada en los años noventa. Finalmente abordaremos el rescate propiamente tal, desde su planificación, hasta su ejecución y cuál fue la respuesta que tuvo el Gobierno de Aylwin a través de la Policía de Investigaciones.

## II. MARCOS ARIEL ANTONIOLETTI

La historia de Ariel Antonioletti está ligada profundamente con la historia del movimiento secundario de los años ochenta. Exiliado en Venezuela junto a su madre, a los catorce años decidió volver a Chile en 1984, insertándose en las movilizaciones estudiantiles. Ingresó a militar a la Izquierda Cristiana (IC) y participó en el Comité de Autodefensa de la Coordinadora de Organizaciones de Enseñanza Media (COEM), participando en marchas y tomas de liceos. La primera fue el 10 de julio de 1985, en el Liceo 12 (Arturo Alessandri Palma), a pasos de su casa, donde Ariel cumplió funciones de seguridad. La toma concluyó con decenas de detenidos y la renuncia del Ministro de Educación (Luengo, 2008, p. 76). Después de aquella toma participó en una reunión del COEM con la Alianza Democrática en la sede de la DC. Allí estuvieron Gabriel Valdés y Ricardo Lagos, quienes seguramente no recordarán que uno de aquellos jóvenes era precisamente Ariel Antonioletti (Beto, 2011)<sup>2</sup>. Producto de la radicalización de sus planteamientos, Ariel decidió abandonar la IC e ingresó a fines de 1986 al Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), invitado por un antiguo amigo. “Fuimos al mismo colegio, en La Florida, después nos echaron a los dos, después fuimos al Liceo 12, también nos echaron a los dos, y seguimos viéndonos, ya éramos vecinos, empezamos a trabajar juntos en Enseñanza Media, empezamos a militar juntos” (Documental “Ariel”, Escuela de Cine de Chile, 2010). Serían años de compromiso, pero a la vez de bastante incertidumbre: Ariel terminó finalmente la enseñanza media en el Liceo Lord Cochrane en 1988, donde es recordado como un elocuente orador en las asambleas, activo en las marchas, combinando ambos espacios. Andrés Bianque lo recuerda como reservado y de buenas notas: “nunca habló mucho conmigo. Creo yo, que era porque me despreciaba de cierta manera, yo militaba en las Juventudes Comunistas... se destacó por hacer esconderse a los pacos a fuerza de Molotov, a piedraza certero y limpio... lo vi repartiendo fuerza y ánimo, lo vi dirigiendo” (Bianque, 2008). Rolando, que militaba en las Juventudes Comunistas, comenta que en las asambleas le gustaba discutir, “nos sacaba la cresta en las reuniones”, pero “en la calle éramos compa-

2 Los nombres de los entrevistados son en realidad seudónimos para resguardar la identidad de los entrevistados.

ñeros” (Rolando, 2013). Lorena, quien militó en el ML, recuerda que Ariel “era un gran orador... pero le caía mal la forma en que lo planteaba”. Tenía un lenguaje directo, difícil de asumir, “un humor un poquito ácido de repente, para ejemplificar situaciones, una capacidad para hacer sentir mal al otro digamos, fácil” (Lorena, 2012). Claudio, también militante secundario del MJL, piensa que Ariel no era precisamente un “cabeza de pistola” o amante de la violencia, sino que vio la lucha armada como un ‘deber ser’. En realidad, para Claudio “las habilidades del Ariel, estaban en las asambleas” (Claudio, 2012), donde era creativo, alegre, siempre ideando acciones y movilizaciones. En su vida personal era más bien pensativo, le encantaba leer y tocar guitarra, especialmente canciones de Silvio Rodríguez.

A principios de 1988 Ariel participó del III Congreso del MAPU-Lautaro, como delegado del comité local de Enseñanza Media, donde se definió la “Guerra Insurreccional de Masas”, que sería la concepción política que le daría el soporte para continuar con la lucha armada después de 1990. Ariel estaba de acuerdo con ello e ingresó a una célula en la zona sur de Santiago, participando en asaltos de productos (‘recuperaciones’ en la jerga del Lautaro), que luego eran repartidos en poblaciones. Entre ellas participó en el Copamiento Territorial Armado (CTA) que se realizó el 23 de mayo de 1989 en el paradero 25 de Santa Rosa, donde muere una niña de cinco años, hecho en que, según Claudio, el Lautaro no tuvo responsabilidad (Claudio, 2012). En el segundo semestre de 1989 comenzó a recibir llamadas anónimas con amenazas de muerte, por lo que partió clandestinamente a la cuarta región. En Coquimbo fue detenido por agentes de la CNI, siendo fuertemente golpeado y torturado (Vera, 2011, p. 38). Toño, que compartió prisión con Ariel, hasta el día de hoy se emociona al recordarlo. Plantea que Ariel era incapaz de sobrellevar la cárcel: “desde el primer momento estuvo la alternativa de fuga en su mente, él no aguantaba estar preso” (Toño, 2012).



Fotografía de Ariel Antonioletti y Andrés Soto en la Cárcel Pública, 1990.

De esta manera Ariel planteó a la dirección del ML, que estaba dispuesto a ser rescatado. Su pareja, en ese momento, recuerda que a veces Ariel le conversaba de esos temas en la Cárcel Pública: “¿Y si pasara algo? ¿Y si me sacaran?... A Ariel se le apretaba la guata, pero también era lindo verlo con la fantasía de escaparse” (Donoso, 2008). La recepción del MAPU-Lautaro ante esta propuesta fue positiva, pues vieron la oportunidad de darle una señal al gobierno sobre la realidad de los presos políticos. El objetivo fue reafirmar la concepción de su “guerra”, optando por la subversión en vez de adecuarse a la nueva realidad democrática. Así lo planteó el propio Ariel, meses antes del rescate, en la revista *El Canelo*:

“Aquí el pueblo tuvo una esperanza de cambio. Se la jugó durante años por el cambio, y esa esperanza, la única forma de satisfacción que tuvo hoy en día, fue esta democracia, ésta que estamos viviendo hoy día, porque no hubo posibilidad de que esta cuestión fuera más avanzada... y aquí es donde hacemos la apuesta: esta esperanza, estas ganas de cuando se junten con la subversión que nosotros estamos instalando en este país, van a ser capaces de avanzar resueltamente hacia la toma del poder... ésta democracia, en los términos del programa de la concertación, no tiene nada que ver con lo que se está planteando... Entonces es una democracia incapaz de realizarse a sí misma. Aylwin para nosotros nos es indiferente. Nosotros estamos en contra de la obra de la dictadura, estamos en contra de sus estructuras sociales, económicas, políticas. Si Aylwin se va a poner del lado del pueblo... perfecto. Ahora, si se pone en la otra trinchera, va a estar expuesto a nuestros tiros” (*El Canelo*, Diciembre de 1990).

Ariel estaba convencido de lo que planteaba su organización, o si se quiere, la organización de Ariel reflejaba profundamente lo que él sentía. Las cartas estaban echadas.

### III. EL MAPU-LAUTARO

Cuando Ariel llegó a Chile, el MAPU-Lautaro (ML) tenía un año de vida. Nacido del quiebre con el MAPU-Garretón en agosto 1983, el ML se transformó en un partido independiente que estuvo ligado a la creación del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), en diciembre de 1982. Las discrepancias principales con el MAPU-Garretón fueron la forma de derrocar a la Dictadura, ya que el ML planteó que debía ser mediante una insurrección popular, promoviendo una revolución socialista. El otro MAPU optaba por integrar la Convergencia Socialista, que buscaba formar una alianza con la Democracia Cristiana para una salida política al régimen militar, serían los orígenes de la Concertación (Acevedo, 2006). Frente a esta disyuntiva, el ML decidió independizarse, rechazando integrarse al Movimiento Democrático Popular (MDP), formado por el Partido Comunista (PC), el MIR y el Partido Socialista (Almeyda). Su

rechazo fue porque consideraba que su alcance era limitado, respondiendo a “una necesidad táctica de una coyuntura política: levantar un referente político público de posiciones de izquierda” (Partido MAPU, 1986, p. 36). Su propuesta fue formar una Dirección Política del Pueblo para lograr la Victoria Popular, con el protagonismo de los sectores populares, para instalar el socialismo y no la mera “restauración democrática” (Partido MAPU, 1983b, p. 4). Dicha propuesta estaba basada en las protestas que desde 1983 demostraron que el pueblo chileno podía desarrollar un proyecto histórico alternativo (Partido MAPU, 1983a, p. 19). Con el tiempo, esta opción radical significó la marginación o el aislamiento del ML de otros partidos políticos de izquierda, a pesar de que participaba en las mesas territoriales o en movimientos de estudiantes contra la Dictadura. Pero en términos prácticos, el accionar del ML no era contradictorio a la propuesta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), aunque sí fueron más precarios en su formación militar, como en su armamento. No tenían ni los mismos recursos o los contactos internacionales que tuvieron el MIR o el grupo PC entre 1973-1990.

La orgánica del ML estaba formada al comienzo por dos instancias. La primera era el partido MAPU (organizado en células), quienes tenían la responsabilidad de desarrollar el trabajo político en los espacios sindicales, estudiantiles y poblacionales. Por otro lado estaban las brigadas del MJL, formadas por jóvenes sin militancia, pero que podían llegar a ser del ML, si lo quisieran. En 1987 la dirección del ML decidió formar una tercera instancia, las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), que sería el referente político-militar del ML. Estas fueron las que realizarían asaltos a bancos o ataques a Carabineros. Posteriormente estas tres instancias serían llamadas como el Complejo Partidario. Ese mismo año el ML realizó un Congreso para definir su política a largo plazo, sobre todo frente al inminente plebiscito. El debate se desarrolló en los distintos frentes de masas del partido con cinco conferencias, concluyendo en enero de 1988 con un evento final. Allí decidieron los votos políticos y una nueva dirección (Ossandón, 2004, p. 18). Lo fundamental fue plantear que la dictadura debía ser derrocada mediante una “Guerra Insurreccional de Masas”. Dicho conflicto armado estaba sustentado bajo la lógica que en Chile dominaba una tríada que tenía como base de las Fuerzas Armadas, las grandes transnacionales y los grupos económicos. La única forma de satisfacer las necesidades populares sería mediante una “Guerra” de todo el pueblo, no de aparatos, sino extendida en territorios, movable, con fuerzas especializadas, pero también con milicias territoriales e irregulares. Este proyecto sería para el ML legítimo, independiente del resultado del Plebiscito, porque según su concepción, quienes dominaban era la antes mencionada tríada (Partido MAPU, 1988).

El nuevo programa del ML planteó la necesidad de crear una fuerza propia del Pueblo, independientes de los conglomerados de la “burguesía”, que estuviera encabezada por la clase obrera y los sectores pobres de la ciudad y el campo: “el sujeto revolucionario es todo el pueblo” (Partido MAPU, 1988, p. 31). El resultado debía ser una revolución socialista, con apertura al continente y en contra del proceso de desnacionalización y transnacionalización iniciado por la Dictadura (Parti-

do MAPU, 1988, p. 32). Resumiendo sus propuestas, el ML se planteó “una patria modesta que rompe con la forma de vida del consumismo, prioriza en el desarrollo pleno del ser humano y que realiza la felicidad con el trabajo y el goce de la libertad” (Partido MAPU, 1988, p. 33). De acuerdo a lo anterior, la lucha debía desarrollarse en torno a la figura de la toma, como acción política encabezada directamente por el pueblo, que contaría con apoyo militar de tal modo que fuera posible formar un Bloque Popular Revolucionario (BPR), inspirados en el concepto de “bloque histórico” acuñado por Antonio Gramsci, autor asiduamente leído por los miembros de la Dirección.

Este programa fue acompañado de la integración de nuevas reivindicaciones, como por ejemplo, el derecho de los jóvenes a vivir una sexualidad segura y placentera, representado en la repartición de condones y de pastillas anticonceptivas en los centros estudiantiles y poblaciones. Con ello se buscó construir una línea política que logró integrar la dimensión social, cultural y política de la vida de los sectores populares, donde los jóvenes era un sector fundamental. Ariel Antonioletti, desde la prisión, lo explicó de la siguiente manera: “para alcanzar la revolución tenemos que ir hoy día viviendo las cosas que pretendemos instalar mañana” (El Canelo, Diciembre 1990, p. 15). A pesar de tener una concepción marxista-leninista y de considerarse una organización vanguardia dentro del pueblo, el ML quiso alejarse de la concepción etapista de los cambios sociales. Además estaba integrando nuevas necesidades y reivindicaciones del pueblo joven, que era donde estaba teniendo mejor resultado su política. El problema estaba en los métodos que ocupaba, por más que reivindicaran su cercanía con “las masas”, el propio desarrollo político del periodo 1988-1994 transcurrió de manera contrapuesta a su desarrollo como fuerza político- militar, lo que los obligó a alejarse de los sectores populares y a fortalecer la clandestinidad de sus militantes. Esto se evidenció en el triunfo del No del 5 de octubre de 1988, cuando el ML esperaba que existiera un fraude. Sofía, ex militante del ML, recuerda aquel día, cuando estaban en un departamento de la Villa Francia, esperando el supuesto fraude:

“Se supone que iba a ganar el Sí, iba a haber fraude, entonces nosotros íbamos a salir e íbamos a hacer una propaganda armada y esperábamos y esperábamos los resultados y yo me quedé raja dormida... y estaba el Claudio, el Ariel, como grupos de amigos que también éramos del Lautaro, porque ahí se mezclaba, yo creo que eso sí es cierto, en el caso en el círculo que me rodeó del Lautaro, mi experiencia, es que todos los amigos se empezaron a reclutar, entonces al final terminamos siendo todos del Lautaro. Y me acuerdo que me quedé dormida y que al final el Ariel me despertó y me dijo que había ganado el No, y yo no lo podía creer. Pa’ mi eso fue como un fraude, ‘no, no tenía que pasar eso, no, no puede ser. Y la gente contenta en las calles, y uno sabiendo, haciendo esta lectura: que esto no garantiza nada. Era como salir a la calle y mirar a toda la gente de lejos, como si uno estuviera mirando desde el más allá, súper triste, súper triste...” (Sofía, 2013).

Es interesante percibir que la alegría que inundó a miles de personas aquella noche, para las organizaciones armadas fue una imagen frustrante: Pinochet había perdido el plebiscito y se realizarían elecciones presidenciales en 1989. Pero tanto para Sofía como para Ariel, este triunfo no significó necesariamente el cuestionamiento de su militancia. Por el contrario, ambos continuaron en el ML, el cual incrementó su accionar en marzo de 1989. Esto generó una focalización de los aparatos de inteligencia de la Dictadura. Por ejemplo, Policía de Investigaciones formó una brigada especialmente dedicada a recabar información del ML en 1989. El comisario Ricardo Villanueva afirmó años más tarde: “quiero ser categórico, el MAPU-Lautaro nunca fue infiltrado”, diría (Alfaro y Navarrete, 2004, p. 30).

A pesar de esto, con la llegada del nuevo gobierno, el ML no realizó un viraje político, sino que continuó con su política armada. Mediante un documento de divulgación expuso que el triunfo del No fue del pueblo chileno, producto de “un desborde de la esperanza popular” (Partido MAPU, 1990, p. 4). Se precisaba que la Concertación sólo ofrecía “migajas con el chantaje de una supuesta democracia, tan enlatada y cartucha que si se tocaron ganas y necesidades de pueblo, resulta que se rompe”, por ende, el nuevo escenario agudizaría la lucha de clases y la necesidad de que en la década de los noventa existiera una situación de “victoria revolucionaria” (Partido MAPU, 1990, pp.5-6). Las expectativas se fundaban en la constatación de que en Chile existían siete millones de personas “en una situación de marginalidad permanente”. De aquellos, al menos medio millón estaban ligados a los sectores avanzados que han luchado en contra de la Dictadura, por lo que la llegada de la sublevación era presentada como un hecho prácticamente incuestionable (Partido MAPU, 1990, p. 6). La potenciación de estos sectores sería mediante tres modalidades. En primer lugar el Partido MAPU, que se estimaba debía transformarse en un instrumento útil y capaz del pueblo, que pudiera “ir vanguardizando este movimiento amplio de millones” (Partido MAPU, 1990, p. 8). El segundo frente sería el MJL, que seguiría teniendo una semi-autonomía y por último las FRPL como referente militar.

Esta distinción orgánica no significaba, en lo absoluto, una diversificación política entre las filas de los lautarinos, toda vez que cada una de estas secciones estaba llamada a contribuir a la política subversiva desde su situación específica. A esta política se le llamó “de las cosas concretas y útiles para el pueblo”, haciéndola con “armas, porque somos una fuerza político-militar” (Partido MAPU, 1990, p. 9). La política sería realizada mediante la toma y la recuperación de productos: remedios, preservativos, cerveza, cuadernos, *cassettes*, zapatos, leche, carne de vacuno y pollo. Según tal documento, las cuentas eran favorables, ya que su presencia estaría en múltiples poblaciones, liceos y universidades de Santiago, además de Valparaíso, Concepción, Osorno y La Serena, pero, confesaban, aún no eran una “fuerza determinante” en el país (Partido MAPU, 1990, p. 11).



Panfleto de MAPU-Lautaro de 1991.

Pese a la amplitud de sus expectativas, los miembros del ML, en realidad nunca, superaron los 300 militantes en Chile, por lo que para duplicar sus acciones tuvieron que maximizar sus capacidades. En ese sentido, un aspecto fundamental fue el rol que cumplió la red de colaboradores, los que en el caso del ML, se formarían en los años ochenta, de manera precaria, con amigos, familiares, ex militantes del MAPU y de otros militantes del PC y el PS. A comienzos de los noventa, el ML no cambió su manera de concebir la política, ni tampoco los modos cómo realizarla, por ende, la conformación de una red de apoyo que sustentara su accionar, tampoco sufrió modificaciones. Ésta retaguardia estaba “en el pueblo mismo... en lo que llamamos los frentes y territorios bastiones del movimiento popular”<sup>3</sup>. Según el ML, esto generó que los servicios de seguridad tuvieran cierta dificultad para infiltrar a la organización, porque “como trabajamos particularmente con compañeros muy jóvenes y muy populares, es muy difícil para el enemigo preparar un agente con esas características” para infiltrarlos (Partido MAPU, 1990, p. 11). Pero aquella red logística no necesariamente estaba centralizada por la Comisión Política, sino que dependía de la lealtad, disposición o compromiso de cada militante, entre otros diversos factores. Cada cuadro político requería formar su propia red, los que no eran conocidos necesariamente por el resto del Partido. De esta manera, aspectos

3 En Santiago, las poblaciones La Victoria, La Pincoya, Malaquías Concha, San Jerónimo, José María Caro, Joao Goulart, Villa Francia, Lo Hermida; Achupallas en Viña del Mar, La Antena en La Serena y Hualpencillo en la VIII región.

tan importantes como la compra de vehículos, la atención de salud y las casas de seguridad, eran función de sólo algunos miembros, los cuales no necesariamente transparentaban la identidad de sus colaboradores. En éste ámbito operaba la confianza y la discreción. Este elemento fue sumamente importante para la extensión y el incremento de las acciones que el ML desarrolló desde 1988, fecha en que se contaba con una amplia gama de colaboradores. Pero, además de ser una ventaja, esto también era sumamente peligroso, ya que dichas personas, que no eran militantes, ocuparían funciones que fueron muy importantes en el éxito de las acciones armadas, sobre todo en el préstamo de casas de seguridad. En este último caso, al no tener el dinero suficiente para obtener inmobiliarios propios, el ML debía arrendar departamentos para sus militantes y conseguir casas en poblaciones para esconder a quienes eran perseguidos por la policía. Esto es uno de los factores más importantes que transformó el rescate de Ariel Antonioletti en un trágico resultado. Para ello debimos conversar, por primera vez después de 23 años, con parte de los militantes que participaron en aquel hecho, destacando la forma en que se dio el operativo y qué significó para los militantes el fracaso de la acción.

#### IV. EL RESCATE

Entre 1990-1992, el 56% de las acciones subversivas en Chile fueron realizadas por el ML, según un informe del propio gobierno (Baby, Compagnon y Gonzalez, 2006, p. 120). De acuerdo a la investigación de Pedro Rosas y otros antecedentes, en el primer año del gobierno de Aylwin, el ML realizó más de 55 acciones, entre ellas: asaltos a bancos, expropiaciones a tiendas comerciales, entregas de alimentos en poblaciones y cuatro ataques a cuarteles de Carabineros (Rosas, 2013, p. 264). Para Carlos, uno de los dirigentes del ML en 1990, éste proceso de transición democrática para nada ponía en riesgo “el andamiaje institucional y político que había dejado Pinochet”, por lo que “en la práctica no hubo paréntesis para nosotros entre lo que fue la salida de Pinochet y la ascensión de la Concertación”. En el caso del rescate de Ariel, este “fue una especie de culminación, de síntesis y operativamente, obviamente, debe haber sido el momento más agudo de nuestro accionar y nuestra confrontación con el Estado” (Carlos, 2007). A pesar del éxito en un comienzo, por la liberación de Ariel, la operación se consideró un “desastre”, pues “bastaba que una carta saltara por los aires, y todo el resto se fue al piso”, afirmó Carlos años más tarde. ¿Era el comienzo del fin? Javier, quien participó en el rescate, por primera vez habla de su planificación y sus resultados: “yo después lo pensé y creo que fue el comienzo del fin del Lautaro, porque habíamos demostrado de cómo hacíamos las cosas” (Javier, 2013). Este dirigente se refiere a la capacidad que el Lautaro tenía para realizar este tipo de acciones, la cual dejaba varios flancos abiertos, sobre todo en la capacidad médica o en las casas de seguridad.

## I. La Planificación

Mediante una carta enviada por Ariel a la Comisión Política (CP), ésta decidió planificar su rescate, descartando otras operaciones similares en regiones. Si bien Ariel no era dirigente, sí era valorado en la organización, incluso el propio Guillermo Ossandón (dirigente del ML), habría querido que fuese parte del Comité Central, pero otros se opusieron por su condición de prisionero, pues la dirección debía estar en libertad según la tradición de la organización.

Era plena primavera y los encargados de las FRPL se reunieron para “chequear” las actividades que debían realizar para el rescate. Se había elegido el Hospital Sótero de Río como el lugar donde operar, sobre todo por la amplitud del espacio, lo cual facilitaba enormemente la salida. Se visitó la Urgencia de Oftalmología, donde Ariel era llevado cada semana, percibiendo la frecuencia de carabineros y las posibles salidas. Los grupos destinados fueron tres. El primer grupo de las FRPL, estaría encargado de ingresar al box a buscar a Ariel. El segundo estaría a cargo del perímetro de la Urgencia, resguardando la salida del primer grupo. Un tercer grupo estaría afuera del hospital, asegurando el portón en la Av. Gabriela Oriente. Se necesitaron tres vehículos, los que fueron sustraídos horas antes del día 14 de noviembre y dos paramédicos, que serían colaboradores del partido por una eventual sanación de heridos. Braulio, quien participó como encargado de la logística, se consiguió tres casas de seguridad: una estaría en la comuna de Conchalí, donde una familia de viejos socialistas ayudaban a esconder armas y personas desde la Dictadura. “Las armas llegaban calientes después de hacer operaciones y las llevábamos allí donde una abuelita socialista las guardaba debajo de su cama” (Braulio, 2013). En aquella casa estaría además una enfermera esperando algún potencial herido. Otra casa sería de una periodista en Ñuñoa, destinada a esconder a algún posible prófugo. Por último, Braulio relata que se consiguió una casa en Providencia, bastante cómoda, donde vivía un matrimonio que participaba en la Concertación, pero que Braulio conocía desde la Dictadura y estaban de acuerdo con recibir a Ariel Antonioletti. ¿Era seguro que los colaboradores supieran la identidad de quien recibirían? Según Braulio, esto se debía a la transparencia que exigía la situación, para evitar sorpresas.

Llegado el 13 de noviembre, Javier y Braulio hicieron un punto a las 22:00 en el paradero 14 de Vicuña Mackenna (La Florida). Pasaron lista a todas las gestiones realizadas, mientras esperaban a Pilar con el último vehículo que debían conseguir. Se había robado un Nissan en la comuna de Macul y un taxi Renault por militantes del Regional Sur. Pasaban los minutos y Pilar no llegaba, generando nerviosismo entre sus compañeros, que siguieron esperando hasta que llegó con una camioneta Nissan Pick Up Chevy. Con dos asientos delanteros y una cabina abierta, claramente no cumplía con las condiciones mínimas, sobre todo porque tenía un montaje de fierro que complicaba el abordaje de los sujetos y porque los dejaba expuestos en un supuesto enfrentamiento. ¿Suspender la operación? ¿Asaltar otro vehículo? Javier

recuerda que como organización la actitud frente a cualquier dificultad, siempre fue “echarle pa’ adelante”. Esto generaba que pudieron maximizar sus capacidades en innumerables acciones, pero que en este caso, provocó que se “estiró mucho el chicle” al aceptar actuar con aquella camioneta, es decir, primó el voluntarismo, no considerando las dificultades que este vehículo imponía a su propia seguridad. “No era fácil tomar de decisión, porque podíamos estirar demasiado el elástico, hasta romperlo” (Braulio, 2013). Finalmente la decisión fue realizar la acción, pero tratar de tener mucho cuidado en la salida. ¿Se podía dormir tranquilo aquella noche?

## 2. La Acción

Al día siguiente, el ML llegó temprano al hospital, esperando a que apareciera Antonioletti al mediodía. Este había desayunado con su madre en la Cárcel Pública, sin avisarle que iría al hospital (Vera, 2011, p. 42). Llegando la hora de almuerzo, el furgón salió con Ariel en dirección sur, con cinco gendarmes como guardias. Efectivamente como indicó la prensa, el primer grupo del ML ingresó a la urgencia de oftalmología, armados y vestidos de médicos, llevándose a Ariel pasadas las 14:30 horas. Los dos guardias que los retenían, al presentar resistencia, fueron repelidos. Uno de los subversivos fue herido en aquella acción. Al escuchar los disparos, el segundo grupo del ML, que estaba a las afueras de la Urgencia, contuvo a los dos gendarmes que se quedaron en la camioneta. Las víctimas fatales llegaron a los dos gendarmes que se quedaron en la camioneta. Las víctimas fatales llegaron a cuatro gendarmes. Solo uno sobrevivió al ser desarmado en el pasillo por un hombre (El Mercurio, 15 de Noviembre de 1990, p. C-11). ¿Por qué fue una acción tan violenta? Al año siguiente, un dirigente del ML se refirió a este hecho: “No fuimos a aniquilar a los guardias de Ariel, fuimos a reducirlos... esto no fue posible y estos sujetos dieron combate; en combate las cosas se resuelven de esa manera” (Página Abierta, 1990, p. 20).

La retirada fue igual de compleja. Ariel se fue en uno de los vehículos, mientras que el primer y segundo grupo subieron a las Pick Up verde, con las dificultades que se previeron. Javier recuerda que al momento de ingresar, uno de sus compañeros comenzó a disparar: era Carabineros. Efectivamente desde Vicuña Mackenna, sin antes ser detectados, dos carabineros dispararon en contra los subversivos. Uno de ellos, el cabo Alfonso Villegas, fue repelido y muerto (La Tercera, 15 de Noviembre de 1990, pp. 4-5). Fue en ese momento, cuando Marcela Rodríguez, militante del ML, recibió una bala en su espalda, la cual la dejaría parapléjica inmediatamente. “Me dieron”, recordarían que dijo.

La caravana salió inmediatamente por avenida Gabriela, para avanzar por avenida Vicuña Mackenna hacia el norte. En el parado 27 se le sumaría un cuarto vehículo del ML, el cual escuchaba la radio de Carabineros. La operación había sido un éxito, Ariel estaba libre y habían rescatado siete armas (tres UZI y cuatro revólveres), aunque el costo había sido alto: cinco funcionarios heridos de muerte.



Arriba Camioneta Pick Up donde escaparon los lautarinos.  
Abajo el carro de gendarmería destrozado en sus ventanales  
(La Cuarta, 15 de Noviembre de 1990, p. 2).

¿Cómo lograron romper el cerco policial, con helicóptero incluido? Según Eduardo “había un sector en que habían pasajes que nosotros conocíamos, habíamos realizado muchas acciones en La Florida, nos escondíamos ahí y perdíamos a los pacos, un sector que le llamamos el ‘triángulo de las Bermudas’, porque nunca nos pudieron pillar”. En la primera parada, en calle Perpetua Freire, Antonioletti se cambió de auto y se decidió que Felipe llevara a Marcela a su casa, hasta donde llegaría una enfermera. En el camino ambos reconocen la gravedad de Marcela, comprendiendo que los cuidados otorgados en la casa de seguridad serían insuficientes para mantenerla con vida. Esta dura constatación los llevó a simular una pelea sentimental en la Villa Alonso de Ercilla, en que Felipe disparó al aire para atraer a las personas, con el objeto de que Marcela fuera trasladada a un centro asistencial y salvar su vida. Marcela fue detenida por Carabineros y llevada al mismo Hospital Sótero del Río, siendo sindicada por la prensa como la mítica mujer metralleta (La Cuarta, 16 de Noviembre de 1990, p. 4)<sup>4</sup>. El hecho fue duramente criticado por los círculos de izquierda. Incluso la prensa diría que fueron los propios compañeros le habían disparado (Ibídem). Según su propio testimonio fue fuertemente reprimida (Gumucio, 2004, p. 42). Con el objetivo de salvarle la vida, su familia defendió su inocencia y pidió que fuera atendida por la Cruz Roja, sin lograr la aprobación por parte de Gendarmería. El temor a las represalias y su crítico estado de salud se incrementó luego de que pasaran diez días sin visitas ni atención médica. Años después, cumpliendo pena de extrañamiento en Italia, Marcela ha colaborado con

4 La prensa denominó como Mujer Metralleta para referirse a las mujeres que dirigían algunas acciones MAPU- Lautaro. La primera foto será un acierto del diario La Cuarta, el 18 de mayo de 1990.

tesis y reportajes sobre su experiencia en el ML. Ante la pregunta de qué significó el 'Lautaro' para ella, Marcela respondió, "una linda experiencia, con un lindo programa, por supuesto, teníamos varias cosas, si tampoco somos perfectos, en el camino se iban solucionando los problemas. Ahora, desgraciadamente nosotros al final pasó que la Fuerza Rebelde se militarizó mucho" (Marcela, 2012).

¿Qué ocurrió con Ariel? Disuelta la caravana, se reúnen por cinco minutos los responsables del rescate y toman una segunda decisión. Además de Marcela, el enfrentamiento dejó a dos heridos más a bala. Con ese escenario, mientras sentían que el helicóptero los acosaba, Eduardo propuso llevarse a Ariel, para que Braulio pudiera hacerse cargo de los heridos, "¿Cómo se iba a llevar a Ariel y todos los heridos?", recordó. El herido en el brazo fue trasladado donde la familia socialista de Conchalí, extrayéndole la bala. El otro herido fue trasladado a Ñuñoa, donde pasó algunos días, siendo atendido sanitariamente. La decisión cambió el itinerario. Braulio hasta el día de hoy no está de acuerdo, ya que "todo estaba arreglado". Ariel estaba emocionado, miraba por la ventana y sonreía, iba sin esposas y con un arma. Finalmente Braulio se llevó a los heridos y Ariel fue dirigido a una casa en la misma comuna de La Florida. Producto de lo inseguro del sector, se decidió dejarlo en la tarde en Providencia, donde Hugo, militante del ML que conocía a Ariel, se encargó de llevarlo a un refugio improvisado en la comuna de Las Condes. Allí Ariel pasó la noche. Horas antes se reunió la CP del ML para barajar las diversas alternativas de refugios. No había muchas alternativas. Se debía confiar en las gestiones de Hugo. Todo se había complicado.

### 3. Los Ayudistas

Si bien en 1990 el ML contaba con una militancia de menos de 150 militantes, tenía una amplia y descentralizada red de colaboradores, muchos pertenecían a las bases sociales de la propia Concertación. En ese sentido, el ML estaba operando con la misma lógica que en dictadura. Eduardo admite este punto, al ser consultado por el desenlace del rescate de Antonioletti.

"El error que cometimos, un error estratégico... nosotros seguimos trabajando con la idea de los colaboradores y pensamos que seguían existiendo colaboradores de izquierda que nos daban seguridad. Ese es uno de los errores estratégicos que nos llevó al desenlace fatal. Partimos con esa convicción. Y que el error grande, de la dirección del Lautaro, de que no prevé, que pudieran haber heridos, y al no prever eso, de esa magnitud, no considera otras líneas de apoyo. La operación estaba tan bien diseñada que en los primeros diez minutos de la retirada, ya la mitad de los compañeros que habían participado, ya estaban en sus casas" (Eduardo, 2012).

Eduardo se refiere a que la CP del ML acordó que Ariel pasara la noche del 14 de noviembre de 1990 en Las Condes, pero al otro día, Hugo decidió, sin previo aviso, llevárselo muy temprano hacia la Comuna de Estación Central. Conversó con una prima suya, consiguiendo que ella lo alojara en la Villa Fernando Gualda. Su marido, Juan Carvajal, trabajaba en el Fortín Mapocho y en Dictadura había refugiado a militantes del FPMR. Pero, ¿cómo se comportaría en esta ocasión? Hugo no les dio detalles, sólo dijo que su amigo venía del sur y tenía problemas. Ariel pasó a llamarse Marcelo y aunque Carvajal dudó en un comienzo, finalmente aceptó recibirlo (Vera, 2011, p. 52). Al enterarse la CP de esta situación, le pidió explicaciones a Hugo sobre el cambio de refugio. Hugo se excusó de que habían tenido problemas en Las Condes y decidió llevarlo donde su prima. Finalmente la CP determinó que se quedara en esa casa, pero sólo una noche. Esta serie de improvisaciones, por la ausencia de una casa de seguridad, sería fundamental para el fracaso de éste rescate.

De vuelta a Estación Central, Hugo conversó con Ariel, cuando llegó Carvajal después de un duro día de trabajo. Este ya sabía de la situación, increpándolos y les pidió que Ariel salga esa misma noche (Vera, 2011, p. 55). Hugo se retiró a las once de la noche en un Charade, buscando otro refugio, sin saber que sería interceptado por la Policía de Investigaciones a un par de cuadras. La operación se había montado desde temprano, según las propias declaraciones de los detectives, a cargo de Guillermo Mora, se enteraron que en el pasaje 5, casa H se encontraba el prófugo (Mora, 23 de Noviembre de 1990, p. 1).

¿Qué había sucedido?, ¿cómo se filtró la información? Según la propia declaración judicial de Juan Carvajal, éste confesó que después de recibir a Marcelo, en su lugar de trabajo se había dado cuenta de que en realidad se trataba de Ariel Antonioletti, ¡y que estaba en su propia casa! Sin pensarlo mucho, decidió entregar la información al Gobierno. ¿Carvajal actuó como un traidor? Así lo piensan compañeros y amigos de Ariel hasta el día de hoy. Pero, independiente de la acción cometida por aquel periodista, el error mayor estaba en poder asignarle una responsabilidad tan alta a una persona que no era ni militante ni colaborador de aquella organización: ¿Por qué tenía que estar de acuerdo en refugiarlo? El ML no sólo tomó la opción de continuar con su lucha armada, sino que además siguió utilizando los mismos métodos en su accionar, y como sus militantes sentían que estaban en lo cierto, pensaban que finalmente los ex colaboradores o personas que habían luchado contra la Dictadura, se comportarían de la misma manera, en favor de ellos. Lamentablemente para sus fines, Chile estaba cambiando. Esta noción de 'vanguardia' que optó la organización, le provocó un aislamiento que inevitablemente la llevaría en un profundo vagabundeo hasta su desarticulación.

## V. EL GOBIERNO E INVESTIGACIONES

Sabido Patricio Aylwin del rescate de Ariel, repudió el hecho porque perturbaba “gravemente la convivencia nacional” (La Cuarta, 15 de Noviembre de 1990, p. 3). Efectivamente para su gobierno, las relaciones con las Fuerzas Armadas y el desarrollo económico dependía de la estabilidad y gobernabilidad que la Concertación le diera al país. Para esto se debía ir por los “cabecillas del MJL”, que según Enrique Correa, Ministro de la Secretaría Gral. de Gobierno, era una organización terrorista que le declaró “la guerra a la democracia” (Qué Pasa, 26 de Noviembre de 1990, p. 5). Para Eugenio Tironi, que desempeñaba en ese momento el cargo de Director de Comunicaciones, este rescate fue “lo más espectacular”, pero sangriento que hizo el ML en democracia (Tironi, 2013, p. 321). La escalada de violencia arriesgaba la transición abierta con el plebiscito del NO. Es por ello, según el actual empresario, que el gobierno trabajó en tres puntos:

Lo primero fue aprobar, a los dos días del rescate, las leyes “Cumplido”, que modificaban en algunos aspectos la Ley Antiterrorista (El Mercurio, 16 de Noviembre de 1990, p. C-2). Esta fue aplicada al ML, a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Así lo admitió el propio Francisco Cumplido, aclarando que fue un error jurídico declararlos como asociación terrorista (Rosas, 2004, pp. 303-304)<sup>5</sup>. Lo segundo, posterior al asesinato de Jaime Guzmán, fue cuando el gobierno creó la Oficina de Seguridad Pública, conocida como “La Oficina”. Por último, según Tironi, el gobierno debió erosionar la complicidad civil que tenían dichas organizaciones armadas en las vastas redes de colaboradores. Tironi estuvo a cargo de esto último, ya que sabía que el ML se nutría de redes “de complicidad y protección”, temiendo que tanto pobladores como estudiantes “fuesen capturados por el embrujo que producía la radicalidad y la violencia política versus la transacción y medias tintas” de la transición (Tironi, 2013, p. 321). No estaban equivocados.

Cuando Carvajal se enteró de que el joven oculto en su casa era Ariel Antonioletti, se dirigió a La Moneda a conversar con su antiguo amigo, Ricardo Solari (subsecretario de Gobierno), quien llamó a Belisario Velasco (Subsecretario de Interior). El acuerdo fue el siguiente: frente a la peligrosidad del prófugo, era mejor dejar que éste se fuera al día siguiente, siendo reducido en plena calle, así protegerían a la propia familia de Carvajal (su esposa y dos hijos) (Carvajal, 17 de noviembre de 1990). ¿Por qué Investigaciones decidió ingresar al domicilio si el acuerdo habría sido otro? Belisario Velasco se defiende hasta el día de hoy:

“A los pocos días se supo que estaba en una casa de alguna persona, en un barrio de Santiago, y bueno, sobre él pesaba una orden de arresto y actuó Investigaciones. Ahí, de acuerdo al parte oficial, él murió cuando lo fueron a detener, le dispararon, nosotros pedimos explicaciones, porque, la verdad a nosotros no nos interesan los detenidos muertos, nos

5 Francisco Cumplido fue Ministro de Justicia en la administración de Patricio Aylwin.

interesan los detenidos vivos, para que siga el juicio correspondiente y se aplique las sanciones que contemple la ley. El Ministerio del Interior puede decir ‘aplíquese tal ley’... No tengo la constancia de que el jefe de la policía haya dicho a su grupo, que mandó a detener a Marco Ariel, que lo asesinará, porque eso es un asesinato. Sea o no culpable, eso es un asesinato. Y por eso pedimos explicaciones. Después hubo cambios en Investigaciones y salió el que era jefe, no solo por esa razón, por muchas y pusimos una persona de mayor confianza. Nosotros exigimos una explicación” (Escuela de Cine de Chile, 2009).

Luego de veinte años de los hechos, el ex Subsecretario de Interior, confesó que Antonioletti fue asesinado, por lo que tuvo que pedir explicaciones a Investigaciones en su momento. Además deja entrever que en los años siguientes muchos funcionarios fueron desvinculados de sus puestos, por ésta y otras razones. Efectivamente aquella institución policial estaba siendo fuertemente cuestionada a comienzos de los noventa, sobre todo por casos vinculados al narcotráfico, lo que motivó una fuerte reestructuración (Qué Pasa, Julio de 1990). Pero a inicios de los años noventa, el Gobierno no cuestionó públicamente el actuar ‘violento’ de Investigaciones, sino por el contrario, lo respaldó, posiblemente porque en el frágil escenario en los inicio de los años noventa no había otra alternativa. En ese momento, al no tener un organismo de inteligencia propio, políticamente leal al nuevo gobierno, la tarea contra el “terrorismo” fue confiada a Policía de Investigaciones, siendo un poco más “fiables” que Carabineros, los cuales estaban fuertemente cuestionados por su vinculación a la dictadura. Años después, es la propia institución policial la que hizo un positivo balance de su labor en contra dichas organizaciones armadas, desarticulando al ML, FPMR y las derivaciones del MIR. Todo esto en el irrestricto respecto a los “Derechos Humanos” (El Detective, N° 87, enero de 1996).

¿Fue tan así como lo afirmó la Policía de Investigaciones? Creemos que el gobierno estaba consciente de que le sería complicado cuestionar los procedimientos tanto de la Policía de Investigaciones, como de Carabineros en los primeros años de gobierno, más bien debieron confiar en que ellos desempeñarían la función de inteligencia y desarticulación de las organizaciones subversivas, sea como sea. Es por esto que ambas “policías” continuaron con los mismos procedimientos que realizaron en dictadura, ejerciendo la tortura a los detenidos, no siendo reprochados por el gobierno, sobre todo porque la desarticulación de las organizaciones subversivas era de materia urgente. Según Belisario Velasco, éste era el “principal problema que figuraba en la prensa, número uno de las preocupaciones de los chilenos”, incluso antes de la salud y la educación. Creemos que más que una preocupación de la sociedad, la desarticulación del ML era una prioridad del Estado, sobre todo para el crecimiento económico del país. Según las tres primeras encuestas del Centro de Estudios Publico (CEP) de 1990, entre las mayores preocupaciones de los encuestados estaba la salud, la educación y el trabajo. El terrorismo estaría incluso por bajo la preocupación sobre los Derechos Humanos (CEP, Mayo, Julio y Diciembre

de 1990). En cambio, la presión para resolver el problema de 'insurgencia', vino desde las propias Fuerzas Armadas, quienes según Edgardo Boeninger, pidieron intervenir para evitar una 'guerrilla', siendo rechazado por el Ejecutivo que tuvo que confiar en Investigaciones, asumiendo con posterioridad una depuración, además de aumentar el financiamiento a Carabineros (Boeninger, 1997, p. 427). La lógica que primó por ese entonces fue que, por el momento, se debía dejar que Investigaciones hiciera su trabajo, aunque esto supusiese el uso de fuerza contra los reclusos, así de como toda la institucionalidad del Estado para capturarlos y castigarlos, incluyendo el uso de la tortura y apremios ilegítimos. Según un informe de Naciones Unidas, entre 1990 y 1996, la tortura dejó de ser una práctica sistemática, pero los casos existentes seguían siendo "numerosos y serios" (Informe anual de Derechos Humanos, 2003, p. 108). El mayor número de estos casos habían sido producidos por Carabineros de Chile (74,6%), frente a 19,7% de Investigaciones (Informe de Derechos Humanos 1990-2000). Pese a esta información, el gobierno relativizó la importancia de los Informes, planteando en 1995 que eran casos aislados (Informe anual de Derechos Humanos, 2003, p. 108).

Uno de los supuestos casos aislados ocurrió el 16 de noviembre de 1990. El operativo se montó luego que el propio Belisario Velasco llamara a Investigaciones para que arrestaran a Antonioletti de "la mejor forma, ya que ellos son especialistas para realizar este tipo de acciones" (Mengozi, 10 de Diciembre de 1990). De esta manera, los efectivos policiales comenzaron a movilizarse desde temprano, mediante agentes infiltrados que vigilaron el domicilio de Carvajal. Con un contingente de más de cien policías, rodearon la casa pasada la media noche. Según los vecinos del sector, el tiroteo comenzó cerca de la una de la madrugada, durando entre media hora y 15 minutos (Buseta y Latapiat, 28 de noviembre de 1990). Los funcionarios de Investigaciones hablaron de "enfrentamiento", ya que el lautarino disparó con un revolver 38. El resultado ya es sabido, Ariel no fue detenido con vida (Mora, 23 de Noviembre de 1990).



Afiche de actividad que todos los años se realiza en conmemoración de Ariel Antonioletti, 2013.

Tanto la madre de Ariel, como otros vecinos, ponen en duda que Investigaciones tuviera reales intenciones de capturar a Ariel. El vecino de la casa de en frente comentó últimamente que en su domicilio sólo se encontraron dos a tres disparos, mientras que la casa de Carvajal estaba destrozada. Las puertas, los vidrios, las cañerías son testigos mudos de la violencia perpetuada por la fuerza pública. “Fue desproporcionado absolutamente”, confesaría aquel vecino (vecino, 2013). Investigaciones luego de asesinar a Antonioletti, detuvo a la familia de Carvajal, quien se había refugiado junto a sus hijos y esposa en una pieza durante el ataque. Juan Manuel Carvajal, hijo menor del dueño de casa, recuerda que su hermano fue amarrado de manos porque se le creía ejecutor de los disparos (Vera, 2011, p. 62). Finalmente la familia salió libre ese mismo día (Fortín Mapocho, 17 de Noviembre de 1990, p. 12). Con los años se supo que el propio Carvajal había denunciado a Antonioletti, partiendo a Europa por temor a represalias (El Sábado, 19 de Marzo de 2011).

Pero ¿por qué Carvajal permaneció en el hogar, poniendo en riesgo a su familia, si sabía que Ariel sería rescatado? Nuestra hipótesis es que Investigaciones en aquellos años tenía más autonomía del gobierno que en la actualidad, ocupando los mismos procedimientos que en dictadura. De hecho, quien estuvo a cargo del operativo aquella madrugada era Guillermo Mora Ortiz, quien estaba sindicado como responsable de la detención de Luis Céspedes Caro en 1978, actual detenido desaparecido ([www.vicariadelasolidaridad.cl](http://www.vicariadelasolidaridad.cl)). Según la periodista Silvia Vera, la tesis de asesinato, incluso estaría respaldada por el ex funcionario de Investigaciones Jesús Silva. Según su relato, los funcionarios Ruperto Chigó Olivares e Iván Cuevas colocaron de rodillas a Antonioletti, disparándole a una mínima distancia (Vera, 2011, p. 74). Aunque no es posible llegar a una verdadera certeza, lo concreto es que Investigaciones, en los meses posteriores de aquel rescate, continuó con los mismos métodos represivos al momento de detener a militantes de organizaciones armadas. Según el informe de la Asociación Internacional Contra la Tortura en Chile, entre 1990 y 1993, Investigaciones torturó física y psicológicamente a militantes de ML, el FPMR y el MIR. En su informe de 1993, de los 75 casos registrados, el 45% había sido efectuado por dicha institución. La mayoría de las violaciones fueron mediante golpes y amenazas psicológicas, mientras el 40% de los casos denunció el uso de electricidad (Asociación Internacional contra la Tortura, 1990-1993, s/f, p. 84). Estas cifras permiten sostener que, más que excesos particulares, existía un método de actuar fundamentado en el uso de la violencia contra las organizaciones y los cuerpos de los detenidos, que además contenía una serie de saberes técnicos o prácticas respecto a las maneras más efectivas de obtener información, u otras que permiten denostar la dignidad de las personas. Muchos de los testimonios recabados por la Asociación Internacional Contra la Tortura, Sección Chile, plantearon que además de la violencia recibida, debían firmar declaraciones falsas y omitir la tortura cuando estuviesen frente al personal de los Tribunales de Justicia, que los visitaban a los días posteriores de haber sido detenidos. Hasta el día de hoy ningún ex funcionario público ha querido admitir que estos procedimientos acompañaron la desarticulación de las organizaciones rebeldes armadas en los años noventa. La

pacificación en los años noventa sigue afirmándose que fue con el “respeto” de los Derechos Humanos (Peña, 2012, pp. 14-16).

## VI. CONCLUSIONES

Con el presente estudio nos hemos adentrado en las profundidades de nuestro reciente y complejo Chile post-dictatorial. En estos rincones hemos podido percibir una serie de continuidades que persistieron después de la salida de Augusto Pinochet de la Presidencia de la República. Por un lado, una serie de organizaciones rebeldes armadas, aunque minoritarias, continuaron ejerciendo la lucha armada, esperando que en algún momento los movimientos sociales se le sumaran a su “revolución”. Fue el caso del MAPU-Lautaro, que desde 1988 decidió realizar una “Guerra Insurreccional de Masas”, pero que terminó siendo una guerra contra el Estado sin características masivas, sino sumamente aisladas del pueblo. Por otro lado, el Gobierno de Patricio Aylwin debió confiar su política de contrainsurgencia a la Policía de Investigaciones, institución que continuó con los mismos métodos que se utilizaron en Dictadura para combatir y desarticular a dichas organizaciones subversivas. Sus técnicas, aunque lo han negado en innumerables ocasiones, contempló la tortura física y psicológica de los detenidos entre 1990-1995. Ambas continuidades, el accionar de las organizaciones subversivas y la violación de Derechos humanos por parte de la Policía de Investigaciones tensionaron los primeros años de la administración de Patricio Aylwin. En ese enfrentamiento, el Ejecutivo apoyó públicamente el accionar de la Policía en pos de la desarticulación del MAPU-Lautaro, sin importar la violencia ejercida hacia sus integrantes. Esa fue una de las principales hipótesis trabajadas en la monografía sobre el rescate de Ariel Antonioletti, donde los orígenes y consecuencias se pudieron comprender mediante el choque de estas continuidades.

El contexto de este relato fue el comienzo de los años noventa, cuando la realidad política chilena estuvo caracterizada por una permanente sensación de fragilidad. El miedo hacia el retorno de los militares al Poder Ejecutivo estaba absolutamente presente en nuestra sociedad y fue leído de distintas maneras. Por un lado, el gobierno de Patricio Aylwin justificó su discurso tenue y postergó su programa de 1988 debido a la presión que ejerció las Fuerzas Armadas en contra de él. Las aspiraciones populares fueron apaciguadas mediante la concepción de que se estaba viviendo una transición a la democracia, para lo cual se debía tener cautela, fomentando la reconciliación entre los chilenos. En ese escenario, la presencia y el actuar de organizaciones como el MAPU-Lautaro fueron percibidas por dicho gobierno, como peligrosas para consagrar el régimen democrático.

Al contrario, las organizaciones rebeldes armadas, concibieron el retorno de la democracia como la continuación de la herencia dictatorial, reflejado en el modelo económico neoliberal y en el sistema político poco participativo. Para el MAPU-

Lautaro, la Concertación no lograría cumplir con las expectativas de los sectores populares, por lo que prefirieron continuar con la lucha armada para intensificar las contradicciones sociales que se desatarían en torno a los pobres de Chile, los cuales llegaban a 5 millones de personas. Si bien esta visión crítica tenía cierta lucidez, dicha organización subversiva no dimensionó su propio poderío ni la real autonomía y poder que tenía el movimiento popular. Por otro lado, dicha organización continuó actuando de la misma forma que en Dictadura, a través de ayudistas o colaboradores, lo que creó una serie de fragilidades y errores en su actuar, como se evidenció en el rescate de Ariel Antonioletti.

¿Cómo comprender esta decisión de continuar en la lucha armada después de 1990? Creemos que, en el caso del MAPU-Lautaro, esto no sólo se explica por su concepción coyuntural entre 1988-1990, donde confirman asumir una “Guerra Insurreccional de Masas”, sino más bien en sus orígenes como organización independiente del MAPU- Garretón en 1983. El MAPU-Lautaro fue producto de una politización radical de jóvenes populares de aquel MAPU, pero que no estuvo conforme con la salida política a la dictadura que se estaba fraguando con la Democracia Cristiana. Este origen radical significó continuar con la concepción del marxismo-leninismo: marxismo, en el sentido de creer en el ‘cambio social’, y leninismo, en que ese cambio lo podría motorizar un partido ‘vanguardia’ del pueblo. Sobre las alianzas políticas, el MAPU-Lautaro desde un comienzo rechazó unirse al Movimiento Democrático Popular, ya que estimó que ésta no luchaba por el socialismo, sino por un gobierno provisional junto a la oposición burguesa. Dicha radicalidad solo podía producir más radicalidad y aislamiento en medida que marchaba contra corriente a fines de 1988. Así fue como decidió hacer carne su “guerra”, la cual no tuvo vuelta atrás. Creemos que no lo tenía en la medida que sus orígenes tan radicales los marcó y les dotó de una identidad tan fuerte que hacer algo distinto, perdería su esencia, no serían el MAPU-Lautaro.

Otro elemento importante que estimamos que cruza la decisión de continuar en 1990 con la “guerra” del MAPU-Lautaro, es el elemento cultural que tuvo la organización desde sus orígenes: el cristianismo. Este elemento subjetivo e inconciente, mezclado a una opción política revolucionaria, llevó al MAPU-Lautaro a sacrificarse como cristo por su pueblo. Ellos siguieron a pesar de ir contra la corriente, esperando que su pueblo los siguiera, sea lo que sea. Estimamos que cristianismo y radicalidad política fueron dos elementos que serán fundamentales para entender el accionar del MAPU-Lautaro desde 1990 en adelante.

Por otro lado, con este estudio hemos podido constatar que la violencia estatal en contra las organizaciones subversivas, ha sido ejercida tanto en la Dictadura como en los gobiernos de la Concertación, llamado Chile post-dictatorial. Al contrario de lo planteando por el Ejecutivo en los años noventa, las violaciones a los Derechos Humanos no fueron casos aislados, sino una forma sistemática de trabajar por Carabineros e Investigaciones. Estos organismos si bien actuaron con autonomía en los primeros años del gobierno de Aylwin, no “haciéndole” caso a las autoridades de

gobierno, lo cierto es que el Ejecutivo los respaldó, ya que privilegió la desarticulación de las organizaciones subversivas por sobre los derechos humanos. ¿Qué tipo de democracia se construye cuando para defenderla se debe violar los derechos humanos? Esta disyuntiva no es nueva en la historia de nuestro país. Precisamente Salvador Allende votó en contra de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, porque precisamente creía que el régimen democrático debía defenderse pero dentro de sus normas y principios (Boletín de sesiones del Senado, 18 de Junio de 1948, p. 742). En ese sentido, la tarea de normalizar y darle gobernabilidad al país en los primeros años del Chile post-dictatorial fue extremadamente sensible y compleja para el Gobierno de Patricio Aylwin, quien finalmente tuvo que optar por respaldar públicamente el accionar de Policía de Investigaciones, independiente si estaba de acuerdo o no con él.

Finalmente el estudio sobre el rescate de Ariel Antonioletti descubrió una temática que no es siempre abordaba en las investigaciones sobre movimientos armados: las redes de colaboradores (llamados muchas veces ayudistas). Efectivamente el MAPU-Lautaro no podría haber realizado las más de 600 acciones entre 1983 y 1994, si no hubiese tenido un apoyo constante de muchas personas que provenían de los sectores populares. “Nos movíamos como peces en el agua”, decía un militante al referirse de la potencia que tenía el Lautaro al nacer desde las poblaciones populares. En nuestro estudio hemos podido determinar que muchos de aquellos colaboradores fueron ex militantes del MAPU de tiempos de la Unidad Popular o comienzos de dictadura, o ex MAPU-Lautaro, que no quisieron estar en primera fila luchado contra la dictadura. Pero hemos encontrado que otros colaboradores eran militantes de partidos de izquierda, como comunistas o socialistas, quienes incluso trabajaban en el gobierno. ¿Cómo se podía explicar este apoyo? ¿Sólo por vínculos personales? Es cierto que muchos colaboradores tenían una relación familiar o de amistad con los militantes del MAPU-Lautaro, que los habían conocido en la lucha contra la Dictadura. Pero ¿es posible que esta ayuda también se entienda como una forma silenciosa de creer que aún se podía realizar algo más radical que la simple vuelta a la democracia? Claramente a comienzos de los noventa la gran mayoría del país no se volcó hacia una salida insurreccional a la dictadura, pero tampoco es menos cierto que existió una complicidad que muchas veces fue inorgánica y sorpresiva en los sectores populares, y que militantes del MAPU-Lautaro, por ejemplo, pudieron percibir y sentir aquella confabulación cada vez que iban a las poblaciones a repartir productos. Les abrían las puertas de sus casas, les avisaban cuando venía Carabineros, les ayudaban a repartir los alimentos, les guardaban armas, no decían nada cuando los interrogaba la Policía de Investigaciones. Pero por otra parte, esta forma de construir la “retaguardia” del proceso revolucionario fue sumamente frágil, porque les otorgaba una responsabilidad extremadamente alta a personas que no eran de la organización propiamente tal, llegando cometer el error de “creer” que un antiguo colaborador en Dictadura, lo haría también a partir de 1990, por la relación familiar. En el caso del rescate del Ariel Antonioletti, entre el 14 y 16 de noviembre, su desenlace, fue realizado por esta potencia, pero

tuvo aquel fatal desenlace, en cierto sentido, por aquella fragilidad.

Año a año, a mediados de noviembre, en una plaza de Estación Central la memoria social se ha tomado los corazones de quienes asisten para recordar a Ariel Antonioletti. Dicho encuentro, organizado por su madre, no sólo rememora a este joven militante del MAPU-Lautaro, sino también el contexto en donde murió y las diversas visiones y experiencias de sus compañeros(as) y amigos(as). Dictadura, post dictadura, presente, pasado, muchas emociones reunidas en torno a un círculo de conversación y una marcha hacia la casa que perteneció a Juan Carvajal, actualmente director del periódico Cambio 21. En uno de esos encuentros de noviembre, pudimos conversar con algunos vecinos, los cuales recordaron aquel hecho. “No se podía hablar abiertamente de esas cosas, nadie preguntó más”, nos dijo uno de ellos. Al frente, la casa de Carvajal de lleno nuevamente de velas y conversación. El olvido fue ignorado.

Barrio Matta, Santiago, Chile.

## BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, N. (2006), *Fuera Pinochet: Chile Popular. El MAPU-Lautaro en las protestas populares (1978-1985)*. En Archivo Chile. Consulta el 20 de noviembre de 2013: [http://www.archivochile.com/tesis/04\\_tp/04tp0017.pdf](http://www.archivochile.com/tesis/04_tp/04tp0017.pdf)
- Acevedo N. (2012), *1988: Plebiscito para la Concertación, Guerra para el MAPU- Lautaro*, En Revista digital Pretérito Imperfecto, N° 1. Consulta el 10 de noviembre de 2013: <http://preteritoimperfecto.cl/wp-content/uploads/2012/05/NA.pdf>
- Alfaro, F. y Navarrete, T. (2004), *La inteligencia Policial en la desarticulación del Mapu-Lautaro*. Policía de Investigaciones de Chile: Tesis para optar a Investigador Policial.
- Baby, S., Compagnon, O. y González, E. (2006), *Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XXI: Europa del Sur- América Latina*, Madrid: Casa de Velázquez.
- Bianque, A. (2008) *A mi compañero de Clase. Ariel Antonioletti*". En Archivo Chile, 28 de Enero de 2008. Consulta el 18 de octubre de 2013: [http://www.archivochile.com/Cultura\\_Arte\\_Educacion/bianque/ab0020.pdf](http://www.archivochile.com/Cultura_Arte_Educacion/bianque/ab0020.pdf)
- Boeninger, E. (1997), **Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad**, Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Donoso, P. (2008), *Exclusivo: Habla la viuda del lautarista Ariel Antonioletti, a 18 años de su muerte. 'Juan Carvajal es un delator y merece una funa*. En El Mostrador, 19 de noviembre de 2008. Consulta el 20 de noviembre de 2013: <http://www.elmostrador.cl/pais/2008/11/19/juan-carvajal-es-un-delator-y-merece-una-funa/>
- Farfán, C. (2006), *El silencio forzado de los presos políticos en democracia*, Santiago: Tesis de Licenciatura en Periodismo, Universidad de Chile, Santiago.
- Faure, E. (2006), *Los locos del poder. Aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro. (1982-1997)*, Cybertesis. Consulta el 10 de noviembre de 2013: [http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/faure\\_e/html/index-frames.html](http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/faure_e/html/index-frames.html)
- Franco, M. y Levín, F. (2007), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- Garretón, M. (2012), *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago: Arcis-

## CLACSO.

- Garín, V. (2005), *Caso Antonioletti y el rol de la prensa frente a acciones subversivas durante la transición chilena*, Santiago: Reportaje de Periodismo, Universidad ARCIS.
- Loveman, B. y Lira, E. (2000), *Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932- 1994*. Santiago: LOM Ediciones.
- Luengo, M. (2008), *Seguridad para estudiar, libertad para vivir. Subjetividad y praxis del movimiento secundario (1980- 1990)*, Santiago: Tesis de Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.
- Ordenes, H. 'Jóvenes, rebeldes y armados'. *El MAPU Lautaro y su accionar en la década de los 90 (1990-1994)*. En Cybertesis, consulta el 13 de noviembre de 2013: [http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ordenes\\_h/html/index-frames.html](http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ordenes_h/html/index-frames.html)
- Peña, J. (2012), *Los secretos de la oficina*, En Revista El Semanal, La Tercera, Santiago, 19 de mayo de 2013. Consulta el 11 de noviembre de 2013: <http://diario.latercera.com/2013/05/19/01/contenido/la-tercera-el-semanal/34-137162-9-los-secretos-de-la-oficina.shtml>
- Peredo, A. (2009), *Con el Pueblo, las Armas y las Ideas: La toma de Chile Va! Metamorfosis de lucha desde la transición chilena: violencia, proyecto, estrategia y táctica del MAPU- Lautaro (1988- 2004)*, Santiago: Tesis de Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.
- Rosas, P. (2004), *Rebeldía, Subversión y Prisión Política. Crimen y castigo en la transición chilena*". Santiago: Ediciones LOM.
- Rosas, P. (2008), *Jóvenes, rebeldes y armados. Una mirada a la identidad y la memoria militante durante la transición chilena, 1994- 2004*. En Revista Izquierdas, N° 3. Consulta el 16 de noviembre de 2013: [http://www.izquierdas.cl/revista/wp-content/uploads/2011/07/rosas\\_pedro.pdf](http://www.izquierdas.cl/revista/wp-content/uploads/2011/07/rosas_pedro.pdf)
- Rosas, P. (2013), *Por la senda de Lautaro... Latinoamérica vencerá. Discurso, acción política, concepción y dimensión internacional del MAPU Lautaro 1982- 2004*, Santiago: Tesis de Doctorado en Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago.
- Tironi, E. (2013), *Sin miedo, sin violencia, sin odio: una historia personal del No*. Santiago: Editorial Planeta.
- Vera, S. (2011), *Rescate sin salida: la mala jugada del MAPU- Lautaro y la excusa concertacionista*, Santiago: Tesis de Licenciatura en Periodismo, Universidad de Santiago.

## ENTREVISTAS

- Beto (10 de abril de 2011). Fue parte del movimiento de secundario en los años ochenta.
- Braulio (19 de noviembre de 2013). Fue dirigente del MAPU- Lautaro y parte de las FRPL al momento del rescate de Antonioletti.
- Carlos (24 de mayo de 2007), facilitada por Héctor Ordenes. Fue dirigente del MAPU- Lautaro desde mediados de los ochenta.
- Claudia (5 de septiembre de 2011). Militante estudiantil del MAPU- Lautaro.
- Claudio (14 de mayo de 2012). Fue dirigente estudiantil del MAPU- Lautaro.
- Eduardo (8 junio de 2012). Fue dirigente del MAPU- Lautaro. Participa en el rescate de Ariel como parte del apoyo externo.
- Javier (8 de diciembre de 2013). Fue dirigente del MAPU- Lautaro desde mediados de los ochenta y formaba parte de las FRPL al momento del rescate de Antonioletti.
- Lorena (14 de mayo de 2012). Fue dirigente estudiantil del MAPU- Lautaro.
- Marcela, 6 de febrero de 2012. fue parte del MAPU- Lautaro. Quedó gravemente herida en el rescate de Ariel Antonioletti.
- Rolando (12 de noviembre de 2013). Fue parte del movimiento secundario desde las Juventudes Comunistas.
- Saúl, (20 de septiembre de 2013). Miembro de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro.
- Sofía (18 de noviembre de 2013). Fue parte del Comité Central a comienzos de los noventa.
- Toño (16 de febrero de 2012). Fue dirigente del MAPU- Lautaro.

## DOCUMENTOS DEL MAPU-LAUTARO

- Ossandón, G (2004), *Memorias del MAPU- Lautaro*, inédito.
- Partido MAPU (1983a), *Mapucistas: con la rebeldía popular, la toma de Chile va!!*, Santiago: Autoedición.
- Partido MAPU, (1983b), “*Resoluciones políticas del Quinto Pleno*”, Santiago: Autoedición.
- Partido MAPU (1986), *Lucharemos por un Chile Popular, nuestro camino es la insurrección de masas. Entrevista a Diego Carvajal. Secretario General del Partido MAPU*, Santiago: Autoedición.
- Partido MAPU (1988). *Con el Pueblo, las Armas y las Ideas. La Toma de Chile Va! 3º Congreso. Programa de la Revolución Chilena*, Santiago: Autoedición.
- Partido MAPU (1990), *La Toma de lo Cotidiano. Entrevista a Diego Carvajal, Secretario General del Partido MAPU*”, 2º Edición, Santiago: Autoedición.

## REVISTAS Y DIARIOS

- La Tercera
- El Mercurio
- Las Últimas Noticias
- La Cuarta
- El Fortín Mapocho
- El Canelo
- APSI
- Qué Pasa
- Análisis
- Página Abierta.
-

## FUENTES JUDICIALES

- Declaraciones en caso “Ariel Antonioletti” tanto de Investigaciones, Juan Carvajal, vecinos y detenidos.

## AUDIOVISUALES

- Documental “Ariel”, Escuela de Cine de Chile, Santiago, 2010. Inédito.
- Documental “La mujer metralleta”, dirigida por Francisco López Ballo, Santiago, 2009.





# “PRESIDENTE AYLWIN: ¿DÓNDE QUEDARON SUS PROMESAS FRENTE A LOS TRABAJADORES?”. CONFIANZA Y DESILUSIÓN DE LOS TRABAJADORES CON EL GOBIERNO DE AYLWIN EN EL CASO DEL FRAUDE DE LOZAPENCO (1990-1993)

## “PRESIDENT AYLWIN: WHERE ARE YOUR PROMISES CONCERNING THE WORKERS? TRUST AND DISILLUSION OF WORKERS DURING AYLWIN’S GOVERNMENT IN THE CASE OF THE FRAUD OF LOZAPENCO (1990-1993)

Oscar Peñafiel Arancibia \*

### RESUMEN:

El retorno a la democracia estuvo cargado de esperanzas para el movimiento de trabajadores, que veía en el nuevo gobierno la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo y modificar la legislación laboral pinochetista. Dichas esperanzas se fueron disipando durante el primer gobierno concertacionista como consecuencia de la política de consensos que éste y las cúpulas sindicales adoptaron. El caso del fraude de Lozapenco, y sus consecuencias para los trabajadores loceros, refleja el abandono de los trabajadores por parte del gobierno, además de la falta de proyecto propio para enfrentar el nuevo contexto político y la nueva realidad laboral.

**Palabras clave:** Concertación – Movimiento de Trabajadores – Lozapenco – Desilusión.

### ABSTRACT:

*The return of democracy was full of hope for the workers’ movement, which saw the new government as a possibility of improving the working conditions and modifying Pinochet’s labor legislation. Such hope was disappearing during the first concert of parties’ government as consequence of the political consensus that this and unions adopted. The case of the fraud of Lozapenco and its consequences, reflect the abandonment of the workers from the government, in addition to the lack of projects of their own in order to face the new political context and the new labor reality.*

**Keywords:** Concert of parties – Workers’ movement – Lozapenco – Desillusion.

**Recibido:** 30 de Septiembre de 2013

**Aceptado:** 15 de Diciembre de 2013

**Received:** September 30, 2013

**Approved:** December 15, 2013

\* Chileno, Estudiante Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: o.penafiel.a@gmail.com

“¿Qué espera del gobierno?  
Todo, espero mucho, especialmente que siga unos ocho años más”  
Entrevista a don Luis Martínez, trabajador.  
La Nación, 2 de mayo 1990

## I. INTRODUCCIÓN<sup>1</sup>

El presente trabajo se enmarca en la discusión relativa a las causas de la despolitización y desmovilización de la ciudadanía pos-dictatorial, expresada en el decaimiento de los movimientos sociales que animaron la movilización contra la dictadura y en la baja sostenida de la participación en los mecanismos de elección de representantes que se construyó en el retorno democrático. En ese contexto, se sitúa desde una perspectiva que coloca a la política como principal factor de dicha situación y, descartando el azar, sostiene la existencia de una operación política enmarcada en las estrategias del consenso y la gobernabilidad.

Para ello, la investigación se sitúa específicamente en el movimiento sindical y en el caso particular de la quiebra de la industria Lozapenco, buscando analizar las formas en que actuaron al respecto los trabajadores y el gobierno, para, a través de ello, dar luces sobre la lógica de acción de cada uno, de manera de ir develando las causas de la desmovilización.

El movimiento sindical fue uno de los actores clave en el proceso de transición a la democracia y, una vez iniciados los gobiernos de la concertación, existía en su interior una alta expectativa respecto a las posibilidades de asumir un papel protagónico como actor en el fortalecimiento democrático, en torno a la recuperación de los derechos perdidos durante la dictadura y respecto al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales.

En ese contexto, los primeros tres años de los gobiernos concertacionistas asistieron a un aumento de la organización sindical, elevándose las tasas de sindicalización, la cantidad de sindicatos y el número de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, ya en 1993, comienza a notarse un rápido desgaste, cayendo todos los indicadores citados, cuestión que llevó a muchos a plantear una crisis del sindicalismo.

Pensar en las causas de tal crisis es un importante camino para pensar también en las causas de la desmovilización general de la sociedad chilena durante la década de los 90, matizando las tesis del encantamiento neoliberal a través de la ampliación del consumo (Moulian, 2002), y a poner en frente la falta de alternativas y el

1 El presente trabajo es el resultado del proyecto final del seminario “¿Ciudadanía neoliberal o resistencia popular? Cambios culturales y movimientos sociales en el Chile actual”, dictado por el profesor Rolando Álvarez en el programa de Magister en Historia de la USACH, 2013. Se agradecen sus comentarios.

desencanto o la decepción frente al incumplimiento de las expectativas generadas como resultado de un complejo entramado donde se mezclan transformaciones estructurales, la lógica política de la transición, la dinámica interna del sindicalismo y situaciones coyunturales particulares.

Desde esa perspectiva, nos acercamos a la tesis de De la Masa (1999), quien plantea que la transición contemplaba, como requisito, la desactivación de los movimientos sociales que habían hecho posible la oposición anti-dictatorial, ello, enmarcado en la necesidad de sostener una pragmática política de consensos que permitiera consolidar la gobernabilidad (Fuentes 1999; Moulian, 2002; Garretón, 2012). De esa forma, movimientos altamente activos a inicios de la década de 1990, caen en un letargo debido al progresivo alejamiento de un Estado que no se hace cargo de las promesas antes realizadas.

En esa línea, Norbert Lechner (2002) plantea que el agotamiento de las satisfacciones ofrecidas por la transición democrática y la modernización económica, hicieron surgir tensiones donde se develaba el carácter poco democrático de la actividad política pos-dictatorial, y un eterno desplazamiento de la meta planteada por la "transición a la democracia". Dicho agotamiento, habría generado una erosión de los mapas mentales de la sociedad chilena, explicando la desafección hacia la democracia y el desencanto característico de la década en cuestión.

Esta misma lógica se habría dado también en el mundo sindical. Al respecto, desde distintos ángulos y con ciertos matices, algunos autores han planteado la primacía de la política de consensos en el movimiento sindical por sobre la movilización en torno a sus demandas y la crisis de expectativas que esto habría generado (Frías, 1991, 2008; Echeverría y Rojas Hernández, 1992; Albuquerque, 1992; Campero, 1992; Maturana y Mac-Clure, 1992; Vitale, 1996; Araya, 2011; Guzmán, 2004). A dicha política de consensos no habría respondido solo el gobierno, sino también la cúpula sindical de la CUT, liderada por militantes concertacionistas (Vitale, 1996; Araya, 2011). La frustración del mundo sindical se refleja de buena forma en las entrevistas realizadas por Echeverría y Rojas Hernández (1992) a dirigentes regionales y en la síntesis realizada posteriormente por los autores, donde se da cuenta de un bloqueo al movimiento sindical por parte del gobierno y su nula voluntad política para avanzar en sus demandas.

Otro grupo de autores (Escobar, 1999; Nuñez, 2004; Álvarez, 2006) ha centrado su mirada en las transformaciones estructurales de la economía chilena para explicar el decaimiento del actor sindical, incapaz de hacer frente a las nuevas condiciones de estructuración de las relaciones de producción que implican el neoliberalismo. Se destacan en esa línea los cambios en el ámbito de la estructura productiva y el mercado del trabajo en Chile; las transformaciones del fondo normativo que regula el mercado del trabajo (flexibilización, liberalización, desregulación), el avance de la informalidad y la precarización del trabajo, lo que implicaría además, una construcción precaria de identidades colectivas (Álvarez, 2006)

Estos autores (Aravena, 2008, 2009, 2011; Aravena y Rojas Flores, 1999; Herberos, 2004; Guzmán, 2012; Henríquez, 1999; Gutierrez, 2011, 2013; Espinoza y Yañez, 1998; Morris, 1998) han analizado el problema combinando los factores políticos y las transformaciones estructurales para explicar la decadencia del movimiento sindical en los 90.

En este grupo de autores, con diversos matices, se combinan una crítica a la lógica de consenso adoptada por la dirigencia del sindicalismo, el error histórico de la negociación según Herrerros (2004), que, ante la ausencia de un proyecto alternativo, le quita presencia política al movimiento sindical, a la vez que incide negativamente en su legitimidad, generando la permanencia de las leyes laborales de la dictadura, viga maestra del modelo neoliberal, con un análisis de los diversos factores estructurales ligados al modelo neoliberal, principalmente la desregulación o flexibilización del mercado de trabajo, la precarización laboral y, con ello, la pérdida de centralidad del trabajo asalariado como espacio de construcción de sujetos e identidades, en tanto las transformaciones estructurales afectarían no solo el elemento económico, sino también el cultural y social.

Interesante es destacar lo planteado por Gutierrez (2013), quien agrega algunos elementos a la hora de analizar las transformaciones que obstaculizan el desarrollo del movimiento sindical. Por una parte la existencia de dispositivos ideológicos que construyen la hegemonía neoliberal, el individualismo, el consumismo y la naturalización del orden; por otra parte, a partir del giro neoliberal, se habrían desestructurado dos formas fundamentales de acción del proletariado: el sindicalismo sociopolítico, limitándolo al ámbito de la empresa, y la apelación a la intervención estatal, en el contexto de un Estado que se retira en busca de arbitrar una relación bipartita entre privados.

En lo particular, la presente investigación busca indagar en las causas de la desmovilización del actor sindical durante el primer gobierno de la Concertación, tomando como caso específico para ello el conflicto generado en torno al fraude al fisco realizado por Feliciano Palma, dueño de la empresa Lozapenco, que implicó la quiebra de la industria y el despido de alrededor de 2.000 trabajadores y la precarización de las condiciones de vida del conjunto de la comuna de Penco.

Plantea que la desmovilización no se generó automáticamente una vez iniciado el retorno a la democracia. Al contrario, al menos durante el primer gobierno concertacionista se llevaron a cabo sendas movilizaciones desde el mundo de los trabajadores. Estas, ante la crisis de expectativas frente a un gobierno y una cúpula sindical que privilegiaron la política de los consensos y la consolidación de la reestructuración neoliberal, declinaron y terminaron por debilitar al actor sindical frente a una nueva realidad laboral, flexibilizada y desregulada, y frente a una realidad política desfavorable.

Para dar cuenta de este proceso, el estudio de la octava región es fundamental, toda vez que se asiste a un momento de crisis terminal de la industria textil, de la

industria carbonífera (Moyano, 2011), de avance de las empresas forestales, de crisis de la pesca artesanal frente al avance de la pesca industrial, y de movilizaciones y conflictos en torno a ello. Es en ese contexto que se desarrolla el conflicto en Lozapenco que, aunque fortuito en su inicio, da cuenta de una forma transversal de acción de los actores involucrados. La coyuntura imprevista, confirma el rumbo en que camina el contexto nacional.

En ese sentido, se enmarca dentro del grupo de autores que privilegian el factor político como explicación de la desmovilización, aunque sin negar las transformaciones estructurales que buscan consolidar la política consensual de la concertación. De esa forma, hace eco de lo planteado por Gutiérrez en el sentido de la transformación del papel del Estado hacia un papel de árbitro entre privados, pero pone sobre la mesa también algunos elementos planteados por ciertos autores (Albuquerque, 1992; Vitale, 1996; Rojas Hernández; Moyano, 2011), respecto al desarme ideológico y a la falta de alternativa y proyecto propio de parte del movimiento sindical para dar respuesta y encontrar nuevas formas de acción frente a las nuevas situaciones, lo que habría influido en la rapidez de su desmovilización.

Así, a través del análisis de un caso particular, fortuito y, por tanto con especificidades propias, puede ayudar a dar luces sobre las formas como se movieron, tanto trabajadores como gobierno, frente a las nuevas problemáticas del mundo del trabajo, y la lógica que estas orientaciones encierran. En ese sentido, busca analizar la forma como se construyeron expectativas, y el proceso mediante el cual se van rompiendo las confianzas de los trabajadores hacia el gobierno. No es por lo tanto un problema de la capacidad legal del gobierno para resolver, sino de los discursos y promesas que éste construye, los que posteriormente serán cobrados por los trabajadores, quienes pasan a una situación de desafección e incredulidad respecto al gobierno.

Se ha privilegiado entonces una descripción detallada del proceso, buscando marcar hitos donde se desarrolla la construcción y destrucción de las expectativas y confianzas, intentando dejar el relato de ello, *en la medida de lo posible*, en la voz de los propios actores.

Para la construcción de tal relato, se ha utilizado como fuente principal el diario "El Sur", el que, debido a su carácter regional, presenta los hechos con mayores detalles y es el único periódico que hace un seguimiento del conflicto a lo largo de los cuatro años que hemos estudiado.

Hemos arriesgado trabajar con dicha fuente, intentando despejar el sesgo ideológico de un periódico ligado a la derecha, que posiblemente buscaba erosionar la legitimidad del gobierno concertacionista y poner sobre la mesa su incapacidad de lograr la tan anhelada gobernabilidad. De todas formas, en lo fundamental, creemos que no se alteran los hechos, y es posible trabajar con ellos haciendo a un lado el análisis particular que su línea editorial realiza.

Aun así, hemos preferido contrastar dicha fuente principal con el periódico oficialista *La Nación* y, para algunos hechos particulares, con la revista *Punto Final*, revista de izquierda crítica de la concertación. En lo fundamental, no se afectan los hechos, pero, la poca cobertura del conflicto por parte de *La Nación*, y entendiendo su función de propaganda, puede, probablemente, darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, la búsqueda de la negación del conflicto, en función de mantener la idea de la gobernabilidad y, en segundo lugar, el silencio puede hablarnos de la poca importancia del gobierno para con un conflicto que, desde su perspectiva, respondía a uno entre privados.

## II. EL FRAUDE

El primero de mayo de 1990, y mientras el dirigente del sindicato N°2 de Lozapenco, Abel Roa, declaraba a la prensa que “la estabilidad laboral es un anhelo general” y que “cualquier alternativa que el Gobierno convenga debe ser para beneficio de los trabajadores y que éstos no tengan que pagar el costo social” (*El Sur*, 30 de abril de 1990), y el ministro del trabajo René Cortazar daba cuenta de las grandes esperanzas que abría el acuerdo marco entre el gobierno, la CUT y la CPC (*La Nación*, 2 de mayo de 1990), comenzaba a rumorearse sobre graves problemas económicos que afectaban a Lozapenco en lo que, a la larga, sería el fraude al fisco más grande de la historia.

Feliciano Palma había adquirido la industria en 1981 luego de su quiebra, logrando una notable recuperación económica de Penco, sorteando con éxito la realidad de pobreza y cesantía de comunas de la región como la vecina Tomé, pasando de una dotación de 365 trabajadores con que contaba la industria en 1982, a cerca de 3.000 trabajadores en 1990, de una población total de la comuna de 45 mil personas.

De esa forma, Lozapenco se constituyó en la principal fuente laboral de la comuna y, mediante una gestión empresarial en extremo paternalista, Feliciano Palma incluso inyectó grandes sumas de dinero en el club deportivo Lozapenco, que logró llegar al profesionalismo, entusiasmando a toda la comunidad. Palma era entonces visto como un salvador para la comuna, muy querido por su gente pues él, junto a su mujer, habrían hecho grandes obras en su beneficio. (*El Sur*, 22 de mayo de 1990).

Pero corto fue el sueño de la prosperidad, la que se sostenía sobre el inmenso fraude al fisco que realizaba Palma. En términos generales, éste consistía en la sobrevaloración de productos exportados para obtener una mayor devolución de impuestos, a la vez que obtenía una bonificación del 10% por exportación de productos no tradicionales. Por ejemplo, exportó a EE.UU. palos de escoba, facturados a nueve dólares cada uno, en circunstancias que el precio de este producto en el mercado norteamericano no era de más que 20 centavos de dólar (*El Sur*, 3 de mayo de 1990).

Finalmente, se determinó que el fraude alcanzó un monto total cercano a los \$ 24 mil millones, por el que Palma fue condenado a siete años de prisión y a pagar una multa de \$ 3 mil millones (La Nación, 21 de diciembre 1993). Fueron condenados además, cuatro funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, como cómplices del caso (El Sur, 17 de abril de 1992).

Más allá del problema judicial, el fraude llevado a cabo tuvo graves repercusiones económicas y sociales, las que se hicieron sentir desde un comienzo en el conjunto de la población y que generaron distintas formas de acción en los actores involucrados.

Frente a tales circunstancias, la primera reacción general de trabajadores y diferentes autoridades de gobierno fue de gran inquietud ante las graves consecuencias que podría traer una eventual quiebra de la industria locera, tercera fuente laboral de la región tras Enacar y Huachipato, y sustento económico de -cerca del 40% de la comuna (El Sur, 4 de Mayo de 1990).

Para los trabajadores, la sensación inicial era de incertidumbre e inquietud, pero de confianza en las capacidades y en la voluntad política del gobierno para solucionar el problema. La frase "pueden contar y confiar en el gobierno" (El Sur, 7 de mayo de 1990; La Nación, 8 de mayo 1990), expresada por Belisario Velasco y repetida hasta el cansancio y de diversas formas por distintas autoridades de gobierno (La Nación, 6 de mayo 1990), hacía eco entre los trabajadores.

En ese contexto, el Ministro del Interior Enrique Krauss, trazaba el camino a seguir, poniendo sobre la mesa las medidas que tomaría el gobierno: declarar la empresa unidad económica con continuidad de giro, designar administradores y gestionar créditos (La Nación, 6 de mayo 1990).

La inquietud, de todas formas, se hacía sentir, más allá de los propios trabajadores y se expandía rápidamente por el conjunto de la población haciendo recordar los angustiosos momentos vividos durante la quiebra de 1981. Comerciantes y dirigentes vecinales daban cuenta de la preocupación de todos ante un probable cierre de la industria (El Sur, 4 de mayo de 1990).

La postura del gobierno, que se mantuvo a lo largo del conflicto, era de, por un lado, buscar el inicio de acciones legales contra Palma, y por otro lado, en cuanto al problema social generado, llamar a la calma y a la confianza en las autoridades, comprometiéndose a mantener las condiciones laborales y evitar una nueva crisis económica en Penco, desvinculando al gobierno del problema y solicitando la información necesaria para llevar a cabo la investigación del caso. Para ello, diferentes autoridades de gobierno, a nivel nacional, regional y local, participaron en diversas reuniones para coordinar acciones (La Nación, 6 de mayo 1990; La Nación, 8 de mayo 1990).

La empresa por su parte, a través de su abogado Renato Zegpi, y de sus directivos, mostraba toda su disposición a cooperar con la solución del caso, aportando la información necesaria para ello y remarcando que este era un problema personal

de Feliciano Palma, pero que no tenía que ver con la empresa y su administración en general.

Incluso, en reunión efectuada con las autoridades el mismo día 3 de mayo, luego de la reunión con los trabajadores, Zegpi propuso conformar una comisión tripartita entre la empresa, el gobierno y los trabajadores, con la finalidad de llevar a cabo una solución participativa. Por último, llamó a la tranquilidad a los trabajadores, señalando que este problema no afectaría a la producción y que se cancelarían los sueldos con normalidad (El Sur, 4 de Mayo de 1990).

### III. ASEGURAR LA PRODUCCIÓN Y CANCELAR LOS SUELDOS

Prontamente, aquellas declaraciones quedarían desmentidas. El 4 de mayo se cancelaban sólo un 30% de los sueldos correspondientes al mes de abril y se complementaba con la entrega de diez kilos de carne por funcionario, procedente de un fundo de propiedad de Feliciano Palma (El Sur, 5 de Mayo de 1990).

Con el correr de los días, el problema de los sueldos se agravaría y se transformó en la principal demanda de los trabajadores durante el primer tramo del conflicto. El conflicto se mantendría así dentro de los marcos de lo gremial, sin entrar en el plano de lo político.

Para solucionar tal problema, los dirigentes sindicales buscaban presionar en la comisión tripartita constituida en Santiago con el fin de separar la parte productiva de la empresa del problema tributario que afectaba a Palma, buscando que se levantasen las prohibiciones de exportar que se habían dictado sobre la industria y que se cancelasen 300 millones de pesos por concepto de retorno de exportaciones que se mantenían retenidos a raíz del juicio. El problema de la exportación resultaba crucial para el futuro de la industria y el pago de los sueldos.

Por otra parte, buscaban la intermediación del gobierno para que se les otorgase alivio en el pago de cuentas por el consumo de servicios básicos, prórrogas de dividendos y no suspensión del crédito de casas comerciales (El Sur, 9 de mayo de 1990).

Mientras tanto, el gobierno nombraba un abogado asesor del Ministerio del Interior cuyas funciones serían de investigación y coordinación entre los distintos organismos del Estado involucrados. Según éste, a pesar de que el problema había sido generado por la irresponsabilidad de un privado, el gobierno estaba haciendo esfuerzos coordinados desde los distintos ministerios involucrados (El Sur, 12 de mayo de 1990).

Los trabajadores, por su parte, seguían empeñados en gestiones que permitieran a la industria seguir produciendo con el fin de evitar la quiebra y lograr la cancelación de los sueldos de abril y mayo adeudados. Para ello, proponían que el

gobierno designase a un administrador delegado en Lozapenco que controlara la parte financiera de la empresa y garantizar el pago de los sueldos.

La situación de los trabajadores, en tanto, seguía agravándose y al 10 de mayo, se les había entregado solamente un adelanto de entre 10 y 15 mil pesos correspondientes al mes de abril, cuando el promedio de sueldos era de 45 mil pesos, y con la preocupación de que, de no levantarse la prohibición de exportar, se agravara la situación (El Sur, 12 de Mayo de 1990).

#### IV. SE MANTIENE LA CONFIANZA, AÚN

A pesar de que las consecuencias del problema ya se hacían sentir en el conjunto de la población, a quince días de iniciado el problema, las confianzas se mantenían intactas en las gestiones de las autoridades y en la posibilidad de la cancelación de los sueldos adeudados. Al respecto, se avanzaría en soluciones que haría que algunos pensarán en una rápida solución para los trabajadores y en una victoria política para la concertación.

En ese sentido, el gobierno solicitaba, haciéndose cargo de las peticiones de los trabajadores, la implementación de un administrador judicial, con la finalidad de asegurar la producción y dar confianza y tranquilidad a los trabajadores (El Sur, 17 de Mayo de 1990).

Ello ocurrió finalmente el día 22 de mayo. El designado fue Enrique Pinto, ex gerente de Fanaloza. En su primera entrevista, éste buscó dar confianza a los trabajadores señalando que, a pesar de sus estimaciones de sobre empleo en la industria, no se generarían despidos y se aseguraría la producción con el conjunto de los trabajadores contratados hasta el momento (El Sur, 23 de Mayo de 1990). Para éstos, ello era un paso importante en el avance hacia una solución definitiva. En una declaración pública, los trabajadores señalaban que lo conseguido era un éxito de sus gestiones y de las autoridades, comprometidas en el complejo problema. El senador Arturo Frei Bolívar no dudó en anotarse una victoria política personal y del gobierno, a la vez que destacaba la correcta actitud de los trabajadores (El Sur, 25 de Mayo de 1990).

Pero la designación del administrador judicial, a pesar de dar algo de tranquilidad para que la industria continuara su producción, no implicó una solución al problema de la cancelación de los sueldos. Para avanzar en una solución en ese sentido, los dirigentes sindicales, en conjunto con el administrador judicial, el abogado Bernasconi y el seremi de Hacienda Germán Cerda, solicitaron al Intendente su colaboración en la obtención de créditos o dineros frescos que permitiesen a la empresa cancelar los salarios al personal, ya que a mediados de junio, sólo se había pagado un anticipo del mes de mayo y se tenían compromisos pendientes con isapres (El Sur, 14 de Junio de 1990).

Los trabajadores se mantenían confiados en una posible y cercana solución que, sin embargo, se alejaba cada día más. Ello, hacía que con el correr de los días fuese aumentando las tensiones en las relaciones entre trabajadores y gobierno, hacia donde se miraba buscando una solución, toda vez que la administración de la empresa ya no estaba en manos privadas.

En esa línea, a comienzos de julio se efectuó una reunión de los dirigentes con el gobernador provincial Juan Ignacio Ugarte, con el administrador judicial Enrique Pinto y con dirigentes de partidos políticos de la Concertación, para conocer los pasos que daba la autoridad para llegar a una solución. En ella, el gobernador pidió a los trabajadores tener tranquilidad y los convino a que “esperaran lo menos, ya que han esperado lo más” (El Sur, 3 de Julio de 1990), porque la solución, consistente en un préstamo del Banco del Estado, debiera salir prontamente. Para ello, el gobierno debía coordinar a las distintas instituciones involucradas. Reafirmando la necesidad de los trabajadores de confiar en el gobierno, Ugarte señaló a éstos la firme voluntad del gobierno de no dejar abandonada a la empresa (El Sur, 3 de Julio de 1990).

Diez días después, los dirigentes loceros anunciaban que recurrirían al presidente Aylwin para solicitarle su intervención ante el Banco Estado para lograr el otorgamiento del crédito. El presidente del sindicato N°2, Edgardo Bravo Pastor, se mostraba confiado en las gestiones, pero ya comenzaba a manifestar cierto malestar por la prolongación de la situación (El Sur, 11 de Julio de 1990; La Nación, 11 de julio 1990).

En dicha cita, el presidente dio su total respaldo a la propuesta y comprometió su gestión para avanzar al respecto, “en la medida que sus facultades se lo permitan” (El Sur, 12 de Julio de 1990). La medida de lo posible también se aplicaba en torno a la defensa de los trabajadores. El diputado Edmundo Salas, en tanto, reafirmaba que “esta palabra del Presidente a los trabajadores la podrán cobrar” (El Sur, 23 de Julio de 1990).

Días después, el crédito aun no se hacía efectivo y, a pesar de que el presidente del sindicato N°1, Luis Pineda, reiteraba su total confianza en las gestiones que realizaba el administrador judicial, Edgardo Bravo, el presidente del sindicato N°2, instalaba ya los primeros signos de desconfianza y de crítica hacia las constantes promesas del gobierno, señalando que ya habían pasado tres meses y recordó que el Presidente les había dado la esperanza de que pondría todo de su parte para que se superara el problema (El Sur, 24 de Julio de 1990). Se comenzaba a hablar ya de las primeras movilizaciones.

## V. "YA NO MÁS MENTIRAS, PEDIMOS UNA RESPUESTA"

Así, el 26 de julio, los tres sindicatos se reunieron por separado. En declaraciones posteriores, dieron cuenta de la extrema situación que estaban viviendo y señalaron que ya no podían esperar más. Mostraron también su desazón por la nula respuesta de las autoridades ante las gestiones realizadas. Señalaron además que existían presiones de muchos trabajadores por comenzar a efectuar movilizaciones para sensibilizar a las autoridades. El sindicato N°3, en ese sentido, dio plazo hasta el 2 de agosto para que las autoridades hicieran efectivo el crédito solicitado por los trabajadores al Banco Estado, de lo contrario llevarían a cabo una movilización hacia Concepción, opción apoyada por los otros dos sindicatos, y, en una decisión no compartida por los otras dos organizaciones, se tomarían la industria (El Sur, 27 de Julio de 1990).

Esta información la llevaron hasta la intendencia, donde la autoridad respondió, bajándole el perfil a la postura de los trabajadores, que las gestiones iban bien encaminadas. Ese mismo día, el administrador Enrique Pinto, informó a los trabajadores que la industria estaba lista para volver a exportar, enviando una primera partida de 107 mil dólares en sanitarios a Estados Unidos. Indicó que con la normalización comercial, se cancelarían en primer lugar los sueldos de julio y con posterioridad, se cancelarían los sueldos atrasados. La medida fue bien acogida por los trabajadores, aunque señalaron que se mantendrían movilizados en defensa de sus intereses (El Sur, 29 de Julio de 1990).

Así, la primera movilización masiva de trabajadores y sus familias se llevó a cabo efectivamente el 2 de agosto, y participaron en ella los trabajadores del sindicato N°3 y N°2. El N°1, mostrando cautela y confianza en las gestiones del administrador y del gobierno, se bajó a último momento de la manifestación, pues manejaba información de que el crédito podía salir en los próximos días (El Sur, 2 de Agosto de 1990).

En uno de los carteles que portaban los manifestantes en la marcha se leía "ya no más mentiras, pedimos una respuesta" (El Sur, 3 de Agosto de 1990), resumiendo el sentir de los trabajadores que llevaban tres meses escuchando discursos de buena fe y de confianza en las autoridades, pero veían que poco se hacía en concreto, mientras su situación empeoraba día tras día.

A la marcha concurrieron, según informaciones de La Nación, 3.000 personas (La Nación, 3 de agosto, 1990), 2.000 trabajadores junto a sus familias según El Sur (3 de agosto de 1990), en una "combativa manifestación" exigiendo una pronta solución, y entre las demandas, además del crédito que permitiese la cancelación de los sueldos, exigían un rápido pronunciamiento respecto del caso al Tribunal de Justicia, y la demanda al Parlamento para que legislase a favor de los trabajadores para evitar la pérdida de sus indemnizaciones (La Nación, 3 de agosto 1990).

Al llegar a Concepción, se reunieron con el gobernador provincial Juan Ugarte, quien, en la habitual tónica del gobierno, les dio a conocer las gestiones que se estaban realizando, conminándolos a proseguir la marcha en orden y respeto. Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a la Intendencia, donde la autoridad les manifestó la preocupación del gobierno en todos los niveles por encontrar una solución y que el crédito estaba ya por salir. Luego de marchar hacia las oficinas del secretario regional de gobierno, donde la “situación por momentos estuvo a punto de descontrolarse ante las expresiones airadas de algunos manifestantes que se manifestaron postergados en sus aspiraciones mínimas que son las de recibir sus remuneraciones” (El Sur, 3 de Agosto, 1990), los trabajadores y sus familias volvieron a Penco.

Al día siguiente, la marcha sería calificada por el diputado Edmundo Salas como una actitud injusta de parte de los trabajadores que no reconocían todas las gestiones que el gobierno estaba haciendo a favor de ellos, remarcando que éste no era un problema creado por el gobierno y que el mismo presidente había comprometido su palabra en la solución del problema. Señaló además que no había de qué preocuparse, pues Aylwin había dado aviso de que el crédito estaría listo en cualquier momento (El Sur, 4 de Agosto de 1990).

Respecto a la marcha, y en un discurso de carácter desmovilizador, dijo que esa no era la actitud correcta y que la solución vendría de las gestiones de los parlamentarios y de las autoridades centrales (El Sur, 4 de Agosto, 1990). Las declaraciones del diputado Salas confirman una actitud general del gobierno de evitar las movilizaciones, los conflictos y dejar la resolución de los mismos en manos de las autoridades. Los trabajadores, debían esperar, mientras sus condiciones de vida se hacían cada día más precarias.

Los días siguientes estarían marcados por la visita a la zona del Presidente Aylwin. Allí, éste intentaría renovar la confianza de los trabajadores con nuevas promesas, las que eran esperadas con ansias por estos. Todos esperaban las noticias que traía el Presidente (El Sur, 11 de Agosto de 1990).

Reunidos en el gimnasio del sindicato N°2, el 11 de agosto Aylwin informó a los trabajadores que Lozapenco recibiría un crédito del Banco del Estado por un monto de 600 millones, a condición de que la empresa fuese administrada con criterios de eficiencia y aumento de productividad lo que, en pocas palabras, implicaba una reducción del personal, la que debía aplicarse con criterios de solidaridad, es decir, optando por aquellos trabajadores en condición de jubilar, y por aquellos en cuyo grupo familiar había más de una persona trabajando en la industria, además, como criterio de despido, debía pesar la hoja de vida en función de alcanzar la máxima eficiencia. Ante ello, Aylwin se comprometió a impulsar planes de desarrollo comunal que permitieran absorber la cesantía (El Sur, 12 de Agosto de 1990), y le señaló a los trabajadores, desatando una ovación, “ustedes tienen la camiseta puesta y por eso, en lo que sea posible, los vamos a ayudar” (La Nación, 12 de agosto 1990).

El crédito en cuestión, se haría efectivo en dos partes. Los primeros 300 millones llegarían al día siguiente, y se utilizarían para pagar los sueldos adeudados, luego, y dependiendo de los criterios de administración, se haría efectiva la otra mitad con lo que se aseguraría la cancelación de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.

Los trabajadores se mostraron satisfechos ante el anuncio, con la esperanza de que estos no fueran más de 500. El presidente del sindicato N°1 abría otra nueva arista al problema, agregando que la siguiente etapa sería la de la licitación de la empresa una vez que volviera a su plena producción (El Sur, 13 de Agosto de 1990).

Finalmente, el 20 de agosto, a 10 días del anuncio realizado por el presidente y luego de casi cuatro meses sin sueldos, los trabajadores loceros recibieron sus remuneraciones correspondientes a julio, quedando de todas formas, pendiente parte del mes de mayo y todo junio (El Sur, 21 de Agosto de 1990).

## VI. NUEVAS Y LARGAS ESPERAS

Pero no se acabó ahí el problema para los trabajadores. El conflicto se centró en adelante en torno a dos ejes. Por una parte, en relación a la normalización productiva y administrativa de la empresa que permitiese cancelar las deudas que ésta tenía con los trabajadores activos y despedidos. Para ello era necesario conseguir la declaración de continuidad de giro al hacerse efectiva la quiebra, y luego conseguir la licitación de la industria a un precio que permitiese los pagos adeudados. La licitación, que no trajo los resultados esperados por los trabajadores, tardaría tres años en realizarse.

En ese lapso, continuaron las promesas de ayuda incumplida por parte del gobierno, en una relación que desgastó más las confianzas. El problema seguía tratándose, en lo principal, como un conflicto privado adoptando medidas de contención que cada cierto tiempo eran sobrepasadas por la movilización de los trabajadores.

Por otra parte, el conflicto se desarrolló en torno al problema de la cesantía y la necesidad de generar planes de empleo para la comuna. Esa arista por sí sola requeriría un trabajo aparte, por lo que no nos adentraremos en ella.

### I. Esperando Un Acuerdo: La Quiebra De Lozapenco

Los primeros días luego de recibido el crédito, el administrador judicial se mostraba optimista frente a la llegada de la segunda parte del crédito y al proceso de normalización de la producción (El Sur, 21 de Septiembre de 1990).

Un mes después de hecho el anuncio, y a pesar de cumplir con las condiciones requeridas (500 personas habían sido despedidas y 100 se habían retirado voluntariamente), ello no se hacía aun efectivo. La situación fue expuesta por dirigentes de los tres sindicatos a las autoridades regionales (El Sur, 6 de Octubre de 1990).

El jefe de gabinete del intendente, Bolívar Ruiz, explicó que el Banco del Estado tenía la predisposición de liberar la segunda parte del crédito, para la cual requería la aprobación de un representante del antiguo dueño, pero ni el abogado de Palma ni su esposa se encontraban disponibles para firmar.

Las trabas judiciales serían en adelante la justificación permanente que daba el gobierno a la prolongación de la situación, señalando en cada momento la imposibilidad de intervenir más allá de sus capacidades (El Sur, 6 de Octubre de 1990). Dejar que cada institución cumpla su rol, sería desde los comienzos un pilar de la gobernabilidad concertacionista.

Mientras el crédito seguía bloqueado, aumentaba la preocupación entre los trabajadores, pues ya iniciado octubre, solo se les había cancelado el mes de julio y parte de mayo. Además, en el ámbito judicial, surgía la información de que Lozapenco no tendría bienes para traspasar a sus acreedores, debido a que, a comienzos de abril, cuando Palma se habría enterado de la detección del fraude, hizo el traspaso de los bienes hacia otra razón social, por lo que Lozapenco se había transformado en “una empresa de papel” (El Sur, 13 de Octubre de 1990).

Los trabajadores manifestaban su extrañeza al Ministerio del Interior, frente al hecho de que el Banco del Estado estuviese negociando un préstamo de 1 millón de dólares con los antiguos dueños, por sobre los 300 millones ya suministrados, ante una propuesta de convenio realizada por estos últimos. Manifestaban además su sorpresa frente al levantamiento de arraigo permitido por el SII a Margarita Germany, lo que permitió que esta saliera del país y no firmara la liberación de la parte del crédito retenida. “Todo esto –indicaron los dirigentes sindicales- se contrapone a lo afirmado por el Presidente de la República, en el sentido de que el gobierno tomará las medidas para solucionar el problema social derivado de la crisis, y que el gobierno pondría toda su voluntad para que el préstamo del Banco del Estado fuera suficiente en su monto y con la premura que la situación requiere” (El Sur, 13 de Octubre de 1990).

El diputado Edmundo Salas se comprometió ante los trabajadores a denunciar en el congreso el convenio extra judicial que estaría negociando Impuestos Internos con la antigua administración, señalando que ello iba en contra de los intereses de los trabajadores que, según el diputado, defendía el gobierno. En su criterio, existía una “misteriosa mano” capaz de doblar la mano “incluso” al presidente (El Sur, 14 de Octubre de 1990).

De esa manera, intentaba restar de responsabilidad al gobierno en la situación, separando la responsabilidad política de éste del quehacer de instituciones como Impuestos Internos. El gobierno, cauto en la materia, solo se remitió a responder

que, por el momento, esperaba tener mayor información sobre el caso para actuar (El Sur, 15 de Octubre de 1990). Mientras que los trabajadores barajaban la opción de demandar a los antiguos dueños. El conflicto se jugaba, a ratos, exclusivamente en el terreno judicial.

Paralelamente, los dueños de Lozapenco buscaban llegar a acuerdo con la junta de acreedores, entre los que se encontraban distintos bancos, Impuestos Internos, Fonasa, Isapres, AFP's, el Instituto de Normalización Previsional y distintos proveedores, avanzando en el borrador de una negociación que permitiera avanzar en una pronta solución.

Aislados los trabajadores del acuerdo tomado, y mientras otros celebraban, éstos emplazaban a las autoridades a actuar con mayor decisión y eficacia ante la grave situación por la que atravesaban. Bernasconi, señalaba al respecto que

"las autoridades de la zona tendrían que responder muy clara y precisamente a lo que los trabajadores esperan de ellas. Inexplicablemente hasta ahora sólo hemos escuchado que se está ante el problema de una empresa privada. Supimos que en una reciente reunión de Seremis sólo los señores secretarios ministeriales de Hacienda y de Justicia estuvieron por asumir una decidida defensa de los trabajadores. El seremi del trabajo, entre otros, no ha hecho nada" (El Sur, 21 de Octubre, 1990).

La respuesta, desde la intendencia no se hizo esperar. En ella, reafirmaban su "permanente voluntad de diálogo con los trabajadores de Lozapenco y su clara intención de velar para que se cautelen sus derechos laborales, apoyando todas las acciones desplegadas para buscar la más pronta solución, que permita a la vez la mantención de esta fuente de empleo" (El Sur, 24 de Octubre de 1990).

Planteaban además, marcando las distancias necesarias, que "la situación no es en absoluto responsabilidad del gobierno, sino que es una consecuencia de conductas del propietario, investigadas por el poder judicial" (El Sur, 24 de Octubre de 1990). Días después, demostrando su confianza en el gobierno, dirigentes sindicales señalaban que las declaraciones de Bernasconi habían sido mal interpretadas, y que los trabajadores valoraban los esfuerzos realizados por el seremi del trabajo (El Sur, 27 de Octubre de 1990).

Dirigentes regionales de la Concertación, en tanto, y mostrando las tensiones entre dirigentes locales y autoridades centrales del conglomerado, si bien concordaban con las declaraciones de la intendencia, manifestaban su "preocupación a las autoridades de gobierno por la inexplicable lentitud con que se ha asumido el deber moral y legal de velar por el bien común y por la debida preocupación por los más débiles" (El Sur, 25 de Octubre de 1990). Proponían officar como mediadores para encontrar una rápida solución al problema de Penco, así como para "dar cumplimiento a la palabra empeñada por nuestro presidente, don Patricio Aylwin Azócar en la ciudad de Penco" (El Sur, 25 de Octubre de 1990).

Señalaban además que los acuerdos que se estaban llevando a cabo entre los dueños de la industria y la junta de acreedores no consideraban los intereses de los trabajadores pues significaba la disminución de los sueldos y, probablemente, aumentar los despidos, e indicaron que “el gobierno no puede seguir esperando que las partes se pongan de acuerdo, sino que tiene que tomar un papel más activo para acelerar las resoluciones” (El Sur, 25 de Octubre de 1990).

En tanto, y mientras se avanzaba en la firma del acuerdo en Santiago, los trabajadores de Lozapenco iniciaron movilizaciones que culminaron con la toma de la industria, acción respaldada en asamblea por el conjunto de los trabajadores agrupados en los tres sindicatos, medida que calificaron como “una presión desesperada frente a siete meses de problemas. Este es un S.O.S. que los trabajadores lanzamos a las autoridades para que nos ayuden en una solución”, señalaba el presidente del sindicato N°2 (El Sur, 31 de Octubre de 1990). La toma, según indicaron, no debía afectar la producción, y buscaba que se aclarasen los términos del convenio que se estaba tramitando y se acelerara su firma para poder obtener los créditos necesarios para normalizar su situación.

La respuesta del gobierno fue la misma de siempre: asegurar que se estaban haciendo las gestiones correspondientes y remarcar que el problema no fue generado por ellos sino por Palma y su esposa (El Sur, 1 de Noviembre de 1990).

Mientras, los trabajadores reafirmaban su convicción de no terminar la toma mientras no se tuviera la certeza de que se les pagaría lo adeudado (La Nación, 2 de noviembre 1990). Explicaban que la toma estaba organizada en función de mantener la producción, que en cada planta había una olla común, mientras que las esposas de los trabajadores solidarizaban realizando marchas por las calles de Penco (El Sur, 1 de Noviembre de 1990).

Por la mañana del 31 de octubre enviaron una carta a la intendencia solicitando su mediación para obtener un crédito por \$40 millones para resolver la situación de los trabajadores y como forma de que el gobierno demostrara su voluntad política. La respuesta obtenida fue que había que esperar a que el convenio fuera firmado, del cual ya existía un borrador (El Sur, 2 de Noviembre de 1990).

Luego, dirigentes sindicales se reunieron en Santiago con el subsecretario del interior, Belisario Velasco, quien informó de las gestiones y de la voluntad del gobierno por resolver el problema. Julio Pérez, secretario del sindicato N°1, a pesar de haber culpado al gobierno por la lentitud de las gestiones en declaraciones previas a la reunión, sostuvo posteriormente, confiado, que “el subsecretario del interior demuestra la mayor voluntad para resolver este asunto y él va a instruir a Impuestos Internos y al Banco del Estado para que esto camine lo más rápidamente posible y la fábrica retome su ritmo normal y se cancelen los sueldos adeudados que ya alcanzan a alrededor de 300 millones de pesos a los trabajadores y se normalice la producción” (El Sur, 1 de Noviembre de 1990).

El 1 de noviembre, en una misa realizada en los patios de la industria, los trabajadores declaraban "somos incansables, siete meses hemos sostenido la empresa con nuestros salarios, pero ahora decimos basta" (El Sur, 4 de Noviembre de 1990). En el mismo lugar, el diputado Juan Martínez señalaba que "los trabajadores han sido víctimas de maniobras poco claras...el gobierno ha sido excesivamente prudente al tratar el problema, mostrando falta de decisión" (El Sur, 2 de Noviembre de 1990).

Al día siguiente, y demostrando la efectividad de la movilización, el Banco del Estado otorgó un crédito por \$40 millones que se utilizó para cancelar un adelanto de \$20 mil a cada trabajador (El Sur, 3 de Noviembre de 1990). Aunque señalaron que la toma continuaría hasta que se tuviera el documento del convenio, la asamblea decidió deponerla por 48 horas como forma de colaborar con la solución y ante la inminencia de la firma del acuerdo (El Sur, 8 de Noviembre de 1990).

Pasados los dos días, los trabajadores dieron un ultimátum, señalando que de no llegar a acuerdo, solicitarían la quiebra de la empresa. El acuerdo se firmó finalmente el 12 de noviembre, el cual fue recibido de buena forma por los trabajadores, pero asegurando que seguirían "en pie de guerra luchando por sus intereses y velando por el futuro de la empresa" (El Sur, 13 de Noviembre de 1990).

Pero la noticia estaba lejos de implicar una solución definitiva del problema. A cinco días de recibida la información, dirigentes loceros viajaban a Santiago a presionar a la junta de acreedores y a las autoridades para acelerar los trámites establecidos en el convenio, de no haber una respuesta positiva que involucrase el pago de lo adeudado, viajaría una caravana de trabajadores y sus esposas a Santiago para protestar "ante los propietarios y el gobierno por la demora y falta de decisión para darle una solución definitiva al conflicto locero" (El Sur, 18 de Noviembre de 1990), además de realizar un paro cívico de toda la comunidad.

Efectivamente, el 20 de noviembre la comunidad Pencona decidió, a modo de protesta, no enviar a los niños al colegio, se realizó un acto en la plaza durante todo el día, los camioneros hicieron sonar sus bocinas y se mantuvo el comercio cerrado entre las 10 y las 13 horas, además, se realizó una colecta entre toda la población para financiar el traslado, en cinco buses, de trabajadores y sus familias a Santiago, para protestar. Éstos se mantuvieron en las afueras de La Moneda, mientras en su interior, dirigentes se reunían con Belisario Velasco y personeros de partidos de la Concertación. Al cabo de la reunión, Jorge Vilches, presidente del sindicato N°3, demostraba la decepción de los trabajadores señalando que

"nos vamos totalmente defraudados y enfrentamos que una vez más los trabajadores han sido burlados. Vinimos con mucha esperanza en la solución y nos vamos decaídos. No hayamos qué decirle a nuestra gente que ha marchado desde Penco para buscar una solución, que buscan lo justo, que buscan lo que a ellos les corresponde, lo que les corresponde a todos, estamos pidiendo que se nos pague lo que se nos debe y que se nos mantenga el trabajo" (El Sur, 21 de Noviembre de 1990).

Al día siguiente, Margarita Germany presentaba una solicitud de quiebra de Lozapenco, como forma de presionar la entrada de fondos para la industria. Ello inquietó a los trabajadores, temerosos ante el cierre definitivo de su fuente laboral. Ante ello, el diputado Salas refirió que “nos sentimos absolutamente frustrados porque los trabajadores han sido engañados por la propietaria y el gobierno no ha dado una solución al problema social” (El Sur, 21 de Noviembre de 1990).

Ante la solicitud de quiebra, los trabajadores, respaldados por la CUT, señalaron que el gobierno debía tomar acciones para asegurar la continuidad de giro de la industria y evitar su muerte y la de la comuna. Belisario Velasco aseguró al respecto que se obtendría tal condición (El Sur, 22 de noviembre de 1990).

La desconfianza de los trabajadores hacia el gobierno se hacía sentir nuevamente, cuando el abogado de estos expresó la extrañeza de los trabajadores por la forma como se había decretado la quiebra, toda vez que se había decretado solo la quiebra de una de las razones sociales comprometidas, dejando bienes de la industria intactos, en manos de otra razón social del mismo dueño. Según los trabajadores, el gobierno cedía a los caprichos de la propietaria y no defendía sus intereses (El Sur, 23 de Noviembre de 1990).

La situación social seguía empeorando, y el gobierno se hacía parte entregando una ayuda en mercadería de 1,5 millones de pesos en beneficio de 1.123 familias, ayuda insuficiente, según declaraciones de las esposas de los trabajadores. Una de ellas, Adriana Ramírez, lamentaba que “quienes más trabajamos por la democracia ahora seamos castigados. El Presidente, cuando vino a Penco, nos ofreció solucionarnos el problema, pero nos dejó botados porque traspasó el conflicto al banco” (El Sur, 24 de Noviembre de 1990).

Estas eran las primeras manifestaciones de la integración de elementos políticos al conflicto, los que de todas formas no lograron traspasar las fronteras de lo discursivo, manteniéndose las demandas en un carácter gremial. Al respecto, los dirigentes loceros planeaban un emplazamiento a Aylwin, quien anunciaba una visita a la zona, en tanto no había cumplido su promesa de evitar la quiebra de Lozapenco (28 de Noviembre de 1990).

En el intertanto, el síndico de quiebra levantó una serie de propuestas a los trabajadores sobre el futuro de la industria, optando los trabajadores por una reducción de sueldos que permitiese la recontractación de la mayor cantidad posible de la planta, luego de que el síndico despidiera a la totalidad de los trabajadores como parte del proceso legal. Cediendo ante lo que, en un momento, plantearon como intransable.

La reunión con el presidente se efectuó el primero de diciembre, en ella, los trabajadores plantearon al presidente la tramitación de una línea de crédito para los trabajadores que les permitiera pagar los tres meses de remuneración adeudados, mostrándose dispuestos, incluso, a dejar como garantía las indemnizaciones por año de servicio que se les debiera pagar al momento de la licitación de la industria.

Solicitaron además que se buscaran los mecanismos legales para que operase la jubilación en los que estaban en condiciones de hacerlo. Las demandas se mantenían así acotadas a la solución del problema de la industria y, más allá de algunas críticas al gobierno, no mostraban señal alguna de un proyecto propio de los trabajadores.

El Presidente manifestó a los trabajadores la voluntad de continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios para ayudar a los trabajadores y a toda la comunidad de Penco. La confianza se renovaba, al menos con parte de la dirigencia sindical. En ese sentido, el presidente del sindicato N°2 reconocía la buena gestión hecha por el gobierno regional y el seremi del trabajo posibilitando la entrevista con Aylwin y se mostraba conforme "porque uno tiene que estarlo cuando el Presidente de la República nos recibe tres veces" (El Sur, 2 de Diciembre de 1990), como si la reunión por sí sola, aunque fuesen ya tres veces, bastara para avanzar en la solución.

En el mismo sentido, el Jefe de Gabinete de la intendencia evaluaba la reunión señalando que los trabajadores habían hecho un reconocimiento de las gestiones llevadas a cabo por el gobierno, a pesar de que no tenían responsabilidad alguna en la situación producida. En una declaración que caracteriza muy bien la posición del gobierno, Ruz señaló que "no es responsabilidad del gobierno el problema creado ni tampoco salvar empresas que caigan en la insolvencia, pero mientras el proceso de quiebra se activa hay que buscar las alternativas para paliar la situación de los trabajadores" (El Sur, 2 de Diciembre de 1990).

Los primeros días de diciembre, otra vez jugando en el terreno judicial, 2.150 trabajadores anunciaban una demanda colectiva contra Margarita Germany, demandando que fuese a remate el conjunto de la Sociedad de Inversiones Penco, y presentando una querrela por los perjuicios provocados. Además se iniciaban los trámites para demandar las indemnizaciones correspondientes a los despidos, mientras se comenzaban a anunciar los primeros re-contratos, ante lo que los trabajadores esperaban que estos se concretaran para la totalidad de ellos o, al menos, "la mayor cantidad posible", como señalaba el presidente del sindicato N°2. Él mismo respaldaba el hecho de que para la recontractación, "la hoja de vida era fundamental" (El Sur, 4 de Diciembre de 1990).

Agregaba además, que se mostraba confiado en la pronta solución del problema y esperaba, respaldado por las afirmaciones del síndico, que en los próximos días llegasen los dineros que permitirían cancelar en primera instancia el mes de noviembre, quedando adeudados octubre, septiembre y parte de agosto. Se mostró confiado también en que el Banco del Estado abriría una línea de crédito para pagar las indemnizaciones, porque "esto fue lo que le pedimos al presidente y él nos dijo que se iba a reunir con los ejecutivos del Banco para ver esta situación" (El Sur, 4 de Diciembre de 1990).

Según los dirigentes loceros, el pago de las indemnizaciones no debería demorar más de dos meses. El optimismo era reafirmado además, puesto que el 12 de di-

ciembre la industria reanudaba sus faenas y se anunciaba que ochocientos trabajadores podrían retornar en los próximos días a sus labores.

Pero el optimismo, como ya se estaba haciendo costumbre, duraba poco y daba prontamente paso a la desilusión. Dirigentes loceros que se encontraban en Santiago tramitando el crédito del Banco del Estado y la intervención de la autoridad para que se les concediera una prórroga para el pago de las deudas de luz, volvían sin resultados. La frustración de los trabajadores se hacía evidente y se sentían defraudados por todas las partes involucradas. Uno de ellos, Juan Mora Gómez, señalaba a El Sur que “hasta ahora no hemos recibido el apoyo que nos prometió el Presidente de la República. Nos sentimos burlados por los propietarios de la empresa. El síndico prometió contratar a todo el personal con 36 mil pesos, pero lo concreto es que son pocos los que han ingresado. Toda esta situación ha sido una humillación para los trabajadores” (El Sur, 15 de Diciembre de 1990).

## 2. Esperando La Licitación...Durante 3 Años

En adelante, la esperanza de los trabajadores estaría puesta en que la licitación de la empresa, declarada unidad económica con continuidad de giro, permitiese el pago de lo adeudado, especialmente las indemnizaciones, demandadas en los tribunales por los trabajadores con cargo a la licitación (El Sur, 3 de Enero de 1991).

Para lograr aquello, los trabajadores y la administración de la quiebra debían lograr normalizar lo más posible la producción, fundamento básico de la declaración de continuidad de giro. Avanzando en esa dirección la junta de acreedores acordó proseguir con la continuidad de giro y licitarla en esa condición, mientras continuaba la normalización de la producción, con 1.120 trabajadores contratados (El Sur, 23 de Enero de 1990).

Luego de un periodo de relativa latencia, los trabajadores volvían a dirigirse a la autoridad para solicitar el crédito (El Sur, 31 de julio de 1991). Este fue rechazado, generando una nueva desilusión para los trabajadores quienes señalaban que “nada, ni la ley ni los apoyos de autoridades de gobierno, ni el de los parlamentarios pudo romper la frialdad de los conductores del Banco. Los argumentos de rechazo no sólo manifiestan insensibilidad social, sino que además la falta de argumentos legales. Olvidan que el Banco es de todos los chilenos” (El Sur, 8 de Septiembre de 1991). La intendencia se comprometía a colaborar nuevamente en las gestiones para tramitar el crédito en cuestión (El Sur, 13 de Septiembre de 1991).

Rechazado el crédito, aun cuando se mantuvieron gestiones en pos de su consecución, la mayor esperanza que quedaba para los trabajadores era que la licitación de la industria se realizara lo antes posible y por un monto sobre los diez millones de dólares.

Comenzaría, a partir de ese momento, un largo ir y venir en torno a la licitación, con repetidas bajadas de la oferta por distintas razones que irían desgastando la paciencia de los trabajadores y del pueblo pencon entero. El periodo estaría cruzado además por la continua demanda de los trabajadores por el pago de los sueldos e indemnizaciones impagas y por la profundización del drama de los cesantes. Mientras tanto, la continuidad de giro cumplía sus objetivos y la producción iría alcanzando poco a poco los niveles estimados como óptimos, llegando a operar a plena capacidad (El Sur, 24 de octubre de 1991).

Frente a las primeras caídas de la licitación, en una reunión con autoridades, y a la que solamente asistieron 130 trabajadores, muestra de la desesperanza que cundía, los trabajadores hicieron saber su molestia por las promesas incumplidas y la falta de apoyo del gobierno. Señalaron, en un golpe duro a la autoridad, que aunque creían que esa etapa ya había pasado, querían darle una nueva oportunidad a la democracia, la que veían lejana en los tiempos que corrían (El Sur, 6 de Abril de 1992).

La respuesta, una enfática defensa de la democracia, corrió por parte del jefe del departamento jurídico de la tesorería general de la república. Este, junto con reafirmar el compromiso que "de buena fe" había realizado el presidente Aylwin, indicó que "el Chile de hoy es un Estado de Derecho y todo se debe solucionar por esa vía" y agregó, culpando la herencia de la dictadura, que "no hay organismos responsables, sino 17 años de liberalismo económico excesivo y pocos recursos humanos para controlar" (El Sur, 6 de Abril de 1992).

Mientras Palma era traído a Chile y se iniciaba el juicio contra él y sus cómplices, cuestión ampliamente celebrada por el gobierno, los trabajadores hacían sentir sus molestias con las autoridades, pasando de la decepción a la rabia y culpando al gobierno de no actuar más allá de las palabras. En ese sentido, Abel Roa señalaba que

"en Penco el gobierno no ha dado soluciones concretas. Incluso el presidente Aylwin cuando estuvo en nuestra comuna, le entregamos notas con situaciones puntuales. Jamás nos respondió. Le planteábamos la posibilidad de jubilación anticipada para algunos antiguos trabajadores de Lozapenco. No nos contestó el Presidente ni sus ministros. Nada" (El Sur, 17 de Junio de 1990).

Mientras que Juan Fierro, del sindicato N°3, planteaba una duro análisis señalando que "hoy vemos con amargura, con dolor, que el gobierno regional no se ha preocupado, no ha dado solución al drama social que vivimos...En las recientes elecciones municipales en Penco hubo muchos votos blancos y nulos. Eso es parte del malestar de la comuna por la política del gobierno" (El Sur, 17 de Junio de 1992).

Luego, en agosto, comenzaron una campaña en defensa de la industria cuya consigna era "Lozapenco se vende, no se regala", destinada a conseguir un buen pre-

cio mediante su licitación. Para ello proponían que el gobierno subsidiara la venta, enfatizando que “de la voluntad política del gobierno depende la situación de más de tres mil familias que pertenecían a la industria al momento de su quiebra” (El Sur, 1 de Agosto de 1992). El gobierno se comprometió a nombrar a una autoridad de alto nivel para estudiar la situación.

Durante el mismo mes, fracasaría nuevamente la licitación de la empresa, esta vez a causa de un bloqueo judicial realizado por Palma. La paciencia de los trabajadores se agotaba definitivamente, ya que la junta de acreedores bajaba el precio mínimo de licitación a 8,4 millones de dólares, frente a lo que los dirigentes loceros señalaban que “el gobierno le ha dado la espalda a los trabajadores de Lozapenco, al fijar sus representantes ante la junta de acreedores, por instrucciones del Ministerio de Hacienda, que el precio mínimo será solo de 347 mil UF” (El Sur, 7 de Agosto de 1992). Señalaban que con ese monto solamente se cancelarían las remuneraciones adeudadas, pero quedarían impagas las indemnizaciones y las cotizaciones previsionales. Indicaban luego, que había llegado el momento de volver a movilizarse, señalando que

“No nos queda otro camino que la movilización. Hasta aquí nos hemos sentado en la mesa de conversaciones y no hemos obtenido nada. La paciencia, el aguante, los cientos de kilómetros andados, los documentos presentados, se agotaron. Llamamos a todas las organizaciones políticas y sociales de Penco a movilizarse en defensa de la comuna” (El Sur, 7 de Agosto de 1992).

Abel Roa, por su parte, indicaba que “no vemos voluntad política del gobierno de ayudar a los trabajadores loceros. No nos vamos a quedar así, recogeremos nuestras banderas de lucha para evitar que se consuma esta injusticia. Queremos reiterar al presidente Aylwin: ¿Dónde quedaron sus promesas frente a los trabajadores?” (El Sur, 7 de Agosto de 1992).

Por último, Jorge Vilches planteaba otra arista de la decepción de los trabajadores, una de más largo plazo, señalando:

“¡Cuánta gente nuestra quedará frustrada!...Creímos y participamos votando por el No, después por el gobierno actual y por la democracia. ¿Y qué? En este momento hemos recibido un golpe muy duro, es una burla para los trabajadores...El gobierno, si es justo, debería darnos un subsidio, una indemnización por una sola vez. Así como el gobierno está dispuesto a entregar tan barata esta empresa, debe responderle a los trabajadores” (El Sur, 8 de Agosto de 1992).

Incluso Manuel Bustos, presidente de la CUT, se hacía parte de las críticas señalando que “ha faltado sensibilidad social y política por parte de los partidos políticos y, por supuesto, también del gobierno” y, dando cuenta del carácter neoliberal del Estado, indicaba que

"el gobierno no ha tenido la valentía para resolver el problema como empresa –por último del Estado- porque es viable y cuando hubiera resuelto sus compromisos, especialmente con los trabajadores, haberla licitado. Se prefiere regalar la empresa, recuperar lo que le prestó el Estado, pero no importa cuánto pierden los trabajadores. Ellos prefieren mil veces que se haga un negocio privado, pero no resolver por la vía de la unidad económica, en que el Estado interviene esa empresa, para resolver el problema a 3 mil trabajadores y a todo un pueblo" (El Sur, 8 de Agosto de 1992).

El 23 de septiembre, luego de realizar gestiones y algunas protestas menores en búsqueda de soluciones, más de 1.500 personas marchaban de Penco a Concepción, manifestación en la que participaron, junto a los trabajadores y sus familias, dirigentes provinciales y concejales, presionando por un cambio en la actitud del gobierno, pues, según expresaron, "se encuentran saturados de invitaciones a diálogos infructuosos y que esperan una respuesta antes del 13 de octubre, fecha de la licitación" (El Sur, 23 de Septiembre de 1992).

Las principales demandas de los trabajadores, eran: una entrevista con el Presidente Aylwin, el nombramiento de un coordinador que se encargase de la crisis de la empresa y que el Estado asumiera la deuda que no podía cubrir la venta de la empresa (La Nación, 24 de septiembre 1992).

Ante las nulas respuestas, una semana después, luego de una marcha de 700 trabajadores, un grupo de 200 de ellos intentó tomarse el municipio de Penco. En una carta entregada al alcalde, los trabajadores señalaban que "nuestra movilización solamente terminará cuando el gobierno asuma el deber patriótico de entregarnos una respuesta que dé solución a los problemas que nos aquejan". Además la carta planteaba que el hecho que Lozapenco fuera una empresa privada, "no justifica que el gobierno se inhiba de socorrer a los trabajadores, privándolos del amparo a que moralmente tienen derecho." (Punto Final, Octubre de 1992). La movilización terminó con 70 detenidos y 12 trabajadores heridos.

El remate en tanto, se canceló los primeros días de octubre, y los trabajadores solicitaban al gobierno el nombramiento de un coordinador entre las tres partes involucradas –empresa, gobierno, trabajadores-, enfatizando la necesidad de que el gobierno se hiciera cargo de la situación a pesar de ser un problema de una empresa privada. Dicho interlocutor fue nombrado el 11 de octubre, ante lo que los dirigentes señalaron que ello les subía el ánimo y les abría una luz de esperanza, abriendo, a pesar de que no terminarían con las movilizaciones, un nuevo y largo período de latencia. El interlocutor funcionaba como una excelente medida de contención, toda vez que la situación se mantendría igual para los trabajadores loceros y para los cesantes. Durante ese periodo se asistió a nuevos fracasos de la licitación.

En marzo de 1993, el presidente Aylwin realizó una nueva visita a la zona. En una actividad realizada en Lirquén, Aylwin señaló su permanente preocupación por la situación de Lozapenco y adelantó que de ahí en adelante atendería personalmente a los dirigentes. Luego de ser increpado por un trabajador, Aylwin señaló que: “el gobierno no puede andar solucionando todos los problemas de empresas particulares que fracasan. Hemos puesto recursos y hemos ayudado permanentemente en la medida de las posibilidades, frente a una empresa que es una empresa privada que fracasó y lo hemos hecho pensando en ustedes” (El Sur, 5 de Marzo de 1993).

### 3. El Remate Y Nuevas Movilizaciones

Finalmente, y luego de dos nuevas postergaciones, el 21 de octubre de 1993 se llevó a cabo el remate de Lozapenco. Esperanzado, el presidente del sindicato N°2 expresaba antes que se efectuara que “ojalá, Dios quiera que el empresario que se adjudique la industria sea una persona de una sensibilidad social, que tenga dinero, que tenga las ganas de trabajar. Porque los trabajadores estamos dispuestos a colaborar, como lo hemos hecho a través de la historia locera” (El Sur, 21 de Octubre de 1993). Señalaba además, la inquietud que atravesaba al conjunto de los trabajadores por el precio de la subasta y por la inseguridad de mantener sus trabajos.

Lozapenco fue adquirida finalmente por “Comercializadora de Productos S.A.”, a un monto de 5,8 millones de dólares, poco más de la mitad del monto ideal planteado por los trabajadores y lejos incluso del 8,5 que planteaba el alcalde de Penco como mínimo para una solución.

Los trabajadores, consternados ante la noticia no demoraron en expresar su decepción. El lamento no se expresaba solamente desde los trabajadores loceros, sino desde el conjunto de la comuna, especialmente de los comerciantes (El Sur, 24 de Octubre de 1993).

A fines de octubre comenzaron a notificarse los despidos correspondientes al traspaso de la propiedad. Al reclamar ante las autoridades problemas con el pago de los desahucios, la respuesta del Intendente fue que ello debían resolverlo los tribunales (El Sur, 30 de Octubre de 1993).

A fines de noviembre se iniciaron 600 recontrataciones por periodo de un mes. Los criterios de contratación distaban de una racionalidad solidaria. Dirigentes y trabajadores viejos, pero sin edad de jubilar fueron los primeros en ser despedidos.

El Director del Trabajo, Jorge Morales, señalaban tomando distancia al respecto, que “la empresa está ejerciendo sus facultades legales y tenemos que respetarla... si hay una situación que tratar convocaremos a las partes para analizar cada caso” (El Sur, 1 de Diciembre de 1993).

Mientras se realizaban gestiones tendientes a resolver el problema de la cesantía que se profundizaba en Penco, los trabajadores decidieron realizar nuevas movilizaciones y tomaron medidas radicales. Siete dirigentes loceros iniciaron una huelga de hambre indefinida en protesta por el no pago de 480 millones adeudados por conceptos de indemnizaciones correspondientes a la continuidad de giro de la empresa a 1.370 trabajadores (El Sur, 20 de Diciembre de 1993).

En solidaridad con la huelga de hambre, se convocaba a un paro generalizado de actividades de la comuna para el día siguiente, mientras 400 trabajadores marchaban por las calles de Penco. Las demandas de la comunidad incluían además la necesidad de contar con alternativas que permitieran reactivar la economía de Penco y generar nuevas fuentes de empleo (El Sur, 22 de Diciembre de 1993).

El día del paro, se hicieron sentir, a las 11 de la mañana, las sirenas del cuerpo de bomberos, y comenzó el cierre total del comercio y la paralización de las tres líneas de locomoción colectiva, mientras cerca de mil personas cortaban el tránsito del acceso a Concepción por cerca de una hora y media, movilización legitimada incluso por el alcalde Fuentealba (La Nación, 24 de diciembre 1993).

El recién electo diputado por la zona Alejandro Navarro, señalaba lo legítimo de la paralización y, buscando reforzar los lazos entre el gobierno y el movimiento sindical, indicaba que el gobierno debiese apoyarla y recordó que "la lealtad de la mayoría de los pencones con la concertación y con el proceso democrático ha quedado demostrada en los comicios electorales que se han realizado desde 1988 a la fecha" (El Sur, 23 de Diciembre de 1993).

El día 23, se efectuó una marcha en la que participaron más de 1.500 trabajadores acompañados por parlamentarios, el alcalde, concejales, dirigentes de las juntas de vecinos, comerciantes, trabajadores del Puerto de Lirquén y ex trabajadores loceros. Según indicaba en El Sur, la mayoría de los gritos y consignas de los manifestantes eran de crítica al gobierno ante la nula ayuda prestada (El Sur, 24 de Diciembre de 1993).

El 25 de diciembre, los ex presidentes de los sindicatos 1 y 2 junto con agradecer el apoyo de la comunidad, señalaron haber quedado insatisfechos con la última visita de las autoridades pues no llevaron nuevos planteamientos, reafirmando que la huelga continuaba hasta que surgiera una solución concreta. (El Sur, 26 de Diciembre de 1993).

Finalmente, el 28 de diciembre, luego de 178 horas de huelga de hambre y ante las gestiones de dirigentes sindicales con el alcalde, concejales y parlamentarios locales, y a la movilización de toda la comuna, se logró un acuerdo para que se pagaran las indemnizaciones adeudadas el día 4 de enero. Con este logro, señalaron los dirigentes, sólo se avanzaba en una de las demandas exigidas, y la población debía mantenerse unida en función de fortalecer el movimiento de la comuna para sacarla de la crisis social y económica (La Nación, 28 de diciembre 1993; El Sur, 29 de Diciembre de 1993).

Efectivamente, los dramas sociales continuarían en Penco, afectado gravemente por la pobreza y la cesantía, completando un ciclo de precarización de las condiciones laborales y de vida que se vivía en el conjunto de la octava región.

## VII. A MODO DE “REMATE”

El caso de los trabajadores loceros ilustra de buena manera las formas como el movimiento sindical cae en la desmovilización. Confiando en la voluntad política del gobierno, los trabajadores se mantienen constantemente privilegiando las gestiones con las autoridades y los trámites judiciales para resolver su problema, por sobre la movilización, a pesar de mostrarse efectiva en distintos momentos del conflicto. A ratos, incluso, confiando en una supuesta consciencia social del empresariado que podría hacerse cargo del problema social, privilegiando ello por sobre la ganancia.

Dejados de lado por el gobierno, que se esforzaba en contener a través de la renovación permanente de las confianzas, y a la deriva de los procesos legales, el movimiento sindical de los trabajadores loceros careció de una posición sólida y clara y evidenció su falta de proyecto frente a las nuevas realidades que vivía el mundo del trabajo. Su legítima demanda de mantener la fuente laboral se dejó en manos de buenas voluntades de terceros, pero sin tener una propuesta que apelase al control estatal de la empresa o a la toma de la misma.

De la misma forma, y aunque no ha sido tema de este trabajo, los trabajadores carecieron de proyecto, y cayeron en la misma dinámica desmovilizadora frente a la situación de la cesantía, siendo incapaces de elaborar y pelear una propuesta de reconversión productiva no precarizante como la que definió el gobierno.

Esta dinámica, en la que lentamente se rompen las confianzas hacia un gobierno en el que se tenían puestas grandes esperanzas para hacer prevalecer los intereses de los trabajadores, sumada a la falta de un proyecto de clase y a la precarización laboral que comienza a experimentarse, genera una desmoralización y desmovilización que ayudó a configurar un periodo de latencia del movimiento sindical.

El gobierno, por su parte, muestra a través de este caso, las orientaciones que mueven su accionar político. En primer lugar, mostrando su nuevo papel de árbitro de las relaciones entre privados, colocándose lejos del rol de defensor de los trabajadores que estos esperaban. Luego, incumpliendo promesas que ellos mismos levantaron, como fue el caso del eterno aplazamiento del crédito que el gobierno prometió negociar con el Banco del Estado. Por otra parte, el gobierno mostraba su carácter neoliberal, no solo por su nuevo rol arbitral, sino por la forma en que consolidó, a través de este conflicto, la reestructuración económica de la región, desindustrializando y promoviendo la instalación de grandes industrias extractivas y tomando escasa iniciativa en cuanto al problema de la cesantía que comenzó

a afectar a la comuna de Penco. Dicho proceso de reestructuración es un desafío pendiente para futuras investigaciones.

Por último, es importante destacar la sensación de orfandad y desilusión que muestran los pencones, relacionando su apoyo al gobierno y su lucha antidictatorial con la forma como éste respondió ante la situación particular. Dicha desilusión y la falta de una alternativa, pueden comenzar a explicar, creemos en parte, la desmovilización y despolitización del movimiento sindical y de la sociedad en general.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aravena, A. (2008). “Reflexiones metodológicas para el estudio del sindicalismo en Chile: aportes para un debate necesario”. En *Alternativa*. Santiago: ICAL, N°25, mayo. pp. 8-22.
- Aravena, A. (2009). “El conflicto laboral en Chile. Perspectivas de análisis y tendencias emergentes”, en Aravena, Antonio y Núñez, Daniel (editores). *El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primea década del siglo XXI*. Santiago: ICAL.
- Aravena, A. (2011). “Los gobiernos de la concertación y el sindicalismo en Chile”, en *Revista Trabajo: Mexico*, Julio-Diciembre. pp. 113-133
- Aravena, A. y Rojas, J. (1999). “El mundo sindical y el trabajo asalariado en Chile.” En Escobar, P. (ed.). *Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa*. Santiago: PET-LOM.
- Albuquerque, M. (1992). “El sindicalismo en el primer año de gobierno democrático.” En Echeverría, F. y Rojas, J., *Añoranzas, sueños, realidades Dirigentes sindicales hablan de la transición*. Santiago: SUR.
- Álvarez, R. (2006). “La identidad precaria: sumisión y resistencia laboral en Chile. El caso de los trabajadores precarios del salmón”. En *Alternativa*, Santiago: ICAL, N°24, diciembre.
- Araya, R. (2011). “El acuerdo Marco Chileno. ¿Un caso frustrado de pacto social?” En *Tiempo Histórico*, Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Primer semestre. pp. 43-63.
- Campero, G. (1992). “El movimiento sindical: situación y perspectiva”, en Echeverría, F. y Rojas, J., *Añoranzas, sueños, realidades Dirigentes sindicales hablan de la transición*. Santiago: SUR.
- De la Maza, G. (1999). “Los movimientos sociales en la democratización de Chile”. En Drake, P. y Jaksic, I. (comp.) *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM.
- Echeverría, F. y Rojas, J. (1992). *Añoranzas, sueños, realidades. Dirigentes sindicales hablan de la transición*. Santiago: SUR.
- Escobar, P. (ed.) (1999) “*Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa*”, Santiago: PET-LOM.
- Espinosa, M. y Yanes, H. (1999). “Diagnóstico sobre sindicalismo en regiones”. En *Aportes al debate laboral N°3*, Santiago: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo.

- Frías, P. (1991). *El movimiento sindical chileno en el primer año de transición a la democracia*. Santiago: PET.
- Frías, P. (2008). *Desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI*. Santiago: Universidad Central-CLACSO.
- Fuentes, C. (1999). "Partidos y coaliciones en el Chile de los noventa. Entre pactos y proyectos". En Drake, P. y Jaksic, I. (comp.) *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM.
- Garretón, M. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago: Arcis-Clacso. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20121121122525/NeoliberalismoCorregido.pdf>
- Gutiérrez, F. (2012) "Núcleo flexible y núcleo estable: la posibilidad de un nuevo sujeto político en el proletariado del cono sur." En Aguilar, P. (et. al.) *Las deudas abiertas de América Latina*, CLACSO.
- Gutiérrez, F. (2013). "Oportunidades y peligros del pluralismo sindical en el Chile post-transición". En *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*.
- Guzmán, C. (2004). "Sindicalismo, neo-corporativismo y transformismo". En: *Sociedad, trabajo y neoliberalismo. Apuntes de las escuelas de formación sindical*. Santiago: ICAL.
- Guzmán, C. (2012). *Los trabajadores en tiempos del neoliberalismo, el caso de Argentina y Chile*, CLACSO.
- Henríquez, H. (1999) "Las relaciones laborales en Chile ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio para la dispersión?", en Drake, P. y Jaksic, I. (comp.) *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM.
- Herreros, F. (2004). "Presentación", en *Sociedad, trabajo y neoliberalismo. Apuntes de las escuelas de formación sindical*. Santiago: ICAL.
- Lechner, N. (2002) "*Las sombras del mañana, la dimensión subjetiva de la política*". Santiago: LOM.
- Maturana, V. y Mac-Clure, O. (1992). "La negociación colectiva en Chile", en VV.AA. *El sindicalismo latinoamericano en los 90. Vol. II Negociación colectiva y sindicatos*. CLACSO.
- Morris, P. (1998) "Sindicatos en receso: la otra cara de la estabilidad laboral." *Aportes al debate laboral* N°4, Santiago: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, Abril.

- Moulian, T. (2002) “Chile actual, anatomía de un mito”. Santiago: LOM.
- Moyano, C. (2011) “El Partido Comunista y las representaciones de la crisis del carbón: la segunda renovación”. En *Revista Tiempo Histórico*, Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano, primer semestre 2011. pp. 29-42.
- Núñez, D. (2004). “El trabajo desregulado en Chile. Crónica de la historia oculta de una década de desarrollo capitalista”. En Álvarez, R. y Aravena, A.(ed): *Los trabajadores y la nueva cuestión social. Repensando la realidad laboral y sindical en Chile.*”, Santiago: ICAL.
- Vitale, L (1996). *Cronología comentada del movimiento sindical de mujeres en Chile y del movimiento sindical chileno*. Santiago: LOM.

## PRENSA

- El Sur.
- La Nación.
- Punto Final.

# EL “REGIONALISMO POLÍTICO NO PARTIDISTA” EN EL CHILE ACTUAL: ¿REPOLITIZACIÓN CIUDADANA O EXPRESIÓN NEOLIBERAL?

## *THE “POLITICAL REGIONALISM WITH NO PARTY POLITICS IN PRESENT DAY CHILE: CITIZEN RE-POLITICIZATION OR NEOLIBERAL EXPRESSION?”*

Patricio Ruiz Godoy\*

### **RESUMEN:**

Este artículo busca indagar en el nacimiento y desarrollo de lo que denominamos el “regionalismo político no partidista” (RPNP), que puede ser definido como un conglomerado de agrupaciones regionales que buscan influir en el debate nacional sobre regionalización y descentralización en Chile desde la década de los ochenta a la actualidad. Nuestra hipótesis principal es que este fenómeno corresponde a un producto arquetípico del Chile neoliberal, pues presenta un discurso enfocado en el crecimiento económico, el fomento a la inversión privada y la aversión a la política partidista. Las fuentes a utilizar fueron principalmente los documentos emanados desde las organizaciones que forman el RPNP, así como periódicos regionales y bibliografía específica.

**Palabras clave:** Regionalismo – Neoliberalismo – CORCHILE –  
CONAREDE – Corporaciones de desarrollo.

### **ABSTRACT:**

*This article seeks to go through the birth and development of what we call the “political regionalism with no party politics (RPNP)”, that can be defined as a conglomerate of regional groups that seek to influence the national debate about the regionalization and decentralization in Chile since the 80s until now. Our main hypothesis that this phenomenon is an archetypical product of the neoliberal Chile, since it presents a speech focused on the economical growth, the encouragement of private inversion and the aversion to the party politics. Our sources were mainly documents from organizations that are part of the RPNP, as well as regional press and specific bibliographies.*

**Keywords:** Regionalism – Neoliberalism – CORCHILE – CONAREDE –  
Development corporation..

**Recibido:** 05 de Octubre de 2013  
**Aceptado:** 20 de Diciembre de 2013

**Received:** October 05, 2013  
**Approved:** December 20, 2013

\* Chileno, Estudiante Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: patricio.ruiz@usach.cl

## I. INTRODUCCIÓN

La implantación del modelo neoliberal en Chile no se redujo sólo a un aspecto económico, sino que fue una verdadera “revolución” que afectó a todas las esferas de la sociedad. La política no escapó a esto, redefiniendo el papel que los principales actores políticos habían tenido en la historia del país, deslegitimando a quienes habían sido el eje del sistema político nacional: los partidos. Desde este contexto, surge un “nuevo Chile”, el cual generaría novedosos tipos de expresiones políticas, más vinculadas a intereses específicos o sectoriales, entre los que se cuenta al regionalismo, el cual será nuestro objeto de estudio. Específicamente nos centraremos en varios organismos regionales agrupados en la Corporación para la Regionalización de Chile (CorChile) y el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (CONAREDE). Ambos organismos nacen desde la octava región, articulados por la Corporación Privada del Desarrollo de la Región del Biobío (Corbiobío). Estos tres organismos, junto a otras corporaciones de desarrollo regional, conforman lo que denominamos el “regionalismo político no partidista” (RPNP), diferenciándose del regionalismo partidista, cuya expresión actual sería el Partido Regionalista de los Independientes (PRI). Si bien el desarrollo de este último es paralelo al del RPNP e incluso en varias coyunturas se entrelazan, creemos responden a fenómenos distintos, pues el contexto de la política partidaria genera dinámicas distintas a las de un movimiento que se desarrolla en la sociedad civil<sup>1</sup>.

Los años a investigar fueron desde 1987, cuando se funda CorChile, ya que consideramos que en esta fecha se forma por primera vez un movimiento homogéneo regionalista a nivel nacional hasta 2007, cuando Michelle Bachelet anuncia la elección democrática de los Consejeros Regionales, destacándose como el gran hito del movimiento hasta el día de hoy.

La problemática a resolver será el determinar el carácter de este organismo como expresión política del “nuevo Chile” neoliberal. Nos interesa entender si la formación y desarrollo de estas agrupaciones corresponde a un fenómeno propio del neoliberalismo, es decir, un movimiento despolitizado, preocupado de intereses sectoriales e incluso utilizado por la clase política como grupo de presión para atacar o defender a los gobiernos de la Concertación o si, por otra parte, responde a un proceso de repolitización ciudadana, generado por las deficiencias de un sistema político y económico excesivamente centralizados, que tiene como objetivo la participación ciudadana en el debate nacional. De esta manera, la pregunta central de esta investigación es: ¿Fue el regionalismo político no partidista una expresión propia del Chile neoliberal o correspondió más bien a un proceso de repolitización ciudadana?

Existe un consenso generalizado sobre los efectos de la aplicación del neoliberalismo en las sociedades y su relación con la despolitización ciudadana. Lo que habría ocurrido en América Latina desde la década de los noventa (aunque en algunos

<sup>1</sup> Su relación será analizada en una sección posterior del artículo.

países este proceso fue anterior, como en el caso de Chile) en relación con la ciudadanía es que esta habría experimentado una involución en lo que respecta a sus derechos políticos, sociales y económicos. En el caso de la política, algunos autores remarcan la existencia de dictaduras neoliberales y/o "democracias con adjetivo", las cuales no cumplirían los requisitos mínimos para considerarse democráticas (Gómez, 2011; Emir y Gentili, 2003). Esto habría producido el efecto de separar a las estructuras políticas tradicionales de la democracia (los partidos políticos, el parlamento, etc.) de la sociedad, generando una distancia insalvable entre ambos (Harvey, 2007; De la Maza, 2001). Existiría una separación entre lo social y lo político, producido por la lejanía entre las demandas nacionales y el diario vivir de la ciudadanía, quien ya no ve en los proyectos globales (meta-relatos) la solución a su problemática doméstica (Baño, 1985). Para explicar este fenómeno en Chile, una interpretación bastante aceptada es la de Tomas Moulian (1997; 1999), quien alude a una "jaula de hierro" conformada tanto por una "democracia protegida" como por las relaciones sociales que se generan producto del neoliberalismo económico, tendientes a promover el individualismo y la satisfacción personal a través del consumo, satisfacción que con anterioridad al neoliberalismo se habría suplido, en parte, con la participación política de la ciudadanía. Todo esto significaría un deterioro inevitable de las estructuras partidarias, las cuales ya no podrían realizar correctamente la intermediación entre el Estado y la sociedad civil, función que habitualmente se le otorga a estos actores (Luna y Rosenblatt, 2005).

Ahora bien, a contrapelo del proceso de separación de la política y lo social, se daba, en forma simultánea, la revalorización, por distintos actores sociales, de la sociedad civil como un espacio de realización de la ciudadanía (Gómez, 2011; Hopenhayn, 2005). Si los partidos políticos ya no podían representar los intereses de los ciudadanos, era necesario que surgieran nuevas expresiones políticas, con orgánicas y dinámicas distintas a la partidaria tradicional, independiente de su ideología. La caracterización de estos nuevos grupos ha tenido dos aprontes metodológicos relevantes: por un lado, tenemos los aportes realizados desde la ciencia política, bajo la denominación de grupos de interés y grupos de presión. Estos serían estructuras colectivas de promoción de intereses, que van por un carril paralelo a la representación parlamentaria<sup>2</sup>. Se diferencia entre grupos de interés y de presión por su capacidad para influir directamente en la elaboración de políticas públicas. El segundo (presión), a diferencia del primero (interés) tiene lo que se denomina "poder de veto", es decir, la capacidad de movilizar la suficiente influencia para determinar la elaboración y aplicación de una política pública determinada (Tsebelis, 2006). El otro enfoque se ha dado desde lo que se conoce como los "nuevos movimientos sociales". Frente a una supuesta debilidad de las dictaduras militares, comenzaron a surgir nuevos actores sociales que encabezarían la lucha democratizadora (De la Maza, 2005). Muchas veces vinculados a la defensa de los derechos humanos, estos movimientos se habrían caracterizado por tener orgánicas más bien horizontales, gracias a la relativamente pequeña base social que mante-

2 Existe una amplia bibliografía desde la ciencia política que abarcan estos conceptos. Un buen resumen se encuentra en Mella (2012).

nían y sus objetivos limitados. En general, la mayor parte de los autores comparten que este tipo de expresiones políticas se caracterizaba por su corta existencia, pues sus objetivos estaban muy vinculados al derrocamiento de las dictaduras, por lo cual la ola democratizadora de principios de los noventa, más la cooptación en algunos países por parte de los conglomerados de centro-izquierda que tomaron el poder, hicieron que perdieran su preponderancia (Almeyra y Jerez, 2009).

Tomando lo anterior en cuenta, nuestra hipótesis sostiene que el RPNP fue un fenómeno propio del Chile neoliberal, pues sus discursos y acciones no tendían a criticar las bases del sistema político o económico. Se trató de un grupo de presión que buscaba reivindicaciones más bien sectoriales, relacionadas con una mejor distribución económica y política para las regiones, pero que no presentaba un proyecto político concreto ni se vinculaba a la sociedad de forma orgánica. Era integrado mayoritariamente por académicos y políticos pertenecientes o con nexos claros a los partidos tradicionales (especialmente la DC, RN y UDI), no contaba con una base social definida y sus decisiones eran tomadas de forma vertical. Por otra parte, su discurso mantenía un fuerte componente anti-partidista, a pesar de que varios de sus dirigentes pertenecían a partidos o incluso, ostentaban cargos en el parlamento.

## II. CRECIMIENTO Y ARTICULACIÓN: CORCHILE EN LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 90

En los albores de la democracia post-dictadura, el RPNP ya constituía un actor relevante en varias regiones del país, aunque su núcleo central seguía siendo la octava región con Corbiobío. Esta fue la primera corporación de desarrollo regional relevante del país, creada en 1984 por el ingeniero Claudio Lapostol Maruejols, quien a la fecha era el presidente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío (CIDERE), y gerente de Cementos Biobío. En definitiva, se trataba de un técnico, vinculado al ala derecha de la Democracia Cristiana, aunque opositor a la dictadura militar (El Sur, 25 de noviembre de 2008, p. 34). El mismo movimiento planteaba que Lapostol sentía:

“frustración al ver que en la ciudad de Santiago se construían las Líneas Uno y Dos del Metro, con recursos que, a ese nivel, era prácticamente todo lo que podía invertir el sector público en Chile. Y en la región existían caminos como el de Concepción a Cabrero, tan malo que los accidentes eran cosa de todos los días, en muchos casos con muertes que lamentar” (CONAREDE, 2011, p. 12).

En 1982 y 1983 Lapostol formó un grupo informal en Concepción con distintos empresarios, académicos y profesionales que se habría dedicado a “un trabajo silencioso y sostenido”. Según el propio ingeniero, no menos de veinte veces se reunió el grupo para analizar un tema que, hasta donde lograron saber, no había sido

abordado seriamente por nadie de la sociedad civil. Dos años en los que habrían recolectado suficiente información para finalmente plantear que

"(...) ya teníamos bien claro que el fenómeno que estaba ocurriendo en Chile era el centralismo, típico de Latinoamérica y de otros países. Típico también de dictaduras. En cambio, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Francia, eran países que se administraban descentralizadamente y que habían dado un salto al desarrollo". (CONAREDE, 2011, p. 14)

A fines del año 83, ya con propósitos definidos, Lapostol convocó a una reunión que se realizó en abril de 1984 y que se estableció como la partida de nacimiento de la Corporación para la Regionalización del Biobío, Corbiobío. "Invitamos a las empresas, medios de comunicación, universidades, bomberos, Cruz Roja... a numerosas fuerzas sociales con mucha representatividad, pero que nunca habían trabajado unidas", recuerda de la que es considerada una reunión histórica (CONAREDE, 2011, p.15).

El nacimiento de Corbiobío inauguró un proceso explosivo de creación de corporaciones regionales en Chile, siendo las más fuertes aquellas de las regiones de Valparaíso (Corquinta) y de Aysén (Codesa) (Abalos, 2003). Finalmente, en 1987 surgió la Corporación para la Regionalización de Chile, CorChile, que preside el mismo Lapostol, uniendo a representantes de todas las regiones a través de las corporaciones de desarrollo recién creadas. Su principal instancia de reunión y organización serían las Jornadas Nacionales de Regionalización, en donde expondrían al país sus principales principios y propuestas.

La década del noventa comienza con la VII jornadas realizada en Valparaíso en mayo de 1990. Luego de seis jornadas realizadas en los ochenta, los regionalistas lograron consumar el proyecto de crear una suerte de coordinadora nacional de las corporaciones de desarrollo, la cual fue llamada "Corporación para la Regionalización de Chile" (CorChile). Esta se transformó con los años en la institución central del RPNP, desde la cual se articularían los distintos intereses regionales. Su presidente recién electo, Claudio Lapostol, expresaba al momento de inaugurar las jornadas una de las máximas que sostendrá el RPNP

"La situación descrita (falta de regionalización) motivó a personas de todas las regiones a organizarse para trabajar por un desarrollo armónico del país, por un trato equitativo para todos los chilenos, buscando igualdad de oportunidades y capacidad de decidir sobre lo que cada uno de nosotros, a cada Comunidad, interesa. De aquí nace la Corporación para la Regionalización de Chile, CorChile, como expresión nacional de personas que desean el desarrollo armónico del país, sin estar sujetas a vínculos político-partidistas, ni confesionales, ni a intereses particulares" (CorChile, 1990, p. 15).

Esta declaración de principios marcó dos pilares centrales del RPNP a lo largo de la década del noventa: 1) la noción de mayor autonomía para que cada región elija el destino de sus recursos y 2) su pretensión de ser un grupo de gente alejado de la política tradicional y la elite, dándole un cariz supuestamente “ciudadano”. Este segundo punto se ve aclarado cuando contraponían la organización partidista tradicional con lo que llamaban “La Red”, que sería una

“(…) unión de personas, como amigos, que se reúnen en relación a un grado de confianza para afrontar problemas o intercambiar información. (...) las redes son una forma de organizarse que no corresponde a una organización convencional, tal como las conoce la sociología y la política. Estas redes corresponden a una iniciativa nueva del hombre por recuperar sus niveles de decisión y de soluciones de problemas, es decir su racionalidad” (CorChile, 1990, p 17).

Finalmente, Lapostol expresaba que esta organización en redes pretendía evitar la peligrosidad de lo público, pues esta habría

“invadido todos los ámbitos de la vida, desconociendo lo específico en las instituciones que son pre-políticas y extra políticas. (...) en todo proyecto democrático debe rechazarse el modelo de liberación de las instituciones por posiciones foráneas partidistas y empresas por la liberación de las instituciones por las instituciones mismas, por lo que representan y hacen” (CorChile, 1990, p. 18).

Terminaba su alocución con una frase que creemos representó fielmente el espíritu del RPNP: “El intervencionismo estatal llega tan lejos como lo permite la irresponsabilidad ciudadana” (CorChile, 1990, p 18). Efectivamente, el discurso que subyace a la declaración de principios de CorChile planteaba una suerte de exaltación de la sociedad civil como motor del desarrollo regional. La política y el Estado serían los “enemigos” de los regionalistas, los cuales dejan de lado el desarrollo de las regiones debido a sus intereses electorales. Incluso fueron más allá, declarándose partidarios del rol subsidiario del Estado planteando que: “El protagonismo en el devenir del proyecto país lo han ido asumiendo los privados siendo el Estado consecuente con su rol subsidiario que le corresponde, derivado de la aplicación de un modelo basado en la economía social de mercado” (CorChile, 1990, p 64).

A pesar de lo anteriormente descrito, las acciones del RPNP no se condecían muchas veces con esta supuesta aversión a lo público. Por ejemplo, en estas jornadas de regionalización expusieron sus puntos de vista tanto el Presidente Patricio Aylwin como el Intendente de Valparaíso, Juan Andueza Silva y el Vicepresidente del Senado Beltrán Urenda Zegers (CorChile, 1990, pp. 105-124). Esto se repetirá durante la realización de todas las jornadas, donde altos personeros de gobiernos, incluyendo al futuro presidente Frei Ruiz-Tagle, también expondrían sus planteamientos. Pero lo cierto es que hasta 1995, no se vislumbran mayores vínculos entre el mundo político tradicional y el RPNP. La actividad de CorChile se reduce prin-

principalmente a la realización de las jornadas nacionales y a la coordinación de las distintas corporaciones de desarrollo regional.

En 1992 se desarrollaron las IX Jornadas de Regionalización en Coyhaique, otro reducto fuerte del RPNP gracias a la Corporación para el Desarrollo Regional de Aysén (Codesa). Estas llevaban por título "La Descentralización: herramienta del desarrollo" y se realizaron entre el 24 y 25 de abril (CorChile, 1992). Si bien los discursos inaugurales mantuvieron la misma tónica de las jornadas anteriores -enfaticando en su aversión a lo público, la exaltación de la sociedad civil como actor relevante y la independencia del movimiento- comenzaba a mostrarse una faceta importante para comprender el fenómeno del regionalismo político, como lo fue su vinculación al mundo industrial. Estas corporaciones de desarrollo agrupadas en CorChile mantuvieron fuertes lazos con los gremios comerciales e industriales de cada región, ya sea tanto a nivel de redes como de financiación de proyectos. Por ejemplo, una de las conclusiones que alcanzó la primera comisión de trabajo que se forma en estas jornadas con el objetivo de delinear "acción y estrategia para la gestión de CorChile" planteaba que se debían: "fortalecer las Corporaciones Regionales, integrando a todas las fuerzas vivas de la comunidad de sus regiones. Como ejemplos: Los clubes Rotarios y Leones, las Cámaras de Comercio, de la Construcción, Turismo y otros..." (CorChile, 1990, p. 83). De hecho, en estas jornadas expusieron sus planteamientos la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción (CCPC) y la Agrupación de Empresarios Industriales del Sur de Chile. Estos tres organismos comparten en sus intervenciones que el excesivo centralismo del país repercute primordialmente en la falta de oportunidades para los empresarios de región, especialmente en lo que se refiere a créditos y fomento a la industria. Los industriales de Antofagasta plantearon que

"(...) apoyamos a CorChile en su misión de lograr una verdadera regionalización en nuestro país, pues esto no sólo implica obtener mayor cantidad de recursos desde el gobierno central hacia las regiones, sino que promover un real desarrollo de estas a través de la iniciativa privada, actividad fundamental para el crecimiento armónico de Chile" (CorChile, 1990, pp. 29-30).

Algunos autores ya han destacado este marcado tinte pro-empresa privada del RPNP, como es el caso de Gonzalo de la Maza, el cual plantea que estos grupos normalmente nacen en el seno de élites regionales disconformes con la rentabilidad de sus negocios al compararse con los grandes grupos económicos surgidos en los años ochenta, cuyos centros de operaciones financieras se encuentra en la región Metropolitana (De la Maza, 2012, pp. 250-251). En el resto de las jornadas también encontramos fuerte presencia empresarial, como son los casos de la ENAP Magallanes, Confederación de la Producción y el Comercio XII región y la Asociación de AFPs en las XII jornadas de Punta Arenas (CorChile, 1996) o la Asociación de Industriales de Atacama y SOLNET Ltda. en las XIII jornadas realizada

en Copiapó (CorChile, 1997). En todas estas instancias, los empresarios mostraron total respaldo a la labor de CorChile, homologando la demanda regionalista a la necesidad de contar con mayores beneficios en materia de políticas públicas, incluyendo mayor flexibilidad laboral, descuentos tributarios a las pymes regionales y subvenciones para la exportación de sus productos<sup>3</sup>. Claramente se fue delimitando un discurso bastante proclive al sistema económico imperante durante las últimas décadas de nuestro país, donde los conceptos de estado subsidiario, desarrollo y economía social de mercado se fundían con la demanda regionalista en una amalgama cuyo eje articulador se encuentran en lo que denominamos el RPNP.

Un último rasgo que nos gustaría destacar es la vinculación entre el RPNP y las universidades regionales, pues este nexo fue el que posteriormente permitió al movimiento influir de manera directa a nivel de formulación de políticas públicas. Así, nos encontramos que desde la formación de CorChile, el ámbito de la educación superior fue concebido como un aspecto primordial en su organización. En este punto resulta insoslayable referirse a Heinrich Von Baer, Rector de la Universidad de la Frontera entre los años 1987 y 2002, quizás la segunda figura más importante del RPNP luego de Claudio Lapostol. Von Baer fue quien se encargó principalmente del vínculo entre las universidades regionales y el RPNP, el cual posteriormente se vería materializado en el acuerdo Universidades-Gobiernos Regionales que analizaremos más adelante. Lo importante ahora es destacar que Von Baer es un prolífico académico (Ingeniero Agrónomo) que hizo de la causa regionalista su meta. Con vínculos familiares directos con la UDI (hermano de Erick Von Baer y tío de Ena Von Baer, ambos dirigentes del partido), basó su activismo político en la defensa de la investigación regional como única forma de superación de la dependencia económica de las regiones a Santiago. Durante la primera mitad de los noventa, su participación en el RPNP se realizó principalmente a través de su papel en la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y la presidencia de CorpAraucanía.

En una entrevista realizada al Diario El Sur con motivo de estas jornadas, Von Baer planteo que las universidades regionales deben ser el “centro neurálgico de la descentralización”, pues sólo ellas tienen el potencial de “conjugan investigación, desarrollo, productividad y recursos humanos que sirvan a las propósitos de las regiones” (Diario El Sur, 24 de julio de 1996, p. 8). En uno de sus artículos publicados en 1993, dijo que las universidades tienen el deber de forjar lo que llama una “Cultura de la Estrategia”, que se relacione con la discusión de conceptos como: “(...) estrategia racional, interdependencia e interacción sinérgica, interinstitucionalidad articulada, gestión pública, pre-inversión, proyectología, plurianualidad o convenios de programación” (Von Baer, 1993, pp. 23-41). Estos conceptos se refieren principalmente a las formas que tienen las regiones para obtener mayores recursos desde el gobierno central y/o poder favorecer la inversión nacional y extranjera dentro de la región. Concibe a las universidades como “Think Tanks” de la causa regionalista, a pesar que reduce está a los temas de desarrollo, investigación y “progreso”.

3 Revisar las ponencias, por ejemplo, de la CPC XII Región en las XII Jornadas... y de la Asociación de Industriales de Atacama en las XIII Jornadas...

### III. EL VÍNCULO ESTATAL Y EL NACIMIENTO DE CONAREDE: REDEFINICIÓN DEL ROL DEL RPNP

La segunda mitad de la década de los noventa estuvo marcada por una evolución del movimiento que redefinió su participación en el debate público nacional. El RPNP comenzó un paulatino proceso de reorientación, el cual transitó desde el enfoque más bien academicista de su nacimiento a uno más político, en el sentido de buscar incidir de forma directa en la formulación de políticas públicas que consideraban relevantes en su quehacer. Quizás podría pensarse que desde una óptica vinculada a la ciencia política, nos encontramos frente a un proceso de transformación propio de los grupos de interés que pasan a ser grupos de presión, donde la diferencia la marca la capacidad de los segundos de articular intereses que le permiten ejercer tanto poderes de creación como de veto en relación a la vida política de una nación (Tsebelis, 2006).

Dos sucesos pueden evidenciar esta evolución del RPNP: en primer lugar, por primera vez el movimiento logró formar un vínculo permanente en el tiempo con el gobierno a través del programa de Universidades-Gobiernos Regionales fundado en 1995, el cual se transformó en una plataforma central en lo que se refiere a formulación de políticas públicas durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por otra parte, se produjo la sustitución de las tradicionales Jornadas Nacionales de Regionalización, de realización anual, por una "Cumbre de las Regiones", realizada en 1997 y que contó con una marcada connotación política, a diferencia de las jornadas, mucho más vinculadas al ámbito académico. De esta primera cumbre, además, nació el Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización (CONAREDE), instancia que buscó integrar a CorChile con otros movimientos regionalistas, ampliando la base social del RPNP.

#### I. Programa Universidades-gobiernos regionales (UGR)

El programa Universidades-Gobiernos Regionales (UGR) fue un proyecto creado en 1995 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Se realizaba en coordinación con MIDEPLAN y MINEDUC y sus objetivos fundamentales eran "Promover la cooperación inter-institucional, para contribuir a la descentralización y al desarrollo regional" (SUBDERE, 2000, p. 1). En definitiva, se trataba de una suerte de comisión de expertos, los cuales se reunirían a formular propuestas para favorecer la regionalización y coordinar instancias político-académicas con el mismo fin. Su trabajo se desarrollaba a través de cinco áreas temáticas prioritarias: 1.- Estrategia de desarrollo; 2.- Globalización; 3.- Ciencia y Tecnología; 4.- Cultura, Artes y patrimonio y; 5.- Problemas jurídico-institucionales y económico-financieros de la regionalización y la descentralización de Chile. El organismo base de la organización era el Comité Nacional de Coordinación que era encabezado por el Intendente de Valparaíso, y

estaba compuesto por el Consejo de Rectores, la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) (SUBDERE, 2000, p. 2).

Como habíamos expresado, este programa gubernamental se transformó en el nexo directo entre el RPNP y el mundo político tradicional. Por el lado del gobierno, la principal figura fue Luis Guastavino, antiguo miembro del Partido Comunista que en el exilio se aleja del marxismo y que en 1990 se integra al Partido Socialista. Al volver a Chile se concentró principalmente en el ámbito académico, especialmente en los temas de regionalización y federalismo. Sus contactos en el extranjero forjados durante sus años en el exilio le permitieron en 1992 organizar el Seminario Internacional “Descentralización y Regionalización: Chile, España, Italia y Suecia”, con patrocinio de organismos gubernamentales como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, CEPAL–ONU. Entre abril y junio de 1993 es invitado por gobiernos regionales, comunidades autónomas e instituciones especializadas de España, Italia y Suecia para desarrollar estudios e intercambios sobre los temas de la regionalización, descentralización y reforma del Estado. En 1994 es convocado para trabajar en el tema de la regionalización en la SUBDERE y, específicamente, para la organización y desarrollo de su propuesta de creación del Programa Universidades–Gobiernos Regionales, que dirigió desde su lanzamiento oficial, el 11 de abril de 1995.

La participación del RPNP en este programa se produjo a través de las Universidades Regionales, que como ya enunciamos, representaron una de las bases del movimiento. Una vez más, la figura consular fue Heinrich Von Baer, a la sazón Rector de la Universidad de la Frontera en Temuco y presidente de la AUR, lo cual le permitía integrar el comité de organización del programa UGR. Fuera de Von Baer, quien se mantuvo en este puesto hasta el término del programa en 2002, otros miembros del RPNP integraron este comité, como Héctor Gaete, Vicerrector de la Universidad del Biobío desde 1998 hasta 2006 (actual rector de la misma, además de miembro fundador de Corbiobío) y Guillermo Crespo, quien fuese Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y vicepresidente de CorChile entre 1995 y 1998 (El Sur, 5 de marzo de 1999, p. 6).

Al igual que la actividad de CorChile, los productos reales de este programa finalmente se limitaron a la publicación de estudios y la realización de seminarios, aunque desde un comienzo este programa mostró un enfoque mucho más político, buscando ser un punto de encuentro entre los diferentes actores regionales a nivel nacional. En 1999, se efectuó una ceremonia en la Moneda que buscaba analizar los primeros cuatro años de vida del programa y proyectarlo a un futuro. En esta sólo hubieron tres intervenciones: la de Gabriel Aldoney Vargas, Presidente del Comité Nacional de Coordinación del Programa UGR e Intendente de Valparaíso, la de Heinrich Von Baer como Presidente de la AUR y la del propio Presidente de la República. Von Baer expresó en su discurso titulado: “Este programa nos ayuda a ser más universidades, más región y más país...” que

“Esta en los signos de los tiempos que vivimos y de los tiempos futuros que se aproximan: la descentralización y el desarrollo humano global y regional, son un imperativo impostergable para que nuestro país pueda superar la pobreza, lograr la modernización y alcanzar un desarrollo más armónico y digno para todos los chilenos.(...) Este programa ha jugado el papel fundamental de ser un puente entre los distintos actores regionales, quienes venían realizando un trabajo encomiable por la regionalización y el gobierno, el cual decidió tomar este tema con la seriedad que se merece y realizar un programa que ha aportado de manera sustancial al debate de ideas...” (Ministerio del Interior-SUBDERE, 1999, p. 26).

Si bien el programa tuvo una duración relativamente breve, pues fue eliminado por el Gobierno de Ricardo Lagos en el año 2002, permitió acercar al movimiento regionalista a la elite política del país y entregarle una figuración nacional que anteriormente no había tenido. El fuerte vínculo que generó el programa UGR entre el RPNP —a través de la AUR- y el mundo político puede evidenciarse de forma clara en la realización de un gran seminario en el año 2000 en las dependencias del Parlamento en la ciudad de Valparaíso. La presentación de cerca de 44 expositores, agrupados en talleres que representaban cada área prioritaria del programa, hizo de este evento una de las expresiones de mayor envergadura en las que se vio involucrado el RPNP. De esta forma, representantes del mundo político como Mario Ríos, Vicepresidente del Senado; Víctor Barrueto, Presidente de la Cámara de Diputados<sup>4</sup>; Alejandra Krauss, Ministra del Mideplan o Francisco Vidal, Subsecretario de la SUBDERE entre otros<sup>5</sup>, compartieron talleres de reflexión con los principales miembros del RPNP (como Von Baer y Lapostol) además de otros como Daniel Risopatrón, Presidente de la Unión Social de Empresario y Ejecutivos Cristianos y miembro de Corquinta o Mario Montanari, Presidente de la empresa INVERTEC PESQUERA de Chiloé (SUBDERE, 2012). En la presentación del seminario, Luis Guastavino planteó que la edición de la publicación del seminario le dio

“(...) una panorámica inmejorable para concluir que aquí se registra una nueva calidad intelectual y una más rigurosa capacidad analítica sobre los temas regionales (...) porque no son los escritorios santiaguinos los que proveerán los mejores diseños y propuestas para descentralizar este país, ya que ellos siempre estarán interferidos por un enajenación de la real realidad regional...” (SUBDERE, 2012, pp. 11-12)

Finalmente, realizaba un guiño directo al RPNP: “De esta forma, creemos que la unión entre Gobierno Central, Gobiernos Regionales, universidades y el rico

4 Barrueto también formó parte del RPNP, pues durante sus cuatro periodos (1990-2006) como diputado por el distrito N° 43 de Talcahuano participó de las actividades de Corbiobío y presidió la en varias oportunidades la Comisión Permanente de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara Baja.

5 También expusieron y participaron de los talleres Josefina Bilbao, Intendente de la región de Valparaíso y Presidente del Comité Nacional de Coordinación del Programa UGR, Heraldito Muñoz, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Gonzalo Rivas, Vicepresidente ejecutivo de CORFO, Ricardo Núñez, Senador, además de todos los intendentes regionales.

movimiento regionalista que se viene articulando en Chile desde hace más de 15 años, producirá la masa crítica necesaria para replantear el desarrollo de nuestra nación” (SUBDERE, 2012, pp. 11-12).

El discurso emanado desde este programa siguió en gran medida la línea de lo que era el RPNP en la primera mitad de los noventa, con la particularidad que ahora se integraba la variable política partidista como un factor a considerar, normalmente como crítica a lo que llaman la “clase política”. Podemos identificar tres líneas centrales: 1) Preminente importancia al tema del desarrollo económico de las regiones y las limitantes de este, 2) las redes internacionales que puedan formar estas y 3) la investigación “productiva” en las regiones. En el caso del desarrollo económico, el *quid* principal era definir que se entendería por desarrollo regional. Así, en una de las publicaciones del programa se expresaba que: “Otro tema que inquieta es que no existe consenso en la llamada clase política respecto de cuál es la visión sobre el desarrollo regional. Por ello, tenemos que definir cuánto queremos de desarrollo regional propiamente tal, y cuánto desarrollo regional promovido desde las estructuras centrales del Estado” (SUBDERE, 2012, pp. 15).

Se continuaba percibiendo un discurso de cierta apatía a las estructuras políticas establecidas. En varias publicaciones se hacían referencias más bien despectivas a la “clase política” y ciertas funciones que esta monopolizaría, no permitiendo el desarrollo económico de las regiones. En un seminario realizado en La Serena, se planteaba que: “Desde la clase política tradicional se asumió un discurso triunfalista, que habla del desarrollo y la superación de la pobreza como un fenómeno transversal, pero los que somos regionalistas sabemos que esto no corresponde a la verdad, pues los beneficios del desarrollo sólo llegan a las regiones donde existen muchos votos...” (Moffat, 1997, p. 46).

Relacionado con lo anterior se encuentra la problemática de la inserción internacional de las regiones. Las diversas publicaciones del programa daban cuenta de la capacidad que tenían muchas regiones de definir una política económica internacional propia, la cual se vería impedida por la elite política y especialmente, la Constitución del país

“Hay regiones que hoy están en condiciones de provocar un desarrollo endógeno, a partir de sus propias particularidades, con sus ventajas comparativas y capital humano, e incluso con vinculaciones de carácter internacional, a pesar que la ley no lo permite, ya que por la actual Constitución Política ninguna región puede establecer una relación activa con las provincias fronterizas de Argentina, Perú y Bolivia. Un claro ejemplo de esto es la región de Atacama, la cual tiene una relación privilegiada con las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja, y si uno analiza estratégicamente, estas zonas en 20 años más estarán integradas de este a oeste.” (SUBDERE, 1998, p. 15).

También se planteaba que las regiones no podían firmar ningún convenio internacional que tuviese validez. Existirían algunos convenios "protocolares", pero que la disposición legal del periodo no le permitiría tener aspectos vinculantes. Se tomaba como ejemplo las regiones décima y duodécima, quienes podrían integrarse de forma importante al sur de Argentina si se le permitiese firmar tratados (SUBDERE, 1998, p. 16). En otro seminario, incluso se presentó una ponencia llamada "Unión Europea: ¿Un modelo válido para la regionalización nacional?", en donde Guillermo Porter, académico penquista e integrante de Corbiobío, planteaba distintos puntos que podrían tomarse del Tratado de Maastricht, incluyendo temas impositivos y monetarios (SUBDERE, 1998, pp. 28-39).

Finalmente, estaba el tópico sobre la investigación y el desarrollo regional. Esta discusión se encuentra muy presente en prácticamente todas las publicaciones del programa UGR, claramente delineado por la activa participación de las universidades regionales agrupadas en la AUR. Aquí, además de la ya reseñada figura de Heinrich Von Baer, se destacaban otros rectores como Sergio Lavanchy de la Universidad de Concepción y Luis Tapia, de la Universidad de Tarapacá. La argumentación básicamente se reducía a un reclamo por mayor aporte directo del Estado a las universidades regionales, el cual les permitiría aumentar la cantidad de investigación relevante y formar un "capital humano" que beneficiase el desarrollo regional. La principal carencia de las mayoría de las regiones de Chile sería la: "(...) falta de una masa crítica de recursos humanos calificados y motivados para desencadenar nuevos procesos de desarrollo" (SUBDERE, 2000, p. 6). Por otra parte, la generación de investigación y conocimiento resultaría crucial pues: "La capacidad de aplicar conocimiento pertinente a las condiciones singulares de cada región, tanto propio como externo, es un factor determinante para las perspectivas de éxito, la dinamización y sustentabilidad de una Estrategia Regional de Desarrollo"(SUBDERE, 2000, pp. 12-13).

En definitiva, tenemos que el programa UGR generó una serie de demandas políticas específicas, referidas principalmente al desarrollo económico de las regiones. Pero no se trataba de demandas que planteasen críticas de fondo al modelo económico, sino más bien requerimientos por obtener mayores ventajas del mismo modelo para los actores regionales, especialmente las asociaciones empresariales. De esta forma, ciertos gremios regionales tenían gran presencia en seminarios y congresos realizados por el programa, entre los que destacan la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos, PROCHILE Concepción, la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción y la Asociación Gremial de Administración de Fondos Previsionales (AAFP), entre otros.

## IV. CONAREDE Y LA CUMBRE DE LAS REGIONES

El segundo factor que influyó en la politización del RPNP fue la creación del Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización (CONAREDE), instancia que junto con agrupar a CorChile con otros organismos menores, tuvo como principal efecto el reemplazar las Jornadas Nacionales de Regionalización por una gran “Cumbre de las Regiones”, cuyo objetivo, en teoría, era “ampliar la base social de los regionalistas para proyectar con mayor fuerza el mensaje...” (El Sur, 23 de mayo, 1998, p. 5). Creemos que estos hechos, los cuales pueden parecer casi anecdóticos, son producto del viraje en que se encontraba el RPNP hacia posiciones de mayor presión al establishment político.

La creación de CONAREDE respondió, en palabras del propio Lapostol, a una inquietud surgida en la última Jornada Nacional de Regionalización realizada en Arica en 1997: “Fue ese año cuando empezamos a barajar la idea de embarcar a más personas y organizaciones, como la Asociación de Municipios, los CORES, organizaciones empresariales y de trabajadores en Chile” recordaba Lapostol años después (Corbiobío, 2001, p. 15). Este organismo era la respuesta del RPNP a dos fenómenos: en primer lugar, muchos integrantes del movimiento creían que si bien CorChile mantenía una presencia nacional importante, estaba aún reducido a ser un actor secundario en la discusión nacional, por lo cual necesitaba ampliar su base de apoyo. Por otra parte, la reciente vinculación al gobierno central a través del programa UGR le había proporcionado una importante llegada al mundo político, especialmente a través de los Gobiernos Regionales y los Consejeros Regionales (CORES), instituciones políticas poco conocidas en aquellos años (no se elegían vía sufragio), pero que comenzaba a concentrar cierto poder en lo relativo a la inversión pública en la región (Cunill, 2012, p. 94). De esta forma, a principios de 1998, organizado por Corbiobío y CorChile, se realizaba un encuentro en Santiago. Rectores de universidades, alcaldes, consejeros regionales, bancadas de senadores y diputados regionalistas, entre otros, constituían el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, CONAREDE, que presidió Claudio Lapostol Marejouis: “Asumimos el desafío de generar un amplio movimiento nacional, capaz de impulsar acuerdos políticos, sociales, económicos y culturales que hagan realidad las ideas ya maduras sobre desarrollo descentralizado en las que todos coincidimos, pero que no hemos podido llevar plenamente a la práctica” (Corbiobío, 2011, p. 18).

Al analizar a CONAREDE, nos encontramos con un organismo mucho más político en sus planteamientos y actuaciones. Su objetivo principal era

“Como consecuencia de la actividad realizada por CORBIOBIO y CORCHILE, en orden a crear una red de sostenimiento del proceso de regionalización y descentralización, en conjunto con otras instituciones se acordó crear el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización, CONAREDE. Creado en mayo de 1998, este es el organismo

plural, calificado y representativo de la sociedad civil chilena, en materia de descentralización y desarrollo local y regional, cuyo propósito es el de construir un país armónico y digno para todos los chilenos" (CONADERE, 2013)<sup>6</sup>.

Si bien esta declaración puede asemejarse a las realizadas por Corbiobío y Cor-Chile (de hecho reconoce ser heredera de ambos), su propuesta programática era mucho más directa, con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, todas resumidas en el llamado "Decálogo Regional" (CONADERE, 2013), dividido en tres partes:

### **I. En el ámbito político-administrativo:**

- a.- Elección directa de Consejeros Regionales y Jefes de Gobiernos Regionales.
- b.- Descentralización y transferencia a los Gobiernos Regionales de Servicios Públicos y Fondos de Desarrollo.
- c.- Evaluación de impacto regional de proyectos de ley.

### **II. En el ámbito económico-productivo:**

- a.- Creación de incentivos al crecimiento de las regiones y desincentivos al crecimiento de la capital.
- b.- Medidas para atraer, retener y desarrollar capital humano en Regiones (becas, crédito universitario; subsidios habitacionales; otros)
- c.- Fortalecimiento de capacidad científica, tecnológica y productiva en regiones.

### **III. En el ámbito educacional y cultural:**

- a.- Descentralización de la reforma educacional.
- b.- Fortalecimiento de las Universidades Regionales.
- c.- Apoyo a los medios de comunicación regional y local.
- d.- Rescate y promoción de las identidades, cultura y valores locales y regionales.

<sup>6</sup> Página oficial de CONAREDE: "<http://corbiobio.cl.tripod.com/ARCHIVOS/CONAREDE.HTM>"

En definitiva, CONAREDE tomaba un cariz político evidente, actuando como un grupo de presión que abogaría por ciertas políticas que el movimiento consideraba relevantes. Para esto, ampliaba su base de apoyo<sup>7</sup> hacia sectores de mayor peso político, especialmente los Gobiernos Regionales. Como producto de lo anterior, tenemos que en 1998 se realizó la primera “Cumbre de las Regiones”, actividad inaugural del nuevo organismo. En la cumbre hay numerosas reuniones y sesiones de trabajo. El encuentro se inició con una sesión solemne en el Congreso Nacional al que asistió el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien destacó “la valiosa contribución de servicio público que hacen los regionalistas” (El Sur, 14 de mayo de 1998, p. 8). Al igual que en las jornadas, la cumbre tuvo como producto un libro que contenía las conclusiones de dicho evento. Hay que destacar que el formato de éste es distinto al de las jornadas, pues ya no se trata de presentar una suerte de “anales” del encuentro, en donde se transcribían las ponencias presentadas por los distintos invitados. Ahora, era más bien un libro programático, sin autores particulares y de contenido político. Las únicas secciones firmadas por un autor específico fueron los discursos de políticos connotados<sup>8</sup> y el discurso inaugural de Claudio Lapostol (CONAREDE, 1997).

La intención de brindarle un mayor contenido programático al movimiento se devela enseguida al analizar la publicación de la cumbre, comenzado por la misma presentación, en donde se realiza una suerte de advertencia sobre el futuro del país

“Hombres y mujeres de distintos puntos del territorio, unidos por un solo propósito: superar el excesivo centralismo del país, que distorsiona gravemente la calidad de vida de la población; favorece el subdesarrollo y hace menos competitivo el modelo de crecimiento (...) Por ello, participan con decisión y entusiasmo de un gran movimiento nacional destinado a revertir este peligroso proceso que genera una creciente insatisfacción ciudadana, pues, a pesar de que crecemos como país, los habitantes tanto del centro como de regiones se encuentran descontentos con su calidad de vida...” (CONAREDE, 1997, p. 7).

Luego, vuelve el clásico discurso sobre la relación entre regionalización y desarrollo económico, destacando además el carácter heredero de este movimiento con lo hecho anteriormente por el RPNP

“Las raíces del movimiento se nutren de muchas jornadas anteriores, incluso históricas, y se fortalecen en la certeza de que la profundización de la democracia, la modernización del Estado, la superación de la pobreza y la transformación del país en crecimiento en nación desarrollada, pasan

7 Esta, según Tsebelis, es una de las características principales de los grupos de interés cuando pasan a grupos de presión, pues esta nueva base de apoyo hace que aumente su “Umbral de Oportunidades” y pueda influir de forma efectiva.

8 Se destacan el discurso del Presidente de la República, Eduardo Frei, del vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo González y de los parlamentarios Mario Ríos, Víctor Barrueto, Carlos Cantero, Exequiel Silva, Carmen Frei y Antonio Horvath.

inevitablemente por una pronta, amplia y efectiva descentralización política" (CONAREDE, 1997, p. 8).

El libro parte con una extensa reseña histórica sobre lo que ha sido el regionalismo en Chile desde los intentos federalistas en los albores de la República hasta la regionalización de Pinochet durante la década de los 80, pasando por la CORFO, la CONARA y otros organismos creados durante el siglo XX (CONAREDE, 1997, pp. 22-23). Si bien concibe estas políticas como "avances", lamenta que no se haya entendido que para la realización de una correcta regionalización, se debían crear instituciones descentralizadas que

"...ejercen funciones del poder público y tienen facultades para dar órdenes –normas, leyes- obligatorias como las del Estado, dotadas del mismo valor imperativo y operantes en una jurisdicción territorial determinada. Esta autonomía la diferencia de la mera descentralización administrativa que ha operado hasta hoy" (CONAREDE, 1997, p. 25).

Esta declaración, más una multiplicidad de otras contenidas en la publicación, daban cuenta del fenómeno de transformación del RPNP, pues aunque mantenía ciertas bases estructurales del discurso anterior (como la centralidad en lo económico y el papel del empresariado local), el foco se encontraba puesto más bien en las instituciones políticas que permitirían realizar los cambios necesarios. Se podría decir que se transitó de un discurso de carácter más peticionista (más dinero a las regiones, más inversión, etc.) hacia uno más programático, donde fuera de pedir regalías al gobierno central, también se proponía una nueva organización política que permitiese obtener estos beneficios de forma permanente (Espinoza, 2009, pp. 5-17).

## V. OTROS ACTORES ENTRAN AL DEBATE: EL REGIONALISMO EN LA DÉCADA DEL 2000

Aunque parezca contradictorio, el RPNP sufrió un proceso de relegamiento y manifiesta pérdida de poder a lo largo de la década del 2000, llevándolo a una posición de invisibilización en el debate a nivel nacional gracias a la entrada de otros actores que influyeron en el espacio público. Con nuevos actores nos referimos principalmente a la irrupción del regionalismo partidista, a través de distintos partidos menores que comenzaron un proceso de fusión y suma de intereses hasta transformarse en lo que hoy se conoce como el Partido Regionalista de los Independientes (PRI), de creciente importancia en la vida política nacional<sup>9</sup>. Creemos que este proceso se debió a dos factores –uno interno y otro externo al movimiento– que conspiraron contra sus posibilidades de desarrollo.

9 Si bien no existe un trabajo que dé cuenta de forma sistemática de este proceso, un buen resumen se encuentra en Navarrete (2012).

El factor interno al que hacemos referencia fue el repliegue de las actividades de CorChile y CONAREDE hacia el ámbito teórico-programático, dejando de lado las manifestaciones públicas realizadas años anteriores mediante las jornadas de regionalización y la cumbre de 1998. De esta forma, no existieron seminarios o reuniones relevantes organizadas por el RPNP en prácticamente toda la década, pues la segunda cumbre de las regiones se realizó recién en el año 2007, casi una década después de la primera. Incluso en la publicación producto de esta cumbre, el movimiento se hizo cargo de esta falencia al plantear que: "... También es cierto que a los regionalistas nos ha costado reunirnos nuevamente en una Gran Cumbre luego de la reunión histórica de 1998, pero esto también da cuenta del crecimiento que han tenido las organizaciones regionalistas a lo largo de estos últimos diez años..."(CONAREDE-Corquinta, 2007, p. 16). Como ya hemos expresado, la actividad de CorChile y CONAREDE durante estos años se enfocó principalmente en generar una suerte de "masa crítica" intelectual y teórica sobre el tipo de Estado que acomodaba a los regionalistas. Son varias publicaciones relativas a este tema, las cuales gozaban de un espesor teórico inusitado hasta la fecha.

En el escenario anteriormente descrito, vuelven a tomar protagonismos aquellos miembros del movimiento vinculados al mundo académico. De esta forma, Heinrich Von Baer, Sergio Boisier, Guillermo Porter, Luis Tapia y Sergio Lavanchy publicaron una multiplicidad de artículos y libros bajo el patrocinio de CONAREDE<sup>10</sup>, elaborando de a poco una propuesta política de descentralización y regionalización, con fuerte acento en los temas ya conocidos: desarrollo, inversiones, exportaciones e investigación<sup>11</sup>. Si bien planteamos que existe una pérdida relativa de poder en lo que se refiere a la visibilidad del movimiento, no es menos cierto que se lograron ciertas metas del movimiento, aunque como veremos más adelante, no podemos cifrar dichos logros exclusivamente en el RPNP. Con esto nos referimos al anuncio hecho por la Presidente Michelle Bachelet en la Cumbre de las Regiones del 2007, donde acompañada por el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz- Tagle; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Tapia; el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker y otras autoridades, firmó la indicación sustitutiva al proyecto de reforma constitucional sobre gobiernos regionales, iniciativa que permitió la elección directa de los consejeros regionales, un largo anhelo de los regionalistas que marca la victoria más importante del movimiento durante sus casi tres décadas de existencia<sup>12</sup>. En esta misma instancia, se reconoció la labor de Claudio Lapostol como la principal figura del RPNP a lo largo de su historia, dando paso a una serie de discursos en su homenaje.

El factor externo al que hacíamos referencias se relacionó con la irrupción en la arena política del regionalismo partidista y el supuesto cambio del ciclo político en el gobierno de Ricardo Lagos. Varios autores plantean que ciertos sucesos ocurridos

10 Algunos son Von Baer (2009) y Lavanchy (2006).

11 No ahondaremos más en la propuesta misma, pues como expresamos en la introducción, no es la finalidad de este trabajo estudiar el RPNP como propuesta, sino su articulación política.

12 Esto al menos es lo que plantean en ese momento, revisar CONAREDE-Corquinta (2007, pp. 45-36) y El Sur, 24 de abril del 2007.

hacia finales de la década del noventa, como la crisis asiática, el debate entre "autoflagelantes" y "autocomplacientes" dentro de la Concertación y la detención de Pinochet en Londres, dan paso a un nuevo ciclo político en el país, el cual significó una cierta repolitización y liberalización de la sociedad chilena luego de una década de los noventa caracterizada por un repliegue de los movimientos sociales y la hegemonía casi absoluta del discurso neoliberal en la elite política<sup>13</sup>. Creemos que el RPNP era un movimiento que representaba con fidelidad las coordenadas políticas predominantes del Chile noventero: discurso basado en el desarrollo económico, repulsión a la llamada "clase política" y gran injerencia de la tecnocracia en el discurso (Espinoza, 2009, p. 7). Pero la década del 2000 trajo aparejados otros fenómenos propios de un proceso de repolitización de la sociedad, cuyo reflejo en el regionalismo fue la creación de partidos regionalista dispuestas a participar en el juego político-partidista, a diferencia del RPNP.

Si bien no es el objetivo de esta investigación revisar el desarrollo del regionalismo político, es necesario realizar una pequeña reseña sobre su evolución para luego ver su relación con el declive del RPNP<sup>14</sup>. En Chile, formar partidos políticos regionales es bastante difícil, ya que el sistema binominal y la propia ley de partidos, que exige un alto número de inscritos, tienden a reproducir un sistema centralizado. La clase política ha logrado ponerse de acuerdo para dictar leyes que facilitan ser candidato con el mero declarar cualquier domicilio en una región. Esto produce que los partidos establecidos puedan apoderarse de la representación regional en un sistema de elección binominal que desalienta la creación de colectividades regionalistas. Las directivas "nacionales" fijan los cupos, negocian las prioridades y reparten las regiones.

De esta forma, los intentos de formar una propuesta mucho más integral provinieron de las propias regiones. En Temuco se creó el Movimiento de Acción Regional, MAR, y en Concepción, una agrupación de empresarios y profesionales constituyó el Partido Regionalista, PARE, durante la década de los noventa, ambas colectividades de corta duración. El primer intento serio de crear partidos regionales se dio en el año 2002, tras la inscripción en el Servicio Electoral de la Alianza Nacional de los Independientes (ANI), partido de carácter regionalista con base en el extremo sur. Paralelamente en el año 2003, el alcalde de Iquique y ex miembro de la Concertación, Jorge Soria, fundó otro partido independiente, cuyo ámbito de acción abarcaba el extremo norte del país, llamado Partido de Acción Regionalista de Chile (PAR). Las primeras elecciones que ambos partidos enfrentaron, de forma independiente, fueron las municipales del año 2004. Ambos partidos corrieron juntos en las elecciones parlamentarias de 2005 a través del pacto denominado "Fuerza Regional Independiente". Sólo obtuvieron una diputada. En cuanto a la elección presidencial del mismo año, el líder del PAR, Jorge Soria, respaldó públicamente al candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, mientras que el ANI entregó su apoyo a la candidata de la Concertación, la socialista Michelle Bachelet, quien finalmente fue electa como Presidenta de Chile para el período 2006-2010.

13 Por ejemplo, es la conclusión que se denota en el libro de Funk (2006).

14 Esta reseña fue tomada en su mayoría de Valenzuela Van Treek (1999).

Tanto el PAR como el ANI se vieron amenazados por el sistema electoral chileno, que exige a los partidos tener un porcentaje superior al 5% para permanecer activo y los partidos de regiones son excluidos por número a nivel nacional. Por ello, ambos partidos se reunieron en el Partido Regionalista de los Independientes (PRI), el cual fue fundado oficialmente el 4 de julio de 2006, ampliando su ámbito de acción a seis regiones, y con proyección al resto del país<sup>15</sup>.

El año 2007 el senador Adolfo Zaldívar, líder histórico de una tendencia interna del Partido Demócrata Cristiano fue expulsado del él. Junto con Zaldívar renunciaron y se integraron al PRI cinco diputados, que fueron conocidos como los “colorines”, más una decena de dirigentes y centenares de afiliados. El PRI solidarizó con el senador y Zaldívar encabezó un movimiento político nacional que se integra al PRI e inicia un proceso de constitución del partido en todas las regiones del país, quedando 9 regiones por inscribirse, entre ellas las que representan el 70% de los electores, incluyendo la región Metropolitana, Bio-Bío y Valparaíso. El año 2008 el PRI anunció su intención de participar en las elecciones venideras en el país como alternativa a las dos coaliciones mayoritarias. La directiva ampliada del PRI decidió el 10 de enero de 2009 proclamar a Adolfo Zaldívar como precandidato para la elección presidencial del 11 de diciembre de ese año, pero éste renunció antes de la contienda. Para las elecciones parlamentarias de 2009, el PRI se unió al Movimiento Amplio Social y a Fuerza País en un nuevo pacto electoral denominado Chile Limpio. Vote Feliz. El PRI obtuvo tres diputados.

De esta manera, vemos como el regionalismo partidista se consolidó como un actor relevante en el panorama político nacional durante la década del 2000. Las relaciones entre estos nuevos partidos y el RPNP fueron más bien tenues. De alguna forma, el acercamiento entre los partidos políticos tradicionales y el RPNP a finales de los noventa hicieron que la mayor parte de sus integrantes tuviese simpatías o militase en partidos establecidos, evitando que sus integrantes integraran los nuevos partidos regionalistas, salvo algunas excepciones<sup>16</sup>. Pero lo importante a destacar es que este nuevo regionalismo político copó el espacio público relativo a la discusión de la regionalización en Chile, quitándole protagonismo al movimiento tradicional regionalista agrupado en CONAREDE. En una entrevista publicada en el Diario El Sur, Claudio Lapostol respondió sobre las relaciones de lo que llama el “regionalismo histórico” con el PRI

“La verdad es que ambos fenómenos responden a necesidades distintas: nosotros somos un movimiento ciudadano, independiente, que pretende movilizar a la sociedad civil regional en pos de conseguir sus objetivos. El PRI es un partido político, involucrado en las luchas políticas coyunturales, aunque su mensaje contenga aspectos compartidos. Desde este punto de vista, nuestra relación con este partido es más bien nula...” (El Sur, 25 de noviembre de 2008, p. 34).

15 Esta parte se encuentra mayoritariamente en la página web del PRI: <http://www.pricentro.cl/seccion.php?tipo=1>

16 Tal es el caso de Ricardo Israel, candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2013 y miembro del Consejo Directivo de CONAREDE.

De esta forma podemos entender como la introducción de un movimiento político partidista influyó en la invisibilización de un movimiento como el RPNP, cuyo discurso y accionar vinculado a la política tradicional y el empresariado local, fue una piedra de tope para un crecimiento con mayor organicidad, espacio que finalmente ocupa en parte el movimiento regionalista partidista.

## VI. CONCLUSIONES

Lo que hemos denominado como "regionalismo político no partidista" es un movimiento que nació a mitad de la década de los ochenta en la región del Bio-Bio y rápidamente se expandió hacia el resto de las regiones del país. Si bien se constituyó a través de las llamadas "Corporaciones de Desarrollo" -de las cuales Corbiobío es la primera y más importante-, a lo largo de la década de los noventa comenzó a expandir su orgánica hacia otros sectores, como las universidades regionales y los gremios empresariales, formando una agrupación a nivel nacional llamada CorChile. A lo largo del artículo, demostramos como durante la década de los noventa, el RPNP se constituyó en un grupo de interés de clara tendencia neoliberal, pues su base de apoyo se encontraba principalmente en las elites empresariales regionales y su discurso apuntaba a una validación del modelo neoliberal, aunque con demandas que pretendían entregarle un matiz regionalista. De esta forma, las críticas que se plantearon no corresponderían a una mirada crítica del modelo en sí, sino que eran demandas sobre la ampliación de los beneficios del sistema para grupos de poder que estaban disconformes con las utilidades que obtenían en sus correspondientes regiones. Sumado a lo anterior, el movimiento se planteó como independiente, apolítico y antipartidista, a pesar de que algunos de sus miembros sí pertenecía a los partidos tradicionales, especialmente a la Democracia Cristiana y a Renovación Nacional. En una futura investigación pretendemos utilizar algunas herramientas teóricas provenientes de otras disciplinas, como la teoría de redes, para profundizar en estas aristas<sup>17</sup>.

La segunda mitad de los noventa fue un momento de cambio para el RPNP. Su trabajo de ampliación y crecimiento había dado el fruto suficiente como para dar un giro hacia posiciones más políticamente definidas. Logró influir directamente en las políticas públicas a través del programa de Universidades-Gobiernos Regionales, donde su fuerte presencia en la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) le permitió establecer vínculos con la política partidista. También amplió su base de apoyo hacia otras organizaciones, fundando el Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización (CONAREDE), organismo que contenía una misión mucho más programática que CorChile, encargado de elaborar un verdadero proyecto político regionalizador.

17 Admitimos que falta indagar con mayor profundidad los vínculos entre el RPNP y los partidos tradicionales, además de otros nexos importantes, como el con los medios de comunicación regionales.

Resulta paradójico que la reformulación del RPNP hacia posiciones más político-programáticas haya dado como resultado un cierto retroceso en el papel de este movimiento en el debate nacional. El fin de las Jornadas Nacionales de Regionalización y el excesivo retoricismo de su accionar fue alejando al RPNP de sus bases de apoyo tradicional, lo cual sumado a la irrupción del PRI como nuevo referente de la demanda regionalista, redujo la influencia del movimiento en el acontecer nacional.

En nuestros días, el RPNP continúa su accionar en las distintas regiones. En el año 2011 se realizó la tercera Cumbre de las Regiones en la ciudad de Concepción, donde cerca de 600 personas se reunieron para analizar lo acontecido en los últimos años y proyectar el movimiento hacia el futuro. Si bien en algunas regiones el regionalismo sigue muy fuerte (como el caso de Corbiobío y Codesa), los organismos nacionales (CorChile y CONAREDE) han perdido preponderancia en el debate nacional. Si bien no está dentro de nuestro marco temporal y tampoco ha sido investigado en profundidad, la aparente ausencia del RPNP en las movilizaciones regionales del 2011 demuestra que el movimiento está en un estado de encapsamiento con respecto a la sociedad civil. En nuestra opinión, este responde a la naturaleza misma del movimiento: una expresión política propia del neoliberalismo del Chile actual.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abalos, J. A. (2003). *Corporaciones regionales de desarrollo: antecedentes, realidades y desafíos*. En Valenzuela, E. y Vega, F. (eds.), *El fantasma federal en Chile: la potencia de la reforma regional*. Rancagua: FES Friedrich Ebert Stiftung, UNIR Universidad de Rancagua.
- Almeyra, G. y Jerez, A. (2009). *Sociedad civil y nuevos movimientos sociales*. Madrid: Cáritas Española.
- Baño, R. (1985). *Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular*. Santiago: FLACSO.
- Cunill, N. (2012). *La cualidad gubernativa de los gobiernos regionales. Un análisis desde la perspectiva de sus competencias e institucionalidad*. En De la Maza, G., Cunill, N. y Joignant, A. (eds.), *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: RIL editores.
- De la Maza, G. (2001). *Los movimientos sociales en la democratización de Chile*. En Drake, P. y Jaksic, I. (compiladores) *El Modelo Chileno: Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: Lom ediciones.
- De la Maza, G. (2005). *Tan lejos tan cerca. Políticas públicas y sociedad civil en Chile*. Santiago: Lom Ediciones.
- De la Maza, G. (2012). *Actores sociales regionales: fortalezas y debilidades para impulsar la descentralización*. En De la Maza, G., Cunill, N. y Joignant, A. (eds.), *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: RIL editores.
- Espinoza, L. (2009). *El discurso sociopolítico expresado en la II Cumbre de las Regiones "Todo Chile es Chile"*. En *Revista Chilena de Estudios Regionales*. (Nº. 2), pp. 84-103.
- Funk, R. (ed.) (2006). *El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena al socialismo*. Santiago: Ediciones UDP.
- Gentili, P. y Sader, E. (2003). *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*. Buenos Aires: CLACSO.
- Gómez, J. C. (2011). *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal*. Santiago: Editorial ARCIS/CLACSO.
- Harvey, D. (2007). *Breve Historia del Neoliberalismo*. Madrid: Ediciones AKAL

- Hopenhayn, M. (2005). *¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces entre política y cultura*. En Mato, D. (ed.) *Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Lavanchy, S. (2006). *Las universidades regionales y su aporte a los procesos de investigación + desarrollo*. Concepción: Corbiobío-AUR.
- Luna, J.P. y Rosenblatt, F. (2005). *¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual*. Santiago: CIEPLAN.
- Mella, M. (2012). *Elementos de ciencia política. Conceptos, actores y procesos. Vol. 1*. Santiago: RIL editores.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: Lom ediciones.
- Moulian, T. (1999). *El consumo me consume*. Santiago: Lom ediciones.
- Navarrete, B. (2012). *Partidos regionales o partidos con inscripción regional (1989-2009)*. En De la Maza, G, Cunill, N. y Joignant, A. (eds.), *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: RIL editores.
- Tsebelis, G. (2006). *Jugadores con veto: cómo funcionan las instituciones políticas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Valenzuela Van Treek, E. (1999). *Alegato histórico regionalista*. Santiago: Ediciones SUR.
- Von Baer, H. (1993). *El rol de las universidades en el desarrollo de las regiones*. En Lapostol, C. *Desarrollo Regional: Tarea nacional*. Temuco: Ediciones UFRO.
- Von Baer, H. (2009). *Pensado Chile desde sus regiones*. Temuco: Ediciones UFRO-CorAraucanía

## FUENTES

- CORCHILE. (1990). *VII Jornadas Nacionales de Regionalización*. Valparaíso: CORCHILE-Corquinta-Corbiobío.
- CORCHILE. (1991). *VIII Jornadas Nacionales de Regionalización: Hacia una efectiva autonomía para el desarrollo regional*. La Serena: CORCHILE
- CORCHILE. (1992). *IX Jornadas Nacionales de Regionalización: La descentralización: herramienta de desarrollo*. Coyhaique: CORCHILE.

- CORCHILE. (1993). *X Jornadas Nacionales de Regionalización: Las regiones...ahora*. Valdivia: CORCHILE.
- CORCHILE. (1996). *XII Jornadas Nacionales de Regionalización: Hacia el Estado regional en Chile*. Punta Arenas: CORCHILE.
- CORCHILE. (1997). *XIII Jornadas Nacionales de Regionalización: Nuevos escenarios, nuevos desafíos*. Copiapó: CORCHILE.
- CONAREDE. (1998). *Todo Chile es Chile: Cumbre de las Regiones*. Valparaíso: CONAREDE-Corquinta.
- CONAREDE. (2007). *Todo Chile es Chile: Cumbre de las Regiones*. Valparaíso: CONAREDE-Corquinta.
- CONAREDE. (2011). *Todo Chile es Chile: Cumbre de las Regiones*. Concepción: CONAREDE-Corbiobío.
- **Programa Universidades-Gobiernos Regionales:**
- SUBDERE. (1997). *Actas del tercer encuentro del programa Universidades-Gobierno Regionales*. La Serena: SUBDERE y Gobierno Regional IV Región.
- SUBDERE. (1998). *Programa Universidades-Gobiernos Regionales. Inversiones, Exportaciones. Perspectivas Regionales*. Talcahuano y Coquimbo: SUBDERE.
- SUBDERE. (1998). *Programa Universidades-Gobiernos Regionales Actas del Cuarto Encuentro Nacional*. Valdivia: SUBDERE.
- SUBDERE. (1999). *Programa Universidades-Gobiernos Regionales. Las proyecciones de un programa de futuro. Ceremonia convocada por el Presidente de la Republica en el Palacio de la Moneda el 28 de octubre de 1999*. Santiago: Ministerio del Interior-SUBDERE.
- SUBDERE. (2000). *Programa Universidades-gobiernos regionales. Estrategias de desarrollo regional y globalización*. Valparaíso: SUBDERE.

## PÁGINAS WEB

- Página oficial de CONAREDE: <http://corbiobio.cl.tripod.com/ARCHIVOS/CONAREDE.HTM>
- Página oficial del PRI: <http://www.pricentro.cl/seccion.php?tipo=1>

## PERIÓDICOS

- Diario El Sur, 1990-2007.

# LA REPRESENTACIÓN DEL PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES SOCIALES EN ESPACIOS LOCALES: EL CASO DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y LA UNIÓN COMUNAL DE HUECHURABA EN UN CONTEXTO ELECCIONARIO, JULIO-OCTUBRE DE 2012

## *THE REPRESENTATION OF THE POWER AND CONSTRUCTION OF SOCIAL NETWORKS IN LOCAL SPACE: THE CASE OF THE NEIGHBORHOOD COUNCIL AND THE COMMUNAL UNION IN HUECHURABA IN THE CONTEXT OF AN ELECTION PROCESS JULY-OCTOBER, 2012*

Javier Rivas Rodríguez\*

### **RESUMEN:**

El artículo analiza las redes sociales elaboradas entre las Juntas de Vecinos de Huechuraba a través de su Unión Comunal, y las candidaturas a alcalde que representaron las dos primeras mayorías de votos en el proceso de elecciones municipales del año 2012: Carlos Cuadrado Prats (PPD-PS) y Marcelo Teuber (UDI). Para dicho efecto, se propone trabajar sobre la base de los vínculos que originaron esos actores entre los meses de julio y octubre del año 2012. Así, se busca problematizar las formas de articulación y circulación del poder en espacios locales, en un contexto neoliberal.

**Palabras clave:** Huechuraba – Elecciones Municipales 2012 – Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

### **ABSTRACT:**

*The article analyzes the social networks created between the neighborhood council in Huechuraba through its Communal union and the candidacies for mayor, that represented the first two majorities of votes in the city hall election process in 2012: Carlos Cuadrado Prats (PPD-PS) and Marcelo Teuber (UDI). For this matter, it is proposed to work from the base of the connections that these characters initiated between July and October 2012. We seek to question the ways of articulation and circulation of the power in local space, in a neoliberal context.*

**Keywords:** Huechuraba – City hall election process 2012 – Communal union of neighborhood council..

**Recibido:** 07 de Noviembre de 2013

**Aceptado:** 16 de Diciembre de 2013

**Received:** November 07, 2013

**Approved:** December 16, 2013

\* Chileno, Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: jrivas.r1@gmail.com

## I. INTRODUCCIÓN

Este artículo propone analizar las redes sociales entabladas por las Juntas de Vecinos de Huechuraba a través de su Unión Comunal, y las candidaturas edilicias que representaron las dos primeras mayorías de votos en el proceso de elecciones municipales del año 2012: Carlos Cuadrado Prats (PPD-PS) y Marcelo Teuber (UDI), así como las modalidades de construcción de liderazgos locales desplegadas en esos contextos. Para tal efecto, se propone trabajar sobre la base de los vínculos que originaron esos actores entre los meses de julio y octubre del año 2012. Dicho periodo se corresponde con el inicio legal del proceso de campaña electoral (30 de julio) y la jornada de concurrencia a las urnas (28 de octubre).

En el marco de las discusiones vigentes sobre las herencias dictatoriales en materia municipal, y los grados de (des)politización de las comunidades locales, una investigación de este tipo busca aportar, desde una mirada enfocada en las experiencias concretamente vivenciadas por los actores en un escenario específico, elementos para problematizar y enriquecer dichos marcos interpretativos, ofreciendo un contrapunto a las miradas más estructuralistas sobre estas materias. En este contexto, Huechuraba se perfila como un caso de estudio atractivo en virtud de la variabilidad de opciones edilicias que ha exhibido desde el retorno a la democracia en Chile, transitando desde sus primeros 8 años como comuna completamente autónoma de la mano de Sofía Prats desde las veredas de la Concertación, para luego experimentar 12 años de administraciones de derecha, al mando de Carolina Plaza (UDI – Independiente) y Eduardo Flores (UDI) (en reemplazo de Carolina Plaza tras su dimisión en el año 2011), para retornar en el 2012 a una opción concertacionista, Carlos Cuadrado Prats.

De esa manera, el problema que orienta esta investigación, guarda relación con el análisis del tipo de redes que entablaron las Juntas de Vecinos agrupadas en la Unión Comunal de Huechuraba, y las candidaturas de Carlos Cuadrado Prats y Marcelo Teuber en el marco del proceso de elecciones municipales del año 2012. En la misma línea, se presta especial atención a las modalidades de construcción de liderazgos locales en la comuna.

La naturaleza de este trabajo es fundamentalmente explorativa, por lo cual, en estricto rigor se ha declinado la opción de articular una hipótesis de trabajo que oriente la investigación. No obstante, si se dispone de algunos supuestos que se buscará tensionar frente a la evidencia recabada. En primer lugar que, si bien el traspaso de bienes materiales juega un papel protagónico en los espacios de circulación de las redes articuladas por estos actores, también se negocian cuotas de poder e inclusiones. De ese modo, lejos de constituirse una mera red de circulación “cosista”, lo que se articula son espacios de negociación política cuyos alcances son, no obstante, locales. En segundo lugar, que dichas redes abundan en mecanismos de funcionamiento informales, como la discusión y transacción directa entre líderes, o el traspaso de sufragios de voto a espacios no vinculados directamente a dichas materias, como los centros de madres y los centros de tercera edad.

Salvo los trabajos de Rolando Álvarez -de los que nos hacemos cargo más adelante- Huechuraba no ha sido objeto de estudios similares al propuesto, una posible explicación puede radicar en la proximidad temporal del problema sugerido. Así, la referencia más inmediata para esta investigación son los trabajos de Álvarez.

Las indagaciones de Álvarez forman parte de un cuerpo investigativo mayor en el que, junto a Verónica Valdivia, se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de reconocer, a propósito de las transformaciones operadas por la dictadura pinochetista sobre los municipios, una “alcaldización de la política” (Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012). Sobre esta perspectiva, Valdivia (Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012, pp. 11-50) propone que, actualmente, los municipios son percibidos por la población como la instancia del Estado que mayor influencia tiene sobre sus vidas. Ello, continúa la historiadora, habría sido un producto de las transformaciones operadas por la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo propósito era alejar a la ciudadanía de las instancias deliberativas vinculadas a las grandes decisiones del Estado. Una de las mayores trascendencias de ese fenómeno radicaría en que tras el retorno a la democracia, la Concertación mantuvo relativamente inalteradas las bases estructurales de dicho modelo. A nivel del impacto de ese modelo sobre las experiencias directas de la población, Valdivia concluye que se operó una nueva forma de participación sin capacidad deliberativa, y donde los problemas del día a día se transformaron en el principal foco de las relaciones, con un debilitado, cuando no nulo, sentido proyectual y de la globalidad.

Tanto Álvarez como Valdivia coinciden en el diagnóstico sobre las escasas innovaciones que trajo el retorno a la democracia sobre estas materias, pero disienten, hasta cierto punto, en su diagnóstico sobre los alcances de dicha influencia sobre la relación entre la población y la política. Aquí es donde la función del estudio de caso saca a relucir su trascendencia como facilitador a la hora de tensionar las hipótesis de orden más estructural (como la expuesta más arriba).

En esa línea, a propósito de la comuna de Santiago durante la administración edilicia de Jaime Ravinet (1990-1996) (Valdivia, Álvarez, Donoso, 2012), Valdivia arriba a la conclusión de que la perdurabilidad de la arquitectura municipal dictatorial desembocó en importantes grados de despolitización de la comunidad local, lo cual se tradujo en su marginación significativa de las instancias deliberativas y de la toma de decisiones en torno a la conducción de la comuna.

A propósito del caso de Huechuraba, en la transición desde la administración concertacionista de Sofía Prats (1990-1996) a la instalación de la derecha a través de Carolina Plaza, Rolando Álvarez (Inédito a) arriba a conclusiones distintas. Para él, lo que ocurrió fue la configuración de un “clientelismo desde abajo” que se tradujo en que, lejos de permanecer como agentes pasivos o inactivos, las comunidades municipales desarrollaron dispositivos para que sus demandas fueran escuchadas por los ediles. Sin embargo el tenor de dichas relaciones, continúa Álvarez, se mantuvo en una frecuencia pragmática, alejada de los liderazgos político-ideológicos tradicionales. En esa línea, el desplazamiento que se produjo en Huechuraba respondió,

precisamente, a esa diferencia en los perfiles edilicios, desde uno concentrado en el “modo de hacer” tradicional de la político, a uno más inserto en las nuevas lógicas, más apolíticas, con un perfil ejecutivo-gerencial, y concentrado en problemas del día a día, y no en aspiraciones proyectuales de largo aliento y alcances estatales.

En una revisión de sus conclusiones sobre el viraje político experimentado en la conducción edilicia de Huechuraba, Álvarez (Inédito b) sugiere que la denominada “lavinización” como marco de referencia electoral no necesariamente se tradujo en una penetración hegemónica de la derecha sobre la comunidad municipal, sino que respondió a una conjunción de elementos estructurales (el apogeo de un periodo de “despolitización”) y coyunturales, como la división del oficialismo que permitió el triunfo de la derecha con la primera mayoría relativa, pese a que, en términos absolutos, la mayor parte de la comunidad local no apoyó a la derecha. En ese sentido, tal como nos sugiere Álvarez, el caso de Huechuraba, como suele ocurrir en historia, debe ser abordado desde la compleja síntesis de las tendencias que atraviesan a las sociedades, junto con aquellos elementos que, a nivel local, mediatizan las respuestas de los actores frente a los estímulos globales

En virtud de la naturaleza reciente del fenómeno indagado, y del énfasis en el campo de las experiencias vivenciadas por los actores involucrados, esta investigación se funda, como una de sus principales fuentes, en la realización de entrevistas en profundidad de agentes claves vinculados a la Unidad Vecinal de Huechuraba y las candidaturas de Carlos Cuadrado Prats y Marcelo Teuber. Junto con el Alcalde actualmente electo, se ha entrevistado a la actual secretaria de la Unión Comunal de la Junta de vecinos de Huechuraba, Gumersinda Cofré, y a su primera directora, Ana Vera; adicionalmente se ha trabajado con el actual alcalde de la comuna, Carlos Cuadrado Prats. A lo largo de esta investigación se entregan mayores antecedentes sobre sus trayectorias biográficas. Esta investigación se alimenta del testimonio de otros dirigentes vecinales, pero ellos han expresado su voluntad de no ser individualizados. En este caso, sólo se ha utilizado el conocimiento recabado de ellos, sin hacer alusiones específicas. A su vez, se ha trabajado con información estadística en lo relativo a las series de resultados electorales proyectados desde los años noventa, archivos noticiosos y material publicitario utilizado en las campañas.

La principal orientación teórico-conceptual que guiará el tratamiento de dichas fuentes para los fines descritos, radica en el análisis de redes sociales (Brertrand y Lemerchie, 2011; Hanneman, s/f; Verd, 2006) (también conocido como análisis reticular). Para Larissa Adler y Anna Melnick (1998), las redes sociales son, desde una óptica académica, una construcción abstracta, en la medida de que no se encuentran necesariamente explicitadas en la realidad, sino que responden más bien a la visualización de ciertas relaciones que el investigador proyecta sobre una sociedad. Esta construcción permite visibilizar estructuras que generalmente no están definidas de modo formal en las propias sociedades en las que se manifiestan. Un supuesto clave es que las acciones de los sujetos condicionan y están condicionadas por el sistema de redes en el que participan, ello supone sostener que los individuos son, inherentemente, seres sociales. En relación a las redes de comportamiento del

tejido asociativo y social, Tomas Villasante (2002) propone que la generación de conciencias sociales y marcos de reconocimiento social no se produce de manera teleológica, ni puramente por subjetividad, sino más bien en el sistema de relaciones específicas que se establece entre la esfera de la producción y de la cultura, de ahí que sostenga que la investigación debe concentrarse justamente allí, donde ambos puntos confluyen.

El análisis de redes cuenta con un andamiaje conceptual capaz de inaugurar preguntas vitales en el análisis de grupos sociales. Al respecto, dos conceptos fundamentales son los de conexión y distancia. El concepto de conexión remite a una pregunta fundamental ¿cómo están conectados los individuos en una red social? Una interrogante de este tipo pone de relieve la necesidad de indagar en diversos atributos de las redes, tales como su composición, densidad y el grado de las relaciones que contiene.

El concepto de accesibilidad, por otra parte, permite generar un campo de problematización sobre los atributos de las conexiones que componen la red; en otras palabras facilita comprender la manera en que un actor está inmerso en una red, a partir de la indagación sobre la distancia que separa a un miembro de la red respecto de otros.

El análisis de redes permite acceder, inclusive, al análisis de textos biográficos, (denominado análisis de redes textuales), desde una perspectiva capaz de involucrar un nivel de análisis sincrónico (referido a los conceptos utilizados en un relato, sobre los cuales es posible elaborar una jerarquía de tipos, para comprender los usos cognitivos del relato), y uno diacrónico (respecto de las relaciones de causalidad, identidad y oposición que componen una narración).

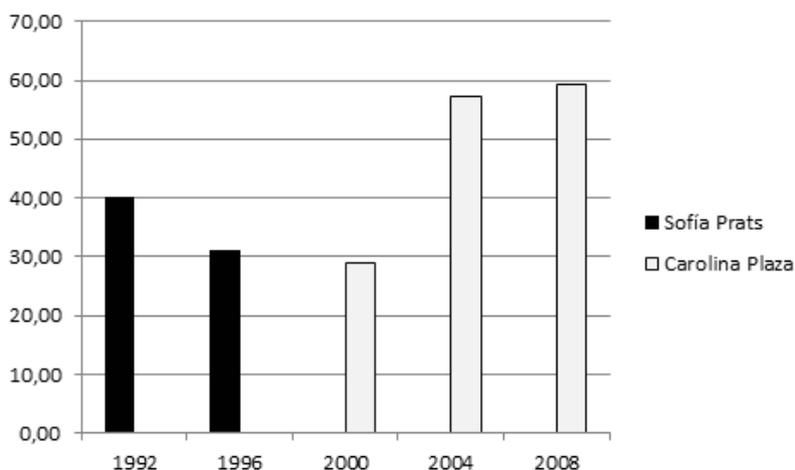
## II. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2012 Y LA COMUNA DE HUECHURABA: ANTECEDENTES, ACTORES Y RESULTADOS

Al enfrentar las elecciones municipales del año 2012, la comuna de Huechuraba portaba detrás de sí una trayectoria edilicia marcada por a lo menos dos ciclos (Álvarez, Inédito b). El primero (1992-2000) se caracterizó por una clara inclinación electoral a favor de candidatos de la Concertación, con Sofía Prats (PPD) como la alcaldesa electa sucesivamente en los comicios de 1992 y 1996. Con posterioridad al año 2000, la balanza se inclinó a favor de Alianza; en ese contexto Carolina Plaza alcanzó la alcaldía de la comuna consecutivamente en los años 2000, 2004 y 2008<sup>1</sup>. Durante este segundo periodo, la representación de la Concertación decayó inclusive a nivel de los concejales (ver Gráfico I).

<sup>1</sup> Para una muestra de las estadísticas electorales de la comuna, véase: Información Histórica Electoral. Disponible en: <http://historico.servel.cl/> (revisado por última vez el 02 de diciembre de 2014). También El Gráfico y Tabla I de este artículo.

Pese a esas fluctuaciones, Huechuraba se perfilaba como una comuna de tendencias en materia de sus opciones electorales en materia municipal, de ese modo, en ambos ciclos fue común la concurrencia de los mismos candidatos electos a lo menos por dos periodos (ver Tabla I). En ese escenario, cada uno los ciclos que se perfilaban hacia el 2012, habían descrito cierta regularidad interna, con los años 2000 y 2004 como una suerte de transición, en la que desaparecieron viejos rostros, y aparecieron otros nuevos, que circulaban en el municipio en vísperas del año 2012.

Gráfico I. Porcentaje de votos obtenidos por las alcaldesas electas en las elecciones municipales en Huechuraba (1992-2008).



Fuente: SERVEL. Años respectivos.

Esos años (1992-2012), no sólo fueron un tiempo de cambio en términos de opciones edilicias, sino también en materia de estilos de administración y gobierno municipal. Mientras Sofía Prats se mantuvo a la cabeza de la comuna, sostuvo una línea de acción que se caracterizó por el desarrollo de iniciativas de orden estructural (especialmente en materia de infraestructura, salud y vivienda), en el marco de una comuna que, en la década de 1990, contaba con altos índices de pobreza y una exigua dotación de servicios. Mientras tanto, el periodo liderado por la administración de Carolina Plaza se diferenció por su proximidad al estilo de conducción política cercano a los principios esbozados por aquel entonces por Joaquín Lavín, con un marcado énfasis en la resolución de problemas inmediatos, en una fórmula que fue sintetizada como el dar solución a los “problemas reales de la gente” (Álvarez, Inédito b).

Tabla I: Frecuencia de Alcaldes y Concejales electos en Huechuraba, y porcentajes de votos obtenidos. 1992-2008.

Candidato	1992	1996	2000	2004	2008
Sofía Prats (PPD)	40.13% (A)	31.24% (A)	23.12% (C)		
Carmen Gloria Allende (PS)	4.88% (C)	8.86% (C)	20.65% (C)		
Ramón Elizalde (DC)	12.84% (C)				
Rosa Harán (DC)	2.49% (C)	8.87% (C)			
Gabriel Rodríguez (DC)	7.84% (C)	10.69% (C)	9.84% (C)	11.51% (C)	
Eduardo Rosales (UDI)	2.82% (C)				
Carolina Plaza (UDI-IND)		6.80% (C)	28.96% (A)	57.15% (A)	59.24% (A)
José Retamales (PPD)		1.64% (C)	2.15% (C)		
Aníbal Rodríguez (UDI)			1.09% (C)		
Valentina Egart (UDI-ILE)				22.06 (C)	30.04% (C)
Eduardo Flores (UDI)				6.43% (C)	
José Hormazabal (UDI)				4.93% (C)	3.75% (C)
Sergio Escobar (PPD)				13.18% (C)	
Camila Benado (PS)				9.48% (C)	6.10% (C)
Daniel Bustos (RN)					3.33% (C)
Carlos Cuadrado (PPD)					14.81% (C)

Fuente: Archivo Histórico SERVEL. 1992-2008.  
(A)= Alcaldesa; (C)= Concejala.

En síntesis, la trayectoria edilicia descrita históricamente por Huechuraba estaba llena de matices de frente al año 2012. En el pasado más lejano, una clara iden-

tificación electoral con partidos vinculados a la Concertación. En el período más reciente, desde la década del 2000, una inclinación hacia la derecha que, sin embargo, no marcó una desaparición del espectro electoral de inclinación concertacionista, aunque sí su debilitamiento; en esos términos, cabe recordar que en el año 2000, tras Carolina Plaza se habían ubicado Sofía Prats (PPD) y Carmen Gloria Allende (PS) con un 23.12% y 20.65% de las preferencias, respectivamente; en el 2004, la alcaldesa UDI había sido secundada por Carmen Gloria Allende con un 37.42% de los votos; y en el 2008 Sergio Escobar (PPD) había alcanzado el 36.62% de los sufragios.

Paralelamente, hacia el año 2012, la trayectoria de las organizaciones comunales contaba con una historia propia. El “casco histórico”<sup>2</sup> de Huechuraba, se perfilaba como una zona que había emergido fruto de las tomas de terrenos, y que albergaba en su suelo a pobladores que habían forjado su experiencia de vida en medio de la pobreza como una realidad concreta y cercana (Garcés, 1997). Consultados sobre su trayectoria en la comuna, los miembros de la Unidad Comunal de Junta de Vecinos señalaron que una proporción importante de los vecinos que actualmente supera los 40 años de edad, vivieron durante su infancia la experiencia de la toma de terrenos<sup>3</sup>; se trata de un antecedente relevante, considerando que era esa misma población la que, hacia los años 2000, eran los mismos que formaban parte del padrón electoral que participó del viraje edilicio de la comuna hacia la derecha.

Hacia la década del 2000, la comuna exhibía un gran dinamismo en materia de organizaciones vecinales. Su importancia destaca no sólo por su número, sino también por su variedad, con una amplia presencia de organizaciones vinculadas al ámbito de las juntas de vecinos, organizaciones deportivas y organismos de adultos mayores (véase Tabla II)<sup>4</sup>. Nuevamente, en este apartado el “casco histórico” de Huechuraba, presente especificidades importantes de notar. Al ser consultados sobre sus vínculos con otros sectores de la comuna (Pedro Fontova, Ciudad Empresarial, La Pirámide) los miembros de la Unión Comunal señalaron que, a nivel de Juntas de Vecinos no existía lazo alguno, bien porque en dichos sectores no se habían formado esa clase de asociaciones, o bien porque si la había, no estaban al tanto de su existencia. En ese contexto, desde la óptica que ofrecen estos dirigentes, el mundo de la organización vecinal ligado al “casco histórico” aparece como un universo auto contenido, desconectado de las otras zonas de Huechuraba.

2 El concepto hace alusión, genéricamente, al sector donde se desarrollaron las primeras tomas de terrenos en Huechuraba, que se transformaron en los barrios de mayor longevidad en la comuna, como la Pincoya, el Bosque 1, o El Barrero. Consultados sobre su uso, el Alcalde Carlos Cuadrado Prats y los representantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Huechuraba, señalaron que sirve para distinguir a esa zona de áreas de desarrollo más reciente, y vocación socioeconómica distinta, como Pedro Fontova, Ciudad Empresarial, o La Pirámide.

3 Entrevista a Gumersinda Cofre y Ana Vera. Noviembre de 2013. Archivo Personal.

4 Para una muestra de las series estadísticas ligadas a estos organismos, véase: Reportes estadísticos Comunales 2012. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: <http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Huechuraba#toc> (Consultado por última vez el 04 de diciembre del 2014).

Tabla II.  
Organizaciones sociales y comunitarias en Huechuraba, 2010.

Tipo de organización	Total
Clubes deportivos	210
Centros de madres	45
Organizaciones de adulto mayor	62
Centro de padres y apoderados	28
Juntas de vecinos	36
Uniones Comunales	257
Otras Organizaciones	3

Fuente: Reportes estadísticos Comunales 2012.  
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Con todo, dicha afluencia y circunscripción territorial de las organizaciones vecinales en Huechuraba, no debe ser interpretada apresuradamente. Como se expondrá más adelante, en relación a la Unión Comunal y las Juntas de Vecinos, existen rasgos de una alta heterogeneidad en cuanto a la magnitud de las funciones que concretamente realizan, así como una conexiones de intensidad desigual entre ellas. Ello en el marco de conflictos internos entre los propios representantes vecinales, así como desiguales intereses en materia de vinculación y pretensiones proyectuales respecto de los objetivos que buscan alcanzar a través de las organizaciones de las que forman parte. Ello sumado a una irregular tasa de participación de los vecinos no vinculados directamente a la dirigencia vecinal en actividades propias de las Juntas, como el desarrollo de reuniones y procesos electorarios.

Más allá de estos matices, es posible afirmar que, en caso alguno, la comunidad Huechuraba carecía de experiencia organizativa, tanto en su pasado más remoto, como en la inmediatez de las elecciones municipales del año 2012.

¿Cuál fue el panorama que ofrecieron los resultados de las elecciones Municipales del año 2012? El puesto de alcalde fue alcanzado por Carlos Cuadrado Prats (PPD) (hijo de la otrora alcaldesa Sofía Prats) con un 47.04% de los votos, superando por 18 puntos a Marcelo Teuber (UDI), que obtuvo el 28.23% de los sufragios. Dentro de las elecciones para concejales, Eduardo Flores (UDI) obtuvo la mayor votación individual (11.02%), la que le permitió “arrastrar” a su compañera de lista (UDI e Independientes) Macarena Zamorano (ILH) que sólo obtuvo un 4.64% de los votos. Paralelamente, se instalaron como concejales Daniel Arias (ILB)<sup>5</sup>, Freddy

5 Por la Lista Regionalistas e Independientes.

Seguel (PPD)<sup>6</sup>, Luzmenia Toro (PCC)<sup>7</sup>, y Leonardo Bustamante (PS)<sup>8</sup>(véase Tabla III). En otras palabras, si bien se perfilaron alternativas de continuidad (como Eduardo Flores<sup>9</sup>), el esquema edilicio experimentó un reordenamiento, concluyendo un ciclo de 12 años en los que, de forma ininterrumpida la derecha había estado a la cabecera de la comuna, de la mano de Carolina Plaza.

El giro del que se habla ¿constituyó una experiencia aislada en mapa electoral de Chile en al año 2012? Para encontrar una respuesta a dicha interrogante, resulta necesario realizar una lectura de los resultados electorales en varios registros. En términos de listas, la Coalición<sup>10</sup> se impuso en primer lugar con el 37,52% de los votos, seguida por la Concertación Democrática<sup>11</sup>, que sólo obtuvo el 29,44% de las preferencias; es importante notar que, dentro de la esfera concertacionista imperaron importantes grados de dispersión, lo que se tradujo, por ejemplo, en la formulación de listas independientes por parte de partidos como el PPD. Con todo, en términos netos, las diferencias entre ambos sectores tendieron a estrecharse. De ese modo, si bien la UDI se alzó con el mayor porcentaje de votos (17.98%) fue seguida de cerca por el PDC, que obtuvo un 16.51%<sup>12</sup>.

Así, volviendo a la pregunta inicial, lo que ocurrió en Huechuraba apuntó, en cierto modo, en contra de la tendencia global, aunque se trató de un fenómeno que se desarrolló en un clima marcado por cierto acortamiento de la distancia entre las dos principales coaliciones de partidos políticos en términos electorales ¿Qué especificidades formaron parte del escenario en el que se produjo este resultado electoral? Esta es una de las respuestas que, en lo sucesivo, se abordan desde una triple óptica que ofrecen las candidaturas que se presentaron al proceso electoral del 2012, la posición de organizaciones vecinales como las Juntas de Vecinos, y los vínculos que se desarrolló entre ellos y el resto de la comunidad de la comuna.

6 Por la Lista "Por un Chile más justo" (PPD e Independientes).

7 Por la Lista PC + Independientes.

8 Por la Lista Concertación Democrática.

9 Desde septiembre del 2011 ejercía la alcaldía de la comuna, luego de que la alcaldesa electa, Carolina Plaza, renunciase al cargo para integrarse a la División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del ministerio Secretaría General del Gobierno. Al respecto véase: La Segunda Online. Concejal Eduardo Flores (UDI) es elegido como nuevo alcalde de Huechuraba. 21 de septiembre de 2011. Fuente: <http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/09/683068/Concejal-Eduardo-Flores-UDI-es-elegido-como-nuevo-alcalde-de-Huechuraba> (Consultado por última vez el 04 de diciembre de 2014)

10 UDI, RN, Independientes Lista H.

11 PDC, PS, Independientes Lista F.

12 Fuente: <http://historico.servel.cl/EleccionesMunicipalesWEB/alcaldes.action.html> (Consultado por última vez el 04 de diciembre de 2014)

Tabla III. Resultados elecciones Municipales 2012 en Huechuraba

Candidato electo	Partido Político	% de votos
Carlos Cuadrado	PPD	47.04
Daniel Arias	ILB	4.11
Freddy Seguel	PPD	7.14
Luzmenia Toro	PCC	5.65
Leonardo Bustamante	PS	11
Eduardo Flores	UDI	11.02
Macarena Zamorano	UDI	4.64

Fuente: Archivos Servel.

### III. FORMULACIONES E IMÁGENES DE CARA A LA ELECCIÓN MUNICIPAL DEL 2012. CARLOS CUADRADO PRATS Y MARCELO TEUBER

Los candidatos que, finalmente, obtuvieron el primer y segundo lugar en las elecciones de alcaldes de Huechuraba, manifestaron estrategias y programas significativamente distintos. A través de su examen, se abre la posibilidad de visualizar la lectura que primó, en ambos casos, sobre los lenguajes, imágenes, aspiraciones y proyectos que tendrían una recepción favorable entre los vecinos de la comuna. En otras palabras, es una oportunidad para entender de qué forma interpretaron sus candidaturas el cómo relacionarse con los votantes de Huechuraba.

Carlos Cuadrado Prats ya contaba con una vinculación edilicia en Huechuraba -como concejal electo el año 2008- hacia el año 2012. Al ser consultado sobre las formas de vinculación que privilegió durante su ejercicio como concejal, así como a lo largo de su campaña electoral, destacó la vinculación con los vecinos en espacios donde se desarrolla su vida cotidiana -“los espacios naturales en los que la gente está” (Cuadrado, 2013) -, como el consultorio o la feria. En su opinión, se trataba de una práctica clave a la hora de proyectar una imagen de cercanía, de presencia en los espacios donde se concreta la experiencia vivida de las personas (Cuadrado, 2013). En esa línea, el propio Cuadrado señala que su campaña se basó en

“Hacer lo que hicimos en dictadura, estar con la gente, en las buenas y en las malas, a distintas horas, trabajar con ellos, todo lo cotidiano, y hacer que exista la confianza de la gente en uno (...) dar grados de cercanía de la autoridad para con la gente (...) eso fue para el periodo para ser concejal como para ser alcalde” (Cuadrado, 2013).

En la construcción elaborada por Cuadrado, el factor de cercanía alcanza, inclusive, imágenes cercanas al concepto de familia. Al respecto, el entonces candidato comentaba que

“Tres niños en estos cuatros años me entregaron sus pistolas, eso quiere decir que vieron en mí al padre que no está, al hermano mayor, a su abuelo, o alguien de la historia de Chile que recuerdan con cariño, eso es lo que es una autoridad política, ejemplo, y nosotros en estos años hemos transmitido eso, valores, principios, ética y moral, hemos sido cariñosos con la gente” (Franja electoral, 2012)<sup>13</sup>.

Esa imagen de cercanía uno de los rasgos destacados por los dirigentes vecinales a la hora de reflexionar en torno a la figura de Cuadrado Prats durante su oficio como concejal, y su campaña electoral. Una dirigente vecinal vinculada a la Unión Comunal lo destaca en su recuerdo en los siguientes términos “(...) se lo pasaba en el consultorio, en la feria (...) él sólo, él hacía sus cosas, él escribía su nombre, Carlos Cuadrado” (Cofré, 2013).

Así, la propuesta articulada por Carlos Cuadrado está llena de matices discursivos. En términos proyectuales, su propuesta articulaba enfoques diferenciados para los diversos sectores socioeconómicos y territoriales que forman parte de la comuna. De esa manera, definía su visión de la alcaldía como: “Una corporación de desarrollo comunal que integra la voluntad de desarrollo económico de los emprendedores, la aspiración a una mejor calidad de vida del caso antiguo, y también, en el sector de Pedro Fontova, la posibilidad de que vivan con las condiciones que ellos aspiraban vivir” (Noticiero UC13, 2012).

Dentro de los énfasis que, en su opinión, lo distinguen respecto de la trayectoria descrita por la comuna de la mano de Carolina Plaza, Carlos Cuadrado también enfatiza una posición de rechazo frente al asistencialismo per se. Sin desestimar la necesidad de entregar beneficios inmediatos, para él se trataba de generar “justicia social” y proporcionar ayudas eventuales, en miras a entregar herramientas que permitan la superación de ese vínculo. Así, al transponer el impacto de las prácticas asistencialistas a la relación entre el municipio y organizaciones vecinales, señalaba que

“El asistencialismo social y la dependencia de la autoridad social intermedia, juntas de vecinos, organismos; estaban muy condicionadas y muy limitadas por la relación que establecía la autoridad política con ellos. Por lo tanto, si la autoridad política se portaba bien con ellos obtenía apoyo, simpatía de la autoridad, si la autoridad política tenía mala, o tenía posiciones divergentes iba el castigo, la no consideración, iba la marginación. Por lo tanto, la reestructuración de la relación entre la

<sup>13</sup> Resulta importante destacar que, en la entrevista realizada en el marco de esta investigación, Carlos Cuadrado destacó, nuevamente, esta anécdota como uno de los sellos que imprimen un rasgo distintivo sobre él.

organización y la unidad política comunal pasa por reestablecer una forma de relación distinta, donde el dirigente entiende, que independientemente la posición que tenga, va a ser respetado en su diferencia por la autoridad política” (Cuadrado, 2013).

Una de las primeras diferencias que distinguió a Marceo Teuber de Carlos Cuadrado Prats, fue la ausencia de una trayectoria edilicia equivalente en la comuna. Teuber llegaba a Huechuraba presentando una trayectoria como concejal por Recoleta durante doce años. Consultadas sobre las estrategias de campaña de Teuber, Dirigentes Vecinales destacan una amplia presencia publicitaria (a través de pancartas, afiches, entre otros) en comparación a la desplegada por Cuadrado Prats.

Uno de los sellos enfatizado por Teuber a la hora de delinear rasgos distintivos, fue su identificación con la otrora alcaldesa Carolina Plaza. En ese sentido sostenía que: “La Carola fue una buena alcaldesa, esencialmente en sus primeros ocho años, y yo vengo a tomar el testimonio de todas las cosas buenas que se han hecho en la comuna en este último tiempo, pero también asumiendo y reconociendo que faltan muchas cosas por hacer” (Franja electora, 2012).

En cuanto a su imagen personal, la imagen que buscó proyectar fue una vinculada con la eficiencia, basada en su trayectoria profesional, familiar y política. En esos términos, manifestaba que

“Soy profesional, titulado de Administración Pública, con vocación por el servicio público. He sido concejal por 12 años de nuestra vecina comuna de Recoleta, donde he sido elegido siempre con la más alta votación. Ahí me he caracterizado por realizar un trabajo colaborativo y he demostrado que con esfuerzo, planificación y constancia es posible alcanzar las metas.

Hoy quiero asumir un nuevo desafío, y esta vez por mi comuna. Con la misma pasión que me ha caracterizado toda la vida y el compromiso de mi familia, en especial de mi esposa Fabiola, trabajaremos intensamente por mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de Huechuraba”<sup>14</sup>.

A diferencia de la figura articulada por Cuadrado Prats, la figura de justicia proyectada por Teuber se fundaba en un principio de eficiencia basado en la solución de problemas concretos e inmediatos. De ese modo, su programa edilicio para el “casco histórico” de Huechuraba, se componía de los siguientes tópicos: a) Más seguridad, b) Mejor infraestructura en calles y avenidas, c) Mejores espacios públicos, d) Red de protección familiar, e) Mayor y mejor infraestructura deportiva, y

14 Fuente: <http://marceloteuberalcalde2012.blogspot.com/p/conoceme.html>. (Consultado por última vez el 04 de diciembre de 2014). Cabe destacar que la construcción de ese tipo e figura ideal encontró un correlato similar en las estrategias de campaña desarrolladas por Carolina Plaza. Al respecto, puede consultarse: (Plaza, 2006).

f) Vivienda<sup>15</sup>. Todas se trataban de iniciativas que apuntaban a campos de acción concretos, de ejecución y efectos visibles a corto plazo. Se trataba, así, de una apuesta “apolítica” en apariencia, carente de contenido proyectual en materia sociopolítica; más bien apuntaba a un estilo de gestión de corte “gerencial”<sup>16</sup>, basado en la intervención sobre problemáticas acotadas, principalmente en materia de servicios básicos, vivienda e infraestructura vial.

Así pues, en síntesis, Cuadrado Prats y Teuber ofrecían lecturas profundamente distintas sobre la realidad de la comuna, y la percepción que primaría entre los vecinos a la hora de inclinarse por una de las alternativas edilicias. Mientras que el representante del PPD proyectó su imagen en torno a los conceptos de cercanía e integración con la comunidad, desechando las herramientas del asistencialismo como fin, proponiéndose como un individuo que, a la vez, representaba una suerte de anhelo colectivo, un espíritu protector; una suerte de “padre” protector, dentro de una comunidad representada como una familia. Paralelamente Teuber, elaboró una representación de sí de orden más “gerencial”, cercano a principios como la eficiencia y la eficacia en la resolución de problemas concretos; en ese sentido, más que su vínculo y/o identificación con la comunidad, la fortaleza que buscó manifestar fue su capacidad para la concreción de metas.

¿Qué vínculos y representaciones desarrolló la contraparte representada por las Juntas de vecinos respecto de esas dos alternativas y sus respectivas “figuras ideales” de cara a la competencia por el sillón edilicio? Dicha interrogante forma parte de las consideraciones vertidas en la siguiente sección.

#### IV. DIRIGENTES VECINALES, JUNTAS DE VECINOS Y LA UNIÓN COMUNAL. ACTORES Y ORGANISMOS (DES) ARTICULADOS

Al ser consultados sobre los roles que concretamente describen las Junta de Vecinos y la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, los dirigentes vecinales entrevistados en el marco de esta investigación<sup>17</sup>, dejan entrever un panorama complejo, marcado por profundas desarticulaciones tanto entre Juntas, como entre estas y los vecinos no vinculados directamente a instancias directivas.

15 Fuente: <http://marceloteuberalcalde2012.blogspot.com/p/mis-compromisos-casco-antiguo.html>. (Consultado por última vez el 04 de enero de 2014). Problemas como la seguridad eran habituales dentro de las propuestas de candidatos de derecha. Una muestra de ello puede rastrearse en el énfasis puesto por Joaquín Lavín en su propuesta de programa de gobierno de 1999, donde proponía descentralizar las decisiones en materia de combate a la delincuencia, a través de la creación de planes de seguridad comunal. La misma Carolina Plaza saltó a la palestra pública al proponer, en el año 2010, detectores de metales en liceos de la comuna. Al respecto véase: Radio ADN. Alcaldesa Carolina Plaza propone polémica idea de poner detectores de metales en liceo de Huechuraba. 20 de abril de 2010. Fuente: <http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alcaldesa-carolina-plaza-propone-polemica-idea-de-poner-detectores-de-metales-en-liceo-de-huechuraba/20100420/nota/991615.aspx> (Consultado por última vez el 04 de diciembre de 2014).

16 Para un análisis de ese perfil, desde el estilo de hacer política que fijase Joaquín Lavín, véase: (Álvarez, Inédito b).

17 Gumersinda Cofré (Secretaría Unión Comunal) y Ana Vera (Primera Directora Unión Comunal).

En esa línea, uno de los primeros rasgos que salta a la luz es que, hacia el año 2012, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos era objeto de severas confrontaciones intestinas, fruto de acusaciones de malversación y substracción de fondos entre los miembros de la directiva. Fruto de esas pugnas, han surgido nuevas organizaciones (las denominadas “Juntas de Vecinos del Pueblo<sup>18</sup>”), que no se encuentran afectas a la Unión Comunal.

Se trata sólo de uno de los signos visibles de desafección que alcanza matices mucho más profundos. En opinión de la experiencia de los entrevistados, la Unión Comunal sólo se vincula esporádicamente con las Juntas de Vecinos, cuando solicitan algún tipo de colaboración. Ello ha desembocado en que, en última instancia, existen diversas Juntas con las que jamás se ha entablado alguna clase de vínculo concreto; de hecho, los dirigentes entrevistados declaran conocer cuántas Juntas de Vecinos existen concretamente en el “casco histórico” –aún menos en el total de la comuna-.

La participación de los vecinos que no forman parte directa de la esfera de la dirigencia vecinal también acusa los rasgos de una notoria desafección. En opinión de una de las entrevistadas, la participación se manifiesta de forma esporádica, vinculada esencialmente a la obtención de algún beneficio inmediato. En esos términos declara: “Poca participación, muy poca participación (...) Es reacia la gente, por ejemplo si tú le dices, mira, va a haber una comida para toda la población, al tiro van, o vamos a regalar tal cosa. (...) pero cosas para ayudar a la junta de vecinos, ahí no” (Cofré, 2013). Contrariamente, en otras instancias, como el desarrollo de comicios para la elección de dirigentes, se desarrolla un notorio ausentismo: “Ahí va como la mitad, porque son mil y tanto los que van a votar, ira la cuarta parte, no van todos, aunque estén inscritos en los libros” (Cofré, 2013). De esa manera, es posible visualizar que el tipo de relación que se desarrolla alcanza una fisonomía propia de las redes clientelares.

De ese modo, la Unión Comunal y las Juntas de Vecinos no se perfilan como un nodo convocante a través del cual se estrechen lazo entre la esfera de la dirigencia vecinal y los residentes de la comuna. La evidencia parece apuntar que, más bien, estos espacios se configuran como espacios de circulación de poder cooptados por quienes se dedican a la dirigencia de manera regular; obteniendo allí reconocimiento -al ostentar un cargo-, herramientas de vinculación y generación de redes -a través de actividad como la organización y repartición de beneficios emanados desde el municipio y otras organizaciones benefactoras-, y poder -al poseer capacidad de decisión y control sobre las actividades y bienes ligados a las Juntas-.

De esa forma, la clave de estas organizaciones no está en el papel que cumplen en cuanto institución, sino en las oportunidades que ofrecen a los individuos que han

18 Así son denominadas una serie de juntas vecinales escindidas de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Huechuraba. Según informa Ana Vera, uno de los principales objetivos de dichas organizaciones es abrir espacios para la participación directa de los vecinos, prescindiendo de la representación ejercida por los dirigentes vecinales electos.

hecho suya la práctica de la dirigencia sindical, permitiéndoles disponer cuotas de poder y reconocimiento al interior de sus comunidades. En otras palabras las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal se configuran, respecto de los dirigentes, como un espacio capaz de generar fuentes de poder y medios para ejercerlo. Sin embargo, no constituyen el principal foco para la generación de redes sociales entre los dirigentes y los pobladores; es en otras instancias, más ligadas a la vida cotidiana de las personas, donde se generan esos lazos<sup>19</sup>.

La trayectoria biográfica de los dirigentes vecinales entrega claves que ayudan a sostener dicha interpretación. En esa línea, un primer rasgo que cabe advertir es su vasta trayectoria en el campo de la dirigencia vecinal, trascendiendo el campo de la Junta de Vecinos. De ese modo, una de las entrevistadas (Cofré, 2013) manifiesta que:

“Aquí en la junta de vecinos van a ser 8 años, he estado siempre de secretaria, en la unión comunal he estado 3 años, también de secretaria, y ahora estoy de tesorera. [Pregunta: ¿Y en otras organizaciones?] Adulto mayor, soy la presidenta (...) [Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo está allí?] doce años” (Cofré, 2013).

Otra de las entrevistadas señala que, junto a su vinculación a la Junta de vecinos, ha participado en la organización de Talleres Escuela para la nivelación de estudios, en la “Organización Social Cultural por la Vida” abocada a prestar apoyo a vecinos con cáncer y en el Consultorio La Pincoya como dirigente (Vera, 2013).

En torno a los perfiles de permanencia en la dirigencia vecinal, se manifiesta que el desarrollo de trayectorias largas es otra de las constantes que ligan a los individuos vinculados a las Juntas de Vecinos: “ Por ejemplo la Gladys Vargas, no te miento, estuvo como 15 años en la unidad comunal, estuvo el Juan Guiñe, pero no de presidente, de secretario, con la (Gladys) después estuvo Eduardo Flores, de acá de la Villa (...) Yo cuando se fue la Gladys Varas entre yo (...) Antes el Carlos Reyes también estuvo” (Cofré, 2013). En ese contexto, Freddy Moya (presidente de la Unión Comunal en el año 2012) constituyó una excepción a la norma; al estar vinculado sólo algunos meses ya que decidió candidatearse a concejal por la comuna.

Otro rasgo común es una relación compleja con la esfera de la política. Consultadas sobre este tópico, las dirigentes entrevistadas declararon en un caso haber sido militante de la UDI (actualmente desafiada del partido), y en otro que su padre había sido comunista. Sin embargo, a la vez destacan que esas filiaciones y preferencias no guardan relación con su instalación como dirigentes sindicales; en ese sentido, como se expone a continuación, los criterios más relevantes para ser electo tienen que ver con el desarrollo de lazos personales en espacio de la vida cotidiana.

19 Al respecto, tanto Ana Vera como Gumersinda Cofré coinciden en la centralidad que adquieren otros espacios como el entorno cercano al hogar y los almacenes locales.

En esa línea, una característica compartida es el estrechamiento de lazos en instancias que trascienden la Junta de Vecinos. Al respecto, la explicación que proporcionan para explicar por qué son electos en los cargos, prima el “ser conocido”, lo que se logra a través del contacto directo. Así, una dirigente destaca que gracias a una barraca de la que es dueña, ha logrado entablar vínculos de cercanía y confianza con los pobladores vinculados a la unidad vecinal de la que forman parte. Otra destaca el desarrollo de actividades anexas a la dirigencia vecinal, como la repartición de “listas” de beneficiando para los familiares de vecinos difuntos.

Respecto de la vinculación a la Junta de Vecinos en sí, lo que destacan como uno de los factores que explica porque logran ser conocidos entre los pobladores, es la realización de actividades extra programáticas y de beneficencia que se conducen a través de las Juntas; como la repartición de juguetes en navidad, el desarrollo de almuerzos, o la organización de paseos a piscinas y balnearios del litoral central.

De ese modo, tal como se proponía más arriba, los dirigentes vecinales utilizan las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal como una herramienta dentro de un sistema de redes y prácticas mucho más complejo que les permite administrar cuotas de poder y entablar redes de reconocimiento y ayuda con los vecinos de su entorno. En ese sentido, las organizaciones no constituyen fuentes de poder, pero son los dirigentes, a través de sus trayectorias individuales, de los vínculos y los grados de reconocimiento que logran conservarlo, quienes lo ejercen.

Hasta este punto, se han delineado las trayectorias discursivas, los modos de relacionarse y las formas de obtención y ejercicio del poder en entornos comunales de candidatos y dirigentes vecinales, y sus proyecciones relacionales hacia el resto de los pobladores. Queda ahora, por último, examinar el tipo de lazos que entablaron, y proponer, desde allí, algunas líneas interpretativas que permitan comprender en qué contexto se produjo el viraje electoral que resultó de las elecciones municipales del año 2012 en Huechuraba.

## V. A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL 2012 EN HUECHURABA: UNA EXPLICACIÓN DESDE LAS RELACIONES SOCIALES

Indudablemente, la explicación en torno al porqué Carlos Cuadrado Prats logró triunfar en las elecciones de alcaldes del año 2012, luego de un período de 12 años de administraciones de derecha, no puede circunscribirse a un único factor. En conjunto, tal como se ha expuesto, la comuna de Huechuraba constituye un universo socioeconómica e históricamente diverso; a su vez, cada una de la zonas que forman parte de la comuna se encuentra jalonada por sus propias tensiones y mixturas internas. De ese modo, una explicación total, siempre se encontrará en el orden de la multicausalidad. Sin embargo, en base a lo expuesto lo largo de este trabajo, es

posible entender algunas de las tendencias que, en Huechuraba, forman parte de la experiencia ligada a la generación de liderazgos, las fuentes del poder a escala local y las formas en que se ejerce.

Al respecto, lo que se observa es que, en la comuna, las trayectorias biográficas, las cuotas de reconocimiento individual, y el contacto directo en espacios de la vida cotidiana, forman piezas decisivas en el proceso de articulación de liderazgos reconocidos y aceptados entre los vecinos. Si bien el desarrollo de lazos clientelares, dirigidos a la solución de problemas concretos, juega un papel decisivo en lo que se considera constituyen las labores inherentes de una autoridad, no bastan per se, deben ir recubiertas de un sentido de proximidad, pertenencia y accesibilidad en la relación autoridad/líder y vecinos. Desde esa misma óptica, a nivel organizacional, las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal son más plataformas para la circulación y obtención de cuotas de poder en sí mismas, más que organismos dotados de una individualidad inherente, capaz de convocar ampliamente la participación de todos los vecinos.

Al analizar cada uno de los rasgos propuestos, puede comenzar a elaborarse un marco hipotético para explicar el triunfo de Cuadrado Prats y la derrota de Teuber. En primer lugar, las trayectorias biográficas. Al respecto, una de las claves para la formación de liderazgos reconocidos guarda relación con la capacidad de exhibir una historia de pertenencia y servicio hacia los pobladores de la comuna. En ese sentido, Cuadrado Prats disponía de un pasado ligado a la resistencia contra la dictadura que le permitió entablar un vínculo de proximidad con el pasado del caso histórico de la comuna; además, su vínculo con Sofía Prats hacía de él una figura de cierto modo “familiar”. Por otra parte, contaba con el antecedente inmediato de haber sido concejal por la comuna. Paralelamente, Teuber contaba con un capital biográfico considerablemente menor; si bien contaba con el antecedente de ser vecino de la comuna, había desarrollado su capital político como concejal por Recoleta lo que hacía de él, en el esquema edilicio de Huechuraba, una figura “recién llegada”. En ese marco, es notorio visualizar cómo buscó ligar su figura a la de Carolina Plaza, presentándose como una alternativa de continuidad respecto de los 12 años precedentes.

En cuanto al reconocimiento individual, Carlos Cuadrado logró generar en torno de sí una imagen de accesibilidad y presencia en los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, de modo similar al como construyen su liderazgo los líderes vecinales, proyectó una imagen de cercanía, de ocupar espacios como la feria y el consultorio. De ello se desprendió una figura de preocupación materializada en acciones concretas y observables en la experiencia diaria de los vecinos. De ese modo, su reconocimiento no se construyó en torno a la estampa del “alcalde” sino de la persona preocupada, interiorizada e integrada de la vida de Huechuraba y sus pobladores; fue en ese escenario donde apareció en su discurso, de forma recurrente, la representación de la comuna como una familia y la búsqueda de justicia social.

Marcelo Teuber construyó, por el contrario, una imagen más lejana, fundada en principios de eficacia que, en este trabajo, han sido homologados a un perfil “gerencial”. Si bien la capacidad de dar solución a problemas concretos aparece como un rasgo positivo, los indicios rastreados en esta investigación parecen dar cuenta de que no bastaban por sí mismo para construir un liderazgo realmente sólido. Por otra parte, hubo otro factor que debilitó la figura de Teuber a nivel de reconocimiento individual: los cuestionamientos de los que fue objeto por pago irregular de sueldos por servicios prestados a la piscina de Huechuraba en el año 2004 (La Nación, 26 de Noviembre, 2006), así como por el escándalo de los vínculos irregulares entre la empresa GMA y el alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo (UDI). En dicho proceso, se señaló a Teuber como uno de los operadores que, junto a Cornejo, procedían de manera irregular (La Nación, 13 de Junio, 2008). De ese modo, su capital de reconocimiento individual recibió cuestionamientos desde la óptica de un posible perfil de corrupción.

El contacto directo fue otro de los rasgos intensamente explotados por Cuadrado Prats. Al respecto, los líderes vecinales entrevistados coinciden en visualizar en él a una figura próxima, accesible; con la que se puede ingresar en un intercambio directo. Por el contrario, manifestaron no poseer demasiadas referencias acerca de un contacto igual de intenso de parte de Teuber. Una vez más, aparece como una figura más distante.

Por último, el rol de las estrategias asistencialistas. Si bien se muestra crítico de ellas, Cuadrado Prats exhibe un perfil en el que esas prácticas no han sido desechadas, aunque su aplicación va recubierta de un discurso que apela a otras formas de vinculación, ligada al pasado, y a la búsqueda de horizontes comunes, como la justicia social. Paralelamente, Marcelo Teuber diseñó una propuesta programática mucho más limitada en la resolución de problemas inmediatos, sin un mayor horizonte a mediano o largo plazo.

De ese modo, el tipo de liderazgo generado por Cuadrado Prats encuentra muchos puntos de encuentro con las formas de relacionarse que exhiben los dirigentes vecinales de la comuna. Cabe insistir que esa imagen se construyó en torno de él como individuo, no de la coalición y partido político al que representaba. Algo similar a lo que ocurre en las Juntas de Vecinos y la Unión Comunal; sin desconocer tendencias y pasados ligados a partidos y sectores políticos, y haciendo de las organizaciones vecinales como plataformas de las que se obtiene recursos y cuotas de poder, lo que prima en ellos es la representación que construyen sobre sí mismos, en cuanto individuos, capaces de conseguir a través de sí, favores, beneficios y metas tangibles para los vecinos que se vinculan con ellos.

Al principio de este trabajo se planteaba que uno de los debates que gira en torno a la sociedad chilena actual, guarda relación con sus grados de integración de una matriz de pensamiento neoliberal, y su relación con el ejercicio de la política y el desarrollo de relaciones de poder. A modo de conclusión, una que busca sembrar más preguntas que certezas, podría señalarse que, el caso de Huechuraba, ense-

ña que, efectivamente, muchos de los viejos rasgos del hacer política en Chile han perdido terreno, como la preponderancia de los partidos políticos; otros elementos se encuentran fuertemente cuestionados, como la representatividad de los procesos eleccionarios a la luz de los altos grados de abstención que se han manifestado en el último tiempo. Más allá de esas tendencias globales, el caso estudiado también da cuenta que en espacios locales como estos subyacen formas de articulación y ejercicio del poder específicos, lenguajes propios en torno al rol y posición de los líderes, y maneras específicamente aceptadas de proyectar la imagen y papel que debe encarnar una autoridad elegible. Cabría hablar, en ese sentido, de una comunidad comunal a medio camino entre los efectos de tendencias que se manifiestan a nivel de país, y formas de significar la realidad basadas en la experiencia, espacios y relaciones donde se lleva a cabo la vida cotidiana.

## BIBLIOGRAFÍA

- Adler, L. y Melnick, A. (1998). *La cultura política chilena y los partidos de centro. Una explicación antropológica*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Álvarez, R. (Inédito a) *La nueva política en el Chile post dictatorial. ¿Pasividad ciudadana o clientelismo desde abajo?* (1990-1996).
- Álvarez, R. (Inédito b). “¿Lavinización de la política?”. *Continuidades y transformaciones de la política chilena. El caso del municipio de Huechuraba*. (1996-2000).
- Bertrand, M. y Lemercie, C. (2011) ¿En qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?, *REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales* Vol.21, #1, Diciembre 2011. Disponible en: [http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol21/vol21\\_1.pdf](http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol21/vol21_1.pdf).
- Garcés, M. (1997). *Historia de la comuna de Huechuraba*. Santiago: ECO.
- Hanneman, R. (s/f), *Introducción a los métodos de análisis de redes sociales*. Disponible en: <http://revista-redes.rediris.es/webredes/text.htm>.
- Plaza, C. (2006). *Sí se puede; Huechuraba por la dignidad de todos*. Santiago: A&V Comunicaciones.
- Valdivia, V., Álvarez, R. y Donoso, K. (2012) *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista*. Santiago: LOM.
- Miquel Verd, Joan. La construcción de indicadores biográficos mediante el análisis reticular del discurso. Una aproximación al análisis narrativo-biográfico. *REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales*. VOL. 10, #7, Junio 2006. (Disponible en: [http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol10/vol10\\_7.pdf](http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol10/vol10_7.pdf)).
- Villasante, T. (2002). *Teoría de redes de comportamiento ¿Cómo interpretar toda esta recomposición social, que va más allá de unos datos asociativos aislados? Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la complejidad social*. Montevideo: Ed. CIMAS-Nordan.

## PRENSA

- La Nación.
- Diario La Segunda

- Radio ADN
- Noticiero UC13

## PÁGINAS WEB

- Servicio electoral de Chile. Disponible en: <http://historico.servel.cl/>
- Reportes estadísticos Comunales 2012. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: <http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Huechuraba#toc>
- Franja electoral Huechuraba (23-09-2012). Disponible en: [http://www.youtube.com/watch?v=OM3cJwICXvQ&list=PLA04y7-RRfY-Cbl0xo1wR\\_FirVtGOyr8w&index=5](http://www.youtube.com/watch?v=OM3cJwICXvQ&list=PLA04y7-RRfY-Cbl0xo1wR_FirVtGOyr8w&index=5)
- <http://marceloteuberalcalde2012.blogspot.com/p/conoceme.html>.

## ENTREVISTAS

- Entrevista a Carlos Cuadrado Prats. (Noviembre de 2013).
- Entrevista a Cofré, Gumersinda (Noviembre de 2013). Secretaria Unión Comunal.
- Entrevista a Vera, Ana (Noviembre de 2013). Primera Directora Unión Comunal.

# COMENTARIOS Y ENSAYOS

/ COMMENTS AND ESSAY



## COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO:

RIESCO, MANUEL (2012), *EL PARTO DE UN SIGLO: UNA MIRADA AL MUNDO DESDE LA IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA*, CENDA-USACH, SANTIAGO

Luis Corvalán Marquez\*

### PRIMERO

Al leer el libro de Manuel Riesco “El parto de un siglo”, tempranamente nos damos cuenta de que estamos en presencia de un texto de considerable alcance. Su apariencia es la de un libro de economía. Pero, a mi parecer, se podría decir que finalmente lo que tenemos a la vista es un libro de política. No, claro está, en el sentido contingente del término, sino en una significación de más largo aliento, incluso fundante.

Dicho de otra manera, estamos en presencia de un libro de perspectiva política que, sin embargo, argumenta sus tesis desde la economía, así como también desde una implícita reflexión historicista e incluso filosófica, aunque quizás esta última se halle subyacente.

A partir de estos supuestos me atrevería a sostener que Manuel Riesco recoge, -aunque con otra perspectiva-, esa tesis de Lenin que sostiene que para trazar la estrategia política se requiere antes que nada precisar el “carácter de la época”.

Como es sabido, Lenin consideraba que, en el marco de la fase imperialista del capitalismo, -la cual a su juicio generaba todas las premisas materiales para el socialismo faltándole a éste sólo el factor subjetivo para su implementación práctica-, el carácter de la época consistía en la crisis general del capitalismo, -iniciada con la revolución de octubre-, y en el paso desde el capitalismo al socialismo a escala mundial. Ello mediante la revolución proletaria. Como se dijo, Lenin estimaba que la premisa que faltaba para operar ese tránsito, -cuyas premisas objetivas consideraba cumplidas-, era el mencionado factor subjetivo, es decir, la voluntad revolucionaria, cuyo núcleo era el partido. En este caso, un partido mundial, la Internacional Comunista, que Lenin se abocó a fundar y organizar.

Pues bien, la primera tarea que consciente o inconscientemente asume Riesco en su libro consiste precisamente en situarse en la problemática de Lenin. Es decir, en la referente a la caracterización de la época. Pero ello no en base a los referentes de un siglo atrás, sino a la luz de toda la historia del siglo XX y de los procesos que hoy transcurren ante nuestros ojos. Incluyendo la historia del socialismo real y su derrumbe, sobre lo cual Riesco propone una lectura. Dicho de otro modo, Riesco problematiza el carácter de la época pensando el tema desde el siglo XXI.

\* Chileno, Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Valparaíso.

En tal tarea, a mi juicio, hace una definición teórica, -siempre implícitamente-, que de hecho remite a la historia del pensamiento socialista, y particularmente marxista. Esta definición se sitúa dentro de la tensión que siempre existió, -no solo en la II Internacional, sino también en la III-, entre las condiciones objetivas requeridas para instaurar el socialismo y las condiciones subjetivas, esto es, la voluntad revolucionaria de sus fuerzas motrices.

Ya Marx, en su conocida Contribución a la crítica de la economía política, de 1859, de alguna manera, quizás un tanto oblicua, abordó el tema. Al respecto sostuvo que la revolución conducente al socialismo no era posible sin sus premisas materiales, o sea, sin sus condiciones objetivas. Su formulación fue la siguiente: “al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social.” Y más adelante agrega: “ninguna formación desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua.”

A través de estos planteamientos, a mi juicio, Marx -a la inversa de lo que parece- no hacía abstracción del factor subjetivo, esto es, de la voluntad revolucionaria. Lo que hacía era correlacionarlo con las condiciones objetivas, al margen del cual sería impotente. En este sentido, -podríamos interpretarlo- quiso decir que aunque la voluntad revolucionaria lograra imponerse por sobre inmaduras condiciones “objetivas”, a la larga estas le pasarían la cuenta.

Como es sabido, en la historia de socialismo europeo la II Internacional enfatizó la falta de maduración de las condiciones objetivas para el socialismo, mientras que la III, -aunque a mi parecer especialmente al comienzo-, las dio por existente poniendo sus énfasis en las subjetivas, esto es, en la voluntad revolucionaria, que había que desarrollar.

Pues bien, a mi juicio, -no sé si conciente o inconscientemente-, Manuel Riesco en su libro -es cierto que de manera implícita- se sitúa precisamente en esa dicotomía. E incluso más, toma partido decididamente por uno de sus polos. En este caso, por el que enfatiza la primacía de las condiciones objetivas. O, mejor dicho, se inclina por la tesis que sostiene que hoy por hoy no existen las condiciones objetivas para el socialismo.

Hoy por hoy, a su juicio, las condiciones objetivas por las que atraviesa el planeta no corresponderían a las premisas requeridas por aquél. Por tanto, se haría necesario adecuar a este hecho duro el pensamiento político de los que hasta hoy lucharon por el socialismo.

Toda la primera parte del libro de Riesco gira en torno a esta tesis. Su argumento central se podría resumir así: recién ahora, a comienzos del siglo XXI, se están generalizando en el planeta las relaciones de producción capitalista, o sea, en sus términos, la modernidad. ¿cómo entonces se podría transitar al socialismo si este siempre fue considerado como el

resultado de la superación de las contradicciones inherentes al capitalismo el cual no se hallaría hasta ahora generalizado en el planeta sino en curso de serlo?

El carácter de la época, en consecuencia, no consistiría en el paso del capitalismo al socialismo, sino en el paso del precapitalismo a la modernidad capitalista, cuestión que vigorosamente estaría en pleno decurso. Ello a nivel planetario. El análisis de los dos últimos siglos, a juicio de Riesco, demostraría este aserto. Los hechos, los datos empíricos, incluyendo en primer lugar el derrumbe del socialismo real, lo pondrían en evidencia.

De allí la necesidad de adecuar el pensamiento a estas realidades. “Mirad, hay cráteres en la luna”, nos dice, para referirse al derrumbe de la visión medieval del mundo frente a la visión moderna, la que en el siglo XVI no hacía más que dar cuenta de una insoslayable empiricidad. En base a estas consideraciones, Riesco nos quiere decir que estamos ante un desafío análogo. Esto es, que tenemos que modificar nuestra visión del mundo, -que antes se focalizaba en un proyecto socialista o de perspectiva socialista- adecuándola a los hechos, particularmente de los ocurridos en el último siglo, que demostrarían que las premisas materiales del socialismo recién estarían configurándose.

En lo dicho, a mi juicio, reside la base teórica del libro, lo que fundamenta todo lo que sostiene luego. Esto es, que la transición del precapitalismo -que identifica con el mundo agrario tradicional- a la modernidad capitalista se halla todavía incompleta, aunque, con la globalización, en vertiginoso ritmo de avance; que lo progresista, bajo ciertas condiciones que explica, es contribuir a su culminación; y que sólo entonces, en un futuro que parece lejano, se podrá pensar en una superación del capitalismo.

Una de las características del libro de Manuel Riesco reside en que dota de abundante material empírico a sus tesis. Particularmente ricos son los datos que proporciona, -para los más diversos lugares del mundo-, sobre las migraciones campo ciudad, los procesos de urbanización, los cambios culturales inherentes a esto, la generalización del trabajo asalariado, etc., en resumen, sobre el paso del orden tradicional y agrario a la modernidad capitalista. No insistiré en este aspecto que recorre su libro, aunque quiero destacarlo con particular énfasis. En este sentido, la labor intelectual de Manuel Riesco, -se compartan o no sus tesis-, hace gala de una encomiable seriedad. Otra evidencia al respecto la constituye su capacidad para dialogar con diferentes autores, no solo europeos y norteamericanos, sino también chilenos, de cuyas reflexiones se muestra al tanto y en las cuales en parte se apoya.

## SEGUNDO

El libro, por otra parte, hace gala de una clara concepción de la historia. Al respecto, como ya se insinuó arriba, parece distinguir dos grandes fases en la historia humana: la tradicional agraria, por un lado, y la modernidad capitalista, por el otro. El mundo contemporáneo, -particularmente el siglo XX-, se caracterizaría por el paso a escala planetaria de la primera fase a la segunda. Ello -y en esto Riesco es muy enfático- al

margen de toda uniformidad y, por tanto, en medio de variadísimas formas, teñidas por la cultura, las personalidades y las más diversas singularidades históricas. No obstante, el contenido fundamental del proceso histórico mundial sería esencialmente el mismo. Esto es, el paso a la modernidad capitalista. ¿Hay aquí un determinismo? Habría que verlo. ¿Dónde reside la necesidad del paso a la modernidad dejando atrás al mundo agrario? ¿Qué compele a la humanidad a pasar de una fase a otra? Marx al respecto habría dicho que sería el desarrollo de las fuerzas productivas el factor desencadenante de tal transición, fuerzas productivas que en su desarrollo van haciendo que las relaciones de producción deban adecuarseles. Manuel Riesco no aborda el punto.

El tema que sí aborda es el referente a la modalidad pionera de ese tránsito, verificada en Inglaterra, donde el libre mercado predominará, aunque sin prescindir del Estado. No obstante -dice Riesco- el Estado, en el mismo tránsito, pero en otros lugares del mundo, habría tenido un rol fundamental. Tal habría sido el caso Ruso (soviético) y el Chino (actual). Porque, a juicio de Riesco, estos casos, y otros análogos que menciona, no constituirían procesos conducentes al socialismo sino formas particulares de la transición del mundo agrario a la modernidad capitalista. Ello, no obstante, sólo habría quedado claro a fines del siglo XX a través de los acontecimientos de todos conocidos, particularmente el derrumbe del bloque soviético.

Análogo -aunque de ningún modo igual- habría sido el caso latinoamericano. Aquí el tránsito a la modernidad capitalista, con todas sus diversidades de un país a otro, habría operado mediante lo que Riesco denomina el desarrollismo, hecho posible debido a cierto control de las burocracias profesionales y técnicas sobre los Estados, cuestión que habría ocurrido, más menos, desde los veinte del siglo pasado en adelante. Esas burocracias, no habrían podido ser cooptadas por las oligarquías, lo que les permitió llevar adelante, a través de la inversión pública y otros instrumentos estatales, los procesos modernizadores que se tradujeron en las industrializaciones sustitutivas, muchas veces apoyadas en las masas populares. Pero no sólo eso, dichas burocracias instalaron lo que Riesco denomina "estados de bienestar social", con sus respectivas prestaciones de salud, educación, vivienda, etc., y con su respectiva institucionalidad. Así habría emergido la modernidad capitalista en América Latina y también en Chile. Riesco aporta numerosos datos históricos para apoyar esta tesis recorriendo la historia de nuestros países, y particularmente de Chile, a lo que dedica varios apartados.

A juicio de Riesco, por otra parte, el éxito del desarrollismo, con su correspondiente estado de bienestar, terminó causando su crisis. Dicho simplíficadamente, la modernidad que indujo creó clases empresariales, y otros recursos humanos, que podían emprender por sí mismas -y quizás mejor- la tarea modernizadora que el Estado desarrollista venía realizando por décadas. Ello se tradujo en el desplazamiento del desarrollismo por el Consenso de Washington, cuyos esquemas creaban mejores condiciones para la acción de tales clases empresariales y, por tanto, para un despliegue más acelerado de la modernidad.

Esto significa que el Consenso de Washington, o sea, el neoliberalismo, sólo habría sido posible por el éxito del desarrollismo. Habría constituido, en cierto modo, la continuación

lógica de este último dentro de una carrera de postas cuyo contenido consistiría en el despliegue de la modernidad. Al respecto Chile sería el caso paradigmático. En efecto, el crecimiento económico que empezara en 1986 y que no pararía sino hasta la crisis asiática, (para ser parcialmente retomado años más tarde) habría sido posible debido a que la dictadura militar no revirtió los avances modernizadores de la Unidad Popular, sobre todo la Reforma Agraria y la nacionalización del cobre. Dicho de otra forma, habría sido posible por las continuidades existentes entre las dos fases, y no por sus rupturas.

No obstante los esquemas del Consenso de Washington, y la modalidad extrema que adoptara en Chile, pese a que continuaron con los desarrollos de la modernidad, lo hicieron con gigantescos costos sociales, nos dice Riesco (aparte de los asesinatos masivos y otras violaciones a los Derechos Humanos, -y de la clausura de la democracia-, que en Chile estuvieron en su origen). En el contexto de la fuerte contracción del gasto social y de la destrucción del Estado de bienestar social que llevara a cabo, -y que Riesco demuestra con abundantes cifras-, los logros del neoliberalismo beneficiaron sólo al quintil más pudiente. Insistamos, Riesco lo demuestra con lujo de detalles.

En vista de estos hechos, el neoliberalismo terminaría en un fracaso, agotándose. Las privatizaciones que le fueron propias, y su racionalidad exclusivamente mercantil, terminaron produciendo pobreza para los más. Y al incumplir las expectativas que generara, como se dijo, se agotó y su agotamiento se hizo evidente en todo el mundo que de nuevo empezó a mirar hacia el Estado.

Ante el agotamiento de los esquemas del Consenso de Washington Riesco postula la necesidad de abrir paso a un neodesarrollismo que restaure un modernizado estado social del bienestar, que instale agendas sociales universales e inclusivas, con sus premisas: un sistema tributario adecuado a ello. Este neodesarrollismo, en todo caso, no implicaría un retorno al viejo desarrollismo. Desde ya supondría la integración latinoamericana. Es decir, tendría que darse a nivel regional, sobre lo cual Riesco hace importantes consideraciones, sobre todo en torno al MERCOSUR, en lo que no podemos detenernos.

Otro aspecto nuevo de este neodesarrollismo residiría en que hasta cierto punto, con su correspondiente rol regulador del Estado, debería representar una síntesis dialéctica con el consenso de Washington y sus más altos niveles de productividad derivados de la existencia de las nuevas clases empresariales, clases que -siendo, al parecer, los actores claves de la modernidad junto a las clases medias urbanas- requerirían de un ambiente adecuado para los negocios, que dentro de eficientes marcos regulatorios, habría que matener.

Da la impresión que Riesco quisiera decirnos que esta verdadera síntesis dialéctica que se expresaría en el neodesarrollismo constituye la premisa para la continuación del despliegue de la modernidad. Y, más aún, convertirse en funcional a tal proceso sería la tarea de la izquierda del siglo XXI. Esta es, a mi juicio, la gran conclusión política del libro.

## TERCERO

A propósito de la síntesis que Riesco nos propone quisiera nuevamente retomar el tema de los supuestos teóricos o filosóficos que parecen subyacer en su libro. A este respecto no puedo ocultar que el texto me sugiere cierto hábito hegeliano. A mi juicio, sus páginas parecen insinuar, en efecto, que el proceso histórico mundial es racional y que tiene una meta hacia la cual ineluctablemente se dirige, aunque por vías extraordinariamente diversas. Tal meta sería la consumación de la modernidad capitalista y después, -en un futuro indefinido-, su superación por una forma que no precisa. Dentro de esa especie de teleología cada fase del proceso parece necesaria y, en tanto tal, representaría un valor. Y su negación por la fase siguiente sería dialéctica. Es decir, se haría manteniendo los elementos válidos en un plano superior. Por eso la crítica que Riesco hace al modelo del Consenso de Washington no supone su condena en bloque. Hay elementos suyos, dice, que deben ser mantenidos en el neodesarrollismo. Al respecto se refiere a ciertos servicios de salud y educación privados, los que deberían coexistir con universales sistemas estatales de educación y salud gratuitos y de calidad, como está en nuestra tradición, por lo demás.

Pero este hegelianismo del texto creo verlo sobre todo en el rol que en la historia Riesco le asigna a las clases subalternas y a las corrientes políticas e ideológicas que se apoyan en ellas. "Honor y gloria a los jacobinos", dice refiriéndose a las mismas. Dichas clases en su discurso parecen ser un instrumento de la razón que regiría al mundo, razón que se materializaría gradualmente a través de la historia, particularmente en el universal proceso de modernización en curso. Esas clases no luchan en su beneficio, nos dice Riesco, aunque creen hacerlo. No por casualidad son las perdedoras de siempre. En realidad ellas luchan, sufren y mueren, -haciendo gala del más increíble heroísmo-, para acelerar el decurso histórico, para hacer lo que los que se beneficiarán con los grandes cambios y revoluciones no se atreven a hacer por sí mismos. Se trata de los sans culottes, de los bolcheviques, de los rodriguistas, etc. Otros ganarán con su sacrificio. Pero, como se dijo, sobre todo ganará el proceso histórico, o la HISTORIA, con mayúscula, a la que aquellos, en el cumplimiento de su misión, harían avanzar.

## CUARTO

Para ir finalizando quisiera hacer cuatro consideraciones más, un tanto críticas. La primera se refiere a la ausencia en el texto de Riesco de referencias a las empresas transnacionales (ETN) y al total control que (con las excepciones consabidas) estas pasaron a ejercer -hasta hoy- sobre los países latinoamericanos, con la correspondiente extracción de gigantescos excedentes. En correlación con esta ausencia, en el texto de Riesco el modelo neoliberal impuesto en América Latina -en mi percepción- se insinúa como un resultado del proceso de modernización desatado por el propio desarrollismo, más que como la consecuencia del desenlace, que se produjo en los setenta, de la lucha entre, por un lado, los sujetos mesocráticos y populares con proyectos de perspectiva socialista y, por

el otro, el imperialismo norteamericano y sus aliados internos, las oligarquías. Desenlace que fue violento y que en muchos países vino seguido de dictaduras militares terroristas que crearon, a través de asesinatos masivos, las premisas políticas para la posterior instalación del neoliberalismo (cuestión, esto último, que a veces corrió por cuenta de los propios civiles).

Mi segunda consideración apunta a poner en duda la valoración en bloque de la modernidad, especialmente en el plano económico, que Riesco parece tener en alta consideración. Respecto al punto hago mío lo que se ha señalado con tanta insistencia durante las últimas décadas. Esto es, que el crecimiento propio de la modernidad capitalista (y también de lo que se llamó “socialismo real”), es destructivo del ecosistema y, por tanto, de la humanidad misma. Por tanto, como ideal absoluto es cuestionable, si no suicida. Como es sabido, en base a este supuesto es que han aparecido propuestas como las de la economía del decrecimiento, el ecosocialismo y la ecología profunda, entre otros. ¿Romanticismos? Quizás, pero sólo desde cierto enfoque ideológico. Esto es, desde ciertos paradigmas productivistas como los que con tanto éxito están destruyendo el planeta. Creo que las mencionadas propuestas merecen ser examinadas en su mérito.

La tercera consideración se refiere al hecho de que la modernidad capitalista, con su énfasis en la posesión de objetos y de consumo mercantil, absolutiza un aspecto de lo humano. Su punto de mira, en efecto, es el homo economicus, el productor y consumidor, el supuesto creador de “la riqueza de las naciones”, con la correspondiente amputación de sus aspectos más elevados. A saber, la dimensión espiritual, la preocupación metafísica, ética y estética, la de los valores desinteresados, como los de la solidaridad y de la compasión a la que se refiere Riesco en su texto, etc.

En referencia a la función deshumanizadora del capitalismo -y a su economicismo evidente- Marx decía que el capitalista no era dueño de su capital, sino a la inversa, que el capital era dueño del capitalista; decía que el capitalista era una mera función de la reproducción ampliada del capital y que, por lo tanto, ya no era un sujeto. Se había alienado: su producto se le había impuesto.

De aquí se puede concluir, entre otras cosas, que el problema no consiste sólo en crear riqueza material, -cosa que dentro de ciertos límites es indispensable- sino en crear humanidad en su sentido más amplio, porque es aquí donde realmente reside la verdadera “riqueza de las naciones”. El punto es si la modernidad capitalista es compatible con este objetivo humanista. Mi impresión es que no.

¿Cómo llevar a cabo una reflexión sobre el futuro deseable que contemple estas dimensiones? Creo que el libro de Manuel contribuye al respecto. Si no, fíjese el lector en las constantes consideraciones que hace al sufrimiento humano involucrado en el desarrollo de los procesos históricos que describe, preocupación que, como es sabido, precisamente no caracteriza a todos los economistas. Véase la descripción de casos particulares que reitera, y su crítica al neoliberalismo al que acusa de no ser compasivo. El neodesarrollismo que Riesco propone sí lo sería, particularmente a través de la universalización de los servicios sociales de calidad, entre otros. Agreguemos la valoración que Riesco hace

de las clases subalternas las que aún perdiendo son, a su juicio, las más valiosas, precisamente porque pagan los costos del eventual avance de la historia, aparte de que en gran medida lo hacen posible.

La tercera consideración que antes de terminar quisiera hacer se refiere al tema del reemplazo en Chile del agotado neoliberalismo por el neodesarrollismo lo cual, -nos dice Riesco-, se hallaría acorde con el carácter de la época. La pregunta que al respecto surge es la siguiente. ¿Qué modalidad de neodesarrollismo cabría impulsar por parte de una izquierda del siglo XXI?

Esta pregunta surge de la constatación que Riesco dice hacer en orden a que el desarrollo de la modernidad, aunque tiene un fondo común, transcurre por caminos muy diversos. Tanto es así que el propio socialismo soviético habría constituido una modalidad posible de ello. (En efecto, la experiencia soviética para Riesco habría constituido una modalidad de desarrollismo). Esto análogamente significa que, del mismo modo como hubo muchos desarrollismos posibles, también habría muchos neodesarrollismos posibles. De allí la pregunta ¿cuál sería el que debería impulsar una izquierda del siglo XXI?

Si aceptamos que esa es la interrogante que realmente tenemos planteada, (cosa que es discutible) mi personal respuesta sería, para decirlo esquemática y simplificada, la siguiente: un desarrollismo que empalme con la tradición de la izquierda del siglo XX; esto es, que responda a los intereses de las clases subalternas, -con su correspondiente impulso a una legislación social y al fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores-; que nacionalice los recursos naturales del país y que cree un Area Social de la Propiedad, ello con vistas a financiar con los respectivos excedentes un Estado Social de Derecho; que reestructure el Estado en un sentido democrático con vistas a combinar lo representativo con lo participativo, pluralista y pluripartidista, eliminando la influencia del dinero en la política; y, en fin, que, dejando atrás la dominación de la oligarquía plutocrática y de las ETN, cree con la participación de todos un multifacético proyecto nacional (respetuoso de la naturaleza) capaz de insertarse en el mundo globalizado en base a una identidad latinoamericanista, coordinándose con los otros países de la región. Y, por último, que no pierda de vista la perspectiva socialista, no concebida para un futuro remoto.

## QUINTO

Quiero terminar recomendando la lectura de este libro, serio, sólido, con gran apoyo empírico y que deja planteadas tesis susceptibles de generar ineludibles discusiones. Sin dudas, su tesis principal -sobre el carácter de la época, que en el fondo sólo es una hipótesis- lejos de sentar nuevas certezas, debiera precisamente contribuir a ello.

## COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO: PALMA RAMOS, JOSÉ (2012), *EL MIR Y SU OPCIÓN POR LA GUERRA POPULAR. ESTRATEGIA POLÍTICO-MILITAR Y EXPERIENCIA MILITANTE. 1982-1990.* EDICIONES ESCAPARATE, CONCEPCIÓN

Mariano Vega Jara\*

Bajo un contexto de dictadura militar, represión política y social, los llamados a “todas las formas de lucha” calaron hondo en la militancia de izquierda en general, por ello, el texto de José Antonio Palma Ramos constituye un gran aporte a la historiografía de la militancia política durante la década del '80 en el siglo XX. La introspección de la investigación contribuye a abrir y visualizar aquellas lógicas clandestinas, secretistas y conspirativas del MIR, descubriendo las complejidades naturales de una militancia y experiencia política-militar.

Como señala el autor, reconstruir este período histórico es hacer una historia de “lo que fue” y de “lo que no fue”, develando su mitificación o satinización por militantes, adversarios y/o enemigos políticos. A su vez, dicha obra nos presenta un marco analítico definido por un estudio teórico e interrelación práctica entre la Violencia Política (VP) y la militancia político-militar del MIR, el cual rejuvenece el estudio de la militancia política con sus nuevos aportes. Para ello, el autor nos sumerge en un debate aclaratorio sobre las diferencias entre los conceptos de violencia, fuerza, poder y agresión, destacando que fuerza y violencia están conectados entre sí, mas el poder es un grado mayor porque modifica a individuos o grupos dotados de una mínima voluntad. La violencia sería la transformación del estado físico de dichos individuos o grupos, por lo cual se conectan en lo político, donde se disputan los conflictos. La agresión apela a acciones violentas como mecanismo de resolución de dichos conflictos, pero a pesar de utilizar fuerza en la ejecución, la violencia no termina cuando se acaban los sentimientos de agresión, por el contrario, adquiere carácter proyectivo si no se resuelve, llevando a nuevos conflictos. Aclarado estos conceptos, el autor nos define la VP como una acción o un estado de acción que se genera en el seno de un conflicto, ya sean sociales o políticos, donde en lo político se instala una praxis de lucha por el poder a través de su ideologización, adoc-trinamiento e instrumentalización. Así, la VP se genera por una acción bajo un contexto político que contiene objetivos políticos, los cuales afectan de manera física y mentalmente a los individuos o grupos, siendo ejercida desde arriba, el Estado, o desde abajo, la sociedad civil o un grupo de ella (pp. 38-41).

A partir de esas definiciones, se establece el análisis o su “aventura conceptual” —según sus palabras—, a partir de lo que define como Violencia en la Cotidianeidad de la Práctica Política (VCP), es decir, la complejización de las formas de los niveles de

\* Chileno, Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, UMCE y ©Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile (USACH). Correo electrónico: mvega22@gmail.com

lucha con elementos técnicos y cuadros políticos —lo político-militar— en lo cotidiano, lo cual elevaría los niveles de concientización y compromiso para radicalizar los frentes sociales de lucha e insertar reivindicaciones programáticas a plataformas más amplias que el propio MIR y en el Movimiento Democrático Popular (MDP) (Pp. 120-125). Sobre la tríada violencia política-estrategia-división (partidaria), el autor irá abordando de manera monográfica el desarrollo de la militancia mirista bajo las Jornadas de Protesta Nacional (JPN) contra la dictadura militar. En este contexto se destaca la tesis central del libro, la cual señala que la Estrategia de Guerra Popular Prolongada (EGPP) como línea político-militar —que se puede caracterizar como *ethos*—, tuvo divergencias tácticas en la militancia mirista, ya sea por la vinculación orgánica a la Dirección Nacional de Masas (DNM) o a la Comisión Militar (CM), llevando a posturas diferentes en los frentes sociales o de masas, lo cual paulatinamente llevó a la división partidaria. En pocas palabras, el planteamiento político-militar que asumía el MIR en la lucha contra la dictadura generó una crisis política, y luego orgánica, a partir de su lectura de la realidad derivada de la EGPP, ya que las movilizaciones populares anti-dictadura se desarrollaron más por el ámbito social y político y no militar como la definía el MIR (pp. 238-257). La EGPP de carácter maoísta-vietnamita de “el pueblo en armas” y su expresión centroamericana, fue lo que definió la militancia mirista desde la “Operación Retorno” o Plan 78, incentivando la creación de una fuerza militar propia, un ejemplo de ello fue el Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro (DGTL) en Neltume, aniquilada por las fuerzas represivas de la dictadura. Posteriormente se crearían las Milicias de Resistencia Popular (MRP) y las Brigadas Salvador Allende (BSA), con un carácter más miliciano urbano, territorial y de masas —en teoría—, que igualmente fueron desarticuladas por la represión, el desgaste y las dudas sobre la línea a seguir en movilizaciones populares que no adscribían a la lógica militar.

Sin lugar a dudas, el MIR al ser un partido u orgánica de carácter político-militar, tuvo la impronta de articular diferentes orgánicas en base a las tareas de la EGPP, de ahí que en el ámbito militar hubieran orgánicas como el DGTL, las MRP y la Fuerza Central (FC), estableciendo diferencias operativas según las categorías militantes. Los lineamientos en las tareas operativas se enmarcarían en la creación de una fuerza social revolucionaria (FSR) donde el MIR juega un rol de vanguardia político-militar contra la dictadura militar. El punto a destacar de la EGPP es su relación a los diversos métodos de lucha revolucionaria y su praxis por medio de la acción directa, ya sean ataques armados frontales a las fuerzas represivas del régimen, sabotajes, atentados, hostigamientos físicos-psicológicos, lucha miliciano urbana, entre otras. Es aquí donde el autor nos hace énfasis en que la VCPP imprimió a la praxis del MIR un carácter procesual y progresivo en el uso de la VP señalada por la EGPP. El *ethos* mirista actuó como eje articulador de las relaciones orgánicas partidarias y su inserción en los frentes de masas, pues de dicha forma se contribuiría a incrementar la FSR necesaria para la insurrección de masas, según las tesis militares. Sin embargo, un punto muy importante que resalta el autor es que el MIR no tuvo un carácter homogéneo, por el contrario, la heterogeneidad —desde la fundación— primó en los debates partidarios como las líneas de expresión de la EGPP, lo que contribuye a no sobredimensionar el carácter monolítico y vertical cuando se apela al “militarismo” del MIR. Más preciso es señalar que, como se menciona en el texto, más que el centralismo

democrático, lo que primó fueron las acciones y ejecuciones de las tareas operativas de la EGPP, dejando el debate o discusión sobre las líneas de dicha estrategia a los cuadros político-militares de dirección de las estructuras orgánicas del MIR, la DNM y la CM, por lo cual las bases miristas eran receptivas a la línea de mando vertical de las órdenes militares. Aquí, el autor nos señala una tesis referida a que la Comisión Política (CP) en el exterior-exilio del MIR presionaba a la CP del interior para planificar y desarrollar una praxis político-militar, que la dirección interna no veía necesariamente como la correcta por la merma de militantes debido a la represión y a los cambios sociales y políticos en la formación social chilena. Interesante punto que nos habla de las lecturas político-militares de las direcciones del MIR, configurando las relaciones orgánicas entre los propios militantes y su propia experiencia militante al calor de las JPN. No estaría de más un estudio que ahonde las diferencias político-militares tanto de las CP interior y exterior sobre las bases de las subjetividades políticas y cómo estas influenciaron el ethos mirista.

Consecuente con la división y compartimentación de las tareas operativas de la EGPP, la predominancia de lo militar en la praxis imprimió una serie de sucesivas derrotas a las orgánicas militares, DGTL, FC y las MRP, lo cual se proyectó a los frentes sociales (estudiantil, poblacional, sindical, campesino y Derechos Humanos) como colaterales o apéndices de la EGPP. La merma de militantes por la represión, la propia compartimentación clandestina y vertical, más la heterogeneidad de discusión —por lo menos en las direcciones miristas— y a las JPN, hicieron que se catalizara o abriera el ethos mirista a las movilizaciones populares que tenían características más sociales-políticas que militar. A pesar de estos reveses militares, al autor toma defensa por el carácter más miliciano urbano y popular de las MRP, donde la VCPP imprime su praxis para crear la necesaria FSR que cree las condiciones desde los propios movimientos sociales (o frentes de masas) para la insurrección. Las JPN al abrir un espacio más “público” o “legal”, de la misma forma abrieron o visibilizaron las diversas lecturas heterogéneas de la EGPP en los cuadros político-militar, reafirmando la tesis central de nuestro autor, lo cual llevaría a la posterior división y fragmentación del MIR.

Sin embargo, diferimos con parte del núcleo que sustenta la tesis de división y fragmentación del MIR que nos señala el autor. Para él la división tendría tres antecedentes; la heterogeneidad en la composición política desde la fundación de MIR, lo cual no pudo homogeneizar la línea política; las exigencias sobredimensionadas de la dirección exterior hacia los dirigentes en el interior en cuanto a profundizar la lucha militar, sin tener un real análisis de la situación concreta y la correlación de fuerzas del movimiento de masas; y su tesis central, que las divergencias tácticas en la EGPP llevaron a tener diferentes lecturas de la línea, unido a la vinculación con las estructuras orgánicas político-militares, bajo una perspectiva insurreccionalista de masas (DNM) o el “Ejército del Pueblo” (CM). No hay dudas que la división en 1987 del MIR se vincula a diferencias tácticas en la EGPP, pues tanto la DNM como la CM coincidían en que la salida a la dictadura era militar. Como correctamente señala el autor, lo táctico primó sobre lo estratégico. Mas, este análisis sólo explica la causa orgánica de la división, de hecho, el autor establece dos hipótesis sobre la división-fragmentación del MIR; que la división fue más orgánica que política, donde la militancia se alineó en base a sus redes políticas subjetivas y

operativas; y que la apertura de las movilizaciones populares en las JPN, catalizó la necesidad de discusión sobre la EGPP en el tan esperado IV Congreso. Tal como señalábamos, las diferencias tácticas sólo nos explican la división coyuntural del MIR y no en cuanto a proyecto histórico, concepción y régimen de partido, pues, si bien las hipótesis que nos sugiere el autor son contingentes a explicarnos cómo se dio la división partidaria, creemos que son insuficientes y adolecen de una mirada más histórica.

De la lectura del texto se pueden vislumbrar dos factores explicativos de la división-fragmentación del MIR hacia 1987. La primera de ella es un factor político que encabezó la lectura mirista de la realidad nacional cuando se abren las JPN y emergen movilizaciones populares de carácter urbano, con un fuerte énfasis en lo social. Estas movilizaciones quiebran la necesidad clandestina-conspirativa de la militancia mirista, los descoloca al ver que la lucha anti-dictatorial no va por caminos de carácter militar y/o miliciano, sino por luchas populares abiertas, por lo cual surgen las dudas en los cuadros de dirección y la emergencia de un lento debate acerca de lo correcto de la EGPP. El segundo factor es teórico-ideológico y está interrelacionado con lo anterior, ya que la subordinación de lo político a lo militar en la EGPP quebró la estrategia programática y, por ende, la concepción y el régimen de partido, pues en última instancia lo que primó fue una lucha político-social contra la dictadura en frentes sociales de masas. En este sentido, el MIR y su opción por la Guerra Popular desde su concepción estratégica erró como proyecto histórico-revolucionario, a partir de la propia discusión ausente sobre el carácter de la EGPP, aunque no por las diferencias tácticas como nos insiste el autor. Lo táctico-coyuntural produce la división, mas es lo estratégico lo que provoca la fragmentación y posterior disolución orgánica del MIR en varios *MIR*'es. En definitiva, la crisis del MIR es más política que orgánica, pues en última instancia la militancia mirista tuvo que optar por cuál línea política a seguir, más allá de las afinidades en las redes políticas de las diversas estructuras político-militares. Lo político derribó el *ethos* mirista.

En cuanto a críticas del texto, éstas se basan en que la presente obra corresponde a una tesis de pre-grado en Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, por lo cual tiene limitaciones en el quehacer historiográfico. La principal tiene directa relación con el enfoque analítico de la VP en la praxis del MIR, pues, si bien el autor nos explica la VCPP, ésta en gran parte del texto es aminorada o subsumida en la descripción monográfica de la EGPP. Se aprecian desconexiones entre los capítulos teóricos y la acción mirista, lo que hace olvidar al lector que se trata de un estudio de la VP, sólo hecho mención en las MRP donde la VCCP se expresaría más palpablemente. Una segunda crítica tiene relación con la utilización de fuentes orales y el trabajo con la memoria militante, éstas sólo se aprecian como un complemento a las fuentes escritas, donde el sujeto de estudio es el MIR como órgano político-militar, dejando relegado las visiones subjetivas de la experiencia militante; no hay un sujeto de carne y hueso en que el lector pueda reconocer(se). No existe una complementariedad mayor en la utilización de ambas fuentes, de ahí el carácter más monográfico de la obra, no complejizando las visiones y diferencias de las líneas de la EGPP en el *ethos* mirista, las cuales llevaron a su posterior división-fragmentación y disolución orgánica. No era el tema central del autor ir por la subjetividad política, pero el exceso de objetivismo obnubila que toda acción directa parte de

ideas-fuerzas, deseos, anhelos, esperanzas, donde la experiencia libera las expectativas para la acción en la realidad concreta. La tercera crítica dice relación con una “ontología revolucionaria” que esquematiza el ser revolucionario bajo criterios que los clásicos marxistas (Lenin) denominan como “antiretinismo parlamentario”, cuando el autor divide aguas entre la izquierda tradicional (reformista), PC-PS y su apego al legalismo, e izquierda revolucionaria, privilegiando lo militar como diferenciación entre ambas. Dicho análisis se hace parte del último capítulo, cuyo acápite “Ocaso Revolucionario” (pp. 265-280) tiene una lógica mirista para explicarnos la actualidad del proyecto procesual del MIR en las diversas orgánicas que reivindican o tienen una praxis e impronta mirista, ya sea los diversos MIR'es, colectivos populares, organizaciones autonomistas o políticas y agrupaciones de índole cultural que rescatan la memoria mirista.

Por último, una crítica que pesa en la memoria del MIR y que se proyecta hasta la actualidad, es la influencia del trotskismo durante los primeros años. Más allá de la heterogeneidad desde la fundación del MIR y la disputa por el cargo de Secretario General en el III Congreso de 1967 entre Luis Vitale, por el sector trotskista, y Miguel Enríquez por el sector castro-guevarista, donde las fuentes que se nos proporciona no concuerdan, el autor hace una acusación de gravedad al sector trotskista, el cual levantó un “Congreso Fraccional” en 1969 —ad portas del IV Congreso— por su rechazo a la política del boicot presidencial de la candidatura de Allende y la no disposición a ejercer acciones armadas, lo que más tarde le valió pasar a la clandestinidad. Aquí surgen problemas con las fuentes que se utilizan, básicamente a Luis Vitale —testigo y militante de la época— quien en ningún momento señala que el sector trotskista hizo un Congreso Fraccional ni nunca fue acusado de ser Fracción por M. Enríquez. Recalca que hubo una expulsión de una minoría (trotskista) en el MIR, pero sutilmente morigera el calor del debate, ya que Vitale posteriormente adhirió en lo subjetivo al ideal mirista, por lo tanto, no es fiable enteramente en sus recuerdos. Salvo el hecho objetivo, que las fuentes citadas por el autor narran, hubo una expulsión previa al IV Congreso del sector trotskista por las diferencias políticas y orgánicas en lo electoral y militar, es decir, concepción y régimen de partido. No una separación ni desplazamientos, sino expulsión de la mayoría contra la minoría, cuando siempre son las minorías las que terminan renunciando o rompiendo con su orgánica madre. Por lo tanto, el autor se hace parte de manera subjetiva al avalar dicha expulsión como una memoria episódica sobre qué recordar y cómo recordar la vivencia del pasado, lo cual establece una memoria semántica como ideología mirista hasta la actualidad. Dicha acusación se constituye en una calumnia política que necesita ahondar en una investigación más exhaustiva y rectificar dicho juicio, ya que el autor al tomar partido por las fuentes primarias y secundarias miristas, establece dicha memoria semántica a las nuevas generaciones.

En síntesis, estamos ante una obra que tiene su punto central en aportarnos un estudio de la VP en Chile y su relación con la experiencia militante en particular, y abrir aquella compartimentación de la historia del tiempo presente en la izquierda en general. Esta primera obra del joven historiador José Antonio Palma Ramos sin duda será un texto de cabecera para ahondar aún más en la militancia política durante los '80, con una tesis central que nos induce a pensar hasta qué punto hubo una unidad o bifurcación entre los

análisis político y/u militares en la izquierda chilena y el carácter movimientista de las protestas populares, del sujeto de la revolución chilena, el carácter dicha revolución y la construcción del proyecto histórico de dicha izquierda durante la dictadura militar. Se vislumbran nuevos desafíos al autor para ir consolidando su metodología de investigación y aportarnos con nuevos estudios de la VP.

# **INSTRUCCIONES A LOS AUTORES**

/ INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS

## I. ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

La revista Divergencia, fundada en el año 2011, es editada por el Taller de Historia Política O.C.F., en Chile, con una periodicidad semestral. Publica trabajos originales de carácter científico y de opinión, en torno al área de las Ciencias Sociales, enfocándose específicamente en la Historia Política Contemporánea de Chile y América Latina, con el objetivo de difundir, discutir y debatir ampliamente los avances de las nuevas investigaciones que en esta materia se realizan. El contenido de la revista está dirigido a especialistas, investigadores, estudiantes de pre y posgrado, como también al público en general.

Los artículos deben ser originales y deben circunscribirse a una investigación propia ya finalizada o en estado avanzado y no pueden estar postulando de manera simultánea a otras revistas u órganos editoriales (impresos o electrónicos).

Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial, y/o los Editores quienes determinarán la pertinencia de su publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos y formales indicados en estas instrucciones, será enviado a dos pares académicos externos, quienes determinarán a través de la modalidad “doble ciego”, a fin de resguardar la confidencialidad tanto de evaluadores como de autores: a) el publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan cumplido correcciones menores, o c) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados el texto será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos

Divergencia acepta artículos de preferencia en idioma castellano, pero también acepta trabajos en inglés.

Además de los artículos científicos originales, Divergencia publica reseñas bibliográficas y ensayos de opinión, los cuales están enfocados en promover el debate y pensamiento crítico de la realidad actual tanto chilena como latinoamericana.

Las colaboraciones pueden ser enviadas en el período de convocatoria señalado en la web: [www.revistadivergencia.cl](http://www.revistadivergencia.cl) Sin perjuicio de lo anterior, Divergencia recibe trabajos durante todo el año, los cuales se incluirán para su evaluación en la convocatoria inmediatamente siguiente a la fecha de recepción.

## 2. FORMA Y PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES

Los autores enviarán sus colaboraciones sólo vía e-mail, en formato compatible con el procesador de texto Microsoft Word (extensiones “.doc” o “.docx”).

Los artículos y ensayos deben incluir afiliación institucional de los autores de la siguiente manera: nacionalidad, grado académico, institución (carrera o facultad y Universidad), ciudad, país y correo electrónico.

Se debe precisar si el artículo es producto de un proyecto de investigación y, de ser así, qué institución lo financió.

De ser una contribución de más de una persona, el primer nombre corresponderá al autor principal y los siguientes a los coautores.

Los artículos originales podrán tener una extensión máxima de 30 páginas, tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, incluyendo notas, cuadros, gráficos, ilustraciones, citas y referencias bibliográficas.

Los artículos deben incluir un resumen de máximo 100 palabras (10 líneas aproximadamente), explicitando los principales objetivos, fuentes y resultados de la investigación. Luego del resumen, se debe adjuntar un listado de tres a seis palabras clave, que se eligen preferiblemente en el Thesaurus de la Unesco (<http://databases.unesco.org/thessp/>). Tanto el resumen como las palabras claves deben estar en idioma castellano e inglés.

La estructura formal del artículo debe ser la siguiente: 1) título (centrado y negrita), 2) identificación del autor (alineado a la derecha señalando nombre y dos apellidos, filiación institucional y correo electrónico), 3) resumen (centrado), 4) palabras claves (centrado), 5) abstract (centrado), 6) keywords (centrado), 7) introducción, 8) cuerpo del trabajo (capítulos y subcapítulos), 9) conclusión y 10) bibliografía. Los puntos del “7” al “10”, deben estar justificados.

Los criterios de evaluación y selección de los artículos serán los siguientes:

- a. Aspectos Formales: cumplimiento de las normas ortográficas, de redacción y otras que establecen en estas “instrucciones a los autores”
- b. Título y resumen: descripción de manera clara y precisa del tema del artículo.
- c. Presentación clara de la(s) problemática(s), objetivos e hipótesis de trabajo.
- d. Fundamentación teórica y metodológica: explicitar claramente la metodología a utilizar y la perspectiva teórica adoptada.
- e. Bibliografía y fuentes: utilización de bibliografía actualizada y variedad de fuentes en relación a la problemática adoptada. Se evalúa positivamente el uso de fuentes primarias.
- f. Resultados: presentación clara y explícita de los resultados de la investigación en las conclusiones.

Las citas y referencias bibliográficas se realizarán bajo el sistema APA-Harvard que establece, entre otras, las siguientes formas:

## Fuentes Bibliográficas

Las referencias bibliográficas se deben insertar dentro del texto indicando entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la(s) página(s). Ejemplo:

(Garretón, 1991, pp.43-49)

Cuando el autor es nombrado en el texto, sólo se indica el año y la(s) página(s). Ejemplo:

...considerando lo anterior, Garretón (1991, pp. 43-49) sostuvo que los llamados procesos de transición democrática...

Cuando se citan varios trabajos de un mismo autor se debe anotar:

(Garretón, 1991; 1995; 2007)

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el año de la publicación con una letra minúscula. Por ejemplo:

...en dos textos recientes (Gómez, 2010a, p. 15; Gómez, 2010b, p. 69) se señala que...

Cuando es más de un autor en una obra (2 o 3) se anota de la siguiente manera:

(Alcántara y Freidenberg, 2003, p. 83); (Valdivia, Álvarez y Pinto, 2006, p. 25)

Cuando son más de 3 autores:

(Garretón et.al., 2004, p.37)

Las referencias bibliográficas deben ubicarse al final del artículo, cumpliendo un estricto orden alfabético y cronológico, siguiendo las siguientes formas:

Libro con un autor

Angell, A. (1993). *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

**Libro con dos autores**

Cristi, R. y Ruiz, C. (1992). *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

**Libro con tres autores**

Valdivia, V., Álvarez R. y Pinto, J. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución*. Santiago: Lom Ediciones.

**Libro con más de tres autores**

Fontaine, A et.al. (2008). *Reforma de los partidos políticos en Chile*. Santiago: PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.

**Libro con editor**

Ríos, N. (ed.). (2010). *Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política*. Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

**Capítulo en libro editado**

Gómez, J. C. (2010). *Democratización y Democracia en la Historia Política reciente de Chile*. En Ríos, N. (ed.), *Para el análisis del Chile contemporáneo. Aportes desde la Historia Política* (pp. 49-60). Valparaíso: Ediciones Taller de Historia Política.

**Artículo en Revista con un autor**

Godoy, O. (1999). *La transición chilena a la democracia: Pactada*. En *Estudios Públicos* (N° 74), 79-106.

**Artículo en Revista con dos autores**

Barozet, E. y Aubry, M. (2005). *De las reformas internas a la candidatura presidencial autónoma: los nuevos caminos institucionales de Renovación Nacional*. *Revista Política* (n°45), 165-197.

**Referencias de Internet**

Moya, P. (2006). *Pinochet en Londres: análisis comparativo de la prensa que cubrió su arresto, aproximación desde el Análisis Crítico del Discurso*. En *Cyber Humanitatis* (N°37). Consulta 27 de Agosto de 2011: [http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto\\_simple2/0,1255,SCID%253D18483%2526SID%253D646,00.html](http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D18483%2526SID%253D646,00.html)

**Fuentes Primarias****Referencias de periódicos y/o revistas no científicas.**

Se debe incluir dentro del texto indicando entre paréntesis nombre del periódico, fecha y página(s). Ejemplo:

... tal como se indicó en aquellos tiempos (La Tercera, 18 de Febrero de 1998, p.6), el gobierno debió ceder...

**Referencias Audiovisuales**

Se deben incluir dentro del texto indicando entre paréntesis el nombre del director y la fecha de realización. Ejemplo:

... tal como se señalo en un documental reciente (Said, 2001), la sensibilidad de la derecha chilena...

En el caso de la referencia bibliográfica se debe anotar al final del texto indicando Apellido del director, año de realización entre paréntesis, nombre del documental o filme en letra cursiva y duración. Ejemplo:

Said, M., (2001). *I love Pinochet*. 53 minutos.

### 3. NOTIFICACIONES Y CESIÓN DE DERECHOS

La revista Divergencia requiere a los autores que concedan la propiedad de sus derechos de autor, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma, a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.

En caso de ser aceptado un artículo, se enviará junto con la notificación de aceptación un modelo tipo de “declaración de originalidad y cesión de derechos del trabajo escrito”, la cual debe ser firmada, escaneada y enviada de forma digital al correo [contacto@revistadivergencia.cl](mailto:contacto@revistadivergencia.cl) o en su defecto a [j.ponce@revistadivergencia.cl](mailto:j.ponce@revistadivergencia.cl)

El plazo para reenviar firmada por parte de los autores la “declaración de originalidad y cesión de derechos del trabajo escrito” es de siete días desde que le es comunicada la aceptación. En caso de no cumplir con este plazo se entenderá que el autor renuncia a su posibilidad de publicar en Divergencia.

Revista Divergencia se reserva el derecho a corregir errores gramaticales, ortográficos, de sintaxis, etc. que pudiesen existir en el escrito, sin previo aviso a los autores, y sin que estos cambios afecten el contenido ni el sentido último del artículo.

### 4. FORMA Y PREPARACIÓN DE LAS RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS Y LOS ENSAYOS DE OPINIÓN

Los autores enviarán sus colaboraciones sólo vía e-mail, en formato compatible con el procesador de texto Microsoft Word (extensiones “.doc” o “.docx”).

Las reseñas bibliográficas podrán tener una extensión máxima de 8 páginas tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, y deben versar sobre un libro cuya antigüedad no supere los 5 años a partir de la fecha de la convocatoria.

Los ensayos podrán tener una extensión máxima de 12 páginas tamaño carta con interlineado simple (1,5) en letra Arial 12, y deben abordar críticamente, temas de la contingencia política chilena y/o latinoamericana, con el ánimo de generar debate, propuestas y en definitiva opinión crítica del tema abordado.

Para el uso de citas se utilizará la norma APA-Harvard, la cual fue detallada en la "Forma y preparación de los artículos originales" presentada mas arriba.

La selección de las reseñas bibliográficas y de los ensayos será realizada por los editores y/o algunos miembros del Consejo Editorial.

## ENVÍO DE COLABORACIONES

Los artículos deben ser enviados a:

**José Ponce López**

*Editor Responsable*

[contacto@revistadivergencia.cl](mailto:contacto@revistadivergencia.cl) o [j.ponce@revistadivergencia.cl](mailto:j.ponce@revistadivergencia.cl)

**Jorge Valderas Villarroel**

*Editor Asociado*

[j.valderas@revistadivergencia.cl](mailto:j.valderas@revistadivergencia.cl)

**Nicole Ríos Kroyer**

*Editora Asociada*

[n.rios@revistadivergencia.cl](mailto:n.rios@revistadivergencia.cl)



## CONSEJO EDITORIAL

A la fecha, el Consejo Editorial de *DIVERGENCIA* se encuentra compuesto por los siguientes académicos:

### Internacionales

- Dra. Teresa Basile (Universidad Nacional de la Plata, Argentina)
- Dra. Mabel Thwaites (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
- Dr. Atilio Borón (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
- PhD. Margaret Power (Illinois Institute of Technology, EEUU)
- PhD. Ronaldo Munck (Dublín City University, República de Irlanda)
- Dr. Aldo Marchesi (Universidad de la República, Uruguay)
- Dr. Jaime Osorio Urbina (Universidad Nacional Autónoma Metropolitana-Xochimilico, México)
- Dr. Frank Gaudichaud (Universidad de Grenoble, Francia)

### Nacionales

- Dr. Juan Carlos Gómez (Universidad Central, Chile)
- Dr. Gabriel Salazar (Universidad de Chile, Chile)
- Dr. Danny Monsalvez (Universidad de Concepción, Chile)
- Dr. Luis Pacheco (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)
- Dr. Rolando Álvarez (Universidad de Santiago, Chile)
- Dr. Igor Goicovic (Universidad de Santiago, Chile)
- Dra. Cristina Moyano (Universidad de Santiago, Chile)
- Dr. Luis Corvalán (Universidad de Valparaíso, Chile)
- Mg. Jorge Gonzalorenna (Universidad de Valparaíso, Chile)
- Mg. Carolina Figueroa (Universidad Arturo Prat, Chile)
- Mg. Benjamín Silva (Universidad Arturo Prat, Chile)

(viene de la solapa anterior)

cos en que distintos académicos y/o actores político-sociales se han dirigido al estudiantado de la Carrera y la Universidad, refiriéndose a variados temas de interés y contingencia. En la misma dirección, una gran acogida han tenido las *Jornadas de Historia Política* que a la fecha han celebrado cinco versiones.

Entre las publicaciones que ha realizado el Taller, se encuentran “*Para el análisis del Chile contemporáneo: Aportes desde la Historia Política*”, en el que se condensan algunas ponencias de las *Jornadas*; y “*Vitalizando la Historia Política. Estudios del Chile reciente (1960-2010)*” que, siendo distribuido de manera gratuita en los establecimientos educacionales de la V región y las escuelas de Historia del País, incluye investigaciones originales de los miembros del Taller.

Esperamos con nuestro trabajo ser un aporte a la historiografía y a su difusión, pues frente a las amnésicas construcciones de futuro que algunos sectores políticos impulsan, postulamos firmemente que solo sobre la base del estudio y el conocimiento del pasado por parte de la sociedad en su conjunto, será posible el entendimiento del presente y la proyección de un mañana en que las injusticias y las desigualdades de hoy ya no existan. En esa proyección estaremos siempre de parte de la clase trabajadora y de los sectores sociales que en nuestro estudio de la historia y en nuestra vida cotidiana, hemos identificado como aquellos para quienes las palabras “desarrollo” o “progreso” (por mencionar algunas de las tan recurrentes en el discurso de la elite política), encuentran poco asidero en sus reales condiciones de vida, no poseyendo una significancia diferente de la paradójica clasificación que les da la gramática, vale decir, la de meros sustantivos abstractos.

La REVISTA DIVERGENCIA, fundada en el año 2011, es editada por el TALLER DE HISTORIA POLÍTICA O.C.F., en Chile, con una periodicidad semestral. Publica trabajos originales de carácter científico y de opinión, en torno al área de las Ciencias Sociales, enfocándose específicamente en la Historia Política Contemporánea de Chile y América Latina, con el objetivo de difundir, discutir y debatir ampliamente los avances de las nuevas investigaciones que en esta materia se realizan. El contenido de la revista está dirigido a especialistas, investigadores, estudiantes de pre y posgrado, como también al público en general.

*DIVERGENCIA JOURNAL, founded in 2011, is produced by the TALLER DE HISTORIA POLÍTICA O.C.F., in Chile and it issued every semester. It publishes original scientific and opinion works in the Social Sciences area, focusing specially in the Contemporary Political History of Chile and Latin American, with the aim of spreading, discussing, and debating broadly the new research progress in this area. The content of the Journal is aimed to specialists, researchers, undergraduate and graduate students, as well as the general public.*

